

TRIBUNAL

CONTRA LA IMPUNIDAD



Ciudad Bolívar y Cazucá

INTRODUCCIÓN

TRIBUNAL CONTRA LA IMPUNIDAD

Ciudad Bolívar y Carucá

La noción de impunidad comienza a tener un significado social más amplio en América latina en el período subsiguiente a las masivas violaciones de los derechos humanos cometidas en nombre de la doctrina de la seguridad nacional por las dictaduras militares en América Central y en América del sur durante las décadas de 1970 y 1980. Antes de dar paso a gobiernos elegidos democráticamente, las dictaduras militares decretaron una amnistía para los que habían ocupado puestos de responsabilidad en sus gobiernos. Los parlamentarios elegidos en estas frágiles democracias ratificaron estos decretos o aprobaron leyes de amnistía temiendo que los anteriores gobernantes militares, que seguían conservando parte del control del poder, tratasen de derrocar las nuevas instituciones democráticas, si se emprendía cualquier acción judicial contra ellos.

En todos los casos, los decretos o leyes de amnistía fueron objeto de protestas, especialmente por parte de las víctimas de torturas y asesinatos de las personas asesinadas o "desaparecidas" bajo los crueles regímenes militares. Las organizaciones de la sociedad civil que habían defendido los derechos humanos en la época de la dictadura apoyaron y organizaron a las víctimas contra la impunidad y condenaron energicamente la impunidad -por considerarla ética, política y socialmente inaceptable- en los casos de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por los militares y por los que participaban en sus gobiernos.

Más de veinte años después, la movilización popular contra la impunidad es más fuerte que nunca en el Cono Sur (Chile, Argentina y Uruguay) y en la región Andina y América Central. En estos países, la búsqueda de la verdad, la justicia y la vida son los pilares para la reconciliación nacional, un elemento clave en la lucha en favor de la dignidad humana y contra la exclusión social en la era de la democracia.

JUSTICIA
y
vida

TRIBUNAL
CONTRA LA INFORMACIÓN
Equidad y valores humanos

Noviembre de 2006
PROYECTO JUSTICIA Y VIDA
projusvi@yahoo.com
www.justiciayvida.org

Diseño y Diagramación
Germán Valencia
gerenis@hotmail.com

Impreso por Editorial Buena Semilla

agradecimiento a Geraoid Padraig fotografías.
Estas fotografías tienen derechos reservados
Aclaramos que las personas en las fotos no coinciden
con los testimonios en cada una.

Impreso en Colombia
Printed in Colombia

INTRODUCCIÓN

LA IMPUNIDAD

La palabra “impunidad” viene del latín *impunitas*, que significa “falta de castigo”.

La noción de impunidad comienza a tener un significado social más amplio en América latina en el período subsiguiente a las masivas violaciones de los derechos humanos cometidas en nombre de la doctrina de la seguridad nacional por las dictaduras militares en América Central y en América del sur durante las décadas de 1970 y 1980. Antes de dar paso a gobiernos elegidos democráticamente, las dictaduras militares decretaron una amnistía para los que habían ocupado puestos de responsabilidad en sus gobiernos. Los parlamentarios elegidos en estas frágiles democracias ratificaron estos decretos o aprobaron leyes de amnistía temiendo que los anteriores gobernantes militares, que seguían conservando parte del control del poder, tratasen de derrocar las nuevas instituciones democráticas, si se emprendía, cualquier acción judicial contra ellos.

En todos los casos, los decretos o leyes de amnistía suscitaron numerosas protestas, especialmente por parte de las víctimas de torturas y de los familiares de las personas asesinadas o “desaparecidas” bajo los crueles regímenes militares anteriores. Las organizaciones de la sociedad civil que habían defendido los derechos humanos en la época de la dictadura apoyaron y dieron a conocer los clamores de las víctimas contra la impunidad y condenaron enérgicamente la impunidad –por considerarla ética, política y socialmente inaceptable– en los casos de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por los militares y por los que participaban en sus gobiernos.

Más de veinte años después, la movilización popular contra la impunidad es más fuerte que nunca en el Cono Sur (Chile, Argentina y Uruguay) y se extiende por la región Andina y América Central. En todas partes, las víctimas siguen convencidas de que la verdad, la justicia y la reparación integral son una condición esencial para la reconciliación nacional, un elemento clave en la lucha en favor de la dignidad humana y contra la exclusión social en la era de la globalización.

Importantes sectores de la sociedad siguen convencidos de que el gobierno militar era necesario para “detener el avance del comunismo”. Otros, por temor a un retorno de la dictadura militar, prefieren no remover viejas animosidades en momentos en que prevalece una apariencia de democracia. Otros, en fin, insisten en que sin justicia no pueden darse las condiciones básicas para una democracia estable.

La definición jurídica de impunidad incluye tres elementos claves: el delito cometido, el autor del delito y los requisitos de la justicia.

Por lo que respecta a la naturaleza del delito, las organizaciones de derechos humanos y los juristas parecen estar de acuerdo en que la impunidad está relacionada con *graves violaciones de los derechos humanos*, en particular los delitos considerados “graves” bajo el Derecho Internacional, en el caso de Cazucá y Ciudad Bolívar, serían crímenes contra la humanidad, y “graves y sistemáticas violaciones” de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales.

Por lo que atañe a los autores de violaciones, se hace hincapié en la *responsabilidad del Estado* – la de los “agentes del Estado o de personas que actúan bajo las órdenes o con la complicidad, la connivencia, la aprobación o el apoyo de las autoridades”.

La justicia exige que los autores de violaciones de los derechos humanos rindan cuentas de sus actos mediante un proceso en el que se incluya la investigación de los hechos, la acusación, el juicio, la sentencia y la determinación de la reparación debida a las víctimas del delito.

La “cultura de impunidad”

Estos debates jurídicos plantean aspectos técnicos, pero no es necesario ser jurista para entender el alcance de las repercusiones jurídicas, políticas y éticas que tiene la impunidad para las víctimas o para la sociedad en su conjunto, especialmente cuando se han cometido y siguen cometándose violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Ahora bien, cuando la práctica de la impunidad se vuelve rutinaria y se impregna con el tiempo en las costumbres, puede ser difícil para las víctimas directas y la sociedad en su conjunto tomar conciencia de los problemas y de la necesidad de hacer algo. En tales casos, podemos hablar de una “cultura de impunidad” que debe ser impugnada.

La cultura de la impunidad evidencia que algo no funciona en el sistema, en sus normas y códigos de conducta. El problema no es simplemente el hecho de que ciertos individuos tengan una conducta delictiva, sino que todo el sistema jurídico queda considerado sistemáticamente y la impunidad se impone como atributo “normal” del poder. Algunas personas piensan que están por encima de la ley, por encima de la moral, que no tienen que rendir cuentas a nadie de sus actos por muy graves que éstos sean. Un defensor rwandés de los derechos humanos resume la situación en su país antes del genocidio de 1994 con estas palabras: “en Rwanda la impunidad ha llegado a ser algo normal, una cultura en la que se puede asesinar sin que exista posibilidad de procesamiento.” En el caso de Colombia la impunidad se ha convertido en la norma.

La lucha contra la impunidad forma parte integrante de la defensa y promoción de los derechos humanos sean cuales fueren las circunstancias. Ha pasado a ser una preocupación prioritaria de derechos humanos en las sociedades que luchan por reorganizarse después de largos periodos de conflicto, dictaduras o regímenes antidemocráticos, por que bajo tales circunstancias la protección que la impunidad ofrece a los autores de violaciones de pasado es el principal escollo para la reconciliación nacional.

Una amenaza para la democracia y la sociedad

La impunidad es una negación del principio de igualdad de todos ante la ley, uno de los fundamentos de la democracia y del Estado de derecho. La impunidad destruye la confianza de los ciudadanos en la función del Estado, en su autoridad y su capacidad para defender sus derechos. Cuando todo se les permite a los que están en el poder, se confirma la idea perversa de que cada cual puede tomarse la justicia por su mano. Así, la impunidad engendra un sentimiento de frustración, de desesperación, de resignificación y de apatía en la sociedad, al tiempo que promueve una cultura de violencia carente de todo principio ético.

El silencio que impone la impunidad encierra a las víctimas, directas e indirectas, en su sufrimiento y desesperación. La curación y la rehabilitación social se hacen difíciles, cuando no imposibles.

La impunidad significa el triunfo de la mentira, el silencio y el olvido. Corrompe y envenena la memoria de las personas y de las comunidades, Las ideologías y doctrinas que indujeron los actos criminales no se condenan ni se cuestionan; y son por consiguiente como una espada de Damocles sobre las cabezas de las víctimas y sobre toda la sociedad. La impunidad hace que sea imposible una auténtica reconciliación social.

Una nueva toma de conciencia de un viejo problema

La impunidad no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia en la mayoría de los pueblos han quedado impunes graves violaciones de los derechos humanos cometidas por personas o grupos en el poder.

Shadrack Gutto, profesor universitario, sostiene que la impunidad de la que se beneficiaron las potencias coloniales europeas, en relación con sus crímenes cometidos en África, ha socavado seriamente a ojos de los africanos la autoridad moral de las declaraciones internacionales de derechos humanos. Una vez alcanzada la independencia, esta impunidad ha permitido, e incluso alentado a muchos Estados africanos a que perpetúen una cultura de impunidad para violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado y sus autoridades.

Se ha dicho que la incapacidad de la comunidad internacional para reconocer el genocidio armenio en 1915 fue una de las causas del Holocausto judío en Europa un cuarto de siglo más tarde.

El sufrimiento pasa de generación en generación junto con la reiterada petición de que tanto el gobierno como la comunidad internacional reconozcan oficialmente la verdad y identifiquen a todos los culpables. Mientras no se produzca este reconocimiento, el recuerdo irreconocible de los mártires seguirá siendo fuente constante de conflicto y sufrimiento para los pueblos.

La regla general es que los gobiernos no han sido capaces o no han estado dispuestos a asumir el peso de los crímenes.

Ante la enorme dimensión de la impunidad de los crímenes cometidos en Cazucá y Ciudad Bolívar, hemos convocado a este Tribunal Internacional contra la Impunidad y no descansaremos hasta que las víctimas logren justicia, verdad y reparación integral.

CONTENIDO

1.	CINCO FALACIAS EN EL PROCESO CON LOS PARAMILITARES	7
2.	RESEÑAS DE PRENSA.....	19
3.	TESTIMONIOS	115
3.1	MASACRE EN CAZUCA (HUEPENDO)	
3.2	DESAPARICIÓN, TORTURA Y ASESINATO (ARTISMENDI)	
3.3	ABUSO DE AUTORIDAD (VARIOS)	
3.4	TESTIMONIOS DE LA COMUNIDAD	
3.5	ADULTOS	
3.6	NIÑOS Y NIÑAS	
4.	ANÁLISIS DE ENCUESTAS	135
5.	POBLACIÓN CIVIL OBJETIVO MILITAR	143
5.1	BASES MILITARES	
6.	TRIBUNAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN CIUDAD BOLÍVAR Y CAZUCA	159
7.	ANEXOS	175
6.1	COMUNICADOS MESA DE ONGS DE CAZUCA	
6.2	COMUNICADO RED DE ORGANIZACIONES DE CIUDAD BOLÍVAR	
6.3	OTRAS DENUNCIAS	

AGRADECIMIENTOS

Desde el comienzo del gobierno del Presidente Uribe se vienen adelantando en Colombia diálogos con los grupos paramilitares que se presentan ante la nación y ante el mundo con ropajes que no corresponden a su verdadera naturaleza, dando lugar a falacias de lenguaje que es necesario sacar a la luz.

Los dichos diálogos son presentados como una **NEGOCIACION POLITICA**, pero no lo es.

Toda negociación política exige como requisito básico la existencia de dos partes o líneas antagónicas o al menos diferenciables. Si se trata de grupos, organizaciones o franjas de población que reclaman una negociación con un gobierno o con un Estado, se presupone que entre esos grupos y el gobierno o el Estado en cuestión se dan diferencias fundamentales sobre los principios o sobre prácticas políticas. Si no existen esas diferencias carece de lógica un proceso de negociación.

Si bien haga un rastreo histórico sobre el pensamiento y las directrices para la política de las fuerzas armadas o de seguridad del Estado colombiano y las de los paramilitares, no encontrará diferencias alguna importante. Se percibe un enemigo común, un mismo modelo social; una misma doctrina que es la llamada de "defensa del nacional"; unas mismas prácticas represivas; un mismo discurso ideológico del sistema vigente; unos mismos mecanismos de impunidad; una misma política del accionar armado y de la participación de la población civil en el mismo; unos mismos parámetros de estigmatización de los movimientos sociales.

1

CINCO FALACIAS EN EL PROCESO CON LOS PARAMILITARES

Se explica que el proceso de negociación con los paramilitares, que se ha presentado como un proceso político, que ha de modificar la Ley 958 de 2005 y suprimir el requisito enunciado en los artículos de la anterior ley, según el cual, para establecer conversaciones y negociar con alguna organización armada, el gobierno debía reconocerle el "carácter político" (Ej.: art. 8, a., b., parágrafo 1, parágrafo 2; art. 10, art. 51; art. 65, etc.). Dicho CARÁCTER POLÍTICO, que se basa en principios y prácticas relativos a la prestación del Estado de manera que se respetan vigente y en aspectos que toquen los derechos civiles, políticos,

Desde el comienzo del gobierno del Presidente Uribe se vienen adelantando en Colombia diálogos con los grupos paramilitares que se presentan ante la nación y ante el mundo con ropajes que no corresponden a su verdadera naturaleza, dando lugar a falacias de lenguaje que es necesario sacar a la luz.

1. Dichos diálogos son presentados como una **NEGOCIACIÓN POLÍTICA**, pero no lo es.

Toda negociación política exige como requisito básico la existencia de dos posiciones antagónicas o al menos diferenciadas. Sí se trata de grupos, organizaciones o franjas de población que reclaman una negociación con un gobierno o con un Estado, se presupone que entre esos grupos y el gobierno o el Estado en cuestión se dan diferencias fundamentales sobre los principios o sobre las prácticas políticas. Si no existen esas diferencias carece de lógica un proceso de negociación.

Quien haga un rastreo histórico sobre el pensamiento y las directrices para la acción de las fuerzas armadas o de seguridad del Estado colombiano y las de los paramilitares, no encontrará diferencia alguna importante. Se percibe un enemigo común; un mismo modelo social; una misma doctrina que es la llamada de “seguridad nacional”; unas mismas prácticas represivas; un mismo discurso legitimador del sistema vigente; unos mismos mecanismos de impunidad; una misma apología del accionar armado y de la participación de la población civil en el mismo; unos mismos parámetros de estigmatización de los movimientos sociales y de las ideologías políticas no capitalistas, así como, una coordinación, combinación y distribución de acciones legales e ilegales con miras a que sirvan a una misma causa.

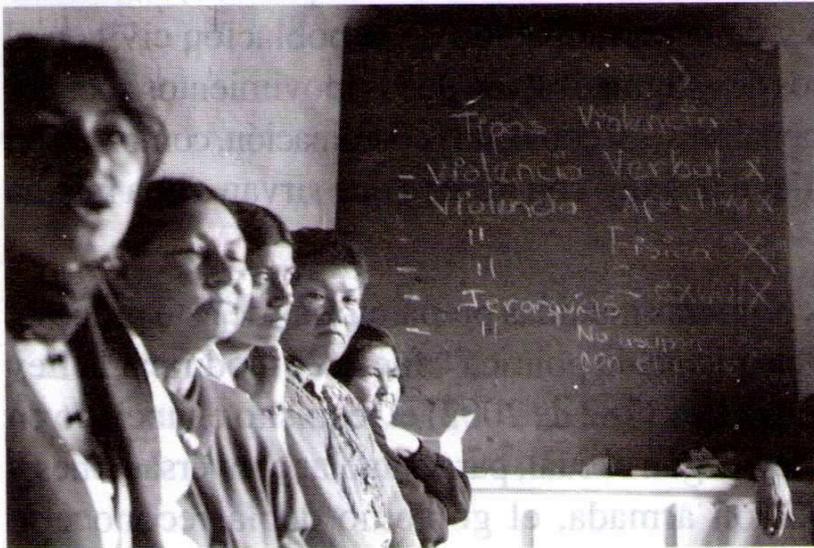
Esto explica que una de las primeras medidas preparatorias de este proceso, que se ha presentado como de “negociación política”, fue la de modificar la Ley 418 de 1997 y suprimir en la nueva Ley (782 de 2002) el requisito enunciado en muchos artículos de la anterior ley, según el cual, para entablar conversaciones y diálogos con alguna organización armada, el gobierno debía reconocerle previamente “*carácter político*” (Ej.: art. 8, a., b., párrafo 1, párrafo 2; art. 11; art. 50; art. 51; art. 65, etc.). Dicho CARÁCTER POLÍTICO, que se basa en la defensa de principios y prácticas relativos a la orientación del Estado de manera opuesta al régimen vigente y en aspectos que toquen los derechos civiles, políticos,

económicos, sociales o culturales, individuales o colectivos, de quienes integran la nación, es lo que en último término define lo que es una insurgencia armada.

Por ello es también revelador que el Gobierno del Presidente Uribe se empeñe en negar la existencia de un conflicto armado en Colombia, con el fin de no tener que considerar siquiera una solución política y negociada con el verdadero polo insurgente que defiende principios y prácticas políticas opuestas a las suyas. Prefiere moverse en un discurso donde las únicas fuerzas políticas con las cuales es posible negociar sean las que defienden su mismo modelo social y económico, donde las que planteen un modelo distinto sean excluidas de toda posibilidad de diálogo o negociación.

2. Dichos diálogos son presentados como una **NEGOCIACIÓN DE PAZ**, pero no lo es.

La base lógica de una negociación de paz es el reconocimiento de un conflicto que enfrenta a fuerzas opuestas que luchan cada una por la defensa de su causa. Por ello se dice que la paz se negocia solamente entre enemigos y jamás entre amigos. Lo afirmado anteriormente en relación con los principios y prácticas que ha defendido el paramilitarismo colombiano en sus más de 40 años de historia, es suficiente para concluir que no se da una oposición entre el paramilitarismo y las fuerzas de seguridad del Estado colombiano. Por lo tanto, carece de lógica hablar de “proceso de paz” entre gobierno y paramilitares, pues nunca ha habido guerra entre esas dos fuerzas.



Si bien, en los últimos meses se ha vuelto frecuente que los más media registren enfrentamientos entre las fuerzas armadas del Estado y grupos paramilitares, e incluso se den estadísticas de “bajas” (muertes, capturas y deserciones) en el paramilitarismo causadas por agentes del Estado, no se trata, sin embargo, de un

enfrentamiento real y de principios entre esas dos fuerzas. En efecto, no se persigue a la dirigencia paramilitar; tampoco a los paramilitares que la población denuncia; en muchos casos los “dados de baja” no son paramilitares sino campesinos o

pobladores cuyos cadáveres se hacen aparecer como de “paramilitares”; en muchos casos se ha comprobado que se dan acuerdos entre oficiales de las fuerzas armadas del Estado y comandantes paramilitares para “dar de baja” a paramilitares de bajo rango que se han vuelto insubordinados o problemáticos, haciéndolos aparecer como blancos de una persecución oficial.

3. Dichos diálogos son presentados como un PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN, pero no lo es.

Como efecto de las numerosas ceremonias de “desmovilización de paramilitares” que se han sucedido desde noviembre de 2003 (iniciadas por la “desmovilización del Bloque Cacique Nutibara” en Medellín, en noviembre de 2003), no se han desintegrado las estructuras paramilitares, ni ha cesado el control de los territorios que antes tenían, ni la relación de obediencia a sus jefes, ni la apología de las “autodefensas”, ni el proselitismo paramilitar, ni las campañas de proyección política del paramilitarismo como anticipo de las campañas electorales.

Hoy día el paramilitarismo representa un poderío económico creciente que impulsa numerosas empresas rentables y mueve sumas exorbitantes de dineros, muchos de ellos “mal habidos” en procesos de legalización, a la vez que proyecta y planifica el control de los próximos debates electorales con miras a eliminar toda competencia mediante las más diversas formas de intimidación.

En los mismos documentos públicos con los cuales se inició el “diálogo” con el gobierno (noviembre de 2002) no se hablaba de desmovilización sino que se registraba la complacencia con el gobierno del Presidente Uribe al cual están dispuestos a devolverle el papel de Estado que han estado ejerciendo en muchas regiones, no para desaparecer como fuerza sino para integrarse a los proyectos del Estado y participar con él en el control de los territorios que han estado bajo su dominio.

Quien se movilice por las zonas de conflicto que cubren casi todo el territorio nacional, puede comprobar que los retenes paramilitares no se han desmontado y que la relación con la fuerza pública continúa siendo tan evidente como antes.

4. Dichos diálogos son presentados como un proceso de DESMONTE DEL PARAMILITARISMO, pero no lo es.

El paramilitarismo tiene un principio rector que consiste en desdibujar las fronteras entre lo civil y lo militar y crear una zona gris donde nunca esté claro

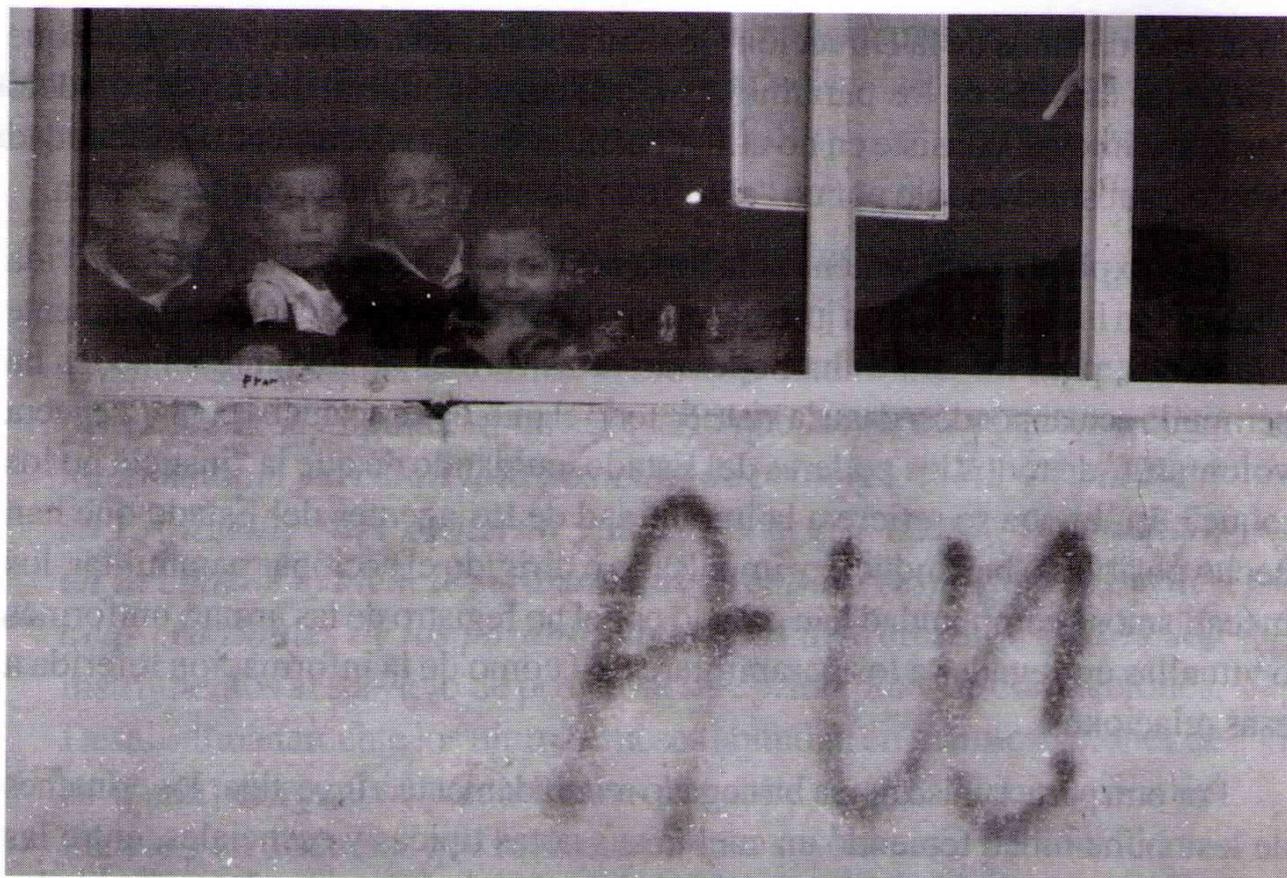
dónde comienza la acción armada del Estado y dónde termina la acción desarmada de los civiles. Desde su primer origen el paramilitarismo ha buscado involucrar a la población civil en la guerra, ya como combatientes que incursionan en campos vedados por el Derecho a los agentes del Estado, ya como blanco de la acción bélica de un Estado que no persigue propiamente a insurgentes armados sino a disidentes políticos y a incómodos líderes sociales.

En lugar de terminar con esa zona gris, el gobierno del Presidente Uribe la ha ampliado de manera exorbitante, creando nuevos campos de grandes proporciones en donde los civiles podrán involucrarse en la guerra, ya como informantes, ya como cooperantes, ya como soldados campesinos que rompen todos los cánones tradicionales de la imparcialidad e independencia que las tradiciones democráticas les fijaron a los hombres de armas del Estado, para involucrarse en la defensa emocional de sus familias y comunidades que han tomado partido dentro de la guerra. De otra parte, el cambio de estatuto legal de las cada vez más numerosas empresas privadas de seguridad, convertidas en apéndices de la fuerza pública (Decreto 3222/02), ha incrementado aún más la zona gris que elimina los perfiles de lo civil y lo militar para confundirlos en un conflicto envolvente en el cual solo un polo cívicomilitar monopoliza toda posible legitimidad y autoriza a demonizar a un adversario concebido también como cívico militar, desconociendo sus derechos y justificando toda forma de exterminio del mismo.

Una observación rigurosa de este proceso con los paramilitares llevaría a denominarlo más bien como un proceso de legalización del paramilitarismo, toda vez que se han ido abriendo más y más espacios “legales” para que los civiles se involucren en la guerra fortaleciendo el polo bélico estatal.

5. Dichos diálogos son presentados como un proceso de SUPERACIÓN DE LA IMPUNIDAD, pero no lo es.

Tanto el Presidente Uribe como el Vicepresidente Santos, el Alto Comisionado para la Paz y otros altos funcionarios del Estado, han venido defendiendo públicamente la necesidad de sacrificar en gran parte las exigencias de justicia frente a los crímenes de los paramilitares, sacrificio que se justifica, según ellos, para poder obtener como contraprestación “la paz”. Esto implica un sofisma, como se vio antes, ya que el proceso no conduce a la paz, puesto que no se está negociando con enemigos sino con amigos.



El sacrificio de la justicia que se demanda se ha ido concretando desde hace muchos meses en diversas propuestas que incluyen indultos y amnistías, rebajas de penas, eliminación de la pena de prisión o la posibilidad de convertir en prisión simbólica los mismos territorios de dominio paramilitar; el establecimiento de blandas sanciones políticas o contribuciones a modalidades de reparación como substitutivas de las penas contempladas en la ley. Todo esto ha suscitado un profundo debate ético y jurídico, a nivel nacional e internacional, toda vez que los crímenes que se propone substraer a la justicia son crímenes horribles que tienen carácter de crímenes internacionales y han lesionado a la humanidad como tal. Además quebrarían uno de los principios rectores de la Constitución, como es el de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, dando lugar a efectos tan repugnantes como el hecho de que un pobre que cometa atracos para sobrevivir tenga una pena mucho mayor que la de un paramilitar que ha participado en genocidios, desapariciones, ejecuciones, desplazamientos y torturas.

Las experiencias de pretendida “desmovilización” de paramilitares que se han dado en este gobierno, evidencian otra de las trampas de la impunidad: mientras la Fiscalía promete investigar a cada desmovilizado y estudiar sus antecedentes, solo cruza sus nombres con los listados de sindicatos o condenados registrados

en la base de datos de la Dirección General de Fiscalías, sin tener en cuenta que una de las tácticas de los paramilitares, que corresponde al diseño del modelo desde sus inicios, consiste en no utilizar el nombre ni el documento de identidad propios, substituyéndolo por un “alias” que además se cambia con frecuencia.

Esto explica que la inmensa mayoría de ellos aparezcan con su hoja de vida “limpia” en los archivos de la justicia, exceptuando a los comandantes ampliamente conocidos, para los cuales han operado otras formas de impunidad: se les ha permitido actuar por décadas a la vista de todo el mundo, amparados por la “ceguera voluntaria” de todos los poderes del Estado, cuidando de que la “justicia no los toque”. En lo que se refiere a la impunidad de los agentes del Estado que han hecho posibles o han inducido, impulsado o dirigido el accionar paramilitar, los mecanismos de impunidad han pasado por el no registro de las armas, uniformes o vituallas entregadas a los paramilitares así como de la información referida a esas relaciones.

Por otra parte la Fiscalía se ha negado reiteradamente a investigar los crímenes de lesa humanidad teniendo en cuenta sus notas típicas y esenciales, entre las cuales está su **carácter sistemático**, el cual exige decretar la conexidad e investigar las estructuras e instituciones en las que se apoya dicha sistematicidad. Y mientras los crímenes “se investigan”, por parte de la Fiscalía, como delitos aislados e inconexos, para que no se puedan tipificar como crímenes de lesa humanidad, se les somete a mecanismos probatorios de antemano destinados al “archivo” o la “preclusión”, dado que se hace descansar la carga de la prueba sobre las víctimas y su entorno social, haciendo caso omiso de su situación de amordazadas por el terror, sometidas como están a un paramilitarismo protegido por el Estado que controla todos los espacios de su vida y que sanciona con pena de muerte o de destierro toda denuncia.

Todas estas prácticas impiden que se pueda hablar de un proceso de superación de la impunidad de los crímenes de los paramilitares.

El Derecho Internacional establece que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles; que no son indultables ni amnistiabiles; que si sus autores no son juzgados en el país donde se encuentran debe aplicarse la jurisdicción universal en cualquier otro país, el cual tiene derecho a exigir su extradición para dicho procesamiento; que no admiten la eximente de obediencia debida ni el del carácter de alto funcionario de Estado de sus autores o cómplices.

Enfrentar el problema de la impunidad de los crímenes de los paramilitares tiene unos REQUISITOS BÁSICOS. Si éstos no se dan, constituye un nuevo engaño prometer una superación de la impunidad.

Esos REQUISITOS serían fundamentalmente los siguientes:

a) Antes de cualquier discusión sobre instrumentos legales que sirvan para superar la impunidad, es necesario que la nación y la comunidad internacional ***perciban una posición de principios (ética y política) en los agentes del gobierno y del estado que tenga credibilidad, en la cual se evidencie su distancia y repudio respecto a las prácticas criminales de los paramilitares***. Los instrumentos legales son instrumentos al servicio de posiciones de principio y de convicciones. Desafortunadamente los últimos meses abundan en manifestaciones de simpatía para con los paramilitares por parte de altos funcionarios del Estado y en discursos que invitan a olvidar sus horrores y a considerarlos más bien como víctimas o como héroes que reclaman recompensas sociales. Todo esto se asocia a la consideración del paramilitarismo como poder económico, político y militar en ascenso vertiginoso, cuyo respaldo se anuncia como “necesario” en los próximos debates electorales.

b) Un proceso de superación de la impunidad exige como condición “sine qua non” ***un sistema judicial fiable, que demuestre independencia, imparcialidad, acatamiento de la ley y mecanismos de control***. Desafortunadamente vamos en contravía de esto y contamos más bien con un aparato judicial cada día más corrupto y alejado de los principios universales de la administración de justicia.

c) Un proceso de superación de la impunidad no puede iniciarse sin ***haber desamordazado primero la voz de las víctimas***. Desafortunadamente cada día vamos más en contravía de esto, pues las víctimas tienen menos voz en la medida en que los paramilitares, al amparo de su legalización, ejercen hoy mayor control social en los territorios donde sembraron el terror.

d) Un proceso de superación de la impunidad exige unos *medios de comunicación libres, honestos y al servicio de la verdad*. Desafortunadamente todo va en contravía de estos principios. La “autocensura” ha sido confesada por los mismos directores de medios en encuestas anónimas. La simple comparación cotidiana entre lo que se informa y lo que no se informa es escandalosa, así como la selección de fuentes y de versiones.

e) Un proceso de superación de la impunidad necesita *enfocar los crímenes desde los factores que los han hecho posibles con el fin de garantizar la no repetición de los mismos*. Desafortunadamente el sistema judicial colombiano se ha negado reiteradamente a investigar los crímenes de los agentes directos e indirectos del Estado en cuanto crímenes de lesa humanidad, violando los principios del Derecho Internacional Consuetudinario y los tratados internacionales que protegen la dignidad humana.

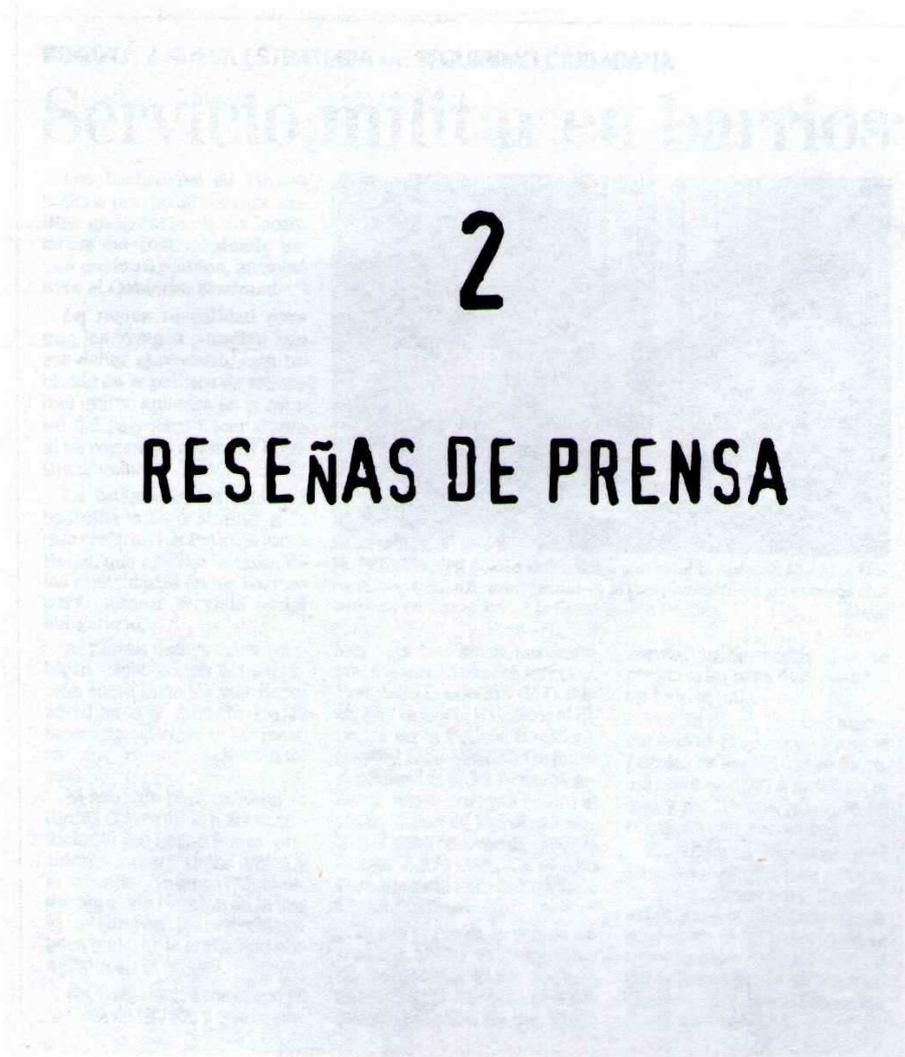
Pasar por encima de requisitos tan elementales para superar la impunidad equivale a engañar nuevamente a la nación y al mundo. Cuando se promete construir piscinas y acueductos en un desierto sin fuente alguna de agua, cualquiera cae en la cuenta del engaño. Pero a veces los espejismos obnubilan las mentes y llevan a tomar las apariencias por realidades.

Javier Giraldo, S. J.

El fenómeno de la mal llamada limpieza social es en realidad una estrategia política del Estado que busca el exterminio de los pobres, en especial de los jóvenes y los miembros de las organizaciones sociales con el objetivo de desarticular todo tipo de organización que cuestione el establecimiento.

Este fenómeno se viene presentando desde hace muchos años en los sectores populares bogotanos, sin embargo en el actual régimen militarista del presidente Uribe, toma un carácter especial por ser este uno de los gobiernos que a promovido la militarización de la vida civil y la tolerancia abierta con los grupos paramilitares de extrema derecha y el narcotráfico, en estos años se ha consolidado el proyecto paramilitar en el sur de Bogotá en complicidad con la policía, los organismos de seguridad del Estado y las fuerzas militares; en este sentido queremos hacer un breve recorrido de prensa durante el periodo Uribe, junto a las cifras dispuestas por algunas instituciones oficiales encargadas de las estadísticas de exterminio y control sobre la población a través del miedo y del terror que promueven estas fuerzas de la ilegalidad estatal.

PRENSA 2002



RESEÑAS DE PRENSA

El fenómeno de la mal llamada limpieza social es en realidad una estrategia política del Estado que busca el exterminio de los pobres, en especial de los jóvenes y los miembros de las organizaciones sociales con el objetivo de desarticular todo tipo de organización que cuestione el establecimiento.

Este fenómeno se viene presentando desde hace muchos años en los sectores populares bogotanos, sin embargo en el actual régimen militarista del presidente Uribe, toma un carácter especial por ser este uno de los gobiernos que a promovido la militarización de la vida civil y la tolerancia abierta con los grupos paramilitares de extrema derecha y el narcotráfico, en estos años se ha consolidado el proyecto paramilitar en el sur de Bogotá en complicidad con la policía, los organismos de seguridad del Estado y las fuerzas militares; en este sentido queremos hacer un breve recorrido de prensa durante el periodo Uribe, junto a las cifras dispuestas por algunas instituciones oficiales encargadas de las estadísticas de exterminio y control sobre la población a través del miedo y del terror que promueven estas fuerzas de la ilegalidad Estatal.

PRENSA 2002

BOGOTÁ / NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Servicio militar en barrios

Los bachilleres de Bogotá podrán prestar el servicio militar obligatorio en las localidades del Distrito donde hayan nacido o residan, anunció ayer el Gobierno Nacional.

La nueva modalidad para que los jóvenes cumplan con ese deber ciudadano, está incluida en la política de seguridad que se aplicará en la capital del país para hacer frente al terrorismo y combatir la delincuencia.

La misión de los soldados bachilleres será similar a la que realizan los Policías auxiliares, que apoyan la tarea de las autoridades en los barrios para cumplir servicio social obligatorio.

Actuarán desarmados, recibirán capacitación o instrucción como la de los auxiliares bachilleres y, durante los 12 meses de servicio se les pagará una remuneración mensual.

El acuerdo para cambiar la figura del servicio militar tradicional fue hecho por el presidente Álvaro Uribe Vélez y el alcalde Antanas Mockus, durante una reunión en la que se evaluaron las estrategias para mejorar la seguridad ciudadana en la ciudad.

En el encuentro celebrado en la Casa de Narino y que se pro-



EL PRESIDENTE Álvaro Uribe Vélez y el alcalde Antanas Mockus, lanzarán una campaña para promover el cumplimiento de los deberes ciudadanos consagrados en la Constitución Política.

longó por tres horas, participaron los ministros del Interior, Fernando Londoño y de Defensa, Marta Lucía Ramírez; el director de la Policía Nacional, general Luis Ernesto Gilibert; el comandante del Ejército, general Jorge Enrique Mora; el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Héctor Darío Castro, y el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Estrélez.

Como parte de la nueva estrategia, Uribe se comprometió a aumentar el pie de fuerza en Bogotá en cerca de 4.000 Policías, dentro de los cuales

nuevos uniformados que se prepararán para distribuirlos en todo el país.

Por su parte, Mockus anunció que el número de Frentes Locales de Seguridad se incrementará de 4.737 a 10.000 en el año y medio que le queda de mandato (ver recuadro).

El gobierno Nacional y el Distrito lanzarán una campaña institucional para difundir los deberes ciudadanos consagrados en el artículo 85 de la Constitución Política con el fin de promover la solidaridad ciudadana y la colaboración con las autoridades.

CRIMEN / ASESINADOS SEIS JÓVENES

Masacre en Soacha

Seis hombres jóvenes fueron asesinados en la tarde de ayer en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá.

El crimen es atribuido por las autoridades a vendetas entre grupos de delincuentes.

Según la Policía, el hecho se presentó hacia las 5:30 p.m. en el barrio La María. Las seis víctimas, que se encontraban en una esquina del sector, fueron abordadas por un grupo de desconocidos que, sin mediar palabra, comenzaron a disparar indiscriminadamente. Allí cayeron muertas dos de ellas.

Los otros cuatro jóvenes, intentando huir de los delincuentes, corrieron hacia el parque conocido como Laguna de Tibanica. Sin embargo, sólo lograron avanzar 500 metros, porque los delincuentes los alcanzaron y les dispararon en repetidas ocasiones.

Según el testimonio de varios testigos, uno de los heridos, moribundo, pidió ayuda pero nadie lo auxilió.

Guerra de pandillas

Dos horas más tarde acudieron unidades de la Policía y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para realizar el levantamiento de los cuerpos, bajo la coordinación de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Kennedy.

Al cierre de la edición, no se tenían las identidades de las personas muertas. Únicamente se informó que sus

edades oscilaban entre los 18 y 22 años.

La Policía realizó anoche patrullajes intensos por todo el sector para dar con el paradero de los asesinos.

Las autoridades atribuyeron el hecho a guerras entre pandillas que, desde hace varios meses, libran una lucha por el dominio de la zona con el fin de controlar el asalto callejero y la venta de estupefacientes.

Las víctimas eran hombres entre los 18 y 22 años de edad.

Sin embargo, algunos habitantes aseguran que los asesinos podrían pertenecer a un grupo de limpieza social o de paramilitares.

"Aquí impera la ley del silencio. Todo el mundo vio, pero nadie dice nada, por temor a que lo maten por chismoso", dijo uno vecino del sector.

Un fiscal seccional de Soacha asumió la investigación para determinar con exactitud los móviles y autores del crimen.

Depilación Defi
Luz láser con la última tecnología
No más vellos... sin manchas, sin
DERMO Papeles moneda y
CENTER Tels: 218 6077

PROVECHE FESTIVAL CELL
SAMSUNG BLUE \$99.00 ESPECIAL
NOKIA 6125 GRATIS

El tiempo Agosto 2002

...autoridades que vigilan los sectores críticos no descartan la práctica de miedos y de paramilitares en la ciudad. Dicen que la mayoría de las

El secuestro del edil de la localidad de Engativá, Isidoro Téllez Páez, el pasado miércoles 25 de septiembre, y la rescisión de su hijo dos días después, dejó una vez más al descubierto la presión que organizaciones delincuenciales y grupos armados al margen de la ley están ejerciendo sobre Bogotá.

Hostigados selectivos, acoso, extorsiones, amenazas y un régimen del terror perpetrado por los aparatos gubernamentales de violencia son actos cotidianos a los que los habitantes de la capital del país se han tenido que acostumbrar.

Lugares como la ribera del río Bogotá y algunos barrios marginales, en donde cada vez es más común la aparición de cadáveres, indican que la violencia en la ciudad se agudiza y profundiza.

Una ciudad de silencios

La guerra en Bogotá se escucha en el ruido que los distintos actores de la violencia ejercen sobre los ciudadanos.

El tiempo septiembre 2002

EL ESPECTADOR DOMINICAL, octubre 4 de 2002

"Limpieza social" en Ciudad Bolívar

Sangre en la arena

Hace poco más de una semana, un grupo de hombres armados incursionó en el barrio Villa Gloria de Ciudad Bolívar, mató a dos jóvenes e hirió de gravedad a otros dos. La gente habla de paramilitares.

La música de Dario Gómez, a volumen en el límite del ruido, no pudo ahogar el eco repetido de unos disparos que le gaban de la calle principal del barrio Villa Gloria, en Ciudad Bolívar, y entraban en un momento crucial del día.

abrió fuego contra el joven y un grupo de amigos que horas antes habían jugado un piratito de fútbol. Eran las 8.00 de la noche de un día festivo convertido en tragedia para la familia de doña Flor y las de Henry (22 años), Gabriel...

golpe. Lo mataron a quemarropa, de un solo tiro".

Distante de ahí, a unos 60 metros, el alboroto de la gente y el alegato de un conductor de buseta pusieron a Mayerli de nuevo en el camino del luto. "Mi hermano Miguel estaba todavía vivo, pero sangraba mucho por las piernas y el único carro que podía llevarlo al hospital de Meis-



Proyecto Justicia y Vida

El espectador Octubre 2002



Dona Flor y su hija muestran los orificios que dejaron los impactos de bala en el bluyin de Miguel (en la foto), un joven que encontró la muerte en una esquina del barrio Villa Gloria.

1-8 MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2002

BOGOTÁ

SEGURIDAD / HABRÁ 20 NUEVOS CENTROS DE MOVILIZACIÓN VECINAL

Más policías para los barrios

Inversión para el año 2003 aumentó en 14 mil millones de pesos. El Sumapaz tendrá estación de Policía y brigada móvil del Ejército.

HUGO SIENRA
Profesor de EL TIEMPO

En el proyecto de presupuesto que acaba de presentar la Administración para el año entrante aparecen las bases con las que se piensa blindar a la ciudad ante posibles acciones terroristas. Por ejemplo, se anuncia la creación de Unidades Móviles de Policía, Centros de Movilización Vecinal en los barrios y la construcción de tres nuevas estaciones -una de ellas en el Sumapaz- en localidades críticas de la ciudad. «La inversión es 54.000 millones de pesos, un 27 por ciento más de la presupuestada para este año.

De esta estrategia hacen parte 2.000 nuevos agentes que

entregará a la ciudad el Gobierno Nacional el próximo año. De acuerdo con el proyecto de presupuesto para el 2003, fijado en 8,8 billones de pesos, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, adscrito a la Secretaría de Gobierno, aumentará en 14.000 millones de pesos sus inversiones en seguridad.

«Bogotá tiene que ponerse a tono con las nuevas realidades y por eso se han apropiado más recursos para equipos, inteligencia y el sostenimiento de toda esta infraestructura con la que se brindará mayor seguridad a la ciudad y a sus habitantes», dijo Hugo Acero, Subsecretario de Seguridad y Convivencia.

El Distrito invertirá en la construcción de las estaciones de Policía de las localidades de Sumapaz, Ciudad Bolívar y Puente Aranda 20.000 millones de pesos. Estas zonas son con-

sideradas de alto riesgo por la presencia de milicias urbanas y bandos de delincuencia organizada.

En el caso del Sumapaz, la localidad más grande de ciudad y de vital importancia geopolítica para el centro del país, tal como lo reveló un reciente informe de EL TIEMPO, la estación estaría ubicada en Betania o Nazareth, dos de los corregimientos más importantes de la región.

El Gobierno Nacional, a solicitud del alcalde Antanas Mockus, está estudiando la posibilidad de crear una brigada móvil del Ejército, que haría operaciones en el corredor que conecta a Usme con el Sumapaz.

En localidades periféricas como Bosa, Suba, Usaquén, Chapinero y Regencia, se construirán en el 2003 cerca de 20 nuevos Centros de Movilización Vecinal para que la Policía haga presencia permanente en los barrios.

La tarea de estos centros será apoyada por las Unidades Móviles, que recorrerán los barrios las 24 horas para atender cualquier alteración del orden o emergencia.

¿Es el camino?

En opinión de Mauricio Llereda, analista de temas seguridad, el aumento del pie de fuerza es fundamental: «Lo que se está planeando es un acierto porque el reforzamiento de la infraestructura de seguridad es crucial ante la falta de protección que tienen algunos sectores de la ciudad por la ausencia de Policía».

Entre más acercamiento haya entre la Policía y la comunidad, mejores posibilidades



BOGOTÁ ESPERA recibir 2.000 nuevos policías que serán entregados

de supervivencia tenemos, sostiene Llereda tras subrayar que a todo esta estrategia hay que agregarle la solidaridad ciudadana para enfrentar fenómenos como el terrorismo.

Maria Victoria Llerena, coordinadora del programa Paz Pública de la Universidad de los Andes, dice que la estrategia de la Administración es acertada al pedirle apoyo al Gobierno con más hombres para focalizar la atención en zonas críticas como Sumapaz y Soacha.

Sin embargo, sostiene que para resolver los problemas en

los puntos conflictivos de la ciudad, se requiere complementar los planes de seguridad con la presencia institucional a través de programas en el área social. «Confío en que las acciones de las autoridades apuntan hacia los barrios críticos que tiene alta incidencia de la Administración con base en el sistema unificado de información de violencia y delincuencia en la ciudad», dijo.

Otras advertencias

De los 104 CAI que funcionan en la ciudad, 80 serán remodelados con el fin de con-

LÍNEA 123 DE EMERGENCIAS

Una de las novedades de la estrategia de seguridad para el año entrante es la modernización del Centro Automático de Despacho (CAD), que contempla como programa prioritario la creación del sistema único de emergencias a través de la línea 123, que servirá para que los ciudadanos se comuniquen con la Policía.

Por este teléfono estarán integrados el Cuerpo Oficial de Bomberos, las secretarías de Tránsito y Transporte, y de Salud, la Cruz Roja y la Red de Radioaficionados.

Los equipos adquiridos en 1990 para el CAD, que funcio-

na hoy con el teléfono 112, ya están llegando al final de su vida útil, por lo cual se requiere su reposición con nuevas tecnologías, según el gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, Ernesto Matallana.

«Con el fin de conseguir recursos permanentes para su sostenimiento vamos a estudiar conjuntamente con el Concejo el cobro de una contribución que no supera los 1.000 pesos y que se cargará a las cuentas de los distintos operadores telefónicos», explicó el funcionario al anunciar que en los próximos días se oficializará la propuesta.

Pasaría bien
Encontrar el perfume perfecto
Cruzarse con un concierto de
Oír el CD que nunca encu

Proyecto Justicia y Vida

PRENSA 2003

El tiempo Enero 2 de 2003

BALANCE / GENERAL TEODORO CAMPO PRESENTÓ AYER EL INFORME FINAL DEL AÑO

Los asesinatos, los únicos que no bajaron en el 2002

Según el director de la Policía, en el año que acaba de terminar se produjeron 73 masacres y 110 secuestros menos en el 2002. Así como 697 muertes menos en accidentes.

En uno de los años en que la sensación de inseguridad ha crecido en Colombia por el escalamiento de la guerra y a pesar de alivio que significó para ciertos sectores la llegada de Alvaro Uribe al poder, paradójicamente las estadísticas de la Policía Nacional muestran que la mayoría de los delitos de impacto social han disminuido en todo el país.

Según el informe presentado ayer por el director de la institución, general Teodoro Campo, en el 2002 hubo 207 homicidios, 73 masacres y 110 secuestros menos que en el 2001.

"La reducción de los casos de homicidio, aunque porcentualmente no es muy alta, significa que hubo unos 300 muertos menos y esto es importante por que se trata de uno de los delitos de mayor impacto social", señaló Campo.

Sin embargo, al mirar en detalle las cifras de los homicidios se nota que la rebaja se debe a la disminución de 697 en el número de muertes en accidentes de tránsito (ver gráfico). Y que por el contrario, el asesinato se convirtió en el único delito que aumentó, 390 más, de 27.840 en el 2001 a 28.230 en el año que acaba de terminar. Es decir, mínimas variaciones. Así murieron asesinadas 49 personas en Colombia, en el 2002 el promedio diario aumentó a 71.

Cabe anotar que hace dos años, del 2000 al 2001 se había presentado un aumento mayor de cinco por ciento, cuando pasaron los asesinatos de 26.540 a los 27.840 del 2001.

Medellín se dispara
El incremento por su parte, narraron los 185 (con 1.032 muertos) en el 2001 a 112 (con 666 muertos) en el 2002. En buena medida, esta variación se explica porque se sigue consolidando el cambio de lógica de los paramilitares, que redujeron en menos homicidios colectivos y más asesinatos selectivos. De hecho, en el 2000 el número fue mucho más abultado: 236 casos.

La disminución de muertes en accidentes de tránsito, se atribuyó a las campañas educativas y de represión contra el conductor ebrio que se han emprendido en todo el país.

Entre las zonas más afectadas por las muertes violentas se destaca el Área Metropolitana de Medellín con un total de 4.583 homicidios (incluyendo los de tránsito), que casi duplica a la segunda, el Área Metropolitana de Cali con 2.061.

El caso de Medellín es dramático, pues el recrudecimiento de los combates entre guerrilla y paramilitares en distintos barrios de la ciudad ha provocado el aumento de 1.702 homicidios comunes en dos años (en el 2000 los asesinatos fueron 3.151).

En tercer lugar está Bogotá, que a pesar de multiplicar el número de habitantes a los dos millones, registró un número menor de muertes violentas: 2.404. Y el departamento del Norte de Santander, que ha visto agravar el conflicto en Cauca y el Calzudo, ocupó el puesto 10 con 2.020 homicidios.

Llama la atención también, además de los ya mencionados, la disminución de delitos como



EL GENERAL TEODORO CAMPO presentó ayer el informe final del 2002.

Delitos de mayor impacto social

	2001	2002	Variación
Homicidios	27.840	28.230	+1%
Homicidios con	27.840	28.230	+1%
Masacres	185 (1.032)	112 (666)	-39%
Harto de Vehículos	31.774	29.253	-8%
Muerto entidades financieras	338	208	-38%
Perdidas bancarias	1.840	1.427	-23%
Secuestros	2.941	2.331	-21%
Secuestros colectivos	249 (1.529)	130 (1.170)	-47%

* Entre paréntesis, el número de muertos o secuestrados.
** Entre paréntesis, el número de plazas en caso de secuestros colectivos.

© Sica. Datos del INPEC. Fuente: Ministerio de Justicia.

el robo de vehículos (2.221 menos) y el de bancos (100 menos). En el caso de los secuestros, que según la Policía sigue una curva descendente (3.706 en el 2000, 3.641 en el 2001 y 2.531 en el 2002), las Farc desplazaron al

Resultados

La Policía presentó los siguientes cifras, entre otras, como resultados de sus operaciones en el 2002

Aprehensiones en todo los países	222.223
Capturas de alta peligrosidad	11.171
Rescates de rehenes	67
Secuestros colectivos	6
Parasitajes capturados	49
Parasitajes muertos	11
Secuestrados rescatados	236
Victimas rescatadas	8.023
Armas rescatadas	41.521
Cables de coca incautados	130.303 kg
Cables de coca incautados	3.231 kg

El general Teodoro Campo también presentó el balance de las operaciones de la institución (ver gráfico) y dijo que en ellas murieron 236 policías. "Hemos pagado una cuota muy alta de nuestros hombres en esta lucha", añadió.

También entregó cifras sobre la red de inteligencia que el presidente Uribe ha puesto en práctica. Campo habló de 1.812.547 "cooperantes sin remuneración" y 1.008 "cooperantes con vinculación y remuneración ocasional" (a quienes les han entregado 457 millones en recompensas).

Campo concluyó con el dato de 37 millones de vehículos que se han movilizado en las carreteras promovidas por el Gobierno para evitar la acción de guerrilla y "paros" en las carreteras del país.

DIRECTIVA EXTERNA No. 0071 (Diciembre 27 de 2002)

Por la cual se establecen las tarifas del servicio de TPBCL a partir del mes de enero de 2003 y se dictan otras disposiciones.

EL PRESIDENTE de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.

CONSIDERANDO

Que en el artículo 605 de la Resolución 087/97 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 606 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 607 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 608 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 609 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 610 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 611 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 612 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 613 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 614 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 615 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 616 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 617 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 618 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 619 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 620 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 621 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Que en el artículo 622 de la Resolución 087/97 de la CRT modificada por el artículo 10 de la Resolución 575/02 se establecieron los tipos de Centros Mínimos permitidos a las empresas de TPBCL, definiendo para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el valor de \$ 245.000 por 1.000.

Proyecto Justicia y Vida

SEGURIDAD / LA CAPITAL, CON MENOS DELITOS

Se redujeron las muertes violentas

Durante el año pasado los homicidios comunes en Bogotá disminuyeron en 200 casos, en relación con el 2001, cuando se registraron 2.632.

Además, se presentaron 8.000 delitos menos, según el balance de la Alcaldía y la Policía Metropolitana sobre reducción de violencia y delincuencia en la ciudad.

Los delitos de mayor impacto social, como hurto de vehículos, de residencias, de entidades financieras y el atraco callejero, cayeron en un 18 por ciento en promedio en el último año.

Fueron retenidos 84 mil artículos de distintos delitos, y decomisadas 13 mil armas de fuego. **1-4**

VEEDURÍA / INDICADORES SOCIALES EN BOGOTÁ

Niños y jóvenes, más vulnerables

No es necesario ser pobre para ser vulnerable en la sociedad.

Una familia de estrato medio-bajo, por ejemplo, sin mayores ahorros, una mujer jefe de hogar con varios hijos, un joven que se ve obligado a trabajar sin terminar sus estudios, o un niño que no es atendido oportunamente, son situaciones en las que a pesar del bienestar relativo, existe un alto riesgo de vulnerabilidad. Cualquiera de ellos puede encontrarse en el desempleo, si no tiene herramientas efectivas que le permitan superar una crisis en el momento indicado.

De estas situaciones se ocupa el estudio 'La vulnerabilidad social en Bogotá 2002', presentado ayer por la Veeduría Distrital, como una herramienta de carácter técnico y una propuesta de avances en política social para la ciudad.

Los niños, los jóvenes (ubicados principalmente en las localidades del sur y el occidente), las madres cabeza de familia, los ancianos, los ciudadanos de la calle y las familias en situación de desplazamiento -más de dos millones-, constituyen los grupos más vulnerables de la ciudad.

En el 97 se registraban 4.700 ciudadanos de la calle. Hoy, esta cifra pasa de diez mil, concentrados en las localidades de Chapinero (1.110), Mártires (799) y San Cristóbal (514). Su número disminuye en Ciudad Bolívar (69), Bosa (78), y Usme (63).

Las localidades que tienen las mayores tasas de mortalidad infantil son Los Mártires, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Barrios Unidos.

El estudio también revela una vulnerabilidad relacionada con la salud de los niños

menores de 5 años, por una disminución -entre 1999 y 2001- en la cobertura de las vacunas contra el polio, triple viral (rubeola, sarampión y paperas), DPT (difteria, tétano y tosferina), tuberculosis, hepatitis e influenza.

Bogotá tiene más de 500 barrios con problemas de titulación y cerca de un centenar están ubicados en zonas de amenaza por inundación o por remoción en masa.

Empleo, la salida

Según el documento, la desigualdad en la distribución del ingreso, que se relaciona de manera estrecha con la pobreza, se ha profundizado de manera sensible. La falta de oportunidades expone a ciertos grupos, como es el caso de los jóvenes.

"Los pobres -entre los más vulnerables- no son inactivos, todo lo contrario, están metidos en el mercado, se endeudan, buscan un carrito de ventas populares, aunque después se den cuenta de que necesitan más recursos. Por eso el camino es incentivar el empleo. Extender verdaderos recursos de crédito para que muchos puedan legalizar su propiedad. Somos una nación de trabajadores y nos gusta hacer empresa", afirmó Alejandro Vivas, durante la presentación del estudio.

LIPOLISIS
Adelgace de Verdol
Tratamiento Médico 100% Efectivo.
Sin Cirugía
Remediación: Calle 98 No. 22-94 Torón, Bogotá
Tel: 333 1000 2000000 2000000

TEMPUS

Proyecto Justicia y Vida

14 de febrero 2003

SEGURIDAD / CIUDADANOS Y AUTORIDADES TOMAN PRECAUCIONES

La ciudad está alerta

Nadie se queja. Y si lo hace, es para protestar porque el vigilante de turno no revisó bien el carro, el paquete, el bolso y hasta el coche del bebé. Es la rutina en la que ha entrado la ciudad presa de una extraña sensación de miedo: luego del bombozo al Club El Nogal, hace ocho días. Una rutina que se repite cada vez que sucede un atentado terrorista. Los retenes se multiplican. Hombres de la Policía y el Ejército revisan puentes peatonales, vigilan edificios públicos, sedes bancarias, centros comerciales, recorren barrios y hacen requisas.

No es raro por estos días ver colas en clubes, almuerzos restringidos o, en la oferta sonora las re-

En las próximas horas sería radicado un proyecto para que organismos de seguridad y de socorro tengan una misma red de comunicación a través del 121.

tra al terrorismo, es no entrar en pánico y mantener la productividad, ha dicho el alcalde.

Mientras tanto, en las próximas horas, decidirá sobre el Club El Nogal, un proyecto de ley para que los clubes puedan, con autorización, vender por el momento cosas que funcionan en la zona del club, similar a la que existe en otros clubes. Esto, por parte de la ciudad, que permitirá intervenir en todos los casos de terrorismo y seguridad. Este proyecto está en la agenda de la ciudad para ser discutido en la próxima sesión del concejo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Semana marzo 3 al 10 de 2003

INFORME ESPECIAL

DELINCUENCIA

Semana marzo 3 - 10 / 03 Ed. 1089

Los condenados

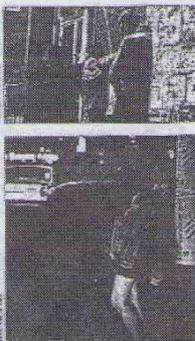
La 'limpieza social' de delincuentes se ha vuelto el pan de cada día en el país. Parás y guerrilla intentan legitimarse de esa forma en los pueblos.

CUANDO CARLOS ALIRIO SANCHEZ SANDOVAL se ponía furioso no gritaba ni golpeaba puños. Sólo se rascaba la oreja derecha tres o cuatro veces y salía a dar una vuelta hasta que le pasara la rabia. Su humilde mamá lo recuerda como un joven que hacía reír a todos con sus chistes y sus originales dichos.

En las calles de Chile, en cambio, no son precisamente conocidos por su buen humor. 'Chiche', como se le llama en el pueblo en un libro y también ladrón. Todavía hoy, un día año después de su muerte, al oír su nombre los jóvenes de su barrio agardan sus ojos hacia la esquina y lloran. Se resisten a hablar abiertamente de él.

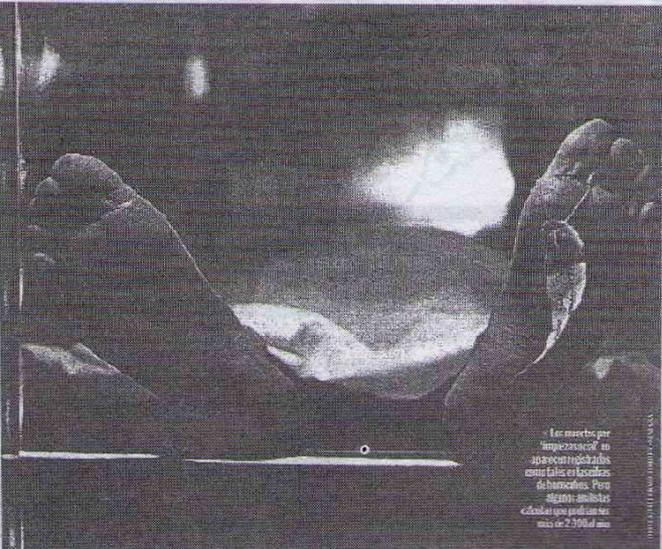
El cambio de identidad y el apellido de Carlos de 'Chiche' tenía a la cabeza de Chile. Roberto Aron, también asesinado o incluso asesinado a quienes los involucra y le pone a unos deportistas de Bogotá que fueron a pasar a la cárcel pero salían rápidamente y andaban camuflados por las calles.

Fue a comienzos del año pasado de los ochenta la fecha. Comenzó a ser el crimen en el pueblo que tenían sus días arrojados. El bodegón más cercano a la plaza de los tres delincuentes. Luego el 19 de abril, dos hombres silenciosos de un barrio y los 9 de la noche en plaza de Chile, al lado de la plaza de Zaparco, 'Arenillo' y 'Rafael'. Los otros 12 delincuentes que murieron antes estaban con otros en prisión. 'Los señores de acá, que va a estar mal', decía uno de los ladrones que le dijo a su amigo un policia-



Los grupos de 'limpieza social' atacan a los delincuentes de poco a poco. También existen las revueltas, a los delincuentes y a los policías.

do que algo iba a pasar. En marzo de cuatro meses después asesinaron a 13 jóvenes en Chile. La mayoría de ellos con antecedentes penales, según la Fiscalía, aunque en el bajo mundo calculan que fueron más del doble. Mataron a todos, incluso a 'Chiche'. Con 25 años, una educación primaria y uno que era separado o primer hijo, se había alzado desde niño con un grupo de lincheros sociales. Su labor era sencilla: se subía y la camioneta blanca gris de los asaltos y voladuras era así algunos compañeros.



Los muertos por 'limpieza social' en los comités de vecinos, los grupos de lincheros. Pero algunos delincuentes chilenos que pueden ser más de 2.500 en el país.

Después julio estos asesinatos aún han vuelto a ocurrir. Sin embargo la posibilidad que se repitan este tipo de linchamientos que sobreviven en la zona de los tres delincuentes a la zona de los tres delincuentes, firma sus parás y más de 20 años de linchamientos que hoy a Bogotá están de mostrar a sus amigos para evitar

carcer la misma suerte, pero que tres meses después de su ejecución que hacer volvió a su pueblo como un ciudadano a morir. Porque en Colombia ya existe la pena de muerte de facto para muchos linchamientos de poco a poco. En Chidimántrica son las familias más pobres, los linchamientos por los pobres muertos. 'Es que la gente se asusta de ellos porque todos se asustan a los niños, los niños los lloran y hasta los adultos', afirma una fiscal de Chidimántrica, como justificación a los linchamientos.

Pero también son víctimas involuntarias porque no aparecen registrados como tales. 'Cuando digo el número de los asesinados es un error', dice el alcalde de Bogotá y en Girardot 10 sólo en 2002. Pero más de 200 muertos de linchamientos, y con frecuencia también prostitutas, homosexuales y heterosexuales, de nacionalidad en Chile, en Bucaramanga, en Tuluá, en Barranquilla, en Combeima, en Aragua. Casi en todo el país. Su mayoría son linchamientos de familias más pobres, los linchamientos por los pobres muertos. 'Es que la gente se asusta de ellos porque todos se asustan a los niños, los niños los lloran y hasta los adultos', afirma una fiscal de Chidimántrica, como justificación a los linchamientos.

Proyecto Justicia y Vida

Marzo 2003

Piden más recursos para la seguridad

Sobre Bogotá, existe una amenaza real de 17 frentes pertenecientes a la guerrilla y los paramilitares, que se han ubicado en municipios vecinos como estrategia para asediar la ciudad.

Esos frentes, 15 de los Pare-1 del Eje-1 de la Autodefensa, tienen como objetivos militares el sistema TransMilenio, los edificios públicos y los centros comerciales, lugares considerados vulnerables.

Así se lo hicieron conocer ayer al Concejo la Brigada 13 del Ejército y la Policía Metropolitana de Bogotá en una sesión plenaria de carácter secreto que se realizó para evaluar la situación de seguridad de la ciudad frente al terrorismo y las medidas que se han tomado.

Durante la sesión a puerta cerrada, a la que asistió la secretaria de Gobierno, Soraya Montoya, se planteó la necesidad de apropiarse más recursos y se insistió en el aumento del pie de fuerza.

La concejal citada, María Victoria Vargas, anunció la disposición de esos recursos a través de un tipo de financiamiento que se destinará exclusivamente a inversiones en infraestructura y tecnología, como cámaras de video y equipos antiexplosivos.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Jorge Daniel Castro, lo pidió al Concejo aprobar el número único de emergencias 123 que reemplazaría el 112 para mejorar la seguridad con colaboración ciudadana.

Montoya anunció que el Distrito está realizando gestiones para comprar, en mayo próximo en Estados Unidos, dos equipos de alta tecnología para bloquear las frecuencias de los aparatos electrónicos que están cerca del lugar donde se hayan colocado artefactos explosivos.

Al término de la sesión, el general Castro confirmó que al final de este mes entrarán en servicio 600 Policías más para reforzar el pie de fuerza.



EL EJERCITO ha intensificado en los últimos días los patrullajes en las zonas periféricas de la ciudad.

Proyecto Justicia y Vida

El espectador 20 de abril 2003

En la ciudad, en promedio, cada día mueren siete personas de forma violenta

Así mueren los bogotanos

Escrito por Andrés Espinosa García

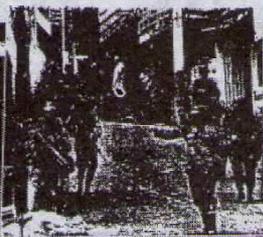
El fiscal de turno arribó pasadas las 10:00 de la ma-

Después del homicidio, los accidentes de tránsito, los suicidios y las muertes accidentales son las causas más comunes de fallecimiento

Semana Julio 2003



Pese a la brega unitaria que delimita los paramilitares desde el momento de su nacimiento, sus mandos representan en regiones como Antioquia, Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Huila



La reapertura de los barrios periféricos de Medellín ha contribuido a reducir los secuestros a la tercera parte en la capital antioqueña



ORDEN PUBLICO Julio 14 2003 ed. 1106

¿Meramente coincidencias?

Operativos militares grandes y exitosos del gobierno de Alvaro Uribe han coincidido con una fuerte expansión paramilitar en esas zonas.

EN SU BALANCE DEL PRIMER semestre del año el gobierno anunció logros históricos en la lucha contra la violencia: redujo el homicidio en 22 por ciento frente al mismo periodo de 2002; bajó el secuestro en una tercera parte y en más de la mitad los ataques a las torres de energía. Y lo que parece más increíble, la guerrilla sólo pudo atacar tres pueblos en seis meses, muy por debajo del promedio mensual durante 2000.

Algunos de estos éxitos son producto de la estrategia de seguridad democrática que ha ido fortaleciendo la presencia permanente de la Fuerza Pública con soldados campesinos, batallones de alta montaña y carabineros de la Policía en diferentes lugares del territorio nacional. Los logros también se deben a grandes operaciones militares ofensivas. Con las llamadas Orión y Mariscal contra las milicias urbanas en la Comuna 13 y otras comunas en el sector noroccidental de Medellín el Ejército y la Policía les arrebataron al ELN y a las Farc sus territorios en plena capital antioqueña.

A principios de este mes el gobierno municipal anunció que los homicidios se han reducido casi 40 por ciento y los secuestros han bajado casi 70 por ciento en Medellín.

La Operación Mariscal, en el oriente antioqueño, ha logrado debilitar al Carlos Airoso Buitrago, del ELN, considerado el frente que más secuestra en el país. Tan efectiva ha sido que es la zona donde más deserciones de guerrilleros se han presentado y se registran las cifras más alarmantes contra el crimen.

Los secuestros bajaron 56 por ciento en Antioquia, según Fondeliberiad. Los ataques a las torres en esta zona estratégica, ya que suministra energía al resto del país, disminuyeron drásticamente y la circulación por la carretera Bogotá-Medellín ha fluído como nunca.

Algo similar ha ocurrido en el occidente de Cundinamarca. Con un gran despliegue militar el Ejército llegó al corazón de la guerrilla en Viota y ha propiciado un duro golpe a los frentes 22 y 42 de las Farc, que tenían asolados a los hacendados y campesinos de esa zona. En la primera mitad del año los secuestros cayeron allí casi 38 por ciento en relación con el mismo periodo de 2002 y se ha reactivado la producción de las fincas. Pero más importante aún, la Fuerza Pública les arrebató a las Farc el punto clave desde donde ejercía control sobre corredores estratégicos para acercarse a Bogotá. Se puede decir, sin titubear, que hoy la guerrilla está más lejos de la capital del país de lo que ha estado en muchos años gracias a esta efectiva operación.

El lado preocupante de estos éxitos, como lo verificó SEMANA con varias fuentes, es que estas operaciones del Ejército y de la Policía coinciden con una fuerte expansión paramilitar en esas zonas. Es una tendencia que causa alarma porque pone en riesgo no sólo toda la política de seguridad del presidente Alvaro Uribe sino también los avances conseguidos por la Fuerza Pública.



«Las Fuerzas Militares están persiguiendo por igual a paramilitares y guerrilleros», dijo María Leda Ramírez, ministra de Defensa

Testimonios recogidos por SEMANA indican que, por ejemplo, en el terminal del barrio 8 de Marzo las paramilitares extorcionan a los buses colectivos. La 'vacuna' es baja, dada la pobreza del lugar, pero la cobrecan de manera costosa. También operan como jueces del lugar. Un señor se fue hace poco sin pagar el arriendo. Las autodefensas fueron a buscarlo y acordaron que les dejara el televisor en prenda, hasta que pagó a plazos su deuda. Otro violó a una niña y ellos lo ajustaron. Los casos abundan y, aunque por ahora gozan de un mayor aprecio entre la población del que tenían los milicianos de la guerrilla, es evidente que, al no tratarse de autoridades legítimas y vigiladas, con el tiempo podrán sentirse confiados y aumentar sus abusos.

Lo preocupante es que todo esto lo hagan de manera abierta y descarada. A todo el mundo le parece increíble que los policías que patrullan el lugar sean los únicos que parecen no darse cuenta de lo que ocurre a ojos vista de todos. Por eso cada día crece más la sospecha entre las comunidades de que el jefe paramilitar del Bloque Metro, 'Rodrigo', no exageró cuando denunció en un reciente comunicado que la Policía, aun a alto nivel, recibía sobornos de su archienemigo, 'Don Berna'. SEMANA

no pudo confirmar esta versión pero sí algunas evidencias de que en el terreno existe como mínimo negligencia para combatir por igual a los paramilitares. En la ciudad de Bellavista, por ejemplo, los paramilitares presos del Bloque Metro exceden con creces los del Nutibara, un hecho que por sí sólo despertaba preguntas.

En el noroccidente antioqueño también existen coincidencias entre la arrebatada militar y una expansión paramilitar del Bloque Metro. Diversas fuentes denunciaron, por ejemplo, que este grupo facilitó el ingreso del Ejército a zonas como Río Verde y Aquilaminá, donde históricamente se asentó el ELN. «En Aquilaminá hubo combates que más bien parecían cubrimientos de retirada», afirma un testigo. Luego entró el Ejército. Hoy siguen ambas fuerzas en la zona. En el caso urbano de San Francisco, que es la cabecera municipal de esta zona rural, los paramilitares tienen su base en una casa reconocida por todos los habitantes. «La única diferencia es que ahora andan de civil

LA OFENSIVA EN CUNDINAMARCA
Las mismas denuncias se repiten en relación con el operativo militar en Cundinamarca. Viota, un municipio de la región del Tequendama, a 82 kilómetros de Bogotá y con una población menor de 15.000 habitantes, es considerada la cuna del comunismo en Colombia. Allí nació el ala fuerte de las Farc y todavía viven allí muchas padres, hijos y nietos de guerrilleros. Aunque los lazos de sangre con la guerrilla son fuertes la gente había comenzado a desespararse con el frente 42 que operó allí. El jefe guerrillero 'Giovanny', en un ataque de paranoia por la

Proyecto Justicia y Vida

FORENSES / DIFERENCIAS ENTRE LOS DATOS DE MEDICINA LEGAL Y LOS DE LA POLICIA

'Perdidos' 303 muertos

El tiempo, 2 agosto 2003

1-8 SABADO 2 DE AGOSTO DE 2003

BOGOTÁ

SEGURIDAD / UNIDADES MÓVILES PARA COMBATIR CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA

16 nuevas zonas seguras

Empresarios donan a la Policía equipos por 7 mil millones de pesos. Barrios críticos de Fontibón, Engativa, Suba, Santa Fe y La Candelaria los beneficiados.

Para mejorar la seguridad de la ciudad y de los barrios con mayores índices de delincuencia y criminalidad, entraron en operación ayer 16 nuevas Zonas Seguras, creadas por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) con el apoyo de la Alcaldía Mayor y la Policía Metropolitana.

Cada una de ellas cuenta con dos camionetas, una moto, ocho policías, un Inspector de Policía y una Unidad de Denuncia y Contravenciones.

Los equipos: 55 patrullas, 28 motos y 28 unidades móviles.



UNAS 16 MUJERES POLICÍA, con el grado de subteniente, estarán a cargo del manejo de las nuevas Zonas Seguras creadas por la Cámara de Comercio.

COMUNIDAD / BIENESTAR SOCIAL A LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE BOGOTÁ

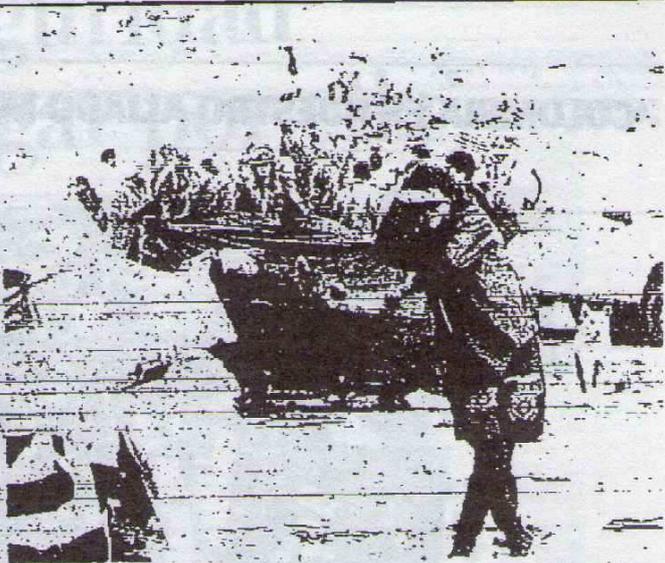
BOGOTÁ

INSEGURIDAD / MUERTES Y DESAPARICIONES

Hay brotes de 'limpieza social'

Bienestar Social se declara preocupada. Defensoría del Pueblo advierte que hay un drama parecido en Pereira, Cúcuta y Cali. "Son situaciones del pasado y aisladas". Policía

"nada", le narró anoche a *Caracas* una indigente. "Para estos habitantes de la calle no hay duda de que están en la mira de grupos de 'limpieza social'. Nos están azotando. Son linantes, vestidos de negro y con pasamontañas. Yo tengo varios compañeros que se han desaparecido de la Gabada de El Campín y de La Culebrera", aseguró un mendigo de la carrera 30.



PARA LOS HABITANTES de la calle no existe duda de que están en la mira. Están temerosos. "Nos están azotando", dicen.

WISTON GONZÁLEZ DEL RÍO

Sacramentalmente, todos los sábados al mediodía y desde hace un año, 'Lucho' iba al parque Santa Marta de Galerias a recibir el almuerzo que le brindaba una asociación cristiana. Pero desde noviembre del año pasado no volvió. Hasta dos meses se supo que 'Lucho' apareció muerto en la carrera 30.

En ese sector, en la calle 72, amanecieron muertos, hace unos y medio "Siete fuegos" y 'La raya'. Igual suerte estuvieron a punto de correr otros tres indigentes a comienzos de mayo. "Estaban como a las 11 de la noche debajo de un puente de la carrera 30. Pasaron varios tipos y les dieron bala. Menos mal que ellos se tiraron al caño rápido y no les pa-

"Los que se tejean echar a las camionetas no vuelven a aparecer", denunció un reciclador que también recordó cómo se salvó de la muerte la semana pasada: "Me dieron plomo en el Federmán no más por estar reciclando en la noche, pero no me ha llegado el día". Afirmó otro que en la calle 69 con 21 "le van cayendo, lo suben a uno y se lo llevan hacia La Calera".

El fenómeno empieza a inquietar a las autoridades del Distrito. El Departamento Administrativo de Bienestar Social, que atiende a parte de los 14.500 indigentes que hay en Bogotá -2.500 de ellos menores de edad-, ya tiene reportes: "Nos enteramos, por usuarios, que recientemente alrededor de nuestros centros de atención en Puente

Aranda han estado algunas 'motos' dando vueltas en la zona pretendiendo hacer 'limpieza social', dijo Andrés Botero Arbeláez, gerente del programa de Atención a la Exclusión Social.

'Se sienten machos'

Para el defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, "este es un problema que se ha generalizado en Colombia. Estamos asistiendo a un drama parecido en Pereira, Cúcuta y Cali. Todas las semanas aparecen cadáveres".

Según Botero, "las formas que se han arraigado en el inconsciente de los colombianos, como el de desechables, pueden hacer que personas de izquierda o de derecha, con tragos, con amigos y sintiéndose muy machos, sean

capaces de acometer contra la vida de estas personas".

No hay estadísticas sobre víctimas de grupos de 'limpieza social'. Según Medicina Legal, el año pasado murieron 37 indigentes en el deprived y céntrico sector de El Cartucho: 49 por arma de fuego, 19 por arma blanca, 98 por la oleada terrorista del pasado 7 de agosto y uno por arma blanca y de fuego.

Sin embargo, es complicado establecer si los asesinatos se producen por ajuste de cuentas, riñas o 'limpieza social'. Lo que sí se puede afirmar es que este año la muerte violenta de indigentes, al menos en El Cartucho, ha disminuido. En el primer semestre se registraron 18 muertes, 14 de ellas por arma de fuego.

El comandante de la Policía

13 de agosto de 2003

'COLOMBIA ES NUESTRO ALIADO MÁS RECIO'



El general Richard Myers, jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFMM. de Estados Unidos, que aparece durante la rueda de prensa en la Base Aérea de Catam, destacó a Colombia como el aliado "más recio" de su país en América Latina y, en alusión a Venezuela, dijo que mientras los vecinos sean complacientes con los terroristas, Colombia no solucionará su problema. 1-2 Ciudad de Bogotá

CUMBRE / GOBIERNO PIDE A MANDATARIOS COFINANCIAR EL AUMENTO DEL PIE DE FUERZA

‘Si quieren seguridad tienen que pagar por ella’

La Ministra de Defensa, en la cumbre de gobernadores que se realiza en Cali, dijo que a corto plazo es necesario diseñar medidas para comprometer recursos locales para seguridad.

**LUIS ALBERTO MIÑO
Y PATRICIA ALEY**
Redactores de EL TIEMPO

La ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, les pidió a los gobernadores y a los alcaldes que se metan la mano al bolsillo para ayudar a financiar el aumento del pie de fuerza en el país.

La funcionaria lanzó la propuesta en la cumbre de gobernadores que comenzó ayer en Cali con 22 mandatarios regionales y la asistencia del Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Ramírez dijo que se trata de buscar alternativas conjuntas que permitan desarrollar la política de defensa y seguridad del Gobierno y para ello, tanto mandatarios regionales como locales deben aportar parte del costo que demanda el refuerzo de la seguridad en las regiones.

“Es difícil para el Gobierno encontrarse impotente ante tantas solicitudes de aumento de pie de fuerza. Sabemos que hay localidades donde es impensable pedirle al Gobernador que asuma parte de los costos, pero queremos decirles que hay que acostumbrar a la gente en el sentido de que si quiere seguridad hay que pagar por ella”, dijo la funcionaria.

La Ministra agregó que el Gobierno quiere llamar la atención sobre la necesidad de diseñar, a corto y mediano plazo, medidas que les permitan comprometer recursos locales y establecer cómo se haría esa cofinanciación.

De inmediato la propuesta tuvo reparos. “Los municipios ni el departamento tienen recursos para cofinanciar. Eso lo tiene que resolver el Gobierno central. Nosotros estamos bajo la ley 550 y la 617 y no podemos disponer de recursos”, dijo el go-



LOS GENERALES MORA, Velasco y Ospina estuvieron ayer en la base aérea de Apiay, en Villavicencio, para darles una voz de aliento a los oficiales y soldados.

Colombia, Prensa - EL TIEMPO

bernador del Cauca, Floro Tumbala.

Guillermo Alfonso Jaramillo, gobernador de Tolima, aseguró que la seguridad es un tema que le corresponde al Gobierno. “Para eso está el impuesto que el Gobierno logró a través de la tributación, cerca de dos billones de pesos. Los departamentos tienen que dedicarse a la inversión social”, dijo.

A favor y en contra

Otros mandatarios, como Gerardo Iván Guerrero, gobernador de Putumayo, le pidió a la Ministra mecanismos. “Estamos dispuestos a brindar apoyo siempre y cuando tengamos las herramientas”, aseguró Guerrero.

El gobernador del Valle, Germán Villegas, dijo que agradece que el Gobierno los haya apoyado con un Batallón de alta montaña y 17 pelotones, pero “el departamento no tiene recursos para ese tipo de cofinanciación”.

Uno de los que respaldó el anuncio fue el gobernador de Cundinamarca y presidente de la Federación de Gobernadores, Álvaro Cruz, quien consideró que los departamentos que tengan más posibilidades de inver-

sion deben aportar mayor cofinanciación, así como lo ha hecho Cundinamarca donde se ha apoyado al Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía.

Durante el evento, que termina mañana, el presidente Álvaro Uribe, les reiteró a los gobernadores que vigilen el proceso electoral para alcaldías y gobernaciones.

“que para estas elecciones nadie les pida permiso a los grupos violentos, hay que pedirle permiso solamente al pueblo”, dijo Uribe.

El Presidente les solicitó a los mandatarios que protejan a los candidatos sin importar cuál sea el grado de afinidad o de discrepancia.

“Hay que trabajar con la Fuerza Pública para garantizar la pureza de este proceso, teniendo mucho cuidado con que no los señalen de parcialidades”, dijo.

El ministro del Interior, Fernando Londoño, les advirtió que deben evitar cualquier conducta que se pueda asumir como politiquería. Y se mostró preocupado por las amenazas que comenzaron a surgir contra algunos candidatos y les pidió no ceder ante las presiones.

‘Hay buenos resultados’: Mora

Cuatro días después de que el presidente Álvaro Uribe les advirtió a los militares que quien no dé resultados debe dejar su cargo, el comandante de las Fuerzas Militares, general Jorge Enrique Mora, expresó su respaldo público a los oficiales de esa institución.

En la base aérea de Apiay, Mora dijo que la moral de la cúpula militar y del Ejército está en el nivel más alto, debido a los buenos resultados operacionales que se están entregando y que el Presidente de la República es conocedor de eso.

Mora y la cúpula militar realizaron ayer un recorrido por los municipios de Uribe, Lejanías y El Castillo, en el Meta.

PLAN / SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA PARA BOGOTÁ Y LA CIUDAD-REGIÓN

Estrategia segura a 10 años

En enero la ciudad debe tener su Plan Maestro de Seguridad para cumplir con el POT. Mockus lo presentó esta semana al Gobierno Nacional.

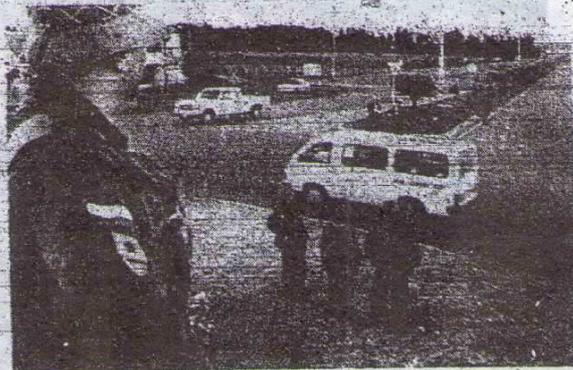
HUGO SIENRA
Redactor de EL TIEMPO

Por primera vez y en cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), expedido hace casi tres años, Bogotá tendrá un Plan Maestro de Seguridad, Defensa y Justicia a 10 años.

La estrategia, que esta semana fue presentada por el alcalde Antanas Mockus a la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez y los altos mandos militares, debe ponerse en marcha el primero de enero del año entrante.

El plan contempla no solo proteger a la capital ante amenazas como las del terrorismo y la subversión, sino a los municipios vecinos que integran la llamada ciudad-región, lo que demandará millonarias inversiones en tecnología de punta, equipamiento y construcción de infraestructura para hacer más eficiente la acción de la Policía.

La Presidencia de la República, los ministerios de Defensa y del Interior y Justicia, la Fiscalía, el DAS y la Policía Nacional, hacen parte del grupo de instituciones que tendrán a cargo la ejecución del plan, que debe estar listo en diciembre.



EL PLAN contempla no solo la protección de Bogotá sino de la ciudad-región con el fortalecimiento de la Policía. Joh Wilson Vlacino / EL TIEMPO

SEGURIDAD CIUDADANA

Fortalecer cuantitativa y cualitativamente la Policía Nacional en la ciudad-región.
Implantación de tecnologías de punta para la vigilancia de instalaciones y espacios públicos y para la operación de la Policía.

Acciones de prevención de la criminalidad a través de la difusión y apropiación por parte de la ciudadanía de

comportamiento seguro dentro de la corresponsabilidad civilista.

Definir actividades de defensa civil necesarias para prevenir y afrontar desastres naturales.

Articular la estrategia global de seguridad con los Planes de Desarrollo Nacional, de Cundinamarca y de Bogotá para darle continuidad.

DEFENSA FRENTE AL CONFLICTO ARMADO

Acciones para la prevención y manejo de amenazas y la minimización de vulnerabilidades en la ciudad-región.

Planes de defensa y cooperación civil-militar para las diferentes unidades territoriales de la ciudad-región.

Promover la resistencia ci-

vil contra los grupos al margen de la ley.

Diseño de esquema de defensa adecuado a las circunstancias específicas de la ciudad-región.

Promover la cooperación ciudadana para proteger la región.

Adecuación de equipamientos y dotaciones para las Unidades de Defensa.

Control del espacio público, anillos viales, espacio aéreo y puertos aéreos y fluviales.

Fortalecimiento de los sistemas de información y de comunicaciones.

JUSTICIA ALTERNATIVA

Involucra a entidades nacionales como despachos judiciales, cárceles, reclusorios de menores y defensorías de familia.

A nivel distrital habrá una acción interinstitucional entre Comisarias de Familia, Unidades de Medicación y Conciliación (mediadores, conciliadores en equidad y Jueces de Paz), Inspecciones de Policía y Unidades Permanentes de Justicia.

Promoción de deberes ciudadanos, en particular los relacionados con denuncia (corresponsabilidad).

Equipamientos para el desarrollo de la justicia formal y alternativa en la ciudad-región.

Políticas de desconcentración en la prestación de los servicios a través de las Casas de Justicia.

Concertación de los cambios necesarios para el desarrollo de los mecanismos de resolución pacífica de conflictos.

3 septiembre 2003
 21 de agosto de 2003

2003 septiembre 3

ESTUDIO / REVELA 'BOGOTÁ CÓMO VAMOS'

De cada 100 bogotanos, 63 son pobres

Para el Distrito, el problema es de ingresos; para los críticos, que los pobres no son incluidos en el nuevo modelo de ciudad.

NACIÓN Más información **1-2 y 1-8** De cada 100 bogotanos, 49 viven hoy en la línea de pobreza y 14 más están en condición de indigencia. Es decir, que no alcanzan a cubrir servicios básicos de salud, educación, vivienda y, en el peor de los casos, ni si-

quiera tienen la posibilidad de consumir los nutrientes necesarios.

Así lo revela un estudio presentado ayer por el proyecto 'Bogotá cómo vamos', según el cual en la capital los ricos tienen un ingreso 56 veces más alto que el de los pobres.

El problema se ve agravado por el alto índice de desempleo que registra la ciudad (17,4 por ciento). El empleo informal supera el 60 por ciento. Los más afectados por la pobreza son los niños, los viejos y los habitantes de la calle.

4 Septiembre 2003

COLOMBIA / UNICEF Y CODHES ENTREGAN INFORME SOBRE MENORES QUE HUYERON POR LA GUERRA

1'750.000 niños desterrados

De cada 10 niños desplazados, solo uno culmina su bachillerato. El 70 por ciento no ha recibido atención médica. Alertan al Gobierno.

ÁNGELA CONSTANZA REBEZ
Subeditora Relaciones con la Comunidad EL TIEMPO

Por cuenta de la violencia que vive Colombia, entre 1985 y el 2002 cerca de 1'750.000 niños huyeron de sus tierras en busca de seguridad y de un futuro mejor. Hoy, prácticamente ninguno ha encontrado ni lo uno ni lo otro.

De cada diez de estos menores solo cuatro han seguido estudiando, y de esos cuatro apenas uno ha conseguido terminar el bachillerato. Además, 1'225.000 han tenido serios problemas de salud, sin haber obtenido atención médica.

Todos han crecido en pequeños cuartos de barrios marginales donde compiten con otros pobres por el agua, la luz y hasta la comida. Por ello tienen altos niveles de desnutrición y hasta problemas mentales. Además, se han visto obligados a negar el sitio

CRUDA RADIOGRAFÍA

Según el informe 'Un país que huye, desplazamiento y violencia', el segundo que publica Codhes en esta temática, el 86 por ciento del total de los hogares en situación de desplazamiento incluye niños y adolescentes. De ellos el 14 por ciento tiene un menor; el 23 por ciento, dos; el 25 por ciento, tres; el 8 por ciento, cuatro; el 10 por ciento, 5; el 5 por ciento, seis; el 2 por ciento siete y el 3 por ciento ocho o más.

El 75 por ciento de esos hogares proviene de zonas rurales y, en casos específicos, de co-

munidades afrocolombianas o indígenas.

Alrededor del 30 por ciento del total de esas familias huyó con otras, mientras que el 70 por ciento lo hizo de forma individual.

El 36 por ciento de los hogares huyó por amenazas directas de los actores armados; el 25 por ciento, por miedo generalizado que se apoderó de las regiones donde vivía; el 8 por ciento, por casos de desaparición forzada; el 3 por ciento, por atentados y el 2 por ciento, por casos de tortura.

de donde vienen, para no ser señalados, y han ido olvidando su cultura.

Ese es el grave panorama que entregaron Unicef y la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes), a través de su informe 'Un país que huye, desplazamiento y violencia', dado a conocer esta semana, en el que, además de esbozar este crudo diagnóstico, los organismos le piden al Estado colombiano incluir en sus programas una política para atender a los niños y adolescentes desplazados.

El documento es particularmente crítico con respecto a la acción del Estado para atender a estos menores, cuya situación, según Unicef y Codhes representa un problema humanitario de grandes proporciones.

"Las iniciativas oficiales de los últimos seis años -señala el informe- que incluyen una ley y tres documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, entre otras disposiciones, no han incidido positivamente en la población menor desplazada que sigue creciendo sin que se garantice

el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales".

Lo más preocupante es que la falta de atención oportuna a todos estos jóvenes y niños es un problema que echa raíces hacia el futuro, pues produce adultos llenos de carencias, sin proyectos de vida, y con grandes problemas físicos y psicológicos que vuelven a reproducir ese mundo agresivo y empobrecido en la siguiente generación.

"Qué sociedad estamos construyendo -afirma Jorge Rojas, presidente de Codhes-, con esos niños que tenían 10 años cuando fueron desplazados hace 13 por la masacre o la bomba y nunca tuvieron procesos sicosociales. Lo que alcanzan a hacer por ellos organizaciones como Unicef, Taller de Vida y otras es mínimo. El Icbf tiene una gran debilidad en esta atención".

Dos casos aparecen como particularmente críticos en el informe de Unicef y Codhes. Se trata de los menores desplazados de Soacha (Cundinamarca) y de La Miel (Tolima) (ver notas anexas). En ellos se resume perfectamente la gran tragedia de estas generaciones de colombianos que están levantándose sin ninguna esperanza hacia el futuro.



EN EL TOLIMA los desplazados se quejan de que las autoridades los desalojan de los sitios donde logran ubicarse. Archivo / EL TIEMPO



EL 53 POR CIENTO de la población desplazada que vive en Soacha está conformada por niños y adolescentes. Miguel Mejía / EL TIEMPO

SEGURIDAD / DENUNCIÓ LA PRESENCIA DE UNA SEGURIDAD 'INFORMAL E ILEGAL'

Quién está extorsionando

Según el alcalde Mockus, hay preocupación por las quejas reiteradas sobre la presencia de hombres camuflados que cobran cuotas a cambio de seguridad.

Pequeños comerciantes estarían siendo víctimas de la extorsión por parte de delincuentes comunes o grupos ilegales armados que operan en algunos sectores de la capital a manera de empresas o grupos de vigilancia privada.

De ahí la advertencia del alcalde Antanas Mockus: "Me parece horrible que haya personas que se disfrazan de paramilitares para pedir dinero por seguridad. No voy a dejar que los paramilitares se metan a Bogotá, como en un tiempo no permití que lo hicieran las Farc".

Fuentes de la misma Alcaldía aseguraron ayer que desde hace tres meses se ha detectado la presencia de personas que se hacen pasar como paramilitares y están boleteando a pequeños comerciantes y tenderos.

"La gente dice que llegan personas, ofrecen vigilancia y seguridad y cobran cuotas semanales", añadió la misma fuente.

Según el Alcalde, hay preocupación porque las quejas por este hecho son "repetidas" y porque así como puede tratarse de grupos ilegales armados, también pueden ser "puros oportunistas".

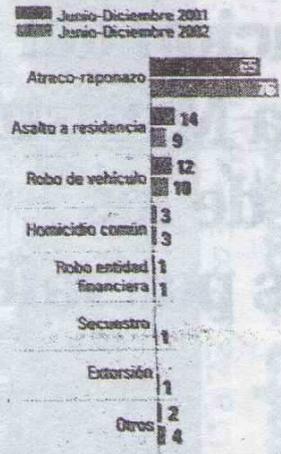
Hace algunos meses un tendero amenazado le dijo a EL TIEMPO que pensaba cerrar su negocio porque debía pagar a dos grupos distintos 10 mil pesos semanales para que no atentaran contra su negocio y pudiera transitar tranquilo por el barrio. Ocurrió en el sector de Patio Bonito, pero se sa-



LA PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS ilegales en Bogotá disparó las alarmas en la Alcaldía Mayor, que pidió a los comerciantes denunciarlos ante las autoridades.

Claudia Rubio / EL TIEMPO

¿De cuál delito son víctimas en los últimos seis meses? (%)



Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

be de otro caso similar en el sector de Los Laches, localidad de San Cristóbal.

La Defensoría del Pueblo de Bogotá reconoció que este año

han llegado a ese organismo cuatro comerciantes de Corabastos que presentaron quejas porque fueron extorsionados. Los negociantes tuvieron que salir de la central.

Según Mockus, si no se ataca el problema, "nos hacen daño a nuestro modelo de seguridad, que se ajusta a nuestra Constitución Política". Por eso la Administración ha comenzado a reforzar la vigilancia en zonas vulnerables a través de los frentes de seguridad, las escuelas de seguridad ciudadana y campañas de sensibilización entre ciudadanía y comerciantes para que denuncien estos hechos.

Para los comerciantes, las declaraciones de Mockus deben ir acompañadas de una denuncia formal, pues se estaría poniendo en tela de juicio a grupos de ciudadanos y pequeños empresarios de la ciudad, anotó el presidente de Fenalco Bogotá, Dionisio Araújo.

El último informe del Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio, del mes de marzo del 2003, reveló que la extorsión y el secuestro aparecen ya como delitos de los cuales son víctimas los bogotanos.

Y según el más reciente estudio de criminalidad de la Policía Nacional, de 32.904 delitos registrados en el último año contra el patrimonio económico de los bogotanos, 600 casos estaban directamente relacionados con la extorsión.

ALVARO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Expresidente de la Corte Constitucional
Candidato

PDI

al concejo

LISTA 55
NO. 01



Policía Política Paga

Centro de Información:
Cra. 3 No. 17-29 Apto 1302
Tel: 3386621 Fax: 5566716

Proyecto Justicia y Vida

11 septiembre 2003

11 septiembre 2003

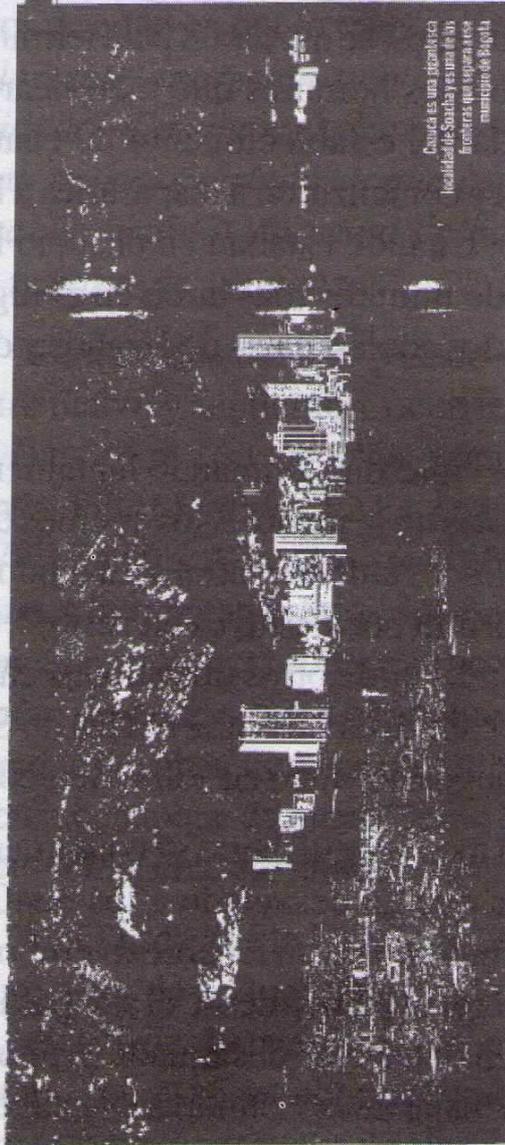
CONGRESO / EN EL SENADO PLANTEARON 4 INTERROGANTES DE FONDO

Las grietas que abrió el debate a la Policía

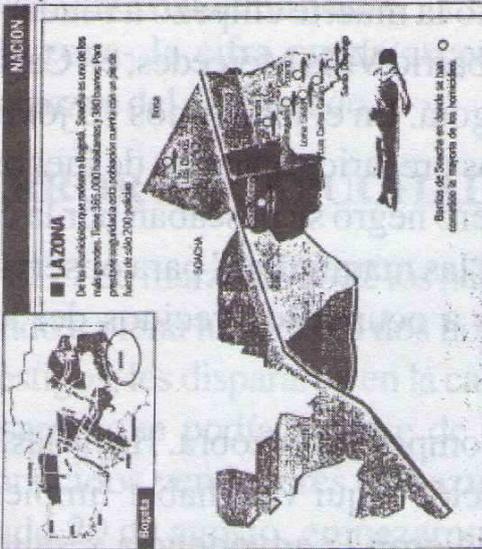
Semana 15 a 22 de Septiembre 2003

La falta de una entidad que controle a la institución y la sorpresa por la falta de información del general a la Ministra fueron dos de los puntos más polémicos.

Semana, septiembre 15 de 2003



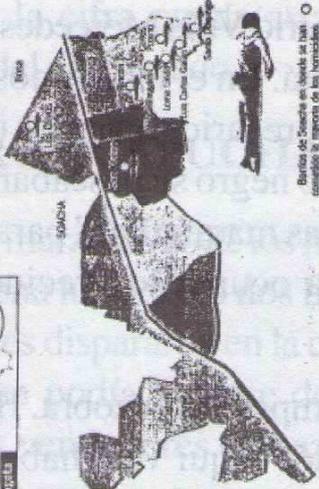
Cuánta es una gigantesca localidad de Soacha y su zona industrial que inspira a los habitantes del municipio de Bogotá.



NACION

LA ZONA

De los municipios más pobres de Bogotá, Soacha es uno de los más grandes. Tiene 365.000 habitantes y 340 barrios. Para preservar su identidad esta población cuenta con un plan de desarrollo de solo 200 predios.



Barrios de Soacha en donde se han cometido la mayoría de los homicidios.

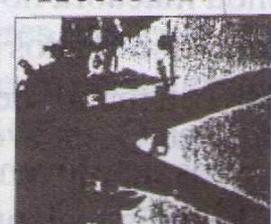
JUDICIAL — Sp. 15022/2003 Ed. 1115
Masacre gota a gota
Durante el último año el municipio de Soacha se ha transformado en el escenario de una supuesta 'limpieza social' que ya superó las víctimas fatales.

A LAS 2 DE LA TARDE DEL pasado 20 de agosto la mayoría de los juegos electrónicos en el barrio Villa Mercedes, en Cazucá, sector del municipio de Soacha, alrededor a Bogotá. En el lugar unos 10 jóvenes entre 15 y 19 años de edad se divertían con unos precarios aparatos de juegos de video. A pesar de los hombres de chaquetas de color negro se paseaban por la calle y ocasionalmente se detenían en la entrada de "las manzanas" para observar al desprevenido grupo. Presumiendo lo que iba a ocurrir los vecinos del local comenzaron a encerrarse en sus casas.

Durante toda la tarde el ruido electrónico acompañó a la zorra. Hacia las 7 de la noche una mujer se acercó al local y anunció: "¡Aquí va a haber limpieza!" Después desapareció. Algunos jóvenes escucharon la advertencia y salieron rápidamente del establecimiento. Otros, más confundidos, se quedaron para terminar sus turnos.

reacciones, pero son los responsables de una de las peores masacres en un país donde es difícil burlar el récord en esa materia. Las pesquisas oficiales aún no terminan, pues a juzgar por los testimonios que han recogido las autoridades —y que coinciden con los que escuchó SEMANA en la zona—, la cifra puede ascender al doble. La triste historia se remonta a comienzos del año pasado.

TERROR INCAPUCHADO
El 23 de marzo de 2002 los habitantes del barrio Julio Rincón se sorprendieron cuando a plena luz del día dos hombres y una mujer, frente a más de una docena de testigos, les dispararon en la cabeza a dos



Un joven herido durante la masacre.

muchachos de 17 y 18 años. Algunos señalan que podía tratarse de una vendetta ya que los dos asesinados eran reconocidos vendedores de busaco. Sin embargo, a partir de ese día y hasta el pasado 20 de agosto, empezaron a ocurrir asesinatos de jóvenes entre 14 y 20 años de edad en por lo menos 10 de los barrios más pobres de Soacha. "Como solamente aparecen uno o dos muertos por semana hasta le puse mucho cuidado al asunto, explica un líder barrial. Las autoridades no daban que entre mujeres, adolescentes y que como la mayoría de los muchachos asesinados estaban murdidos en vena de busaco o bandidos de arracaburas seguramente se trataba de venganzas".
A mediados del año pasado un grupo

de dirigentes sociales denunció que entre marzo y septiembre ocurrieron 36 homicidios en 16 y 20 barrios, principalmente en los barrios Julio Rincón, Loma Linda, Villa Mercedes, La Esperanza, Luis Carlos Galán, La Capilla, Carlos Pizarro y Villa Sándra. Afirmaron también que, además de los asesinatos, en los Altos de Cazucá de los barrios de civil ingresaban hombres vestidos de civil ingresaban arbitrariamente a las viviendas y sometían a los moradores a atropellos, retención vehicular de transporte público y huida desesperada a sus ocupantes para construir sus nombres con los de una lista que llevaban. Revelaron también que en algunos sectores esos encapuchados decretaban toques

Nadie debería decirle a donde ir ni cuándo hacerlo.



O'GARA-HESS & EISENHART
An Artime Holdings Company
Blindajes para que usted se mueva libre.

La norma O'Gara excede las normas internacionales de resistencia balística.
CIT 23A, #69B-05, PBX 405 1414 Bogotá. www.ogara-hess.com

Unidad de Falsificación: Calle 13 No. 14-15 Bogotá, C.R. No. 0318 del 14 de Julio de 2000.

Judicial.

Masacre gota a gota.

A las dos de la tarde del pasado 20 de agosto la muerte empezó a rondar por un establecimiento de juegos electrónicos en el barrio Villa Mercedes, en Cazucá, sector del municipio de Soacha, aledaño a Bogotá. En el lugar unos 10 jóvenes entre 13 y 19 años de edad se divertían con unos precarios aparatos de juegos de video. Afuera dos hombres de chaquetas de cuero negro se paseaban por la calle y ocasionalmente se detenían en la entrada de “las maquinitas” para observar al desprevenido grupo. Presintiendo lo que iba a ocurrir los vecinos del local comenzaron a encerrarse en sus casas.

Durante toda la tarde el ruido electrónico acompañó la zozobra. Hacia las 7 de la noche una mujer se asomó al local y anunció: “aquí va a haber limpieza”. Después desapareció. Algunos jóvenes entendieron la advertencia y salieron rápidamente del establecimiento. Otros, más confiados, se quedaron para terminar sus turnos en los juegos. Una hora después los dos hombres que merodearon durante la tarde se pararon en la única entrada del establecimiento de cuatro metros cuadrados. Desenfundaron dos pistolas y comenzaron a dispararles a los cinco muchachos que permanecían en el sitio. Cuando estaban en el suelo los remataron con disparos en la cabeza. Un par de minutos más tarde en el lugar quedaron los cuerpos de un niño de trece años, dos adolescentes de 16 años y dos hermanos de 18 y 19 años.

Después de cometer el crimen los asesinos salieron caminando lentamente por la mitad de la polvorienta calle con las pistolas en la mano. A los vecinos que se atrevieron a asomarse a curiosear los homicidas los amedrentaron apuntándoles con las armas y gritándoles: “¡cuidado con abrir la boca, esto es en serio!”. La ronda macabra no acabó esa noche. Dos días más tarde otros dos adolescentes fueron asesinados con disparos de pistola en la cabeza en una calle del barrio San Mateo, a menos de un kilómetro del local de juegos de video en Villa Mercedes.

Los siete jóvenes asesinados a sangre fría en menos de 48 horas se convirtieron en las más recientes víctimas de un fantasma que ha desvelado a los 364000 habitantes del municipio de Soacha: el resurgimiento de un tenebroso grupo de supuesta “limpieza social” que comenzó a sembrar el pánico desde el año pasado. Hoy las investigaciones de las autoridades señalan a este desalmado grupo de haber cometido 34 asesinatos comprobados. Al matar a sus víctimas a cuentagotas

han evitado despertar reacciones, pero son responsables de una de las principales masacres del país donde es difícil batir el récord en esa materia.

Las pesquisas oficiales no terminan aún pues, a juzgar por los testimonios que han recogido las autoridades – y que coincidieron con los que escuchó SEMANA en la zona- la cifra puede ascender al doble. La triste historia se remonta a comienzos del año pasado.

TERROR ENCAPUCHADO

El 21 de marzo de 2002 los habitantes del barrio Julio Rincón se sorprendieron cuando a plena luz del día dos hombres y una mujer, frente a más de una docena de testigos, les dispararon en la cabeza a dos muchachos de 17 y 18 años. Algunos pensaron que podía tratarse de una vendetta ya que los dos asesinados eran reconocidos vendedores de bazuco. Sin embargo, a partir de ese día y hasta el pasado 20 de agosto, empezaron a ocurrir asesinatos de jóvenes entre 14 y 20 años de edad en por lo menos diez de los barrios mas pobres de Soacha. *“Como solamente aparecían uno o dos muertos por semana nadie le puso mucho cuidado al asunto, explica un líder barrial. Las autoridades nos decían que eran muertes aisladas y que como la mayoría de los muchachos asesinados estaban metidos en venta de bazuco o bandas de atracadores seguramente se trataba de venganzas”.*

A mediados del año pasado un grupo de dirigentes sociales denunció que entre marzo y septiembre ocurrieron ejecuciones extrajudiciales de cerca de 50 jóvenes entre 16 y 20 años, principalmente en los barrios Julio Rincón, Loma Linda, Villa Mercedes, La Esperanza, Luis Carlos Galán, La Capilla, Carlos Pizarro y Villa Sandra. Afirmaron también que, además de los asesinatos, en los Altos de Cazucá hombres vestidos de civil ingresaban arbitrariamente a las viviendas y sometían a los moradores a atropellos, retenían vehículos de transporte público y hacían descender a sus ocupantes para confrontar sus nombres con los de una lista que llevaban. Revelaron también que en algunos sectores esos encapuchados decretaban toque de queda desde las seis de la tarde para los jóvenes. Quienes no lo cumplían eran asesinados.

A pesar de que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana sobre Altos de Cazucá, aún desde antes de estas denuncias, fue muy poco lo que las autoridades locales hicieron en su momento por ponerle freno a la situación. Como el número de víctimas nunca superó los tres asesinatos en el mismo día la versión de que se trataba de ajustes de cuentas aislados fue acogida con facilidad

por algunas autoridades. Sin embargo una investigación adelantada en la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General dejó recientemente la escalofriante realidad de lo que realmente se escondía detrás de las muertes aisladas.

La Investigación

La fiscalía, apoyada por miembros de la Sijín que conocían bien el lugar, se dedicó a estudiar cada uno de los asesinatos que venían ocurriendo en el municipio. Como resultado de su investigación se estableció que había elementos suficientes para determinar que todos los homicidios tenían algo en común. El arma utilizada siempre era la misma, una pistola nueve milímetros. Todas las víctimas eran asesinadas con impacto de bala en la cabeza. La mayoría tenían el mismo perfil: jóvenes, algunos de los cuales tenían problemas con la ley o eran señalados de pertenecer a bandas de delincuentes menores. Mientras las autoridades unían estas piezas del rompecabezas, apoyados en los dictámenes de medicina legal, oficiales de la Sijín se dedicaron a buscar a los testigos.

“La gente tenía mucho miedo y nadie quería hablar, dijo a SEMANA uno de los investigadores. A finales del año pasado llegamos hasta una niña de 17 años que pertenecía a una de las pandillas más reconocidas de Cazucá. Ella nos dio los primeros nombres de varios de los hombres que habían participado en uno de los asesinatos”. Con esa información la policía logró capturar a fines de noviembre del año pasado a los primeros dos asesinos. Estos no solo confesaron algunos de los homicidios sino que comenzaron a delatar a sus cómplices. En diciembre de 2002 y enero de este año Policía y fiscalía detuvieron a 19 personas y las vincularon como responsables de 26 asesinatos.

Se logró determinar que los sindicatos formaban parte de un mal llamado grupo de “limpieza social”, el cual era, presuntamente, financiado por algunos comerciantes de la zona. “Se hacían llamar “los paracos” y decían que eran parte del frente capital de las autodefensas”, afirma uno de los oficiales del caso. Sabían que esto generaría mucho temor. Sin embargo de los 19 capturados solo uno, aparentemente, tiene relación con grupos paramilitares. Los demás eran delincuentes que conformaron bandas que eran contratadas para realizar la “limpieza social”.

El proceso que adelanta la unidad de Derechos Humanos de la fiscalía, del que hacen parte los 19 capturados y las 26 víctimas iniciales, no ha concluido. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Gobierno de Soacha, entre enero

y agosto del año pasado 105 personas fueron asesinadas con armas de fuego en ese municipio. “Creemos que cerca de 90 de esas muertes fueron causadas por los grupos de limpieza social. La investigación para determinar eso plenamente aun continúa”, dice el oficial.

La incertidumbre sobre la cifra real de víctimas de esta matanza es generalizada ya que no hay exactitud sobre el número de asesinatos. Todas las instituciones, Secretaría de Gobierno, Policía, Fiscalía, defensoría y Medicina Legal, manejan estadísticas muy diferentes. “eso se debe a que algunos cuerpos no aparecen, pero existen las denuncias de los testigos de los muertos. Otros son llevados a municipios vecinos. Además hay zonas en las que ha sido imposible realizar los levantamientos debido a que no hay seguridad para llegar allí. En lo poco que hay consenso es en que la cifra de muertos puede llegar al centenar”, dijo un funcionario de la morgue municipal.

Las autoridades esperaban que las 19 capturas pararan el desangre. Pero en los últimos tres meses los asesinatos selectivos han regresado. “Se ha establecido que existe relación entre las muertes de los últimos meses con las del año pasado”, dice el secretario de gobierno de Soacha, Ricardo Ladino. Al igual que con las víctimas de 2002, no hay certeza sobre el número real de homicidios ocurrido durante 2003. Las cifras han vuelto a ser escandalosas y la fiscalía ha tenido que empezar de nuevo la investigación. Pero sin la ayuda de las autoridades nacionales, y ante el silencio de dirigentes y medios, será difícil que pueda avanzar lo suficientemente rápido para alcanzar a proteger a las futuras víctimas, niños y adolescentes que han crecido en la peor pobreza, con zapatos rotos amarados con alambre, sin ninguna oportunidad. Y la “limpieza social” que necesitan con urgencia es una que les dé unas condiciones de vida más dignas y seguras.

7 Septiembre 2003

Debate por datos sobre lucha contra la guerrilla

Según las estadísticas oficiales, dicen, solo deben quedar 3.471 guerrilleros.

Viceministro afirma que es una crítica "un poco superficial" y los invita a conformar comisión técnica para revisar los datos.

"Según los estimativos del Ministerio de Defensa, para el año 2000 había en Colombia 21.585 insurgentes y según estas mismas estadísticas entre los años 2000 y 2003 han sido neutralizados (por captura, muerte o desertión) 18.114".

Con esas palabras, el Banco de Datos de Violencia Política de las organizaciones Cinep y Justicia y Paz -reconocido centro de información sobre el conflicto colombiano- dejó planteado un debate sobre las cifras que manejan las instituciones oficiales con respecto a la guerrilla en el país.

"Dados los resultados operacionales de la Fuerza Pública, en la actualidad tan solo deberían existir 3.471 guerrilleros", concluye el documento. Y advierte que no obstante esa diferencia el Ministerio asegura que actualmente la subversión cuenta con 21.072 miembros.

El texto, que fue publicado en la página en Internet de la revista *Noche y Niebla*, cruza también estas cifras con la población carcelaria para hacer otras deducciones.

Dice que, de acuerdo con el Inpec, el número de reclusos del país ha aumentado en 4.743 (el total es hoy de 58.977). Y se pregunta que ha pasado con el resto de las 32.629 personas que fueron privadas de la libertad en el primer semestre de este año, según un informe de agosto pasado del Viceministerio de Defensa.

Consultado sobre el artículo, el viceministro, Andrés Peñate,



A PRINCIPIOS DE este año llegaron a Bogotá procedentes de Arauca más de 40 personas, investigadas por rebelión. *Foto Wilson Vizcaino / EL TIEMPO*

Guerrilleros dejados fuera de combate Enero 1999-agosto 2003

	1999	2000	2001	2002	2003*	Total
Muerte	818	976	1.028	1.683	1.270	5.775
Deserción	68	173	339	662	1.433	2.695
Captura	1.236	1.556	1.776	3.553	4.123	12.244
Total	2.122	2.705	3.143	5.918	6.826	20.714

*Datos al 31 de agosto del 2003

fuente: Ministerio de Defensa y Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República
(versión Diseño Editorial: EL TIEMPO)

afirma: "Esa crítica es un poco superficial, no toma en cuenta el hecho de que la guerrilla y las organizaciones terroristas renuevan su base con reclutamiento forzado". Y agrega: "Uno no puede comparar esas cifras tan burdamente con el stock total".

Precisiones

Asegura que las estadísticas, cuya recolección y difusión están bajo su responsabilidad, "son totalmente verificables. Son contrastadas con las de instituciones como el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, con la Fiscalía, con Medicina Legal, porque muchos utilizan diferentes métodos o momentos de corte".

Y añade: "Si ellos tienen dudas los invito a crear un grupo técnico y revisamos cifras y criterios y llegamos a un acuerdo. Ese tema no me trasnocha".

El alto funcionario explica

que en las cifras de captura incluyen a las personas que son detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía, no a los retenidos por horas. Y se define cuántos miembros tienen las Farc, el Eln y las Auc con información de desertores y documentos incautados, entre otras.

Cabe anotar que el último informe de prensa del Ministerio de Defensa se habla de 4.123 "guerrilleros capturados" en lo que va corrido del 2003 (ver gráfico) y no de 32.629, que es el dato que recogen los de *Noche y Niebla*.

"Lo que sí hemos dicho es que en el último año las desertiones y bajas en combate ha crecido muchísimo. Por primera vez en 12 años el número de guerrilleros se ha reducido. Se han desmantelado frentes como el Carlos Alirio Buitrago y el Bernardo Alzate", concluye.

El tema de las estadísticas ha estado cuestionado en otras

Semana, 4 octubre 2003

Allanamientos y detenciones en Soacha

NOZ

Unidades del DAS y la Brigada 13, Fuerza de Tarea Los Dragones, irrumpieron de una a tres de la mañana del viernes 12 de septiembre en el barrio Cazucá de Soacha, Cundinamarca procediendo a allanar violentamente cinco casas de habitantes del sector. Las unidades del operativo cubrían sus rostros con capuchas y tras abrir las puertas a golpes, destruyendo en algunas los vidrios, procedieron a detener a los señores Cristian Guzmán y Alfredo Quintero Chica, contra quienes actualmente se sigue un proceso que los habitantes de Cazucá califican de injusto y represivo, pues estas personas son reconocidas en el sector por su labor comunitaria y buen comportamiento.

Las unidades del DAS y el Ejército destruyeron afiches de una ONG que denunciaba el genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista que se encontraban en la sede de Provienda y decomisaron cédulas de personas del lugar que permanecían en la sede comunal para efectos de diligencias comunitarias a través del altavoz local. Además, después de preguntar por el defensor de derechos humanos y activista comunal Jorge Restrepo, a quien le allanaron su residencia y no encontraron, procedieron a llevarse un maletín suyo con documentos de la empresa donde trabaja, la CPU de su computador y varios disket. Restrepo goza de un programa de protección oficial, ya que se encuentra amenazado y su vida corre serio riesgo, pues ha sido seguido en ocasiones anteriores por sicarios. Según denuncias de los vecinos que presenciaron el operativo oficial, una señora fue golpeada y al señor Alberto Naranjo, a quien también le allanaron su vivienda, los militares le preguntaron si no había visto a la guerrilla y a Manuel Marulanda en su casa. El violento operativo del gada causó pánico en la población local, pues riores paramilitares encapuchados han ingresado a personas del barrio. Los voceros de la cc de ellos pertenecientes a Provienda y el mov pidieron la libertad para los detenidos y el cesatropellos. *voz

1-10

DOMINGO 5 DE OCTUBRE DE 2003

BREVES / JUSTICIA

La guerra 'para' en Bogotá

Aunque el comandante de la Policía de Bogotá, general Jorge Castro, descartó que en las calles de la ciudad se esté librando una guerra territorial entre el Bloque Centauros y las Autodefensas del Casanare, confirmó que sí se han presentado muertos por las llamadas oficinas de cobro. El viernes, en el barrio San Bernardo, fueron abaleados dos presuntos paras que habrían robado dinero a sus jefes.

9 octubre 2003

NACION



'Sebastián', comandante general del Frente Capital, y 'Jerónimo', comandante militar, afirman que tienen presencia en las zonas periféricas de Bogotá desde hace dos años

BOGOTÁ

Oct. 6-13/03 Ed. 1118

Ofensiva Capital

Los bogotanos están desconcertados por la presencia de grupos paramilitares en la capital de la República. ¿Qué hay detrás de esto?

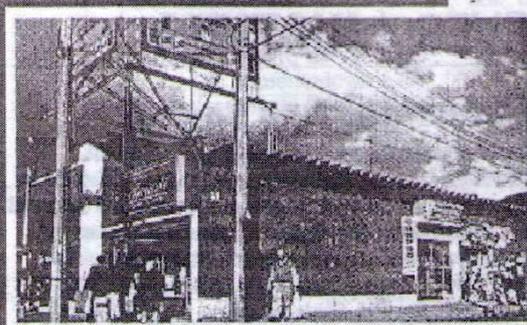
LOS OFICIALES DE LA SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá habían seguido a los dos hombres desde hacía varios días. Sabían quiénes eran y qué iban a hacer en la capital. Siguieron paso a paso cada una de las reuniones que sostuvieron en diferentes sitios y el viernes de la semana pasada tomaron la decisión de capturarlos con 'las manos en la masa'. Y así fue. Poco antes del medio día una patrulla interceptó un carro Lada azul en la avenida 19 con calle 152. Para evitar una balacera en uno de los sectores más concurridos del norte los policías simularon estar efectuando registros a varios vehículos.

Cuando llegó el turno del Lada los dos hombres que iban en su interior intentaron escapar. Uno de ellos fue capturado en el lugar. El otro consiguió esca-

par. Cuando los oficiales revisaron el interior del vehículo encontraron dos fusiles de asalto AK-47 y seis proveedores. Dos horas después del operativo el hombre que había escapado fue detenido por la Policía en el centro. Aunque las autoridades ya tenían la información los dos capturados confesaron a la Policía ser miembros del Frente Capital, un grupo paramilitar que está empezando a operar en la ciudad. Estas detenciones son la última evidencia de que en Bogotá comienza a aparecer de manera incipiente aún un fenómeno peligroso: el interés de grupos paramilitares de controlar barrios y usar a la capital de retaguardia.

"Han llegado para intentar tomar posición de ciertos territorios, confirmó a SEMANA el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Jorge Daniel Castro. Desde finales del año pasado detectamos el fenómeno con la presencia de miembros del Bloque Centauros de Miguel Arroyave, que opera en los Llanos, y de los hombres del clan Buñtrago de las autodefensas de Casanare", afirma el alto oficial, quien hace más de un mes durante un operativo de control de armas en San Andresito, ya había hablado de la presencia de miembros de las autodefensas en la capital.

El tema no es nuevo y el año pasado algunos comerciantes habían comenzado a hablarlo en privado. Sin embargo en los últimos meses las denuncias sobre las actividades de estos grupos ilegales se han vuelto cada vez más frecuentes y públicas y provienen de cada vez más diversos sectores.



Las autoridades afirman que han detectado actividades de los paramilitares en sectores como el 7 de Agosto, Corabastos y San Andresito



Proyecto Justicia y Vida

HIPÓTESIS / LA GUERRA DEL LLANO SE VIVE EN LAS CALLES BOGOTANAS

Las 'oficinas' de los paramilitares

Emulando a los narcos del Valle, dos bandos de autodefensa crearon en Bogotá cerca de una docena de centros del crimen. El atentado de ayer tendría a estos como protagonistas.

Entre las hipótesis que las autoridades distritales empezaron a manejar tras la explosión del carro bomba ayer, en el sector de Sanandresito de la carrera 38, las dos que más fuerza han tomado involucran como protagonista principal a las 'oficinas de cobro' que funcionan de manera clandestina en la capital del país.

Ya sea por tratarse de un enfrentamiento entre bandas de paramilitares que manejan dichas 'oficinas de cobro' o por un ataque de la guerrilla, presumiblemente las Fare, contra las mismas. "Para demostrar que ellos (los guerrilleros) están también presentes", dijo un investigador.

Las 'oficinas de cobro', organizaciones criminales, conformadas por 10 ó 20 gatilleros, son manejadas por paramilitares que ofrecen sus servicios al mejor postor. El propio comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Jorge Castro, reconoció públicamente hace ocho días que estas 'oficinas' están dedicadas al ajuste de cuentas.

Hay evidencia de que, emulando a la mafia del Valle, los 'paras' han creado al menos una docena de estas 'oficinas' que funcionan en los Sanandresitos de la 38 y San José, en Corabastos, en los mataderos y en los populosos barrios de las Ferias, Restrepo, Patio Bonito y Siete de Agosto.

En estos sitios se diseñan las acciones para enfrentar la creciente guerra que se libra en la capital entre el Bloque República, respaldado por las

Autodefensas Campesinas del Casanare y el Frente Capital, protegido por el Bloque Centauros de las Auc.

Los dos bandos se disputan el control de zonas y el jugoso botín que deben pagar mensualmente comerciantes, industriales, tenderos, profesionales de la ciudad y distribuidores de la central de abastos a cambio de 'seguridad'.

Investigaciones policiales conocidas por EL TIEMPO revelan que uno de los principales impulsores de las 'oficinas de cobro' es un poderoso jefe paramilitar del Llano que habría adquirido por 6 millones de dólares —unos 15.000 mil millones de peses— el control de uno de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Aunque a través de un intermediario el señalado jefe paramilitar le negó a este diario de manera enfáticamente la versión y amenazó con demandar a quien lo relacione con esas actividades, los altos mandos policiales sostienen que continúan recogiendo pruebas para encarcelarlo.

Su antagonista, el mismo con quien libra una guerra a muerte en el Meta y Guaviare, asegura que es él su principal contendor en las calles bogotanas.

Producto de este enfrentamiento, en los últimos meses han muerto varios integrantes de ambos bandos. El hecho más reciente ocurrió el pasado viernes, en el barrio San Bernardo, centro de la ciudad, cuando sicarios dispararon contra dos paramilitares de una de estas 'oficinas de cobro'.

'Vigilantes'

Además de la guerra interna que libran, estas 'oficinas' también vienen enviando citaciones a administradores de conjuntos residenciales, urbanizaciones y pequeños edificios con el propósito de que destinen parte del cobro de la

administración a financiar lo que ellos denominan lucha antisubversiva.

Según oficiales de inteligencia que desde hace más de un año les siguen el rastro, la 'invitación' va acompañada de una amenaza contra la integridad física del administrador o su familia si no accede a sus exigencias.

La Policía y el Ejército han incautado cartas extorsivas a nombre de las autodefensas que en realidad son efectuadas incluso por delincuentes comunes que ni siquiera tienen contacto con los paramilitares.

En estas también invitan a los propietarios de los apartamentos a cancelar los contratos de vigilancia vigentes y buscar que la seguridad del conjunto residencial quede en 'manos confiables'.

Según las autoridades, los recomendados son testaferrros de esas organizaciones que, como ha ocurrido en ciudades como Cúcuta y Bucaramanga, posan de celadores.

"Ellos se encargan de efectuar un censo de los dueños e inquilinos para luego notificarlos de la 'vacuna' mensual que deberán pagar para financiar la guerra contra las milicias 'Antonio Nariño' de las Fare y las del frente urbano regional 'Óscar Fernando Serrano Rueda', del Eln, integradas por los comandos 'Carlos Re-



LAS PESQUISAS dan cuenta de que el carro, aunque matriculado en Barranca, tenía una placa de Mosquera (Cundinamarca). Walter Díaz / EL TIEMPO

yes Marino', 'Manuel Pérez' y 'Ernesto Che Guevara'", aseguró una fuente oficial.

Los integrantes de las 'oficinas de cobro' también tienen alianzas con bandas de delincuentes comunes para ejecutar robos a fábricas y residencias, traficar con armas, secuestrar a personas e incluso cometer asesinatos.

Hace un mes, hombres del general Castro capturaron a dos sicarios, al parecer pertenecientes a estas 'oficinas', minutos después de que asesinaron a sangre fría a dos comer-

ciantes de Corabastos, en una cafetería del barrio Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

Con base en esa alianza, los jefes de las bandas sicariales, apartamenteros y jaladores de carros están utilizando el poder amedrentador de los paramilitares para extorsionar a nombre de ellos.

Por ahora, los organismos de seguridad intentan establecer si la bomba de Sanandresito es un nuevo episodio de la guerra 'para' y si esta fue activada por sicarios de las 'oficinas de cobro'.

AHORA PUEDES ELEGIR

FAMILIARES Y AMIGOS

Pobreza en media Bogotá

POLICÍA / GRUPO ÉLITE ANTITERRORISTA AL ESTILO DE COMANDOS DE E.U.

Llega el Swat a Colombia

El primer grupo de 24 hombres ha desarrollado habilidades como la de tomar el control de una edificación en menos de 30 segundos. Operan desde hace 20 días.

Bastó una operación de 28 segundos para que el pasado 21 de noviembre, y tras 17 días de secuestro, el estudiante de medicina Edgar Enrique Rodríguez Ravelo recobrar su libertad.

No se trataba de un rescate cualquiera. Era la gran prueba de fuego para los 24 hombres de la Policía que recién se graduaron como el primer grupo Swat -a imagen y semejanza de los élite que con el mismo nombre operan en Estados Unidos- contra el terrorismo y el secuestro.

En un video grabado por la



EL ENTRENAMIENTO de los comandos Swat de la Policía Nacional ahora se hace en Colombia. Ya se graduaron 24 uniformados.

Felipe Cárdeno / EL TIEMPO

Proyecto Justicia y Vida

PRENSA 2004

Febrero 2004

SEGURIDAD 7 DELITOS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL SE REDUJERON EN UN 20 POR CIENTO

Homicidios aumentaron en enero

El conflicto interno del país y el narcotráfico habrían incidido en el aumento de los casos, dice la Alcaldía. El hurto a personas y de vehículos bajó en el primer mes del año.

Aunque los delitos de mayor impacto social continuaron su tendencia a la baja, los homicidios y los suicidios mostraron un aumento significativo durante el primer mes del año y de la administración del alcalde Luis Eduardo Garzón.

En su primer balance sobre violencia y delincuencia en la



CON LOS RESULTADOS de enero, se anunció que se tomarán las medidas necesarias para evitar que los homicidios se disparen.

Andrés / EL TIEMPO

seguridad y las campañas pedagógicas de prevención.

En cuanto a los suicidios, los cifras muestran un incremento del 31,3 por ciento, al pasar de 16 casos en enero del 2003 a 21 en el primer mes del 2004. El tema es complejo e incluso el propio ex alcalde Antanas Mockus reconoció que en este frente no había conseguido los resultados que esperaba.

Lo bueno

En su conjunto, los delitos de mayor impacto social registraron una disminución del 20,4 por ciento con respecto al mismo período del año anterior, lo que confirma la tendencia a la reducción que se ha presentado en los últimos años.

El tiempo febrero 2004

CIUDAD / EN LA CAPITAL, LOS RICOS GANAN 56 VECES MÁS QUE LOS POBRES

Pobreza en media Bogotá

Proyecto Justicia y Vida

7 marzo 2004

PRENSA 2004

PRENSA 2004



PARAS' INTENTAN PENETRAR LA ZONA EN DONDE SE ASIENTAN ALGUNOS MILICIANOS

do ronda en Cazucá



en las
serios
abigan
casas,
trazo
y 20
a el
stró lo la
del pro-

privilegio y las juntas de acción comunal coinciden en que en esta década tampoco verán pavimentadas sus calles.

Para la Policía y el DAS mucho del miedo tiene que ver con la inseguridad que reina en el sector, pues aseguran que no tienen registro de rondas de encapuchados.

Cada día, en alguno de los 43 barrios de la comuna 4 de Soacha, el Ejército, la Policía, la Djin o el DAS, hacen una operación contra la delincuencia.

"En muchas cuadras hay guardias de ladrones que hemos ido erradicando. Viven aquí en un rancho y salen a atracar a Soacha o a otros sectores", señala Serrano.

Precisamente, la Policía lo designó en diciembre en el cargo para que gracias a la pe-

dagoga que aprendió como jefe de seguridad del ex alcalde Antanas Mookus, trate de mejorar el sector.

Desde que llegó recorrió todos los días la zona, buscando a esos muchachos que atraen a plena luz del día con armas largas", dice el mayor.

Mientras el equipo de EL TIEMPO recorrió uno de los barrios, cuatro jóvenes montaron un reón y a punta de changones asaltaron un carro de gaseosas, dos colectivos y un carro particular, según dijeron habitantes a este diario.

Muchos fueron los testigos y ninguna la denuncia. Los asaltantes son de 'Los Quipitos', una de las 50 bandas de la zona, de acuerdo con las autoridades.

2-2

CONFLICTO / 'PARAS' INTENTAN PENETRAR LA ZONA EN DONDE SE

El miedo ronda

Cuentan que 'llega un camoncito de noche y se lleva a los muchachos'. Los niños, dice un sicólogo, creen que vienen por ellos y los van a scribillar.

JINETH BEDOYA LIMA
Redactora de EL TIEMPO

Para las autoridades los aterrados rumores que rondan en Cazucá sobre desapariciones y rondas de la muerte no concuerdan con las cifras que ellos manejan. Sin embargo, en una zona baja y con visible temor, habitantes de este barrio de Soacha (Cundinamarca) hablan del 'camoncito' que llega de vez en cuando y se lleva a los 'sapos'.

Lo cierto es que valiéndose de las dificultades de los desplazados de todo el país, que se han ido asentando en los límites de Bogotá, los grupos armados se disputan el sector para manejar centros de logística para todo tipo de operaciones.

EL TIEMPO constató la presencia de milicias de las Farc en un desvinculado rancho de lata, donde algunos jóvenes se reúnen a planear su ofensiva contra los 'paras' que intentan ganar terreno.

"Las rondas de los encapuchados que llegan en un camoncito de noche y se llevan a alguno de los muchachos de la cuadra, son constantes", dice una persona que labora en Cazucá y que define a los encapuchados como 'paras'.

Los paramilitares buscan en los reconvertos de Cazucá a esos supuestos guerrilleros, pero no han podido penetrar y tener sus propias casas, como el la han hecho las Farc", complementa un oficial de inteligencia militar.

"Hace dos meses, hacia las 5:30 de la tarde cuando salía a coger mi colectivo para Bogotá, llegaron los encapuchados. Era cinco con pasamontañas, se bajaron de una camioneta, recorrieron toda la manzana y luego se fueron", anota el do-



TODO EMPEZÓ cuando en las calles aparecieron muertos jóvenes que días antes habían sido sacados de sus casas.

de cerca de 50 milicianos y 20 paramilitares en la zona. La última confrontación se registró el 28 de diciembre, cuando la Policía ubicó a tres 'paras' del Bloque Centauros - el que promueve al Bloque Capital -

"Cuando estábamos listos para capturarlos ellos abrieron fuego", señala el mayor Omar Yesid Serrano López, comandante de la estación de Soacha.

Para la Policía estas 'balacearas' son esporádicas. Para los habitantes ya se volvieron parte de su cotidianidad. "Los de las pandillas mantienen agarrados, pero otras veces esos encapuchados llegan a buscar a no sé quién", dice la tondera.

En el caso de la guerrilla, el Ejército ha capturado entre octubre del año pasado y la segunda semana de enero, a 27 presuntos milicianos. Además hay una alerta temprana de la Defensoría por la presencia de grupos de 'limpieza'.

Retén de 'los Quipitos'

Desde la entrada a la zona, por la Autopista sur a la altura de San Mateo, hasta la cima de la montaña donde están las



privilegio y las juntas de acción comunal coinciden en que en esta década tampoco verán pavimentadas sus calles.

Para la Policía y el DAS mucho del miedo tiene que ver con la inseguridad que reina en el sector, pues aseguran que no tienen registro de rondas de encapuchados.

Cada día, en alguno de los 43 barrios de la comuna 4 de Soacha, el Ejército, la Policía, la Djin o el DAS, hacen una operación contra la delincuencia.

"En muchas cuadras hay guardias de ladrones que hemos ido erradicando. Viven aquí en un rancho y salen a atracar a Soacha o a otros sectores", señala Serrano.

Precisamente, la Policía lo designó en diciembre en el cargo para que gracias a la pe-

dagoga que aprendió como jefe de seguridad de Antanas Mookus, trate de mejorar el sector.

Desde que llegó recorrió todos los días la zona, buscando a esos muchachos que atraen a plena luz del día con armas largas", dice el mayor.

Mientras el equipo de EL TIEMPO recorrió uno de los barrios, cuatro jóvenes montaron un reón y a punta de changones asaltaron un carro particular, según dijeron habitantes a este diario.

Muchos fueron los testigos y ninguna la denuncia. Los asaltantes son de 'Los Quipitos', una de las 50 bandas de la zona, de acuerdo con las autoridades.

Proyecto Justicia y Vida

EL MIEDO RONDA EN CAZUCA

PARAS INTENTAN PENETRAR LA ZONA EN DONDE SE ASIENTAN ALGUNOS MILICIANOS

Cuentan que llega un camioncito de noche y se lleva los muchachos. Los niños, dice un psicólogo, creen que vienen por ellos y los van a acribillar.

Para las autoridades los aterradores rumores que rondan a Cazucá sobre desapariciones y rondas de la muerte no concuerdan con las cifras que ellos manejan sin embargo en voz baja y con visible temor, los habitantes de este barrio de Soacha (Cundinamarca) hablan del “camioncito” que llega de vez en cuando y se lleva a los “sapos”.

Lo cierto es que valiéndose de las dificultades de los desplazados de todo el país, que se han ido asentando en los límites de Bogotá, los grupos armados se disputan el sector para manejar centros de logística para todo tipo de operaciones.

EL TIEMPO constató la presencia de milicias de las FARC en un desvencijado rancho de lata, donde algunos jóvenes se reúnen a planear su ofensiva contra los “paras” que intentan ganar terreno.

“las rondas de los encapuchados que llegan en un camioncito de noche y se llevan a algunos de los muchachos de la cuadra, son constantes”, dice una persona que labora en Cazucá y que define a los encapuchados como “paras”.

“Los paramilitares buscan en los recovecos de Cazucá a los supuestos guerrilleros, pero no han podido penetrar y tener sus propias casas, como sí lo han hecho las FARC”, complementa una oficial de inteligencia militar.

Hace unos mese, hacia las 5:30 de la tarde cuando salía a coger mi colectivo para Bogotá, llegaron los encapuchados. Eran cinco con pasamontañas, se bajaron de una camioneta, recorrieron toda la manzana y luego se fueron”, anota el docente de uno de los colegios de la zona. Él y otras personas se escondieron en un lote desocupado. “es lo que la gente suele hacer. Aquí ver o escuchar más de lo necesario, es firmar su sentencia de muerte”, agrega.

Los organismos de inteligencia han detectado la presencia de cerca de 50 milicianos y 20 paramilitares en la zona. La última confrontación se registró el 28 de diciembre, cuando la Policía ubicó a tres “paras” del Bloque Centauros el que promueve el Bloque Capital.

“cuando estábamos listos para capturarnos ellos abrieron fuego” señala el mayor Omar CESID Serrano López, comandante de la estación de Soacha.

Para la Policía estas “balaceras” son esporádicas. Para los habitantes ya se volvieron parte de su cotidianidad. “Los de las pandillas mantienen agarrados, pero otras veces esos encapuchados llegan a buscar a no sé quienes”, dice la tendera

En el caso de la guerrilla, el Ejército ha capturado entre octubre del año pasado y la segunda semana de enero, a 27 presuntos milicianos. Además hay una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo por la presencia de grupos de “limpieza”.

Reten de “los quipitos”

Desde la entrada a la zona, por la autopista sur a la altura de San Mateo, hasta la cima de la montaña donde están las torres de telefonía celular, los 43 barrios que conforman Cazucá son recovecos de tela asfáltica, latas, cartones y algunas casas prefabricadas y en ladrillo.

La mayoría del cableado de la luz es de contrabando. El agua llega cada doce días y dura tres.

SEGURIDAD / YA HAY CASI 2 MILLONES EN TODO EL PAÍS, SEGÚN MINISTERIO DE DEFENSA

Crece 'ejército' de cooperantes

En Montes de María, 400 fincas compraron los radios. En la vía La Línea-Barranquilla hay 7.000 organizados.

Los militares tienen 152 mil cooperantes.

El índice de atracos callejeros, riñas en lugares públicos y robos en viviendas se ha reducido en más de 80 por ciento durante el último año y medio en un populoso sector del noroccidente de Bogotá, aseguran autoridades de la zona.

La rebaja no se debe al aumento de policías ni a un programa de resocialización de bandas, como se ha hecho en barrios del sur de la capital. El Ministerio de Defensa lleva a cabo un experimento con una red de informantes que ha demostrado, por sus resultados, ser efectiva.

Uno de los vecinos tiene un radio de banda ciudadana al que están comunicados 50 conjuntos residenciales, cuyos vigilantes informan de sospechosos y movimientos extraños de vehículos. Una vez el dueño del radio recibe la información, la retransmite a la frecuencia de una estación de Policía, donde siempre hay disponibles patrullas de reacción.

"Así hemos evitado robos en apartamentos, peleas en las calles, que aquí eran muy frecuentes, y recientemente un asalto a un bus por la calle 138, cerca de La Colina Campestre donde fueron capturados los delincuentes, y también se evitó un carro bomba cerca del Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en Suba", afirma el coordinador de la red.

Este modelo, que ya existe en otras zonas de la ciudad, como Soacha y Engativá, y que la Gobernación de Cundinamarca llevará a 116 municipios, hace parte de una agresiva campaña del gobierno de Álvaro Uribe para incrementar el número de cooperantes en todo el país.



EN EL NOROCCIDENTE de Bogotá, una red de cooperantes afirma haber reducido en 80% los atracos y las riñas. *Martin Garcia / EL TIEMPO*

De acuerdo con cifras entregadas por el viceministro de Defensa, Andrés Peñate, hoy hay cerca de 1,8 millones de cooperantes (78.373 del Ejército, 1.600 de la Fuerza Aérea, 73.776 de la Armada y 1,6 millones de la Policía).

Cabe anotar que cuando llegó Uribe a la Presidencia ya estaban organizadas miles de personas en frentes locales de seguridad, solo urbanos y coordinados por la Policía.

El aumento en el número de cooperantes ha permitido, según el Ministerio de Defensa, disminuir acciones terroristas en un 27 por ciento. Y según el ex director de la Policía general (r) Teodoro Campo, este apoyo llevó a reducir el homicidio en un 26 por ciento y las masacres en un 58 por ciento, de octubre del 2002 al mismo mes del 2003.

En Sucre, por ejemplo, una red de cooperantes rural entregó información sobre un artefacto explosivo cerca de Palmitos y la Armada logró desacti-

varlo. Y en Santander, otra red llevó a la captura de siete auto-defensas con material de guerra.

"Hay absoluta reserva y compartimentación de la información, es decir, nadie sabe en el barrio quién es cooperante", asegura el viceministro Peñate y cita a Holanda, Estados Unidos y Gran Bretaña como países en los que funciona este tipo de redes.

Para ser cooperante se necesita ser mayor de edad y acercarse a una unidad militar o de policía. Allí, un oficial le asigna un código al interesado a través del cual desde ese momento en adelante y sin necesidad de identificarse entrega información por teléfono, radio, celular, fax o correo electrónico.

Algunos críticos han anotado que este sistema podría llevar a denuncias sin fundamento por problemas personales entre vecinos, sin embargo los encargados afirman que es muy difícil que una denuncia

falsa prospere pues, aseguran, las informaciones que reciben se verifican a través de cinco pasos técnicos.

Otros, también las tratan de asimilar con las llamadas Convivir, creadas durante el gobierno de Ernesto Samper. Sin embargo, fuentes del gobierno rechazan de plano la comparación con el argumento de que aquellas eran grupos que patrullaban y portaban armas.

Hasta ahora, según el Ministerio de Defensa, el 60 por ciento de los datos que se han recibido son correctos.

"La Red de Cooperantes suele confundirse con los llamados informantes y son dos cosas distintas. Los cooperantes son voluntarios, no reciben recompensas ni dinero de parte del Estado", aclara Peñate.

"Los cooperantes no se conocen entre sí, no se reúnen y jamás realizarán por sí mismos una operación. Su labor es únicamente brindarles información a las autoridades", explica.

El Gobierno pretende montar a corto plazo una estructura integrada de comunicaciones para que sirva a las redes de cooperantes de todo el país, a través de bases de radio, celulares y teléfonos de monedas.

En las carreteras ya comenzó a funcionar la Red de Cooperantes Viales (Redvic), integrada por quienes viven alrededor de las principales vías y empresas transportadoras.

El Ministerio de Defensa confía en que Cundinamarca, Tolima, Arauca y los Montes de María se integren pronto a la red. En esta última región ya existe una red comunitaria: 400 finqueros compraron un radio y el Estado les proporciona las antenas repetidoras. Un proyecto similar entrará a operar en 35 municipios de Arauca.

Hoy, el Ministerio de Comunicaciones estudia las vías Pasto-Tumaco y Cali-Buenaventura, para instalar repetidoras, al igual que se hace en la vía La Línea-Medellín-Barranquilla, donde hay 7.000 cooperantes.

Según el Ministerio, estos han permitido reducir en 27% el terrorismo.

Cambio Abril 5 2004

PARAMILITARES

¿Ciudad perdida?

La Defensoría alerta sobre el crecimiento del paramilitarismo en zonas como Ciudad Bolívar, donde las AUC reclutan gente por 600.000 pesos mensuales.

La disputa entre guerrilla y paramilitares, ya vieja en algunas zonas del norte y del sur del país, tiene también su escenario en el sur de Bogotá, en el populoso sector de Ciudad Bolívar. Primero llegaron las Fare, que en mayo de 1982 y a través de la VII conferencia ordenaron a sus frentes desplegar fuerzas en las principales ciudades para adelantar labores de inteligencia que facilitarían la comisión de atentados, secuestros y extorsiones. Se establecieron en sitios como Bosa, Ciudad Bolívar, Soacha, Patio Bonito y Suba, y conformaron milicias que empezaron a intimidar a una ciudad que se consideraba blindada.

Como respuesta a la penetración de la guerrilla y para recuperar el terreno ganado por ella, fueron llegando los paramilitares y de esa forma esos sectores se fueron convirtiendo en escenario de enfrentamiento de los grupos ilegales, lo que explica en buena medida por qué allí los índices de criminalidad son más altos que en otros sectores de la capital. Informes de inteligencia indican que las AUC se han fortalecido en Bogotá debido al debilitamiento de las Fare en los últimos dos años, pues no sólo han sido golpeadas duramente por las autoridades en sus grupos de milicianos urbanos, sino que han visto caer a mandos medios de los frentes 51, 52 y 53 en Cundinamarca.



El fenómeno paramilitar ha alcanzado dimensiones preocupantes y las autoridades señalan que una muestra de ello es que sólo en los primeros meses del año han capturado 41 miembros de ellas. Por eso la Defensoría abordó el tema y el 9 de marzo entregó al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior, un informe con el diagnóstico de la situación. Según el informe, en Ciudad Bolívar existe desde 2001 una disputa entre las Fare y las AUC por el control de ese sector -considerado un corredor estratégico hacia otras localidades y municipios de Cundinamarca-, enfrentamiento que

hoy por hoy inclina la balanza hacia el lado de los paramilitares, que desde finales del año pasado consolidaron su presencia en el sector. Con Miguel Arroyave a la cabeza, el frente Capital de las AUC, el más importante en Bogotá, fue ganando terreno y desplazando a las milicias de las Fare no sólo en Ciudad Bolívar, sino en sectores comerciales de la ciudad.

En los primeros meses del año han sido capturados 41 miembros de las AUC en Bogotá.

hoy por hoy inclina la balanza hacia el lado de los paramilitares, que desde finales del año pasado consolidaron su presencia en el sector. Con Miguel Arroyave a la cabeza, el frente Capital de las AUC, el más importante en Bogotá, fue ganando terreno y desplazando a las milicias de las Fare no sólo en Ciudad Bolívar, sino en sectores comerciales de la ciudad.

Sin embargo, las autoridades aseguran que su reinado fue corto porque se encontró con que Martín Llanos, al mando de una célula del Bloque República, también de las AUC, estaba dispuesto a ganarle de mano su predominio en la ciudad.

Abril 2004



FUENTE: FOLIA SACOM

Con cerca de 120 hombres, Llanos logró dominio en sectores como Suba, Mártires, Germania y Usme, mientras Arroyave, al frente de cerca 400 hombres, se hizo a sectores como el barrio Restrepo, Kennedy, Puente Aranda, Las Ferias, 7 de Agosto, Bosa y Cazucá, entre otros. A punta de amenazas y extorsiones, uno y otro fueron sumando jugosos ingresos a cambio de dar seguridad a industriales, comerciantes y tenderos, ingresos que recaudaban a través de las llamadas oficinas de cobro en los Sanandresitos, Corabastos y el 7 de Agosto.

Zona de alto riesgo

El fenómeno preocupa en grado sumo a las autoridades. Y aunque fuentes del Ejército sostienen que el terreno ganado por el frente Capital es simbólico, el informe de la Defen-

soría del Pueblo asegura que en sectores como Ciudad Bolívar los paramilitares no sólo aumentaron su poder de intimidación sobre la población, sino que erigió el número de asesinatos de personas señaladas de auxiliar a las Farc. Según el informe, entre el 1º de enero y el 15 de febrero de este año, fueron muertas 36 personas, 12 más que en el mismo período del año pasado. "Tenemos certeza de que esos muertos son producto de la guerra que se libra en Ciudad Bolívar", dijo un funcionario de la Defensoría.

Por su parte, el coronel Mario Valencia, comandante del batallón de Policía Militar No. 13 con jurisdicción en la zona rural de Ciudad Bolívar, no niega el problema paramilitar, pero asegura que no hay indicios

Golpe

Las Auc sufrieron un duro revés hace unos días en Bogotá con la captura de Enrique Rojas González, el Gary, quien según la Policía es uno de los jefes del frente Capital de las Auc, cuyo centro de operaciones es Ciudad Bolívar.

Las autoridades lo vinculan con más de 54 homicidios y lo consideran como el más poderoso extorsionador de comerciantes de la capital. En un computador portátil, que le fue decomisado, encontraron una lista con más de 100 nombres de personas extorsionadas, e información que revela los sistemas utilizados para invadir y apropiarse de fincas y lotes del sur de Bogotá.



CONTINUAR →
CAMBIO

Edición No. 502

JORNADA / MOCKUS HARÁ EN MAYO EJERCICIO PEDAGÓGICO DE LA 'CROACTIVIDAD'

Viene el 'Día del sapo'

Alcalde dice que hay que combatir el silencio que genera el miedo a informar. Pide aplaudir más las cosas buenas que hace la gente. Reacciones encontradas por la iniciativa.

El alcalde Antanas Mockus anunció ayer que en un mes se realizará una nueva jornada pedagógica denominada 'Día de la croactividad' para cuestionar a fondo la versión colombiana de la 'ley del silencio' y elogiar las actitudes positivas de los bogotanos en defensa de la ciudad.

Aunque no dio a conocer la fecha en que se hará el ejercicio, dijo que la jornada se viene preparando desde hace varios meses dentro de los programas para estimular el accionar voluntario de la ley.

"La jornada pretende la retroalimentación social del sapo bueno. Es la bienvenida a la persona que es capaz de asumir actitudes valerosas ante las instituciones, sus superiores y frente a las normas", afirmó Mockus.

El Alcalde se declaró como un buen sapo en varios sentidos: "Me gusta aplaudir lo bueno, no hablar mal de los demás, mediar en conflictos y propiciar acuerdos entre las personas que recurren a la 'sapería' para descalificarse".

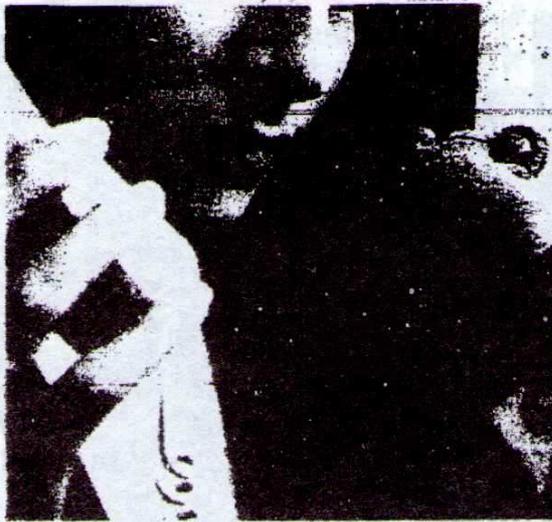
Al explicar los alcances del nuevo experimento pedagógico, dijo que no se trata de "impulsar una sociedad más 'sapa', sino más croactiva" para comunicar e informar lo que ve.

Reacciones

La iniciativa de Mockus, lanzada en una tertulia de la Veeduría Distrital en la que se analizaron los resultados de las jornadas pedagógicas celebradas en Bogotá como el 'Día sin Carro' y la 'Noche de las mujeres', provocó inmediatamente reacciones encontradas.

El investigador y político, Pedro Medellín, dijo que le parece un ejercicio que introduce a la gente en la cultura de la sospecha, en la que todo el mundo es culpable de algo.

"Cuando se invita a ser 'sapo' es porque todos tienen al-



SEGÚN MOCKUS, la 'croactividad' ayuda a acabar la cultura del silencio que impera en el país.

go que es verdad. El sapo no es solidario, siempre se esconde o se amantiza" dijo al proponer la celebración del 'Día de la solidaridad' en lugar del de la 'croactividad'.

Dionisio Araujo Velez, director de Femenos Bogotá, crítico de la jornada del 'Día sin carro', calificó la iniciativa de

imaginativa y simpática. Cuando la amistad se confunde con complicidad es muy perjudicial para la ciudad. Tiene razón, hay que denunciar más las cosas, ser más croactivos para superar ese limbo peligroso" dijo el dirigente gremial al respaldar la propuesta.

YO OPINO...

Miguel Pardo

Estudiante

"Me parece bueno porque es una manera de denunciar las cosas que hace la gente mala. Lo importante es que quien cumple la tarea de sapo bueno no pida ninguna contraprestación por lo que dice o cuenta".



Jenny Álvarez

Empresaria

La idea tiene mucho alcance pedagógico. El riesgo es que no todo el mundo está dispuesto a colaborar por miedo a lo que le pueda suceder.



Ángel Moyano

Periodista

"Mockus tiene sus locuras, pero esta es una buena propuesta para la situación que estamos viviendo. Una información oportuna sin que suene a 'sapería' puede evitar muchas cosas, entre ellas el terrorismo".



JUDICIAL

Semana Mayo 31 a Junio 7 104 Edición 1152

Todo por la plata

La increíble y triste historia de Eladio Díaz, un hombre señalado de ser el segundo del frente 15 de las Farc y el autor material del crimen de la familia Turbay Cote, muestra la cara oscura de la política de recompensas.

A LAS 3 DE LA MAÑANA DEL pasado 5 de marzo una docena de camionetas de la Policía y la Fiscalía llegaron hasta la casa de Eladio Díaz Artunduaga en el deprimido barrio La Esperanza en Soacha, en las afueras de Bogotá. Los uniformados rodearon la vivienda de dos pisos que cuega de un pedazo de montaña polvorienta y, tras llamar a la puerta, cinco policías ingresaron acompañados de un fiscal. Le informaron a Díaz que se trataba de un allanamiento de registro y control. Después de requisar minuciosamente la humilde tienda que está en el primer piso del lugar y las dos habitaciones de la planta baja, el fiscal le informó a Díaz que quedaba arrestado.

Cuando preguntaron el motivo de su detención le informaron que tenía una orden de captura como autor material del homicidio del congresista Diego Turbay Cote, su madre Inés Cote, y cinco personas de la comitiva del parlamentario, quienes fueron asesinados a sangre fría el 29 de diciembre de 2000 cerca de Puerto Rico, Caquetá.

Con unos recibos de teléfono en la mano y un cuaderno que contenía la contabilidad de la tienda de la familia, los policías le dijeron a la familia de Díaz que aparte de estar sindicado de uno de los peores crímenes de los últimos años, también estaba acusado de rebelión ya que estaba señalado de ser el segundo comandante del frente 15 de las Farc que opera en el sur del país. Dos días después de la captura de Eladio, las autoridades

efectuaron una rueda de prensa en la que presentaron públicamente a Díaz y dieron el parte de victoria.

Sin embargo lo que para el puñado de hombres de la Fiscalía y la Policía fue un exitoso operativo que permitió la captura y judicialización de un peligroso delincuente, para la justicia es un proceso que está lleno de dudas y que deja en evidencia los peligros de los planes de recompensas del gobierno que son mal manejados.

PELEA DE BORRACHOS

La historia de la captura de Eladio Díaz, quien enfrenta la posibilidad de pagar un mínimo de 20 años de cárcel, comenzó el primero de enero de 2003 con una simple pelea de borrachos. Ese día, como era costumbre en esa fecha,

varios de los vecinos de barrio La Esperanza, al sur de Bogotá, se reunieron en una cancha de tejo en donde corrían rios de cerveza para festejar el año nuevo. Según contaron a SEMANA el dueño del local y varias de las personas que estuvieron esa día, Eladio llegó a la cancha cerca de una de la tarde.

Allí se encontró con José Díaz Camacho, un hombre joven que había llegado hacía pocos meses al barrio para vivir en la casa de su hermana, al frente de la de Eladio. Desde hacía varios días Eladio estaba buscando a José para que le pagara los 25.000 pesos del mercado que le había fiado en su tienda. José, recordando los testigos, estaba ebrio y frente al reclamo de su vecino comenzó a insultarlo. Los dos hombres empezaron a pelear y después de una serie de empujones José salió corriendo. Eladio cogió una botella de cerveza y se la lanzó golpeándolo en la cabeza. José dio media vuelta, lo insultó y prometió vengarse. Fue la última vez que Eladio y los vecinos del barrio La Esperanza lo vieron.

Tres semanas después la vida de Eladio y su familia continuó con la misma rutina y dificultades que ha enfrentado desde que llegó a Soacha en 1994 desde el municipio de Suaza, Huila, en donde trabajó como carpintero. Con 44 años,

Eladio lleva los últimos 10 ganándose la vida con una pequeña tienda que está en el primer piso de la casa que él, su mujer y sus hijos construyeron sobre una empinada ladera. Para tratar de conseguir el dinero que le permitiera subsistir y pagar las cuotas atrasadas de los seis millones de pesos que en 2001 pidió prestados al Banco Caja Social para terminar de construir su casa, Eladio conseguía que le fiaran ropa en Bogotá y se iba de correría para venderla en las ferias de Facatativá y Mesitas del Colegio.

Durante 2003 fue poco lo que se volvió a escuchar de José Díaz Camacho. Lo único que se escuchaba en el barrio La Esperanza es que había ingresado al programa de reinserción haciendo pasar como un guerrillero del frente 42 de las Farc. Para obtener beneficios adicionales a los contemplados en este programa algunos de los reinsercidos colaboran con las autoridades y entregan información sobre la ubicación de armas, caletas o guerrilleros. Este tipo de información contempla un plan de recompensas económicas. Es así como, por ejemplo, si un reinsercido da información que permita la captura de un jefe de finanzas puede tener una recompensa de hasta cinco millones de pesos. Esa información debe estar avalada por prue-

bas documentales o por declaraciones de testigos que respalden la denuncia. Y eso fue lo que Díaz Camacho hizo al conseguir que dos amigos le sirvieran de coartada en su plan para obtener una recompensa.

LOS TESTIGOS

A comienzos de este año, Díaz Camacho, en una declaración ante la Fiscalía dijo que cuando llegó a vivir a Soacha, a finales de 2002, se dio cuenta de que en el mismo barrio vivía Eladio Díaz Artunduaga, quien pertenecía al frente XV de las Farc, en el cual él había militado. José Díaz le dijo a la Fiscalía que Eladio era conocido con el alias de 'Mojojo' o 'Tartaja' en la zona de Puerto Rico y que un día antes del asesinato de los Turbay Cote y su comitiva, Eladio había planeado el crimen e, incluso, lo había enviado el día de los hechos para ver las reacciones.

Señalar a Eladio como uno de los comandantes guerrilleros que había participado directamente en el asesinato no sólo le garantizaba a José Díaz la posibilidad de acceder a la recompensa sino que se convirtió en una efectiva venganza por el botellazo que éste le había propinado en la pelea en la cancha de tejo

ara que su testimonio fuera creíble, José contó con testigos adicionales que le permitieron justificar la coartada de que había sido guerrillero y que Eladio era un importante comandante que había participado en el crimen de los Turbay.

El pasado 23 de febrero acudió a la Fiscalía Herminio Tique Tique, un amigo de José, y rindió una declaración en la que afirmó que durante un viaje al municipio de Doncello, Caquetá, en diciembre de 2000, vio en varias oportunidades a Eladio con uniforme de las Farc frente de un grupo de guerrilleros del frente XV, pero nunca precisó los lugares en donde lo vio. También afirmó que eladio era el segundo comandante de la fuerza, detrás de alias 'el Mocho' y que en esa época José Díaz le había nombrado, además, que Eladio había participado en el operativo en contra de los Turbay.

En la declaración Tique Tique dijo que Eladio era un comandante sólo porque había escuchado a los vecinos del Doncello hablar de alias 'Tartaja' y porque se escuchó también que él era un comandante. Una semana después de haber rindió esta declaración el fiscal ordenó el arresto de Eladio Díaz.

Pero si bien los testimonios de José Díaz

y Herminio Tique no son contundentes y están llenos de imprecisiones, no menos extraño resulta el testimonio de un tercer testigo que apareció recientemente. El 23 de abril pasado Heder Rodríguez, quien tenía un local de comidas rápidas en Puerto Rico, Caquetá, le dijo a la Fiscalía que a las 3 de la tarde del 29 de diciembre de 2000, pocas horas después del asesinato de los Turbay, llegaron a su local seis guerrilleros, entre los que se encontraba, según él, Eladio. De acuerdo con su declaración los hombres le contaron todos los pormenores de cómo habían cometido el múltiple crimen.

Resulta curioso que los responsables de uno de los mayores crímenes políticos de los últimos años hablen abiertamente sobre el delito que acaban de cometer en un sitio público y se lo confiesen a quien se declaró como partidario de la familia Turbay, como lo afirmó. El testigo reconoció que conoce a José Díaz y a Herminio Tique y dice que decidió declarar cuando vio la noticia de la captura de Eladio un mes atrás. Con la copia de su declaración Rodríguez podrá conseguir acceder a los subsidios que contemple el programa para los desplazados, al cual había intentado entrar infructuosamente.

TODO POR LA PLATA

Aunque los testigos, que han sido la base de la acusación de la Fiscalía en contra de Eladio, presentan serias dudas, tienen inconsistencias en sus versiones y buscan un claro beneficio económico, existen otros elementos que dejan un amargo sabor en el caso. Si bien en el expediente por la muerte de los Turbay es clara la participación de miembros de la columna Teófilo Forero de las Farc, así como miembros de otros frentes de esa organización, resulta curioso que en ninguno de los apartes de la voluminosa investigación figure relacionado el nombre de Eladio o los alias de 'Mojojo' o 'Tartaja' como participe del crimen.

No menos extraño es el hecho de que si bien Eladio era uno de los hombres más buscados por este crimen las autoridades no lo hubieran capturado cuando tuvieron la oportunidad. El 7 de marzo de 2002

Eladio Díaz fue arrestado por la Policía y puesto a disposición de la Fiscalía 42 seccional de Soacha acusado de vender alucinógenos. En ese entonces permaneció 12 días en los calabozos de la Sijin, tiempo durante el cual se revisaron todos sus antecedentes o requerimientos. Para esa fecha la investigación de los Turbay estaba cerca de su fin y la lista de autores materiales e intelectuales estaba prácticamente lista. Eladio quedó en libertad porque la Fiscalía no encontró méritos para acusarlo y no era buscado por ningún delito.

En los registros de inteligencia militar así como en las bases de datos de los organismos de seguridad, en las cuales existen expedientes o al menos reseñas de los principales comandantes guerrilleros, tampoco existe rastro alguno sobre Eladio Díaz Artunduaga. Diversas fuentes de inteligencia consultadas por SEMANA aseguraron que si Eladio fuera el segundo hombre de alias 'el Mocho' o el jefe de finanzas del frente XV, como afirman los testigos, existiría algún tipo de información.

Eladio está recluido en la cárcel La Picota. Sus vecinos, los miembros de la junta de acción comunal del barrio, y los feligreses de la parroquia a la que asiste desde hace 10 años no se cansan de enumerar las virtudes de Eladio y en afirmar que está cometiendo una grave injusticia. Y todo parece indicar que así es y que Eladio no es más que otra víctima de la explosiva mezcla de informantes en busca de recompensas a cualquier precio por el afán de las autoridades de mostrar resultados. ■



La junta de acción comunal y la parroquia del barrio en donde vive Eladio Díaz han afirmado que este no tiene vínculos con la guerrilla y se ha destacado como miembro ejemplar de la comunidad

2 MAYO 31, 2004 Semana

24 Junio 2004

C. BOLIVAR / BORRARON GRAFFITIS

El Cuerpo Elite se hizo sentir

A pesar de que solo ha pasado una semana desde que el Cuerpo Elite de Acción contra el Delito anda rondando los barrios de Ciudad Bolívar, los vecinos aseguran que las cosas han comenzado a cambiar. Este fin de semana, los 150 hombres se dividieron en grupos y se dedicaron a trabajar en los barrios Caracolí, Potosí, Tres Esquinas y Sierra Morena.

"Estamos contentos con la presencia de la Policía porque por acá vivir es jodido -dijo una habitante de Caracolí-. Después de las 6 p.m. hay que guardarse en la casa. Lo que más nos preocupa a las ma-

dres es que hay muchos violadores y secuestradores de niños. Pero eso va a cambiar porque ahora vamos a los agentes todos los días".

Los uniformados -acompañados por Yaco, un Labrador experto en detectar explosivos y narcóticos- regularon personas y establecimientos, plantaron fachadas que tenían grafitos abusivos a las auto-defensas y salularon a los niños.

"Cuando grande quiero ser un policía como ellos", dijo Jonathan, de 10 años, en el parque Sierra Morena, donde



LOS 150 HOMBRES de la Policía estuvieron en los barrios Caracolí, Potosí, Tres Esquinas y Sierra Morena.

Edgardo Cárdenas / EL TIEMPO

los uniformados informaron acerca de una jornada de salud que realizarán en 20 días.

"Entre más resultados mostremos, más nos van a colaborar -dijo el coronel Alejandro Calleja, comandante del

departamento de Policía Tequendama-. Aunque es poco tiempo para balances, desde que el Cuerpo Elite funciona solo se nos ha presentado un homicidio, por arma blanca, en una rifa callejera".

POLICÍA / CÓMO TRABAJAN MÁS DE MIL AGENTES ANTIDISTURBIOS

Así son los 'robocops' colombianos

Las protestas que hicieron los habitantes de Copacabana (Antioquia) contra un peaje y las que ocurrieron en Cartagena durante la apertura de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se-

garon a la luz a los 'robocops' de la Policía, que conforman el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esma). Vestidos con una armadura de poliuretano negra de nueve kilos de peso, que los hace parecer personajes de ciencia

ficción, estos más de mil hombres de no más de 25 años viven en acuartelamiento de primer grado y son sometidos a duros entrenamientos para soportar piedras, bombas molotov e insultos.

1-4

Proyecto Justicia y Vida

Alerta en las calles de Bogotá

SEGURIDAD DE LA PÁGINA 100

ma Carlos José Herrera. Este último observatorio tendrá como base las recomendaciones efectuadas por la ONU.

Otras de las medidas que se estudian son el fortalecimiento de los acros de resistencia civil, los frentes de seguridad, los programas A las y Zonas Seguras de la Cámara de Comercio y la implementación de un proyecto que aspira incrementar el pie de fuerza capitalino en 2.000 policías más.

CUERPO ÉLITE PARA SURA

"La positiva experiencia de Ciudad Bolívar, en la que se logró una histórica disminución de la criminalidad se repetirá en otras localidades, porque está claro que los delincuentes no habitan en las zonas en las que operan, están en los sectores más deprimidos. Si los combatimos allí el efecto de la seguridad se replicará en el resto de la ciudad", indicó el comandante de la Policía Metropolitana, general Héctor García Guzmán. (Ver entrevista).

El otro oficial confirmó que en los próximos días un grupo elite cercano a los 100 uniformados se establecerá en la localidad de Suba, "porque allí hemos detectado problemas similares a los de Ciudad Bolívar".

El general García no niega que estos delitos menores aquejan a los ciudadanos. De hecho reconoce que cada día son retenidas en promedio 400 personas por contravenciones al código de Policía.

No obstante, la ausencia de denuncias y una normatividad que impone penas mínimas para esta clase de delitos impiden la efectividad de estas detenciones, pues después de 24 horas la mayoría de retenidos retorna a las calles a hacer de las suyas. Para los uniformados la situación se ha convertido en un juego del gato y el ratón que parece nunca acabar. Algunos policías incluso capturan en la semana, en dos o tres oportunidades, al mismo delincuente.

Lo curioso del asunto está en el mismo de algunos contraventores,



Cada día son capturados más de 400 contraventores en Bogotá. 24 horas después salen; la mayoría a seguir delinquiendo.

quienes abiertamente reconocen que son ladrones o 'flampirás' y además se burlan del laxo sistema judicial. "Hay que rebuscarse como sea en las calles, porque hoy en día en ningún lado hay trabajo y uno necesita comer. Además la gente da mucha papaya", afirman.

Mientras esperan en las 'Salas de Reflexión', ubicadas en todas las estaciones de Policía de Bogotá, dicen que el único pensamiento que atraviesa por sus mentes es el de volver a capturarlos, o más bien, de escapar de la ciudad.



La verdad es lo que es, y sigue la verdad aunque se piense al revés.

"Se necesitan 20.000 policías"

P. ¿Cómo califica la seguridad en la ciudad?

R. Comparada con los problemas que se viven en otras capitales como Washington, Nueva York, Río de Janeiro o Lima, Bogotá se puede considerar como una ciudad segura.

P. ¿Y cómo explica el incremento de la delincuencia?

R. No creo que exista tal incremento. Al contrario, hemos mejorado en sectores críticos como Ciudad Bolívar, en donde capturamos y judicializamos a 392 personas en pocas semanas. Pero no sólo estamos allí, pues tenemos vigilancia continua en toda la ciudad, evitando al máximo el impacto del terrorismo y de la delincuencia. En lo que va del año, la seguridad se ha incrementado en más de un 10%.

P. ¿Cuál es el actual pie de fuerza con el que dispone la capital?

R. A la fecha contamos con 10.800 policías profesionales y 4.200 au-



General Héctor García Guzmán.

materia R. Con coordinadores en este año, salida de una más para salir en materia P. ¿Qué ciudadan R. Que las auto víctimas

El miedo en los Altos de Cazucá

En las esquinas del sector de Altos de Cazucá en Soacha, nadie quiere hablar del vendedor de frutas. Era un hombre querido y apreciado. Todos se abstienen inclusive de pronunciar su nombre por miedo a los paramilitares. La víctima, Alfonso Martínez, los denunció y desapareció el pasado 5 de septiembre. Diez días después las autoridades encontraron sus restos.

El día que Juan Camilo Lara, Marlon Andrés Suárez y Jimmy Monroy abandonaron Altos de Cazucá en la localidad de Soacha, lo hicieron porque un hombre les había prometido unas buenas ganancias en un banquete en la ciudad de Pereira.

Los tres menores dejaron sus hogares con la certeza de que en tres días volverían. Sólo tenían que embutirse en unos trajes con corbatín, y participar como meseros en una recepción para alguien importante.

Cuando estaban en camino, el hombre que los había abordado en la cancha de baloncesto les cambió el itinerario. Les dijo que la recepción era en Monterrey (Casanare). Lo que seguía en pie era el pago por los "tres días que duraría la fiesta". A cada uno les pagarían 150 mil pesos.

Pero cuando los muchachos llegaron hasta Monterrey aparecieron varios hombres, los separaron del sujeto que les había ofrecido el trabajo y se los llevaron. Según la Sijin, se trataba de un grupo de paramilitares del bloque Centauros que los 'reclutó' para componer sus filas.

A los muchachos los incomunicaron, les quitaron la plata y todo lo demás. Los entrenaron un



Pese a que la comunidad afirma que cerca de 200 jóvenes han sido asesinados en el último año, la Policía habla de 39 homicidios y 21 desapariciones.

pues uno de ellos murió en combate. Como pudo, otro se fugó y la Policía de Cundinamarca se encontró en sus testimonios para llegar hasta el hombre de la cancha de baloncesto.

Se trata de Iván Javier Bermúdez, alias 'John', capturado en el centro de Soacha después de va-



Según la Policía, Iván Javier Bermúdez, conocido como 'John', les ofreció trabajo a tres menores para que se desempeñaran como meseros. Los muchachos terminaron en las autodefensas del Casanare.

Según las investigaciones de la Sijin Cundinamarca, 'John' contactaba a jóvenes y adolescentes recientemente de otros adolescentes en Altos de Cazucá para integrar las autodefensas del Casanare.

Melchides Gervantes, un habitante de Cazucá, manifestó a HOY que, tal como sucedió recientemente en Flandes y Girardot, las autodefensas llegaron a Cazucá a cometer asesinatos selectivos y reclutar jóvenes. "Las principales desapariciones están ocurriendo en el sector de Casaloma y Villas de Casaloma. Así en Cazucá están recogiendo a los chicos. Los están reclutando en las malas. Unas familias denuncian y otras no porque acá pasan con revolver en mano y le dicen a la gente: '¡Alílese o le matamos al chino!' Entonces la gente tiene que quedarse callada", dice el hombre a la prensa judicial, que agregó además que Alfonso Martínez, un vendedor de frutas de 60 años

Proyecto Justicia y Vida

27 julio 2004

Autoridades distritales en alerta

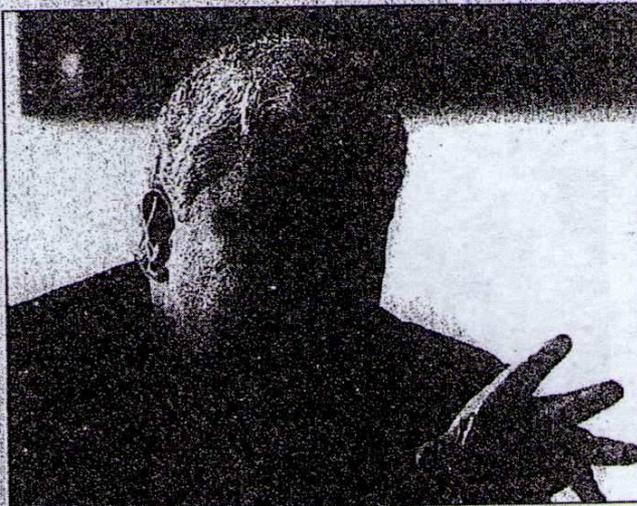
SEGURIDAD DE LA PÁGINA IC

a toda hora los 'paracos', y de mi albergue se han ido a combatir en las filas de las Auc unos cuatro reinsertados. Mi mejor amigo en el albergue, Rubén*, se fue con ellos porque, según él, la guerra da más plata".

A su vez, Julio Rodríguez*, desmovilizado desde hace seis meses de las filas de las Farc, comentó: "Muchos de nosotros nos sentimos tentados de regresar a un grupo armado, porque es lo que hemos hecho toda la vida, y porque pareciera que le estorbáramos a la gente". Y complementó: "Entonces vienen los 'paracos' y nos ofrecen cualquier peso y nos vamos. Yo he estado en conversaciones con uno de sus reclutadores, pero lo que me ataja es mi esposa y mi bebé de 2 años".

Por su parte, Andrés Vergara*, coordinador de uno de estos albergues, admitió sin problemas que es frecuente que estas camionetas "patrullen el sector" y que les ofrezcan a los muchachos plata para volver a empuñar las armas. Para Vergara, el problema radica en que muchos reinsertados sienten que los cursos que les dan no son suficientes para ser útiles y reincorporarse a la sociedad, "y aceptan ofrecimientos de los 'paracos' por \$400.000".

A pesar de los controles efectuados por la Policía, la presencia de estos grupos armados es una bomba de tiempo en la ciudad. Las autoridades tienen muchas razones para estar intranquilas. Lo que más inquieta es que en sectores residenciales como La Soledad, El Campín o Nicolás de Pedernán, estas camionetas que pertenecen a las Auc se ven frecuentemente, por obvias razones, representan un peligro para la comunidad.



Carlos José Herrera, Subsecretario de Seguridad y Convivencia / HERMINO RUIZ

"Hay ausencia de control y de seguimiento más riguroso de los reinsertados. Además, la dificultad logística y administrativa para brindar atención oportuna, genera una sensación de desconcierto entre la comunidad y los mismos desmovilizados. Una situación preocupante, y mucho más si la inversión anual que hace el Gobierno al programa es de \$50 mil millones", señaló el subsecretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá, Carlos José Herrera.

LAS SOLUCIONES

La Alcaldía Mayor de Bogotá está tomando las primeras medidas al respecto. Por un lado, espera desarrollar dentro de poco el Programa Complementario de Trabajo con la Población Reincorporada, que tiene como objetivo fundamental facilitar la reintegración a la sociedad de los desmovilizados, tener un control más riguroso sobre su estancia y movilidad, y una participación de estas personas en los distintos programas de inclusión que se adelantan en el Plan de Desarrollo del Distrito.

De la misma manera, las autoridades

gubernamentales de Bogotá le solicitaron formalmente al director del programa de Reinserción, y al ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, una descentralización del programa, ya que actualmente la capital del país cuenta con el 97% de la totalidad de los desmovilizados en Colombia.

"Estamos empezando a crear albergues en Villavicencio, Medellín, Cali, Barranquilla, entre otras ciudades, para evitar hacinamientos y para brindar mejor seguridad a los reincorporados", indicó Juan David Ángel, director del programa.

Ángel confirmó además que desde que inició el programa en la era del presidente Uribe, 12 reinsertados murieron, dos de ellos asesinados y los demás en riñas callejeras, o en accidentes de tránsito. Aunque otros números manejan los reinsertados, quienes especulan que no menos de 30 de ellos han sido asesinados en los últimos dos años.

Las autoridades también estudian la posibilidad de reducir a un año el tiempo máximo de estos reinsertados en los albergues. "Es que no se justifica que estén más de un año allí. Aspiramos a agilizar sus estudios, a que reconozcan la ciudad y muy pronto se integren a ella", señaló Ángel, quien además fue enfático en aseverar que no permitirá que se originen nuevos desmanes de los desmovilizados. Y que de ser así, "todos ellos podrán ser judicializados e incluso se les podría revivir el delito de rebelión".

Por lo pronto las inquietudes abundan en la localidad de Teusaquillo y las denuncias son el pan de todos los días, ya sea por parte de la comunidad, las autoridades o los mismos reinsertados.

*Nombres cambiados por seguridad.

31 Julio 2004

Habla 'Andrés Camilo', el jefe político del Bloque Centauros, grupo que trajo los 'paras' a Bogotá

'Desmontaremos el Frente Capital'

Los mandos de la organización ilegal dicen que la ciudad ya no está en peligro y que cumplieron con su función en la capital. Dicen que sacaron a 150 hombres y que desmovilizarán otros 300 que tienen encima de los cerros tutelares.

Mas...
Son...
Los...

Julio 2004

FISCALÍA / COMANDANTES DE UBATÉ, DE LA ESCUELA DE CARABINEROS Y EL SUB DEL GAULA DE BOGOTÁ

Los oscuros pasos de 3 mayores

La justicia establece hasta dónde estos 3 policías usaron la infraestructura de la institución para secuestrar y encubrir el asesinato de un comerciante. Todo para hurtarle \$ 350 millones.

REDACCIÓN JUSTICIA

Un insignificante afiche, pegado en una cartelera de corcho en la estación de Policía de Susa (Cundinamarca), en el que se pedía ayuda para encontrar a un desaparecido, destapó uno de los escándalos más oscuros de la institución en la época reciente.

Cuando el patrullero Rubiel



EN LA VÍA de Bogotá hacia Girardot fue abandonado el cadáver de Rubén Suárez.

Archivo / EL TIEMPO

CRIMEN / ASESINADOS SEIS JÓVENES

Masacre en Soacha

Seis hombres jóvenes fueron asesinados en la tarde de ayer en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá.

El crimen es atribuido por las autoridades a vendetas entre grupos de delincuentes.

Según la Policía, el hecho se presentó hacia las 5:30 p.m. en el barrio La María. Las seis víctimas, que se encontraban en una esquina del sector, fueron abordadas por un grupo de desconocidos que, sin mediar palabra, comenzaron a disparar indiscriminadamente. Allí cayeron muertas dos de ellas.

Los otros cuatro jóvenes, intentando huir de los delincuentes, corrieron hacia el parque conocido como Laguna de Tibanica. Sin embargo, sólo lograron avanzar 500 metros, porque los delincuentes los alcanzaron y les dispararon en repetidas ocasiones.

Según el testimonio de varios testigos, uno de los heridos, moribundo, pidió ayuda pero nadie lo auxilió.

Guerra de pandillas

Dos horas más tarde acudieron unidades de la Policía y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para realizar el levantamiento de los cuerpos, bajo la coordinación de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Kennedy.

Al cierre de la edición, no se tenían las identidades de las personas muertas. Únicamente se informó que sus

edades oscilaban entre los 18 y 22 años.

La Policía realizó anoche patrullajes intensos por todo el sector para dar con el paradero de los asesinos.

Las autoridades atribuyeron el hecho a guerras entre pandillas que, desde hace varios meses, libran una lucha por el dominio de la zona con el fin de controlar el asalto callejero y la venta de estupefacientes.

Sin embargo, algunos habitantes aseguran que los asesinos podrían pertenecer a un grupo de limpieza social o de paramilitares.

"Aquí impera la ley del silencio. Todo el mundo vio, pero nadie dice nada, por temor a que lo maten por chismoso", dijo uno vecino del sector.

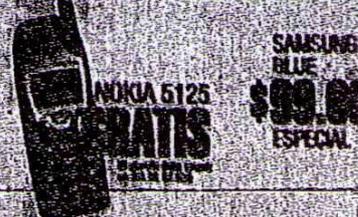
Un fiscal seccional de Soacha asumió la investigación para determinar con exactitud los móviles y autores del crimen.

Las víctimas eran hombres entre los 18 y 22 años de edad.

Depilación Defi

Luz láser con la última tecnología
No más vellos... sin manchas, sin
DERMO Pague menos y ha
CENTER Tels: 218 6077/

PROVECHEN FESTIVAL CELU



Julio 2004

Son 800 mil los jóvenes desplazados

La mayoría de los que huyeron del campo por la violencia no quieren volver. El Presidente plantea su estrategia.

campo, del que huyeron por culpa de la guerra. Aducen, sobre todo, falta de oportunidades para estudiar.

Al clausurar el foro Conflicto Armado y Juventud, en el que se debatió el tema, el

DEFENSORIA / EN UN MES SE HAN REPORTADO FUERON REPORTADOS 3.255 CASOS ANTE LA FISCALIA

Urgen bloque de búsqueda para los desaparecidos

Defensor del Pueblo lanza alerta y pide recursos para la comisión de búsqueda urgente, crear una unidad especial en la Fiscalía y elaborar el registro único nacional de desaparecidos.

Yusuf Correa, un militante de la Unión Patriótica, lo vieron por última vez la mañana del 5 de noviembre del 2002.

Salió de su casa en la urbanización Plaza Colón, en Medellín, cuando varios hombres que descendieron de dos vehículos lo capturaron encima a golpes y se lo llevaron sin dejar rastro.

Correa es una de las 271 personas que cada mes, en promedio, registran como desaparecidas en la Fiscalía General de la Nación en todo el país. Es decir, una cada dos horas y media. Lo que significa un aumento de 3 por ciento con respecto al 2001 (ver gráfico).

Este incremento prendió las alarmas del Estado e hizo que la Defensoría del Pueblo emitiera por primera vez una resolución sobre el tema de la desaparición forzada.

Son dos las grandes preocupaciones que se desprenden del documento. Una, el ya mencionado aumento del delito, y la otra, la impunidad.

"Hay preocupación, incluso en la misma Vicepresidencia, porque el delito se ha agravado. Mientras otras violaciones a los derechos humanos han disminuido, la desaparición forzada de personas está aumentando", explica Olga Lucía Gaitán, directora nacional de recursos y acciones judiciales de la Defensoría.

Cabe advertir que no todos los casos son delito, pues en el conteo figuran los abuelos que salen a pasear y olvidan el camino de regreso, los esposos y esposas que abandonan a su pareja, los novios que se "vuelan" y los hijos que huyen de la rigidez de sus padres, entre otros.

792 investigaciones

Sin embargo, la Procuraduría recibió en el 2001, 117 quejas por desaparición, 8 más que en el 2000, lo que indica un aumento leve en la responsabilidad imputable a los agentes del Estado. Esta tendencia al alza permanece estable en el año 2002 y en lo que va corrido del 2003.

Ade más, en la resolución recién divulgada por la Defensoría consta que desde la entrada en vigencia de la ley que tipifica el delito de desaparición forzada (589 de junio del 2000), la Fiscalía General ha abierto 792 investigaciones.

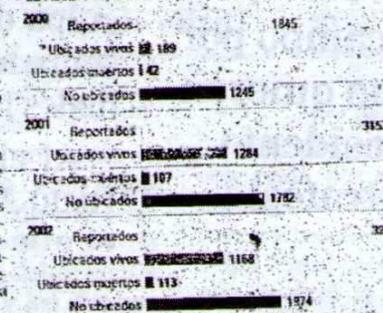
Y es ahí donde viene la segunda preocupación, la de la impunidad. En el documento se muestra como la mayoría de los casos se hallan en etapa preliminar y son muy pocos los casos las resoluciones de acusación.

Ante esta situación, señala la Defensoría, los familiares han acudido a la Com

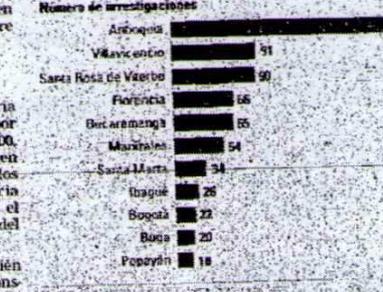


HACE UN MES, los familiares de personas desaparecidas marcharon por las calles de Bogotá. Ellos piden que lo ordenado por la Ley 589 del 2000 se ponga en práctica.

La Fiscalía reportó 3.255 personas desaparecidas en el 2002



Distribución geográfica de las investigaciones sobre desaparición forzada desde la expedición de la ley 589 del 2000.



misión Interamericana de Derechos Humanos, a denunciar casos de desapariciones. Por lo menos en dos casos, ese tribunal ha señalado al Estado colombiano culpable.

Con esos argumentos, el defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, hace un llamado urgente al Congreso para que a partir del próximo 20 de julio apruebe la ley estatutaria que de recursos y reglamente

el Mecanismo de Búsqueda y Rescate.

Así mismo se pide a la Defensoría que estudie la posibilidad de crear una unidad especial para investigar los casos de desaparición forzada y fortalecer el programa de protección a víctimas y testigos.

El presidente Álvaro Uribe en una reunión reciente con algunos defensores de derechos humanos se comprometió a sacar adelante el tema del Mecanismo de Búsqueda.

Las cifras no son claras

Este, creado por la ley del 2000, no tiene precedentes en la legislación de otros países. La ley dice que cuando desaparece una persona se puede activar el mecanismo. Se podrá solicitar a cualquier autoridad judicial, por parte de terceros, sin necesidad de mandato alguno, que disponga de inmediato una búsqueda urgente." indica

Sin embargo hoy, tres años después, aún está en proceso de creación.

Otro de los problemas que plantea la resolución del Defensor es que a la hora de analizar el fenómeno se dificulta por la dispersión de cifras. Por ejemplo, la Asociación de Familias de Desaparecidos y Asufades, dice que en el año 2001, las desapariciones forzadas aumentaron en un 100 por ciento con respecto al 2000, al pasar de 654 a 1.317 casos.

Y que además, para el 2002, sin que aún se encuentren consolidadas las cifras, se presentó un promedio de 90 casos por mes, lo que significaría una leve disminución respecto de las cifras del 2001.

Por esa razón, Cifuentes también le pide al Gobierno agilizar el diseño y puesta en marcha del registro nacional de desaparecidos, en el cual se incluyan todos los datos de identificación de las personas desaparecidas y de inhumación y exhumación de cadáveres de personas no identificadas.

Proyecto Justicia y Vida

BOGOTÁ

AUDIENCIA / DRAMÁTICA RADIOGRAFÍA DE VIOLENCIA CONTRA JÓVENES EN CAZUCÁ

Reaparecen grupos de limpieza

Este año 33 menores han sido asesinados en esa zona. Denuncian que guerrilla los recluta para conformar milicias y 'paras' para crímenes selectivos.

En los altos de Cazucá se está matando a los jóvenes porque se niegan a participar en la guerra como colaboradores o como integrantes de los grupos armados ilegales que hacen presencia en esa zona limítrofe entre Bogotá y Soacha (Cundinamarca).

Esta denuncia se hizo ayer durante la audiencia pública de siete horas sobre la grave situación de derechos humanos de Cazucá, que se realizó en el Congreso por convocatoria de las comisiones de Derechos Humanos de Senado y Cámara.

Los promotores de lo que se calificó como un "exterminio" son la guerrilla, los paramilitares, las pandillas y las bandas de narcotraficantes que, según las autoridades, conforman el espectro de violencia que se vive en ese territorio cercano a Ciudad Bolívar. Y las alarmantes cifras de los distintos organismos estatales y de investigación parecen confirmar la denuncia: en los últimos cinco años han sido asesinados 337 jó-

venes en el grupo de 10 a 24 años. En lo que va corrido del 2004, 33 adolescentes han muerto en diferentes hechos de violencia, según el informe presentado por el director de la Policía Nacional, general Jorge Castro.

En la sesión también se denunció la desaparición de 620 jóvenes en los últimos meses en Cazucá, pero las autoridades no negaron ni conformaron la versión dada por algunos habitantes de la zona.

Limpieza social

Esta participación cada vez mayor de los jóvenes en las tasas de homicidios de la Comuna 4 de Soacha, como se le conoce a Altos de Cazucá, se debe a la reaparición en la zona de los grupos de limpieza social, aseguró la directora del proyecto Justicia y Vida, Lilia Solano. "Es la reedición del fenómeno que azotó a esta zona en la década pasada. Quien no se acoge al control que ejercen los 'paras' y los militares o se niega a colaborar con la guerrilla, se extermina", dijo en su intervención.

Según una investigación de campo realizada por Bernardo Pérez, del Observatorio del Conflicto de la Universidad Externado, a los jóvenes, con edades promedio de 19 años, se les mata en sus barrios, con armas de fuego y a cualquier hora del día



EL RECINTO del Senado se llenó ayer de habitantes de Cazucá durante la audiencia pública de siete horas.

Mónica Moreno / EL TIEMPO

Santana, aseguró que la guerrilla se está aprovechando de los adolescentes para organizar milicias urbanas y los paramilitares para ajustes de cuentas y homicidios selectivos con la consigna de una limpieza social.

Al reconocer que en Altos de Cazucá hay presencia de las

Farc, el Eln y las Autodefensa Unidas de Colombia (Auc), con el Bloque Capital, el comandante de la Brigada 13 del Ejército, general Luis Ardila, dijo que este año en la zona han sido detenidos 11 milicianos, un cabecilla de las Farc y 12 integrantes de las Auc capturados.

PRESENTA SUS NUEVAS DELICIAS: CARNES AL CARBÓN Y POLLO APANADO A LA BRONZER

Y TRÁVASE VACACIONES

Por compras superiores a \$ 15.000 reclama una tarjeta para raspar, participa en la rifa de viajes a CARTAGENA y muchas sorpresas más.

Cecilia Roldán / El Tiempo

1-8

DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2004

INFORME ESPECIAL

CONFLICTO / 49 FRENTEROS EN 382 MUNICIPIOS DEL PAÍS HAN PASADO DEL CONTROL MILITAR AL POLÍTICO Y SOCIAL

La paramilitarización de Colombia

Desde el cañon que les hace un sonoro homenaje hasta congresistas que no ocultan su simpatía por los jefes 'parás', hay un asombroso mapa de 'infiltración'

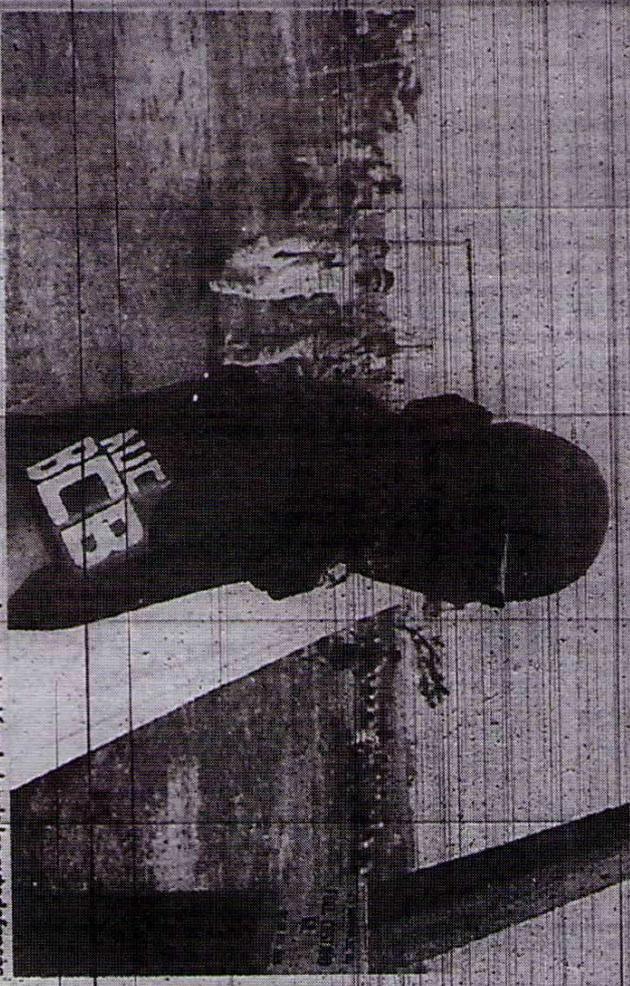
Una fuerte dosis de piecunación parece recorrer las venas de ciertas esferas de poder en Colombia. Ahora, como nunca antes, han comenzado a tronar las alarmas ya no tanto por la existencia de grupos de autodefensa sino por los síntomas avanzados de paramilitarización del país.

El fin de semana pasado, en una reunión convocada por la embajada de Estados Unidos en Cartagena, el tema no dejó dormir tranquilos a un grupo

cliente del territorio nacional. Notorio crecimiento frente a los 3.000 hombres que según el Gobierno tenían los paramilitares en 1995 y también con respecto a la presencia en un 25 por ciento de los municipios que inventarió el investigador Mauricio Rubio en 1998.

De esa etapa se pasó, entre 1994 y 1997, a la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como una federación que, según sus estatutos y las ideas de su líder, Carlos Castaño no solo quería ser un ejército que copara el país sino una fuerza política "que represente y defienda derechos e intereses nacionales desatendidos por el Estado".

De 1998 hasta el 2001, exportaron el modelo paramilitar de Córdoba y Urabá a más de 15 departamentos, en un experimento saqueado de masacres y crímenes (ver notas I-10).



EN BARRANCABERMEJA, en el 2002, construyeron un parque en homenaje al fundador de las autodefensas de Urabá Fidel Castaño. Una vez se difundió la noticia, la Policía destruyó la placa.

Archivos/El Tiempo

EL TIEMPO

DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2004 1-9

INFORME ESPECIAL

ESTRATEGIA / UN PROYECTO MILITAR Y POLÍTICO DESARROLLADO EN MENOS DE UNA DÉCADA

El mapa de la influencia 'para'

Un vistazo al grado de penetración de los 'paras' en varias regiones hasta el 2002, cuando se detuvo su expansión, arroja luces de cómo podrían ser la política y la sociedad en esos sitios en unos años.

El mapa paramilitar de hoy, casi dos años después de haber detenido su expansión territorial, puede pinzarse, en líneas gruesas, con un control absoluto en vastos sectores del Caribe, Urabá y la parte central del río Magdalena; una dominación relativa en el noroccidente y en comunas de Medellín; una ascendencia importante pero llena de pugnas en parte de los Llanos, una influencia incipiente en el Valle y Nariño, y una 'farsa' inconclusa en las selvas del sur, sobre todo en Putumayo.

Observando el modelo de avance de las autodefensas desde mediados de los 90, ejecutado de modo idéntico en casi todas las zonas donde se propusieron llegar, es posible apreciar en qué fase de penetración se halla cada región.

"El panorama del grado de implantación paramilitar en cada sitio puede ser un indicio importante sobre cómo va a ser la política local en los próximos 10 años, un caso de que se firme la paz y se cumplan la desmovilización y el desarme -dice un analista del Gobierno que pide no revelar su nombre-. Además, se puede intuir cómo será el modelo social y económico que terminará predominando en esta etapa".

En la fase del terror, que es la que marca la entrada de las autodefensas, parece no hallarse ningún punto del país en el momento. Esta etapa, caracterizada por grandes masacres generadoras de desplazamientos masivos, la repliegan en Huastaca y Los Tumbos antes de entrar a Urabá, la llevada a Maripán en el '97, donde además fueron por primera vez la institución, como símbolo de su llegada al Meta, en el '98, para

arribar a Barrancabermeja (Santander) quemaron a 32 personas que dormían en un bazar en el barrio María Eugenia. Según un reporte de la Policía, la última matanza de esas proporciones la cometieron los 'paras' el 14 de abril del 2001, cuando asesinaron a 40 campesinos en El Naya (Cauca). Quizá por las presiones internacionales frente a esta práctica horrida, o porque en los últimos dos años no se han producido grandes avanzadas sobre nuevos territorios, ningún municipio colombiano parece estar hoy en esta fase, aunque muchos estén sufriendo asesinatos selectivos.

Este tipo de crimen es, precisamente, una característica de la segunda fase, en la que se busca la consolidación militar y se empiezan a penetrar las estructuras sociales, políticas y económicas. Es el tiempo en que se elimina a los opositores, en que se empiezan a imponer tributos a los comerciantes e industriales, y en que se presiona a alcaldes y líderes comunitarios para que entreguen recursos.

También, es la época de la compra de las tierras baratas que han dejado baldías los campesinos, luego del terror de las masacres.

Ejemplo de esta fase es el Meta. Allí hay evidencia de que Miguel Arroyave, comandante del 'Bloque Centauros' abalado esta semana, exigía el 5 por ciento de muchos contratos. El asesinato en agosto de Carlos Pérez Gómez, contratista de la Gobernación, por negarse a pagar la vacuna, puso en evidencia esa costumbre. Además, en la inspección Casibaro, de Puerto Lleras, el jefe 'para' tenía montado un centro de 'cobro de impuestos' donde eran citados ganaderos y comerciantes, según la Fiscalía.

La tercera fase es la del trabajo comunitario. Los 'paras' consiguen permear definitivamente a la dirigencia regional, las extorsiones dejan de ser la metodología básica de relación con el sector económico y empiezan a montarse fundaciones y cooperativas para sacar adelante proyectos productivos y hacer gestión social.



Manuel Pineda
"El Prato"
(Bloque Centauros)
Meta: Acacías, Puerto Lleras, San Carlos de Guama, Cultural Granada, San Martín



José A. Castro
"Melina"
Alas: Bokabó (Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá)
Puerto Triunfo (Antioquia), Pto. Parra, Cimitarra, Pto. Olaya (Sicr)



Rodrigo Marcano
"Rodrigo Cadena"
(Bloque Norte)
Sucre: Tolu, Ovejón, Chalcán, Simojovel, Bolívar: Carmen, Mompoix, María La Baja



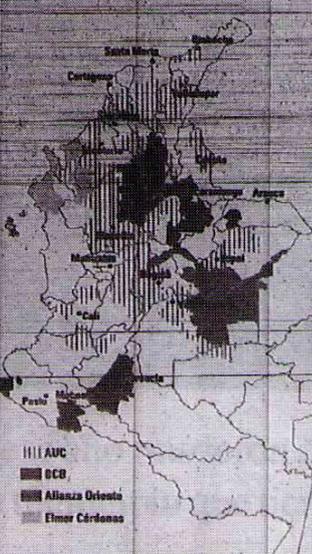
Armando A. Pérez B.
"Carota"
(F. La Galarra)
N. de Stader: Tibú, El Tera, Sardinata, San Calisto, Cúcuta, Pamplona, Teorama



Pedro O. Guerrero C.
"Diego"
(Frente Guaviare)
San José, Mapiripán, Puerto Concordia (Guaviare)



Luis Arzufo
"Osorio Turbajula"
"Mami"
(Frente Occidente Antioqueño)
Dabeiba, Peque, Itango, Toledo, Frontino



MAPA REALIZADO CON DATOS DE PRESIDENCIA Y FUERZAS ARMADAS. PRESENTA LA UBICACIÓN DE LOS GRUPOS PARAMILITARES, MUNICIPIOS DE INFLUENCIA Y ROSTROS DE JEFES POCO CONOCIDOS.

Infografía: Adán Espinosa, Diseño Editorial: EL TIEMPO



N.M. 'Sullán Bolívar'
(Bloque Central Bolívar)
Sur de Bolívar: San Pablo, Simón, Capita, Rosa del Sur, Arcabuzo



Guillermo Pérez Alzama
"Tobío"
Tolima: Liborciadores del Sur
Nariño: Tumbaco, Barbaosa, Tópiles, Tópiles



Carlos Hernando
Alas (Sucreño)
Ministerio de Educación Nacional que antes de cumplir un mes de Ministerio de Educación



Alexander Linares
"Donoso"
"Macra"
(Frente urbano del Bloque Libertadores del Sur)
Leyva y Pasto



Luis Miguel Galvis Pérez
"Luchito Galvis"
(F. Compañeros Caribla ACCU)
Bolívar: Achí, Tinjibaco, Montecristo, Sucre: San Marcos



Héctor Germán Buitrago
"Pierda"
"Marín Llanos"
(Autodefensas Campesinas del Casanare)
Monterrey y Toumense



José Baldomero Linares
"Guillermo Torres"
(Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada)
Meta: Pto. Gaitán, Puerto López y parte de Vichada



David Hernández Rojas
"29"
(F. Mártires de Valle de Upar)
Cesar: La Paz, Valledupar, San Diego, Copey, Becerril, Boscón



Luis Eduardo Cifuentes
"Galindo"
"Agall"
(Autodefensas Campesinas de Cundinamarca)
Yacopi, La Palma, Topaipí



Sin identificar
"Francisco Tabares"
(Autodefensas del Sur del Cesar)
Aguachica, La Gloria, Camaró, San Martín, La Gloria, Ocaña



Gregorio Calderón
"Vilabona"
"El Pasaño"
(Lona Sur Caguán)
Florencia, Curibó, Belén de los Andes, Montalía

También es clave conseguir el manejo de las universidades. En esta etapa se puede ubicar a Cúcuta, al Eje Bananero, al norte de Antioquia y a Barrancabermeja. En la primera ciudad, inclusive, las autodefensas consiguieron infiltrar la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía. Los alcaldes de Cúcuta y Barranca están presos por presuntos nexos con los 'pa-

ras'. De Urabá, Carlos Castaño llegó a reconocer que una empresa comunitaria exportaba banano a Canadá y Panamá. "Lo sorprendente de estos modelos es su rapidez -dice un académico-. En menos de cinco años consiguen poner en funcionamiento iniciativas de vgdad. Esq seduce a mucha gente necesitada, y más cuando lo que ven del la-

do guerrillero es que los proyectos revolucionarios están pensados a 40 y 50 años". En la cuarta fase se puede hablar de dominación real de un territorio. Los índices de criminalidad bajan, la oposición prácticamente no existe y se consolida un proyecto político y social. Cesar, Magdalena y Córdoba son sus prototipos.

En ese año, según registraron los medios de comunicación, organizaciones sociales denunciaron que entre marzo y septiembre asesinaron selectivamente a cerca de 50 jóvenes entre 16 y 20 años de los barrios Julio Rincón, Loma Linda,

Proyecto Justicia y Vida

Septiembre 2004

'No hay tal fenómeno': Gobierno

Aunque el Gobierno Uribe reconoce que el país puede estar percibiendo una especie de copamiento progresivo del paramilitarismo, debido a la seguidilla de noticias sobre su infiltración en la política y en las finanzas de alcaldías y gobernaciones, rechaza con vehemencia que dicho fenómeno se esté registrando realmente.

Así lo hizo saber a través del ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, a quien designó para responder los interrogantes de EL TIEMPO.

"No, con mayúsculas. Que nadie crea que esto empezó el 7 de agosto del 2002. Lo que está ocurriendo es que ya empezó a salir a la superficie lo que ha venido sucediendo por años. Llamémoslo así: quiere el sinceramiento de la era Uribe, la hora de ponerle fin a ese país virtual en el que vivíamos. La realidad es distinta y eso es lo que hemos venido mostrando", dice.

El ministro añade que nadie se había dado cuenta, por ejemplo, de que a Arauca solo le faltaba una bandera y un himno para ser un país diferente; de la infiltración en Cauca, del impulso que los 'paras' venían tomando, fenómenos que "antes" estaban empujados hacia afuera.

Y si bien admite que no hay una gerencia estatal como tal que coordine las

estrategias de los diferentes estamentos para atacar las formas variadas de la infiltración 'para', afirma que sí hay un plan maestro y que está dando resultados indiscutibles.

"El plan se llama los 100 puntos de gobierno de Álvaro Uribe y es una política, la de seguridad democrática, que tiene dientes. La coordinación se va dando entre los diferentes entes según la necesidad", afirma y da ejemplos.

"La alianza entre 'paras', funcionarios locales y políticos corruptos que se venía apropiando del dinero de los más pobres a través de las ARS, claro que nos tomó por sorpresa, pero la coordinación para desmascararlos y darles el primero de varios golpes, fue perfecta.

"No crea que fue un proceso de un día. Duramos tres meses y participaron dos ministerios, la Fiscalía, la Policía, el DAS... Eso es coordinación", asegura.

Y manifiesta que procedimientos similares se están aplicando con otros ministerios y entidades para perseguir las finanzas 'paras', expropiar tierras, extinguir bienes, frenar el robo de combustibles. "Por supuesto que se está atacando el mal con muchas medidas".

A este respecto, la Fiscalía afirma que

en al menos 15 investigaciones contra 'paras' ha contado con el apoyo de otras entidades. Además del expediente de las ARS está el de la masacre de Altos del Naya (Cauca), perpetrada por 'paras' y en cuya investigación participaron Ejército y DAS.

Para desembarazar las diferentes estrategias de los 'paras' de adueñarse de presupuestos locales, la Oficina Anticorrupción de la Presidencia -a cargo de Margarita Zuleta- ya hizo un barrido en los 32 departamentos mediante una serie de rondas de trabajo con las Comisiones Regionales de Moralización y a través de ocho encuentros con la sociedad civil de igual número de ciudades, entre ellas Bogotá.

La idea -dice Zuleta- es la de conocer aún más su acople, formular una política pública contra esas formas de corrupción trabajando desde lo regional, y golpearlos con más fuerza.

Y si bien el ministro Uribe admite que para el Gobierno es claro que el solo esfuerzo militar es incapaz de darle un giro al país, dice que en este campo también hay que mostrar.

"Las cifras hablan por sí solas". Durante la era Uribe se han capturado 7.078 combatientes; abatido 824 y desmovilizados 1.355. Se les han incautado 5.870 ar-



mas, 700 mil proyectiles, 2.910 granadas, 1.584 equipos de comunicación, 21 embarcaciones y 957 vehículos.

¿Y la infiltración en la política...?

"No me corresponde decir quiénes y hasta qué grados están involucrados pero por sus actuaciones, el país ha ido conociendo en dónde están ubicados políticamente. Con lo que estamos haciendo, también se va a ir viendo".

EL MINISTRO de Defensa, Jorge Alberto Uribe, dice que las cifras hablan por sí solas en materia de combates a los 'paras'.

ESTE INFORME FUE REALIZADO POR LUZ MARÍA SIBERRA (CRISTINA); SERIBIO OCCAMPO, FRANCISCA MARTE SOTO Y ALBERTO BUSTOS (UNIDAD INVESTIGATIVA) EBISANA MORALES, JORGE MELÉNDEZ Y CARLOS GARCÍA (POLÍTICA) Y ALVARO SERRA. EDITOR ADJUNTO, CON COLABORACIÓN DE LOS CORRESPONSALES. Ciudad Bolívar, Colombia 8 | 98060@eltiempo.com.co

22 octubre 2004

VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2004 EN LA MIRA 10 3

Viene de la Pág. 2

que se atrevió a denunciarlos fue desaparecido el pasado 5 de septiembre y posteriormente asesinado. Sus restos se encontraron diez días después en un potrero junto al barrio La Capilla de Soacha.

Aunque Cervantes manifiesta que en Cazucá han desaparecido unos 600 jóvenes y 200 personas más han sido asesinadas en el último año, la Sijín Cundinamarca afirma que 'John' está vinculado en por lo menos 21 casos de reclutamiento y que en esa zona al sur de la capital se han registrado 39 homicidios en lo transcurrido del 2004.

Lo que dicen las autoridades es que "se ha detectado reclutamiento pero no es que a todo el mundo lo recluten y que se hayan llevado ese número de personas. Hay mucha gente que se va a coger hoja de coca, que se va empleada al campo y hay otros que los reclutan y los llevan engañados. Por la misma situación social que se vive entre las familias, donde muchas veces hay maltrato, el muchacho decide irse de la casa. El papa, para salvar responsabilidades, dice: "Se desapareció el hijo mío", explicó a HOY un oficial de la Sijín Cundinamarca.

*Nombre cambiado



La pobreza y los conflictos socioeconómicos hacen que muchos jóvenes en Cazucá sean susceptibles de integrarse con actividades ilícitas.

¿Más de 600 desaparecidos?

La cifra de jóvenes reclutados por los paramilitares en Cazucá, se mencionó por primera vez en una audiencia de siete horas celebrada el pasado 19 de agosto en el Congreso de la República.

Durante esta, se denunció que los promotores de lo que se calificó como un "exterminio" son la guerrilla, los paramilitares, las pandillas y las bandas de narcotraficantes que, según las autoridades, conforman el espectro de violencia que se vive en

esa zona al sur de Bogotá. Según trascendió en el debate, en los últimos cinco años han sido asesinados 847 jóvenes, de los cuales 334 pertenecían al grupo de 10 a 24 años.

En la sesión también se denunció la desaparición de 620 jóvenes en los últimos meses en Cazucá, pero las autoridades -para aquel entonces- no negaron ni confirmaron los testimonios suministrados por la comunidad.

Sector subnormal

El sector de Cazucá está conformado por aproximadamente 42 barrios de asentamiento subnormal de carácter ilegal, lo que determina la precariedad de sus condiciones físicas: ausencia de alcantarillado, suministro improvisado de agua, ausencia de vías de acceso pavimentadas; sus habitantes no cuentan con posibilidades de empleo digno y no hay garantías en materia de salud y educación. El sector recepciona casi la totalidad de las familias que llegan al municipio desplazadas por el conflicto armado.

Los jóvenes que habitan en el sector carecen de oportunidades para acceder al estudio, capacitarse o emplearse, y tampoco cuentan con espacios para recreación y deporte, o desarrollo de prácticas culturales.



El reclutamiento en Flandes

Hace dos meses la comunidad de Flandes y Girardot denunció la desaparición de por lo menos 40 jóvenes, muchos de los cuales eran desempleados o trabajadores de la plaza del municipio cundinamarqués.

Según trascendió, personas desconocidas llegaron a esas dos localidades, y les ofrecieron a los jóvenes hasta 800 mil pesos para que fueran a trabajar en arroce-

ras de Arauca y Casanare. A la mayoría les pagaron 200 mil pesos por adelantado.

No obstante, varios de los jóvenes terminaron privados de la libertad y algunos otros dados de baja por el Ejército en desarrollo de múltiples operaciones y combates, porque habían sido enrolados en las autodefensas. Las autoridades manifestaron que oficialmente recibieron sólo 12 denuncias por personas desaparecidas.

EL TIEMPO, 7 DE NOVIEMBRE DE 2004

La “pena de muerte” regía en cazucá.

El verdadero número de muertes de jóvenes ocurrido en Cazucá (Soacha) y en Bosa (Bogotá) en el 2002 – e incluso en el 2003- nunca se pudo cuantificar. O por lo menos así lo consideran dirigentes cívicos de la zona que con cierta periodicidad denuncian esa suerte de exterminio, a cuentagotas, de sus jóvenes.

Según explicaron las autoridades en su momento, aunque testigos denunciaban las muertes, los cuerpos luego no aparecían. En algunos casos porque eran llevados a otros municipios y en otros porque por seguridad no lograban llegar hasta el sitio para hacer el levantamiento.

Los datos de medicina legal dicen que ese año murieron de manera violenta 104 personas en Bosa en 230 en Soacha, un municipio que tiene cerca de 350000 habitantes.

Las denuncias lanzadas desde estos populosos sectores, apenas si se han sentido en los centros del poder. Sin embargo, en su momento la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana con respecto a la situación de Altos de Cazucá y hace cerca de dos meses, en la Cámara de Representantes se hizo un debate sobre derechos humanos en el cual uno de los temas centrales fue la situación de la zona.

El ministro del interior Sabas Pretelt reconoció que había una bomba social muy fuerte, mas de 10000 jóvenes que no tienen nada que hacer, dijo el representante Venus Albeiro Silva, quien ha tenido como su centro de trabajo político estos barrios, particularmente Bosa.

Según las investigaciones de las autoridades, el primer asesinato que tienen registrado en esta mal llamada “limpieza social” se dio el 21 de marzo de 2002 cuando en el barrio Julio Rincón dos hombres y una mujer les dispararon a plena luz del día a dos jóvenes de 17 y 18 años.

En ese año, según registraron los medios de comunicación, organizaciones sociales denunciaron que entre marzo y septiembre asesinaron selectivamente a cerca de 50 jóvenes entre 16 y 20 años, de los barrios Julio Rincón, loma Linda,

Villa Mercedes, la Esperanza, Luis Carlos Galán, La Capilla, Carlos Pizarro y Villa Sandra, entre otros.

Los dirigentes cívicos expresaron que en Altos de Cazucá hombres vestidos de civil ingresaban a las viviendas y atropellaban a la gente, detenían vehículos de transporte público y hacían descender a sus ocupantes para confrontar sus nombres con los de una lista que llevaban.

También se hablaba de un camioncito que recogía a algunos muchachos que estaban en las esquinas y se los llevaban para nunca más volver.

A pesar de las capturas a fines del 2002 de algunos de los sicarios, la masacre a cuentagotas volvió a reactivarse hacia julio de 2003. Aún hoy, dicen algunos, continúa.

7 Noviembre 2004

JUICIO / JAIME ANDRÉS MARULANDA, DE 26 AÑOS, CONFESÓ ANTE UN JUEZ UN ROSARIO DE MUERTES

'Yo no maté a 37 personas, maté a 137'

Todo ocurrió entre abril y noviembre del 2002. Uno de los jefes del Bloque Capital de los 'paras' que vivía en Bogotá les pasaba a él y a sus compañeros las listas. Luego les pagaba 400.000 'por cabeza'.

REDACCIÓN JUSTICIA

En los juzgados especializados de Bogotá, donde a pesar de estar acostumbrados a oír los detalles de los más macabros crímenes de Colombia, el viernes de la semana pasada la jueza no pudo evitar hacer un gesto espontáneo como de quien se va de espaldas y el resto de la concurrencia tampoco pudo contener un "Uyyy" cuando escucharon la confesión de Jaime Andrés Marulanda.

'El Chiquitín', como lo dicen quienes lo conocen, comenzó a dar su testimonio a las 9 de la mañana del 29 de octubre. Y a esa altura, cerca de las 11:30, soltó con cierto tono de queja una frase explosiva: "El fiscal me acepta cargos por 37, cuando yo le informé que son 137. No me explico por qué. Yo maté fue a 137 personas".

En la sala de audiencias del cuarto piso del edificio de la calle 32 con 5, cerca al centro internacional de Bogotá, la concurrencia era poca. Estaban el fiscal y el procurador del caso, otros ocho sindicados, sus respectivos abogados defensores y seis particulares.

Después del impacto provocado por la confesión, en la sala reinó el silencio y Marulanda siguió hablando un rato más. "Ese era mi trabajo, cumplía con lo que me ordenaban", se le



SEGÚN las estadísticas de Medicina Legal, durante el 2002, en Soacha fueron asesinadas 230 personas. Archivo / EL TIEMPO

Bogotá. Cada mes les da plata. Dependiendo de los trabajos que hayan hecho, de las cabezas que hayan matado. Por cada cabeza o persona que matan les pagan 400 mil pesos".

Contó también las muertes propinadas por otros de los muchachos de la banda. "El Gato" mató hace 20 días en Bosa a un muchacho que violó a una niña, en el paradero de buses de Los Laureles, a las 12 de la noche. Era un sábado. Yo estaba en una tienda como a una cuadra y vi cómo 'El Gato' le disparó.

"También mataron a una amiga mía, Gina (Penagos), tenía 16 años y mes y medio de embarazo. Eso fue hace dos meses (10 de agosto) en el barrio Julio Rincón, al pie de las canchas de microfútbol, a las 7 y media de la noche. Lo hizo Jair, 'El zarco'. A él lo cogió la Policía como hace 20 días, en la casa de la novia. Cuando mataron a Gina yo estaba en la casa, cuando salí la vi y estaba tendida. Se que la mató Jair porque él mismo me contó. Dijo que la mató que porque era sapa".

Por los relatos de Olga Lucía a la Fiscalía, parecía que ellos contaban sus aventuras de sicarios, como quien conversa de la última película vista. "Jair también me comentó que había matado a una muchacha en San Mateo y a sangre fría. Me dijo que llevaba un bebé y que a él le daba cosa matarla. Pero que 'El gato' le decía que la bajara o si no que él hacía el trabajo. Ellos se turnaban para asesinar a la gente, un día uno y otro día otro. Entonces Jair la mató y él me comentó que no podía dormir de saber que el niño había quedado en el suelo llorando".

La muerte de Olga L.

Un día después de que Olga Lucía hizo este relato a los fisca-

LOS QUE MURIERON

Los siguientes son 27 de los 37 homicidios por los cuales está condenado Jaime Andrés Marulanda, ocurridos en el 2002 y en los barrios que aparecen entre paréntesis.

- José Grillo y Harbey Jaramillo, 21 de marzo (Julio Rincón).
- Ángel Enrique Meneses, Elkin Jonathan Acosta y Rubén Limas, 13 de mayo (Carlos Pizarro).
- Pedro Antonio Monroy, 14 de mayo (Villa Esperanza).
- Anderson Calderón Moreno, 22 de mayo (Villa Sandra).
- Anyerson Felipe Velásquez, 26 de mayo (Vista Hermosa).
- José Jair Agudelo, Omar Alberto Rodríguez, 30 de mayo (Loma Linda).
- José Mauricio Galeano, primero de junio (Julio Rincón).
- Ricardo Alexander Uribe, 2 de junio (Vista Hermosa).
- Valerio Vicente Borda, 13 de junio (Santo Domingo).
- Waldo y José Edison Galindo, 22

- de junio (Vista Hermosa).
- John William Soler, 11 de julio (La Esperanza).
- Manuel Elías Leudo y César Augusto Vargas, 20 de julio (Villa Sandra).
- Duvar Andrés Duque, 27 de julio (Julio Rincón).
- Gina Penagos, 10 de agosto (Julio Rincón).
- Christopher Barrero, 13 de agosto (Los Olivos).
- Jhonatan Francisco Rivera, 29 de agosto (San Mateo).
- Freddy Arley Herrera, 30 de agosto (Las Marias II).
- Diana Alexandra Chávez Ruiz, 6 de septiembre (Luis Carlos Galán).
- Yeison Eduardo Pinto y Miguel Ángel Quevedo, 15 de septiembre (Villa Mercedes II).
- David Amado, 15 de septiembre (Villa Mercedes).
- Juan Evangelista Calderón y Julio Alexander Salamanca, 19 de septiembre (Loma Linda).

guió hablando un rato más. "Ese era mi trabajo, cumplía con lo que me ordenaban", se le oyó decir a la hora de explicar el porqué de los asesinatos.

¿A qué organización pertenece? -le preguntó la jueza.

Al Bloque Capital (de las Autodefensas) -respondió él sin titubear.

¿Dónde operaba?

En Altos de Cauca

¿Era el jefe?

No. Era un colaborador, un paterno de las Auc.

¿Qué otras personas trabajaban con usted?

Éramos varios. No los puedo identificar porque nos rotaban mucho.

¿Quién más está vinculado?

¡Doctora! si yo me pongo a hablar de todo lo que pasó allá, aquí caería gente que ni se imagina.

28 años de prisión

Uno de los asistentes lo que más recuerda es su mirada. Tal vez, porque es lo único de su figura que delata su oficio. "Tiene una mirada tan fría ... de esas que solo tienen los que no le temen a la muerte. Los que han vivido con ella", describe. Por lo demás, pasaría casi inadvertido. Mide cerca de 1,50 metros -de ahí su apelativo-, es calvo, flaco, blanco y de ojos grandes. En su intervención dijo que es huérfano y que, a sus 26 años, está aprendiendo a leer y escribir.

Debajo del jean y la camiseta azul de manga corta que lucía esa mañana se escondían otras huellas de su historia. En la nuca tiene la cicatriz de un tiro de revólver, otro disparo le dejó una especie de hueco en el muslo de la pierna derecha y en la parte izquierda del pecho se pintó un tatuaje con el que quiere dejar claro el lugar que ocupan 'Brian y Vanesa', sus dos hijos. Otra hija que tuvo, murió.

Waldo y Jose Edison Galindo, 22 septiembre (Loma Linda).

Marulanda está hoy recluso en la cárcel de Acacias (Meta) pagando su condena. La justicia lo encontró responsable de 37 asesinatos -en su mayoría de jóvenes, pero también niños, "líderes comunales y personas con ideología de izquierda"- entre abril y noviembre del 2002 (ver 'Los que murieron').

Lo llamaron a comparecer en la audiencia pública de ese viernes como testigo en el proceso que les siguen a otros ocho jóvenes que como él están vinculados a este trágico rosario de muertes.

El juicio de 'El Chiquitín' avanzó más rápido porque, entre otras cosas, él se acogió al beneficio de sentencia anticipada. Razón por la cual, además, su condena por los 37 homicidios apenas asciende a 28 años de prisión.

En algunos apartes de su declaración ante la jueza, que se extendió a lo largo de seis horas, se dedicó a echarse la culpa y a tratar de absolver a los otros sindicados. "Están juzgando a otras personas que no tienen que ver con esto", decía.

Lo mismo ocurrió con el único otro condenado, Hugo Wilson Orozco Orozco, 'El gato', quien en su confesión aseguró que ninguno de los otros tenía que ver con las muertes.

Los asesinatos

Todo comenzó a destaparse el 2 de octubre del 2002, cuando Olga Lucía Londoño Sánchez, una joven de 14 años que fue novia de Marulanda, lo denunció ante la Fiscalía. El día anterior, 'El Chiquitín' mató a un hombre con el que ella vivía. "Nosotros vivíamos en la misma pieza pero no teníamos ninguna rela-

ción de pareja", advirtió en su momento Olga Lucía.

Estudiante de primero de bachillerato y empleada en una casa de familia, Olga Lucía dijo que podía dar fe de cómo 'El Chiquitín', además de este, asesinó a otras dos personas.

"El trabajo de ellos es matando gente. El primero que yo supe que mató fue por vicioso, eso hace como tres meses. En Villa Esperanza, por el lado del caño, fue como a las tres de la tarde. Yo estaba en la casa y escuché los tiros y cuando bajamos la gente decía que había sido 'El Chiquitín'. Lo mató como con cinco tiros. Sé que él fue el que lo mató porque él mismo me dijo".

'Ese era mi trabajo, cumplía con lo que me ordenaban', dice 'El Chiquitín'.

"El otro fue el primo de él que se llama Édgar N. Lo mató porque me saludó. Me dijo 'quiubo Olga' y me cogió la mano. Yo no contesté. Entonces él lo llamó 'Quiubo Édgar'. Y él se devolvió y le dijo 'Quiubo primo'. Ahí fue cuando Chiquitín le dio un tiro en la cabeza con una pistola negra delante mío. Cuando quedó tirado le dio otros tiros. Yo cerraba los ojos. Eso fue hace mes y medio en Bosa La Libertad. Eran como las 10 y media de la noche, de un viernes. Después seguimos caminando, llegamos a la casa de Chiquitín y se pusieron a tomar. Yo me fui a acostar y me entraron los nervios cuando me di cuenta que ese muchacho estaba muerto.

Olga Lucía no solo relató los crímenes de Marulanda, sino que dio detalles de la organización. "Ellos trabajan para las Autodefensas de Colombia y tienen un patrón que se llama Luis, que vive en el centro de

La muerte de Olga L.

Un día después de que Olga Lucía hizo este relato a los fiscales, es decir el 3 de octubre del 2002, las autoridades capturaron a 'El chiquitín' y a 'El gato' en Loma Linda. Después, entre diciembre y enero del siguiente año, el 2003, la Policía y la Fiscalía detuvieron a 19 personas más.

Su testimonio se convirtió, sin duda, en una pista certera para comenzar a destapar lo que había detrás de una de las más grandes masacres de la historia en Bogotá y su vecindario. Venía ocurriendo silenciosamente y a cuenta gotas en populosas barriadas del sur, en particular en la localidad de Bosa, y en altos de Cauca, del vecino municipio de Soacha (ver nota anexa).

Jaime Andrés Marulanda, 'Chiquitín', no negó ninguno de los crímenes que su ex novia le atribuyó. En lo único en que se distanciaron sus testimonios es en el nombre del jefe. Marulanda no habló del 'Luis' que mencionó Olga Lucía: "Yo solamente cumplía órdenes de Dago", dijo.

Cuando lo capturaron a él y al 'Gato', les encontraron algunos listados con nombres de personas, algunas de las cuales estaban 'chuleadas'.

Desde entonces, las amenazas comenzaron a rondar la vida de Olga Lucía. El 6 de noviembre de ese mismo año, el 2002, a las 6:30 de la mañana llegaron a su casa dos amigos y le pidieron que los acompañara al médico. "Yo no quiero salir. Ustedes me van es a matar", les respondió intrigada.

Ellas se fueron y al rato llegaron tres hombres: "El jefe quiere hablar con usted", le dijeron, según escucharon las personas que estaban en la casa con Olga Lucía. Aunque ella trató de escabullirseles, finalmente se la llevaron.

Su cadáver apareció al día siguiente, el jueves 7 de noviembre, en terrenos de la hacienda 'Terreros' de Soacha.

Hacía solo dos semanas atrás, antes de cerrar la última ronda de interrogatorios, los fiscales le preguntaron a Olga Lucía si quería añadir algo más. "No tengo miedo a morir. Por parte sí y por parte no. No es que me dé lo mismo, pero el día que a uno le toque morir, pues también se muere", fue lo único que dijo.

EL 'BLOQUE CAPITAL'

El 'Bloque Capital' comenzó a llegar a Bogotá a finales del 2000. En octubre del 2001 reconoció haber asesinado a los congresistas Octavio Sarmiento (en Tame) y Luis Alfredo Colmenares Chía (en el norte de Bogotá), por ser supuestos auxiliares de la guerrilla.

También se dedicaron a las 'oficinas de cobro'. En su momento, la Policía identificó 12 en los Sanandresitos, Corabastos, El Restrepo y el Siete de Agosto. Su otro frente de batalla fueron los barrios populares de donde según ellos sacaron a las milicias de las Farc.

En mayo pasado, el asesinato Miguel Arroyave, jefe del 'Bloque Centauros' -grupo de donde nació el 'Capital'- en entrevista a este diario dijo: "Bogotá está casi resuelto para nosotros. De Bogotá ya casi sacamos la gente. Queda un 30 por ciento".

DATOS DE VICTIMAS ASESINADAS DE EL TIEMPO NOV. /04

FECHA	NOMBRES	AÑOS	BARRIO
21 Marzo 2002	José GrilloHarbey Jaramillo	17Años18 Años	Julio Rincón
13 Mayo 2002	Ángel Enrique MenesesElkin Jonathan AcostaRubén LimasCarlos Pizarro		
14 Mayo 2002	Pedro Antonio Monroy		Villa Esperanza
22 Mayo 2002	Anderson Calderón Moreno		Villa Sandra
26 Mayo 2002	Anyerson Felipe Velásquez		Vista Hermosa
30 Mayo 2002	José Jair AgudeloOmar Alberto Rodriguez		Loma Linda
1 Junio de 2002	José Mauricio Galeano		Julio Rincón
2 Junio 2002	Ricardo Alexander Uribe		Vista Hermosa
13 Junio 2002	Valerio Vicente Borda		Santo Domingo
22 Junio 2002	Waldo GalindoJosé Edison Galindo		Vista Hermosa
11 Julio 2002	Jhon William Soler		La Esperanza
20 Julio 2002	Manuel Elías LeudoCesar Augusto Vargas		Villa Sandra
27 Julio 2002	Duvar Adres Duque		Julio Rincón
10 Agosto 2002	Gina Penagos	16 Años	Julio Rincón
13 Agosto 2002	Christopher Barrero		Los Olivos
29 agosto 2002	Jhonatan Francisco Rivas		San Mateo
30 Agosto 2002	Freddy Arley Herrera		Las Marías II
6 Sep 2002	Diana Alexandra Chávez		Luís Carlos Galán
15 sep 2002	Yeison Eduardo PintoMiguel Ángel QuevedoDavid Amado		Villa Mercedes II
15 Sep 2002	Edgar N		Bosa la Libertad
19 Sep 2002	Juan Evangelista CalderónJulio Alexander Salamanca		Loma Linda
7 Nov. 2002	Olga Lucia Londoño	14 años	Terreros Soacha
5 sep. 2004	Alfonso Martínez		

EDITORIAL

'Paras': a paso grande

La magnitud del control que han adquirido los grupos paramilitares sobre extensas regiones del país se ha convertido en un fenómeno dramático, con preocupantes implicaciones para el futuro nacional. Las autodefensas exhiben hoy una influencia que no es solo militar sino política, social y económica. Tan profunda y tan extendida, que para muchos no resulta exagerado hablar de una proactiva paramilitarización de Colombia.

Por considerar que es tema de crucial importancia, EL TIEMPO le dedica hoy un amplio espacio especial. Se trata de un problema vasto y complejo, que es poco conocido pese a su larga historia. "Ha sido largo el camino recorrido desde San Juan Bosco Laverde y Puerto Boyacá, en 1962, hasta Santa Fe de Ralito hoy", decía Mancuso en la instalación de los diálogos de Ralito y añadía que nunca estuvo en nuestras mentes edificar este gigante". Pero lo cierto es que este enorme monstruo: mil cabezas hoy avanza a paso grande, atropellado y voraz por todo el territorio nacional. Con múltiples vasos comunicantes con poderes locales, civiles o militares, actores económicos y la política nacional. Y con capacidad de incidencia sobre presupuestos y autoridades municipales. Respaldado por astronómicas cantidades de dinero provenientes de la captura de toda clase de rentas legales e ilegales, desde los dineros de la salud hasta el arcotráfico, pasando por la gasolina y el boleteo generalizado. Con un poder de fuego e intimidación que ha desplazado a la guerrilla de muchas regiones y producido decenas de miles de desplazados y cientos de masacres y sesinatos selectivos.

A diferencia de la guerrilla, los paramilitares no lucharon contra el sistema sino desde el mismo, en la bandera de defender la propiedad y ayudar al Estado a combatir la subversión. Lo cual les otorgó amplia base social y no poca simpatía entre muchos los sectores sometidos al acoso guerrillero. Somos el brazo armado de la clase media desprotegida", llegó a decir Carlos Castaño. Hacendados, anaderos, políticos y estamentos militares los han respaldado, aunque hoy muchos de sus promotores iniciales ven con preocupación que este "rancho stein no regresara al laboratorio y que el remedio puede estar resultando peor que la enfermedad. A caballo de un discurso antiguerrillero y anticomunista se ligaron también al narcotráfico, el punto de que varios de sus jefes son indistinguibles del mismo. Y la desaparición de figuras como Castaño y Arroyave indica que las actuales luchas pueden repetir la historia de sangrientas *verities* entre sus jefes que protagonizaron hace 20 años las Autodefensas del Magdalena Medio. Y como aquellas, que lanzaron el célebre movimiento político 'Morena', los actuales 'paras' han incurrido en la política. Con mejor éxito, según lo indicaría la afirmación de hace dos años de uno de sus jefes sobre un 30 por ciento del Congreso a su favor.

¿Cuántas alcaldías, concejos, asambleas y hasta gobernaciones están en manos o bajo la intimidación de los paramilitares? ¿A cuántos presupuestos locales, ARS, embarques portuarios, chances y otras cosas llega su largo brazo? Sería imposible hacer siquiera la cuenta de los hatos ganaderos y los negocios que les pagan. O de los que se han apro-

xiado Arias y Eleonora Pineda, no tienen los calzones suficientes para proclamarlo? ¿Cuánta tierra está en sus manos? En buena parte de la Costa Atlántica y los Llanos, los 'paras' campean por sus fueros. Otras regiones del país viven bajo el miedito. Y en otras, como el Magdalena Medio o Córdoba, es evidente que su dominación conlleva respaldo social.

Pese a que dicen defender el sistema y a que surgieron en parte con su complicidad, los paramilitares exhiben rasgos de un proyecto propio y de una élite emergente de acento rural que puede revelarse como una formidable competencia contra el Estado de derecho en regiones clave del país donde, después de imponerse a sangre y fuego, se mantienen sin permitir oposición, determinando desde el largo de las faldas de las muchachas hasta castigos corporales por infidelidad. "El para-Estado de los paras" es una figura que ya se menciona.

Nada de esto es nuevo. La gran expansión de las autodefensas tuvo lugar a partir de su unificación nacional, en 1997, luego de que las Accu, de Córdoba, emprendieran la exportación de su modelo y el dinero del narcotráfico financiara su crecimiento. Para el 2002, las autodefensas habían multiplicado geométricamente su pie de fuerza y ya eran, desde el punto de vista de capacidad militar y control territorial, más o menos lo que son hoy. La negociación que abrió con ellas este gobierno ha surtido el efecto de que ese control pase de la clandestinidad a la luz del día. De cuchicheos temerosos en los pueblos del Magdalena Medio y la Costa Atlántica, se ha pasado a congresistas que dicen abiertamente que quieren a Mancuso, y a ex gobernadores que publican cartas de respaldo a los paramilitares.

Si bien en ciertas partes del país el control aún es ejercido mediante el puro terror, o está en pleno curso la disputa con la guerrilla por corredores y zonas de cultivos ilícitos, en otras está muy avanzado un proceso de dominio de la sociedad, que combina la presencia armada con trabajo comunitario: construyen vías, prestan servicios de salud o, a través de fundaciones y cooperativas, hacen proyectos productivos. Todo ello acompañado de un discurso que explota hábilmente los intereses y el atraso regionales frente al centralismo bogotano y con el que se presentan como el remedio natural a la amenaza de la guerrilla y la ausencia del Estado.

Se trata, en fin, de una situación extremadamente grave y preocupante. Las autodefensas pueden convertirse, si ya no lo son, en el más serio problema de gobernabilidad de Uribe. El Gobierno sostiene que es el que más las ha combatido y exhibe significativas cifras sobre el aumento de capturados y dados de baja. Es también el único que ha tenido una política para desmovilizarlos, mediante la negociación. Pero preocupa que Santa Fe de Ralito termine legalizando ese ilegítimo monopolio del poder que pretenden montar los jefes paramilitares. El país está en mora de entender el peligro que este estado de cosas representa para la estabilidad y la democracia. Y si bien es acertado combatirlos militarmente e intentar desmovilizarlos mediante una negociación, como lo plantea el Gobierno, también es urgente dotarse de estrategias para enfrentar el control social, político y económico que ejercen en buena parte del territorio nacional. Dejar pasar el tiempo es permitir su

El progresivo crecimiento del paramilitarismo en amplias regiones de Colombia es un fenómeno que debe preocupar a la sociedad entera.

MINDEFENSA / INVESTIGACIONES

Reclamo por infiltración de 'narcos' en la Policía

El ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, deploró ayer la infiltración de la mafia en la Policía e instó a los oficiales a formar a sus hombres.

"Quiero pedirles a todos los oficiales que hagan una labor prácticamente evangélica con sus policías para decirles que el peor negocio es dejarse tentar por esos cantos de sirena...".

afirmó el Ministro.

El director de la Policía, Jorge Daniel Castro, anunció investigaciones y una cacería de los policías corruptos y advirtió que esta se extenderá inclusive a los que ya están retirados.

1-4



BBQ SALE
 Venta, mantenimiento y reparación
 de estufas a gas. Toda la familia.
 Calle 101 No. 118 - Bogotá - Colombia

PRENSA 2005

Enero 2005

ALLANAMIENTO / DOS EXPLOSIONES DESPERTARON A LOS MORADORES DEL BARRIO SANTO DOMINGO

Policía destruyó casa por error

En la vivienda dormían cinco adultos y cuatro niños de una humilde familia de Ciudad Bolívar. Autoridades buscaban una caleta llena de armas y explosivos, que nunca apareció.

REDACCIÓN CUNDINAMARCA

A las 3 de la madrugada del pasado miércoles, el sueño de los nueve integrantes de la familia Arenas Díaz, entre los que se encontraban cuatro niños, fue interrumpido de un tajo por dos explosiones.

Una de las detonaciones hizo volar en pedazos la puerta principal de la vivienda, ubicada en el barrio Santo Domingo, un humilde sector de la localidad Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Tras el segundo estallido, la casa quedó semidestruida, con huecos en las paredes, en las escaleras y en el techo.

Inicialmente, los Arenas Díaz pensaron que se trataba de un acto terrorista o que una banda de ladrones los estaba atacando.

Sin embargo, luego de reponerse de las detonaciones, pudieron comprobar que las personas que habían entrado violentamente a su vivienda eran 40 agentes de la Policía de Cundinamarca que los habían confundido con integrantes de un grupo armado ilegal.

Los uniformados, armados con fusiles, cascos y chalecos antibalas, les apuntaron en la cabeza y los sacaron a la fuerza a una terraza, donde los obligaron a acostarse boca abajo, en medio de insultos en los que los relacionaban con la guerrilla y los acusaban de ocultar una caleta llena de armas y kilos de dinamita.

Allí los mantuvieron detenidos hasta el



ASÍ QUEDÓ LA CASA de la familia Arenas Díaz, después de las dos explosiones provocadas por la Policía de Cundinamarca, durante un allanamiento, que resultó un error. Carlos Julio Martínez / EL TIEMPO

amanecer, momento en el que los policías pudieron comprobar que Amparo Arenas, su esposo Mauricio Tibaquirá y su recién nacido hijo Camilo, al igual que sus hermanos José, Armando y Ferney, y sus sobrinos Natalia, Maribel y Jhon, estos dos últimos de 12 y 14 años, solo guardaban en su casa dos sofás, un comedor de cuatro puestos, un televisor y dos pipetas de gas que alimentan un pequeña estufa.

"Uno de los sargentos y el resto de agentes nos dijeron que los disculparan, que todo había sido una equivocación. Una de las granadas que lanzaron casi le cae a una pipeta de gas. Incluso rompieron un sofá y unas mesas de noche para mirar si allí teníamos las armas ocultas", relató

Mauricio Tibaquirá, que se gana la vida atendiendo una salsamentaria. Armando y Ferney, quienes trabajan manejando una chiva en Girardot (Cundinamarca) los fines de semana, resultaron con cortaduras leves en sus manos y en una pierna, por la rotura de los vidrios de las ventanas.

El subcomandante de la Policía de Cundinamarca, coronel José Segura, le dijo a EL TIEMPO que la equivocación se produjo porque un informante les entregó datos falsos que llevaron a allanar la casa de los Arenas Díaz.

El oficial anunció que la Policía correrá con todos los gastos de reparación de la vivienda. "Fue un error que ya estamos subsanando", dijo Segura.

BOGOTÁ

SOACHA / LOS HECHOS OCURRIERON EL DOMINGO EN LA MADRUGADA

'Nos mataron lo mejor del barrio'

Un joven con retraso mental fue asesinado por desconocidos sin que se sepan los motivos. Otro fue herido gravemente. Los habitantes del barrio Julio Rincón tienen miedo.

'Lalo', de 36 años, ayudaba a llevar las lavadoras alquiladas a las casas y luego las recogía. Ese era su trabajo. También, si veía a las mujeres cargando paquetes, las ayudaba y de paso les coqueaba en su media lengua. Y siempre que alguien requiera de sus servicios ahí estaba.

Por eso, a su entierro, el martes pasado, fue casi todo el barrio Julio Rincón de Altos de Cazma (Soacha), donde vivía. 'Era un ser bueno, no le hacía daño a nadie. No entendemos por qué lo mataron', dijo don Francisco. 'Cómo estamos de mal en esta zona, que asesinaron a una persona con discapacidad (padecía retraso mental)'.

En la madrugada del domingo, a 'Lalo' le dispararon

desconocidos mientras se tomaba unos aguardientes con Guillermo Villalba, otro habitante de la zona, un joven de 29 años que trabaja en un taller de carros. Este último resultó herido en la cabeza y se encuentra en un hospital del sur de Bogotá.

La hija de doña Zolla fue la primera en enterarse del hecho. 'Ellas estaban en la cocina y mi niña sintió un golpe fuerte. Me avisó y de inmediato llamé a la Policía, que llegó rápido, pero 'Lalo' había muerto y quedó irreconocible', argumentó La niña, sin embargo, no vio a los asesinos, no supo cuántos eran ni en qué se movilizaban.

Barrio fantasma

Según los residentes, la situación de inseguridad se complica cada día más. 'Teníamos vigilancia privada, pero los celadores fueron amenazados por desconocidos y renunciaron', comentó una vecina que pidió omitir su nombre. Otra dijo que es mejor no salir cuando cae la noche, porque son muchos los robos, que también se dan a primeras horas de la mañana, cuando la gente se va a

trabajar. 'Somos un barrio fantasma. A ratos solo los perros están en la calle'.

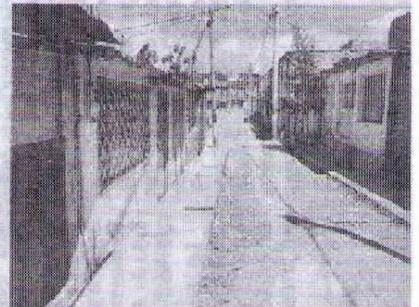
Según las cifras del 2002 -publicadas por EL TIEMPO en julio pasado- en esa zona, de 350.000 habitantes, murieron 249 personas de manera violenta. En lo que tiene que ver con los jóvenes entre los 16 y los 24 años, en el 2004 fueron asesinados un promedio de tres cada mes.

El secretario de Gobierno de Soacha, Carlos Sandoval, afirmó que la administración municipal y la Gobernación de Cundinamarca reforzaron el pie de fuerza de la Policía para la Corona IV (donde queda el barrio Julio Rincón). Ahora hay una camioneta y más radios de comunicación. 'Los resultados se ven. En los últimos meses se han intensificado los operativos y durante noviembre y diciembre del 2004 se redujeron los asesinatos en un 17,4 por ciento'. Pero esto no es suficiente pues el miedo habita en el Julio Rincón. Sobre el caso de 'Lalo' Sandoval no tenía información.

Blanca Mujica, mamá de Villalba, manifestó que su hijo 'no tenía líos con nadie. Al-

gunos vecinos me contaron que lo hirieron por defender a 'Lalo'.

En la tumba del joven asesinado, contó doña Zolla, las flores sobran el martes pasado. 'La fila de su entierro fue tan larga, que abrió tranca en la vía principal. Es que nos mataron lo mejor del barrio'.



EN EL BARRIO Julio Rincón, de Soacha, se ve soledad en las calles. La gente tiene miedo y prefiere quedarse en sus casas. (Foto: Diana)

LOS NOMBRES FUERON CAMBIADOS PARA PROTEGER A LAS PERSONAS.

2002

[14 febrero 2005

PRENSA 2005

1-10

LUNES 14 DE FEBRERO DE 2005

BOGOTÁ

EL TIEMPO

CRIMEN / ERA UN MUCHACHO QUE LE AYUDABA A SUS VECINOS

Alexander iba a ganarse la vida, cuando lo mataron

Este es el tercer joven asesinado en las últimas dos semanas en el Portal II, en Ciudad Bolívar. Ahora su familia debe abandonar la vivienda que levantó después de 11 años de esfuerzos.

GERMÁN GÉLVEZ
Redactor de El Tiempo

Alexander Acosta tenía 14 años. Estaba aprendiendo a leer y en el 2005 guardaba la esperanza de entrar a estudiar en algún colegio, después de pasar la mayor parte de su vida ayudando a sus padres en el oficio del reciclaje. También tenía la ilusión de que este año, por fin, le practicarán una operación en la nariz, para corregir esa fractura que sufrió a los 5 años, cuando cayó de cara mientras subía las empuñadas y rocosas laderas del barrio Portal II de Ciudad Bolívar. Quería ser grande, pero el martes de la semana

pasada, a las 10:30 de la mañana, lo mataron de dos disparos en la cabeza.

Ese día, antes de salir de la casa, tendió su cama, les sirvió el desayuno a sus hermanas mayores y sus padres, y salió en compañía de Luchito, un hermano dos años menor —con quien andaba para todas partes—. Iban a ganarse la vida, esta vez, llevando arena para una ferretería cercana, cuando alguien se acercó y le dijo que lo necesitaban en la parte alta del barrio.

Sus hermanas estaban a punto de salir para comprar lo del almuerzo, cuando escucharon los tiros. "Nos quedamos quietas —dice una de ellas—, porque aquí, suene lo que suene, nadie se asoma. Pero en sepulda llegó Luchito lleno de pavor, casi tumbando la puerta. Iba caminando al lado de Alex, y de pronto vio que se desplomaba".

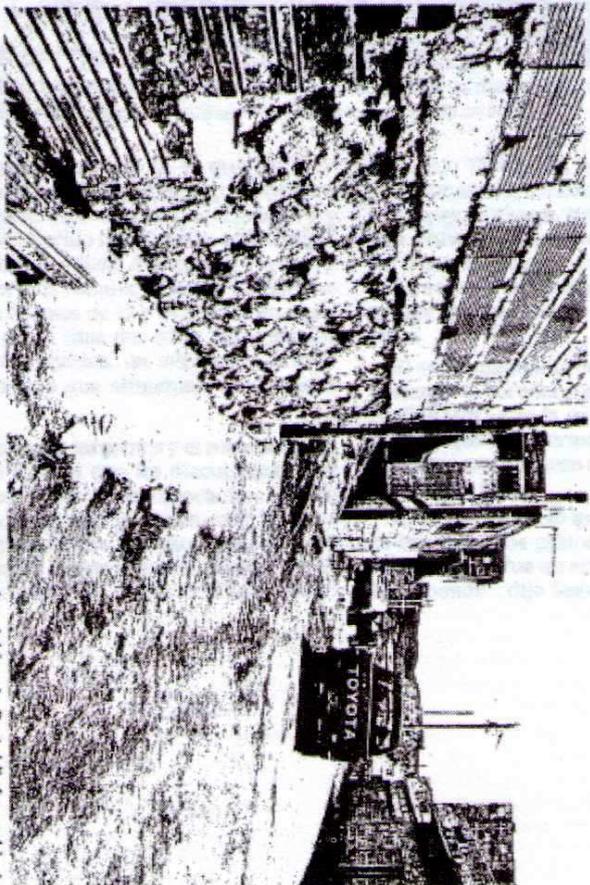
La gente del barrio llegó hasta el sitio —calle 112 sur con Ba—, para ver lo sucedido. En los últimos 15 días es el tercer joven asesinado en el sec-



ALEXANDER ACOSTA

tor, pero este caso sucedió a la luz del día. Ni la familia ni nadie sabe nada, no hay explicación ni motivo aparente. Alexander consentido por los adultos del barrio por su espíritu de servicio. Era el que se ofrecía a llevarles galones de agua a los ancianos solos, o le cargaba ladrillos a cualquier vecino que estuviera construyendo su casa.

Se acostaba temprano, incluso los 31 de diciembre. Solo reclamaba la peca del arroz



EL SITIO DONDE ALEXANDER Acosta cayó asesinado, en una esquina del barrio Portal II, fue cubierto con arena. Todavía nadie se explica la causa del crimen.

con bastante aguadepanela, y le hacía caso a Estefanía, su sobrina de 6 años, quien jugaba a ser su profesora y le ponía planas para que aprendiera las letras.

Ayer en la tarde, Estefanía repasaba las hojas del cuaderno de su tío, sentada en el borde de la cama que él ocupaba, mientras la familia se alistaba para abandonar esa vivienda prefabricada que compraron gracias a un subsidio, y que reemplazó al ran-

cho de palos y cartones que los Acosta instalaban allí hace 11 años, cuando llegaron al barrio. Todavía no saben a dónde ir, solo que deben salir.

"No sabemos nada de quién pudo cometer este crimen, lo único claro es que nadie nos va a devolver a nuestro hijo", dice la madre.

Dejarán el material recidado, que ocupa buena parte de la casa, y se llevarán las pocas pertenencias de Alex, entre estas, las botas que compró con

sus propios ahorros y que muy pocas veces se calzaba para evitar que se dañaran. Los Acosta saldrán desplazados de un sector al que llegan muchos en similares condiciones.

A raíz de los casos presentados, las Juntas de acción comunal de los barrios del sector empujezan a formar el Núcleo de Participación Comunitaria para hacerle frente, entre otros temas, a la inseguridad y la deserción escolar de los jóvenes.

Proyecto Justicia y Vida

25 febrero 2005

SEGURIDAD / SI HOMBRES HAN OCURRIDO EN ESA ZONA EN LO QUE VA DEL 2005

Extorsionaba y asesinaba a nombre de los paramilitares en Sibaté, Soacha, Fusagasugá y cerca de Bogotá. Jesús Henry Sánchez, 'Esteban', y cabecilla de una facción del Bloque Capital, actuaba contra comerciantes y transportadores. Obligaba a mujeres a ocultar las armas utilizadas en sus crímenes.

El cobrador del Bloque Capital



'Esteban' era un verdugo para los comerciantes.



Junto con 'Esteban' fueron capturados otros dos comandantes del bloque Capital de las Auc: 'Juan Carlos' y 'Pitufo'.

Jesús Henry Sánchez, conocido como 'Esteban', uno de los líderes de la línea dura del Bloque Capital de las autodefensas, y conocido con el alias de 'Esteban', inspiraba miedo entre algunos comerciantes y transportadores de municipios como Sibaté, Soacha, Fusagasugá y sectores como Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar. Según las autoridades, tenía a su mando un siniestro grupo de hombres entrenados para matar.

Una fuente de la Policía Cundinamarca le dijo a HOY que a Sánchez y a otras once personas capturadas el 13 de febrero, se les atribuyen más de cien asesinatos. Muchos de ellos en la zona de Altos de Cazuca, un sector deprimido y donde con frecuencia se producen crímenes que quedan en el misterio.

Ese domingo, Jesús Henry Sánchez caminaba tranquilamente en compañía de dos de

sus escoltas del Bloque Capital, por una de las calles de Fusagasugá, cuando se encontraron con un retén de la Policía Cundinamarca.

Sánchez llevaba una pistola nueve milímetros y un proveedor para fusil en la parte posterior de su pantalón, que encontraron los policías en el momento de la requisa.

Al ser interrogado sobre el porte del arma y de la munición, 'Esteban' permaneció en silencio. Enseguida la policía le extrajo la cédula de ciudadanía, con el número 76'310.237 de Popayán, y confirmó su identidad.

Una vez capturado, la Seccional de la Po-

licía Judicial de Cundinamarca estableció que el 'modus operandi' del bloque que liderado por 'Esteban' consistía en utilizar a las mujeres de esa organización, para que transportaran las armas de fuego dentro de sus bolsos personales. Las entregaban a sus compañeros en el sitio y hacían que acordaban para cometer el asesinato.

Luego del delito, les devolvían las armas para que ellas las trasladaran a otros lugares. Con este sistema de rotación de armamento en serie, los delincuentes evitaban el cuantioso transporte de las mismas, la fabricación de caletas y evadían la acción y el control de las autoridades.

Así mismo, se estableció que 'Esteban' llevaba por lo menos dos meses extorsionando a varias empresas de transporte. Velosiva, Coopstrans y Cootransfer, entre otras, recibían a diario la visita de los miembros del Bloque Capital que les exigían el pago de una 'vacuna' a cambio de permitirles seguir prestando sus servicios a la comunidad.

Los cultivadores de fresa de la provincia del Tequendama también fueron extorsionados. En el municipio de Sibaté, el mismo grupo está sindicado de cometer varios asesinatos.

Acusado de homicidio, extorsión, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y conformación de grupos armados ilegales, 'Esteban' está ahora preso en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá.

25 Febrero 2005

25 febrero 2005

25 febrero 2005



Visita al infierno

"Nos tuvieron contra la pared y luego salió una agente con tapabocas y empezó a pedirnos datos sobre nuestras pertenencias (...). Otro policía nos hizo desnudar y poner en cucillitas..."

Ahí empezó el calvario. Era ya media noche. Empecé a ver bultos humanos en el piso. Eran todos los detenidos y hedía horrible, todo oscuro. Tuvimos que sentarnos cerca de un charco de orinas, sin importar el olor, para que nadie se nos acercara... unos raperos a quienes habían cogido en nuestro barrio por pintar grafitis nos dijeron: 'haganse con nosotros para que no los violen'.

Acceptamos su invitación. Sólo nos quedaba resignarnos, sentarnos y espe-

PÁG. 2

rar que pasaran 24 horas para que nos soltaran". Así habla Ernesto Guevara*, estudiante de derecho de 20 años que vivió el drama de estar en la Unidad Permanente de Justicia de Bogotá. Lo

retuvo la policía por tomar trago con sus amigos en un parque. Testimonio desgarrador.

HOY le cuenta, a través de una víctima, lo que ocurre en las Unidades Permanentes de Justicia (U.P.J.) a donde llegan decenas de detenidos cada noche.

5 abril 2005

2005 IndA II

SEGURIDAD / 87 HOMICIDIOS HAN OCURRIDO EN ESA ZONA EN LO QUE VA DEL 2005

Alarma por asesinatos selectivos en barrios de Ciudad Bolívar

Alcalde Garzón pide reunión urgente con el Fiscal General para analizar el fenómeno. Delitos de mayor impacto social bajaron un 10 por ciento en el primer trimestre.

Aunque en el primer trimestre del año hubo 1.600 delitos menos que en el mismo período del 2004 y los índices de mayor impacto social bajaron, el alcalde Lucho Garzón prendió ayer las alarmas sobre el aumento sustancial de los homicidios en cuatro localidades.

Con las cifras de la Policía Metropolitana y de Medicina Legal en la mano, Garzón reconoció que las muertes por homicidio subieron en un 10 por ciento en los primeros tres meses, pasando de 380 en el 2004 a 418 en el 2005.

Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Santa Fe son las localidades donde mayor número de homicidios comunes se han registrado en lo que va corrido del año.

Garzón expresó su mayor preocupación por lo que está ocurriendo en Ciudad Bolívar, donde, según dijo, al parecer se están presentando asesinatos selectivos, sin que aún se hayan podido establecer sus móviles.

"No queremos especular, pero sí hay un cambio de tipología en los homicidios de esa localidad -afirmó Garzón-. Ya no se presentan por riñas, licor o atraco, ahora tenemos la sospecha de que son selectivos".

Anunció que busca una reunión urgente con el fiscal general, Luis Camilo Osorio, para analizar el tema, sobre el que la Alcaldía ya puso en marcha acciones como resultado del consejo de seguridad Distrital que se celebró el jueves pasado.

Igualmente, en la bienvenida a 300 nuevos policías que entraron ayer en servicio para reforzar la seguridad, mostró preocupación por la presencia de fuerzas al margen de la ley en la ciudad.

"Hay hechos que nos preocu-



DE LOS 300 efectivos que recibió ayer Bogotá para reforzar el pie de fuerza, 125 se destinarán al programa de Policía Comunitaria y 90 a la Sijín.

pan, como retenes de la guerrilla en Usme y detenidos que muestran que hay una especie de reclutamiento", dijo Garzón al señalar que estos temas de seguridad los revisa junto con el Ejército, la Policía, la Cámara de Comercio, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación.

Insistió en que la seguridad de Bogotá debe ser el tema central del Consejo Comunal previsto para mayo con el presidente Álvaro Uribe, por cuanto el conflicto armado que vive el país está repercutiendo en la ciudad.

Dentro de la nueva estrategia para mejorar la percepción de seguridad de los bogotanos, en este mes se realizarán las primeras audiencias públicas locales, en las que la comunidad hará visibles sus problemas de seguridad. La primera será en Ciudad Bolívar el 11 de abril. El 18 en Mártires y Puente Aranda y el 25 de abril en San Cristóbal.

"Tenemos que enfrentar el tema de la percepción ciudadana frente a la seguridad y ahí no hay sino dos caminos: pasar de agache, que no es lo que hacemos en esta administración, o lo enfrentamos y eso es lo que vamos a hacer", aseguró Garzón.

Estadísticas comparativas de la localidad de Ciudad Bolívar

1 de enero a 27 de marzo 2004-2005

Muertes violentas	2004	2005	Diferencia	Variación %
Homicidios	62	87	25	40,3
Muertes en A/T	11	6	-5	-45,5
Suicidios	4	5	1	25,0
Muertes accidentales	4	3	-1	-25,0
Total	81	101	20	24,7

© Gráfico: Diseño Editorial / EL TIEMPO
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal

Delitos de mayor impacto social

En Ciudad Bolívar

	2004	2005	Diferencia	Variación %
Lesiones comunes	222	88	-134	-60,4
Hurto de vehículos	16	51	35	218,8
Hurto de motos	16	18	2	12,5
Hurto de bancos	0	0	0	0,0
Hurto a residencias	76	45	-31	-40,8
Hurto a personas	96	65	-31	-32,3
Hurto a establecimientos comerciales	40	16	-24	-60,0
Total	466	283	-183	-39,3

© Gráfico: Diseño Editorial / EL TIEMPO
Fuente: Casos de Investigaciones Criminológicas, Policía Metropolitana.
Cálculos: Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia

Patrocine un niño desde hoy

25 Febrero 2005

11 Abril 2005

SEGURIDAD / HOY SE REALIZARÁ LA PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA ... 11 de abril de 2005

Garzón 'blindará' a Ciudad Bolívar

Por alto registro de homicidios de jóvenes, el Alcalde Mayor anunciará hoy la inversión de 2.400 millones de pesos en infraestructura, redes juveniles y campañas.

Ciudad Bolívar, una de las localidades más pobres de Bogotá, se convirtió este año en la zona más violenta de la capital. El número de homicidios pasó de 66 -entre enero y marzo del 2004-, a 88 en el mismo lapso del 2005. De esa cifra, 81 de las víctimas eran jóvenes entre los 16 y 23 años.

Del total de muertes, en 57,5 por ciento de los casos las autoridades no pudieron establecer el móvil. Los barrios más afectados con las muertes de jóvenes son Candelaria, Bella Flor, Arborizadora Alta, Vista Hermosa, según un informe de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Algunos habitantes atribuyeron los crímenes a un nuevo periodo de "limpieza social".

A lo anterior se suman las denuncias de vecinos que hablan de una nueva ola de reclutamiento de jóvenes por parte de grupos armados ilegales, especialmente paramilitares.

Por estos hechos, el alcalde Luis Eduardo Garzón convocó para hoy a las 9 a.m., en el colegio Rodrigo Lara Bonilla del barrio La Candelaria, a una audiencia pública que le permita conocer, de boca de los mismos vecinos, qué es lo que está pasando en Ciudad Bolívar.



En Ciudad Bolívar durante el primer trimestre del presente año aumentaron de 66 a 88 los homicidios. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes. Archivo particular

Delitos comunes primer trimestre del 2005

Delito	I trimestre 04	I trimestre 05	Variación
Homicidio común	380	418	10%
Muertes en accidentes de tránsito	128	99	-21,4%
Lesiones comunes	2231	1873	-14,9%
Lesiones en accidentes de tránsito	1386	474	-65,5%
Hurtos de carros	1428	1477	0,3%
Hurtos residencias	1324	1100	-14,9%
Hurtos a personas	1585	1463	-6,2%
Hurtos a entidades comerciales	1001	872	-11,1%
Hurto a entidades comerciales	53	62	19,2%
Piratería terrestre	185	18	-90,2%
Extorsiones	16	0	-100%
Secuestros	16	0	-100%
Actos terroristas	2	0	-100%

El Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá

EL TIEMPO estableció que Garzón anunciará hoy la destinación de 2.400 millones de pesos para darle un 'blindaje' en seguridad a la localidad. Es una partida que se invertirá en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata en los barrios Santo Do-

mingo y la Estrella Sur y una nueva estación de Policía. Así mismo, para el fortalecimiento de las redes juveniles, publicidad para la convivencia y actividades que permitan prevenir que más muchachos sigan perdiendo la vida por efecto de esa violencia.

También se buscará trabajar en la "territorialización" y en convenios de seguridad locales con participación de la ciudadanía, expresó el subsecretario de Seguridad y Convivencia, Andrés Restrepo.

Reclutamiento

El reclutamiento de menores no es nuevo, teniendo en cuenta que el año pasado, más de 39 muchachos, entre los 11 y 16 años, fueron llevados "con engaños" por las filas de autodefensas de Martín Llanos para combatir en Monterrey (Casanare).

"Me ofrecieron 400 mil pesos mensuales para trabajar en una finca arrocerca. Eso no era ni la mitad de lo que me ganaba en la plaza", reveló un menor reclutado en el mer-

cado de Soacha, municipio que limita con Ciudad Bolívar y que registra un fenómeno similar en los altos de Cazuca (ver nota anexa).

"Yo lo tomé como una alternativa de trabajo, pero luego, cuando llegamos a Casanare, me tocó aprender a disparar (...) las primeras veces me oriné del miedo, pero ya no había forma de salirnos" narró el menor que se encuentra bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Cabe anotar que el elevado número de muertes en Ciudad Bolívar no se presentaba desde 1998, según Restrepo. En el primer trimestre del 98 se relacionó con las disputas territoriales que venían ocurriendo por las milicias de las Parcs. El otro 'pico' ocurrió en el 2001, tras la suspensión de los diálogos en el Cauca. Ahora, nuevamente y en ese primer trimestre se 'disparan' los homicidios.

Por su nueva tipología, Garzón expresó que sin especular, estarían registrándose las muertes en forma selectiva.

De ahí que el alcalde estará hoy con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Héctor García, escuchando a la comunidad. Quienes no quieran hacer denuncias públicas, las podrán consignar en papeles que podrán depositar en urnas.

El ejercicio de las audiencias públicas para tratar temas de seguridad continuará en los Mártires y Puente Aranda, que se realizarán conjuntamente el 18 de abril, y en San Cristóbal, donde está prevista para el 25 del mismo mes.

SOACHA

El caso de Cazuca

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Héctor García, informó que en los últimos 15 días, sin embargo, no se ha presentado ningún homicidio en Ciudad Bolívar.

"Eso es de aplaudirse, no de alarmarse", dijo García.

Ese resultado se ha extendido a Cazuca, donde la situación ha mejorado, pero sigue siendo delicada, según el comandante de Policía de Soacha, coronel Juan Carlos Ponce.

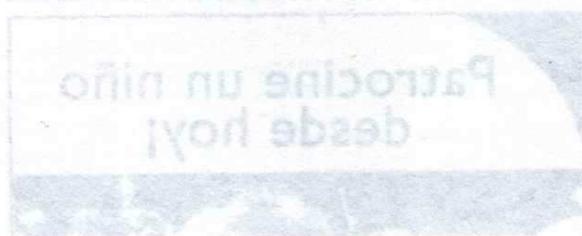
Allí, hay dos puntos álgidos que son los barrios Luis Carlos Galán y Julio Rincón, donde se registra la mayor cantidad de víctimas por muertes violentas.

Igualmente ocurre el 'paseo' de los hombres armados que buscan 'trabajadores' para sus filas.

"Sabemos que las autodefensas de Martín Llanos y el Bloque Centauros tienen una pelea en el sector por el reclutamiento", señaló una funcionaria de la Defensoría del Pueblo.

Así mismo, un grupo de oficiales de inteligencia "asegura que mientras las condiciones de los habitantes de Cazuca sigan siendo precarias, los grupos armados buscarán allí a sus combatientes. Por ahora, sobre Cazuca se mantiene la alerta temprana 062 de la Defensoría del Pueblo sobre "una posible masacre".

Entre tanto, los profesionales que siguen visitando Ciudad Bolívar todos los días, esperan que alguien les diga algo de "sus hijos".



13 Abril 2005

Incremento de asesinatos en el sur de la ciudad Los paramilitares se pasean como Pedro por su casa

Bastante se dice sobre el incremento de la violencia en la ciudad, especialmente en las localidades del sur, donde la situación socioeconómica y cultural registra niveles dramáticos. Los organismos oficiales suministran cifras de cómo se reproduce la descomposición social, pero no plantean soluciones definitivas al problema.

Se afirma que se incrementa el número de pandillas juveniles en Ciudad Bolívar, al pasar de 274 en años anteriores, a 854 en los últimos meses. Aumento de asesinatos en la misma localidad en lo que va corrido del año, se han registrado 28 asesinatos, cifra escalofriante. Las autoridades desde sus propios intereses le atribuyen esta pandemia a diferentes factores, entre ellos, a problemas biológicos, hereditarios, psicológicos y lo más común, son consecuencia del conflicto interno que padecemos.

Lo cierto, todo el mundo en la ciudad se encuentra profundamente preocupado por la forma como el Gobierno Nacional ha cogido como depósito de reinsertados y asentamiento de paramilitares a todas las localidades de Bogotá. En Ciudad Bolívar transitan a cualquier hora del día, como Pedro por su casa, avistas de las autoridades policiales. Declaran el toque de queda a partir de las siete de la noche a los habitantes de las localidades del sur; visitan a diario los diferentes negocios: tiendas, cafeterías, billares, misceláneas, etcétera, ejerciendo el control en todas sus actividades, golpeando, robando y asesinando a todos aquellos que consideran sus enemigos.

Los de la vista gorda

La primera autoridad administrativa de la ciudad y el general de la XIII brigada se trenzan en un idebate, donde el Alcalde Mayor atribuye la situación a la presencia paramilitar en la capital, mientras el general dice todo lo contrario, que aquí en Bogotá todo funciona divinamente. Entre tanto, el padre Alirio López quien dirige el programa Vida Sagrada de la Alcaldía, Andrés Restrepo, subsecretario de seguridad y convivencia y el comandante de la Policía Bogotá, se dedican a construir monumentos a la paz y a la no violencia, con las armas corto punzantes decomisadas a los delincuentes.

Se necesita que el Gobierno Nacional y Distrital, reconozcan que la raíz del problema se encuentra en la injusticia, la exclusión, la desigualdad, factores generadores de la pobreza y miseria en que se debaten la mayoría de bogotanos y colombianos. Y que no basta solamente construir monumentos a la paz, ni la construcción de una sociedad totalmente policíaca represiva, pensando en que los grandes males de la ciudad se van a solucionar de esta manera. Se necesita democracia participativa real y decisoria. Más democracia es lo que está perdiendo el pueblo. *VOZ

17 Abril 2005

INVESTIGACIÓN / ALCALDÍA Y AUTORIDADES LOCALES, EN MÁXIMA ALERTA

'No dejaremos que 'Macaco' naga en Bogotá lo que 'Don Berna' hizo en Medellín'

Informes señalan que hombres del jefe 'para' llegaron a Ciudad Bolívar. En cumbre Jiribe-Garzón se buscarán salidas. Alcalde pide tratar el tema en Ralito.



La alarma que esta semana prendió el alcalde Luis Eduardo Garzón, sobre la creciente amenaza paramilitar en Bogotá, tiene origen en informes confidenciales que señalan que desde Santa Fe de Ralito (Córdoba), lugar de concentración de los jefes de las autodefensas, se acordó que uno de sus más poderosos hombres se encargara de la retoma de Bogotá.

Se trata de Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', el jefe del Bloque Central Bolívar (Beb) y cuya misión, aseguran estos mismos informes, sería la de ejercer en la deprimida localidad de Ciudad Bolívar el mismo poder que los 'paras' desplegaron en Medellín y expandirlo a otras zonas de Bogotá.

'Macaco', según las indagaciones, encargó a su vez a 'La Araña' y a 'Rubiano' de liderar la avanzada sobre la localidad de 252 barrios y un millón de habitantes, en la que fueron asesinadas 88 personas en el primer trimestre del año, la cifra más alta desde 1997. Esos mismos registros señalan que desde diciembre pasado, hombres que se identifican como miembros del grupo de 'Macaco' están intentando penetrar un sector de taxistas para usarlos en operaciones de inteligencia, estrategia similar a la utilizada en el pasado por la mafia.

Además de oficiales de inteligencia, esta información la conocen varios funcionarios de la Alcaldía y el representante a la Cámara por Bogotá Gustavo Petro, que prepara un debate para el próximo 26 de abril en donde tocará este tema, entre otros relacionados con el paramilitarismo.

La información señala que la penetración empezó ofreciendo seguridad a transportadores de servicio público, a distribuidores de productos y a tenderos de la zona a cambio de cuotas mensuales que oscilan entre los 3.000 y 500.000 pesos.

Para lograrlo, se acabó primero con los retenes que milicianos de las Farc y pandilleros instalaban en las vías. Luego, se procedió a identificar a extorsionistas y a sicarios.

A estos se les advirtió que debían sumarse a sus filas o de lo contrario serían desterrados o eliminados, tal como viene pasando. Estos crímenes son reivindicados en grafitis y panfletos.

"Muerte a los sapos... a los niños malos los acostamos temprano", rezan los avisos distribuidos en barrios como

El Tesoro, Jerusalén, Candelaria, Bella Flor, Arborizadora Alta y Vista Hermosa.

La presencia de 'La Araña', pistolero cordobés, fue confirmada esta semana por un sicario capturado por la Policía. Las autoridades han logrado establecer que a la par con la estrategia de seguridad, 'La Araña' lanzó una ofensiva de reclutamiento de jóvenes a los que ofrece entre 400 mil pesos y un millón al mes.

En Soacha, esta tarea la lidera 'Rubiano'.

Un funcionario de la Alcaldía le dijo a EL TIEMPO que también hay indicios de que

los 'paras' intentan controlar el negocio de la prostitución y penetrar en el mercado inmobiliario para lavar dinero.

Adicionalmente, señalan las pesquisas, los paramilitares vienen efectuando una expropiación a la fuerza de lotes en la localidad para crear corredores estratégicos de movilidad hacia el Sumapaz, zona de influencia del frente 53 de las Farc, al mando de 'Aldinever' o 'El Zarco'.

Como Medellín

"No vamos a permitir que 'Macaco' haga en Bogotá lo que 'Don Berna' hizo con Medellín", advirtió a este diario una alta fuente de la Alcaldía de Bogotá tras confirmar que conocían los informes de inteligencia.

Si la ofensiva es de esa magnitud, se estaría dando inicio a una nueva era del paramilitarismo en la ciudad.

"Es urgente que el país sepa si 'paras' de Ralito están detrás de las amenazas en Bogotá".



POR EL MOMENTO, la respuesta a la alarma encendida por el Alcalde, sobre presencia 'para' en Ciudad Bolívar, se tradujo en constantes patrullajes de la fuerza pública.

A Bogotá las autodefensas llegaron en el 2000 con el denominado Bloque Capital, liderado por Miguel Arroyave -jefe paramilitar asesinado en los Llanos en septiembre pasado-. Y si bien hicieron presencia con muertes selectivas en Ciudad Bolívar y Cuzcá y manejaban tenebrosas oficinas de cobro en los llamados sanandresitos, en la central de abastos (Corabastos), y en barrios como el 7 de Agosto, nunca lograron un poder similar al que se pretende, emulando el logrado en Medellín.

De hecho, a mediados del año pasado, informaron que estaban saliendo de la ciudad y que iban camino a la desmovilización. En su momento, funcionarios lo corroboraban en voz baja.

¿Por qué regresan? ¿por qué en plena negociación? Una hipótesis es que vuelven para tratar de replicar en la capital el modelo que impuso Diego Fernando Murillo, 'Don Berna', en Medellín.

'Don Berna', miembro del cartel de Medellín en la época



CARLOS MARIO JIMÉNEZ, 'Macaco'.

de Pablo Escobar, aplicó de manera implacable una estrategia de 'pacificación'.

Sus hombres llamaron al orden en el 2002 a todas las bandas. Según el relato de jóvenes desmovilizados a EL TIEMPO, los reunieron en fincas y les dijeron: "O se someten o los aniquilamos".

En menos de un año ya tenían en sus filas a decenas de pandillas. En noviembre del 2003, algunos de ellos apresen-

ron en las listas de 'paras' de movilizados en Medellín. Ahora, un puñado figura en juntas de acción comunal y estudios hablan de su influencia en algunas comunidades.

A Ralito

Ante este panorama, el alcalde Garzón le envió esta semana una carta al alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, en la que le pide que el tema sea discutido en Ralito, en donde están concentrados 'Don Berna' y 'Macaco'.

"Es urgente que el país conozca claramente si los grupos de autodefensa en proceso de negociación están detrás de las estructuras armadas que, a su nombre, amenazan las poblaciones de varios barrios de Bogotá", dice la carta de Garzón a Restrepo.

Esta semana Garzón y presidente Álvaro Uribe se reunirán para analizar la problemática y buscar soluciones de fondo para impedir que en Ciudad Bolívar se repita el modelo de 'Don Berna'. Y también esperarán respuesta que llegue desde Ralito.

27 Abril 2005

19 Abril 2005

BOGOTÁ INDIAS

REUNIÓN / URIBE Y GARZÓN ANALIZARON SITUACIÓN DE SEGURIDAD

'Paras' en Bogotá, a mesa de Ralito

El Gobierno Nacional está de acuerdo con llevar el tema de la presencia paramilitar en las localidades de Bogotá a la mesa de diálogos con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que se desarrolla en Santa Fe de Ralito (Córdoba).

La revelación la hizo el alcalde Lucho Garzón al término ayer de una nueva reunión con el presidente Álvaro Uribe, en la que el tema central fue la situación de orden público de la ciudad.

Según el mandatario, el Gobierno está abierto a eso y a todos los temas que afecten la seguridad de Bogotá. "El Presidente lo dijo claramente: 'Asesino que esté en este cuento, asesino que hay que buscar sin importar su origen'. Así fue como lo planteó".

En el encuentro se analizó lo que ocurre, particularmente en Ciudad Bolívar, donde los homicidios se dispararon en el primer trimestre '05 (19 casos), según las autoridades.

El miércoles pasado Garzón le envió una carta al alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, pidiéndole que el tema de la presencia y el accionar 'paras' en Bogotá fuera puesto en Ralito.

Garzón llamó la atención sobre la disminución de los homicidios en Ciudad Bolívar en los últimos 15 días. "Está-

mos investigando para determinar si es que existe una mano invisible, alguien que dijo paren eso que está pasando en Ciudad Bolívar, o no. ¿Eso se debe a que me paran muchas bolas y obedecen, o detrás hay unos intereses distintos?".

Uribe y Garzón avanzaron durante la reunión en la definición de la metodología para celebrar el Consejo Comunal que se hará en Bogotá para tratar el tema de seguridad. Aunque no se ha fijado la fecha, se sabe que será en mayo.

El otro tema que se trató fue el relacionado con el decreto presidencial que reglamenta el Estatuto Orgánico de Bo-

gotá (decreto 1421), en lo que tiene que ver con la selección de los alcaldes locales.

En presencia del secretario Jurídico de la Presidencia y de los secretarios de Gobierno y General de la Alcaldía se acordó su contenido.

No se les quita a las JAL la facultad de conformar las ternas de candidatos, pero a estos se les obligará a someterse a un examen y permitir el escrutinio de su hoja de vida. Quienes cumplan los requisitos van a la audiencia y los ediles tendrán que acoger el veredicto judicial para definir la terna que enviarán al Alcalde Mayor.



• Inglés

• Francés

• Italiano • Alemán

• Español (con certificado)

high technology in learning™

• piense • hable • lea • escriba

120 horas

Programa 24, 6 a 8 horas diarias
Lunes a Viernes de 8am a 9pm
Sábados de 8 am a 2 pm
Niveles: Básico, Intermedio,
Avanzado y Superior

Iniciación de clases
18 y 25 de Abril

www.hcl-online.com



CURSOS INTENSIVOS

Calle 99 No. 19A-58
BOGOTÁ 7276

Proyecto Justicia y Vida

120H

25 Abril 2005

POLICÍA / EXTORSIONABAN EN CIUDAD BOLÍVAR

Caen 9 señalados 'paras' en Bogotá

Cobran 'peaje' a transportadores de la zona, en 13 paraderos de la localidad. Ya están identificadas otras bandas que trabajan para los 'paras'.

Los paramilitares que operan en la convulsionada localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, sufrieron un duro golpe en las últimas horas.

Efectivos de la Policía Metropolitana capturaron a nueve señalados 'paras' acusados de extorsionar a transportadores que prestan su servicio a cerca de un millón de habitantes.

Según las investigaciones, estos hombres operaban en 13 paraderos de la localidad y le cobraban a cada conductor una 'vacuna' diaria de 2.000 pesos. "Esa sola banda recogía diariamente hasta un millón de pesos", señaló a este diario un oficial de la Policía, quien agregó que hoy se dará a conocer el resultado de la operación.

Agregó que el cabecilla del grupo ya está identificado y que este tiene antecedentes por otros delitos, como homicidio. "De los otros detenidos estamos verificando sus antecedentes en todas las bases de datos de los organismos de seguridad del Estado", señaló el oficial.

Además de esta organización, las autoridades tienen localizadas al menos otras cinco bandas que operan en similares circunstancias en Ciudad

Bolívar y sus alrededores. "Estamos avanzando en la plena identificación de cabecillas que vienen extorsionando en Bosa y Soacha y en otros sectores como Patio Bonito y en Corabastos", dijo la fuente.

Recientemente, la Fiscalía y la Policía capturaron a 'La Araña' y a 'Rubiano', dos hombres acusados de liderar la retoma 'para' de Bogotá, ordenada por la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Los dos sindicatos venían reclutando a jóvenes de la zona, a quienes les ofrecían entre 300 mil pesos y un millón de pesos mensuales. También son señalados de ser los autores intelectuales de la 'limpieza social' que estremeció a Ciudad Bolívar en el primer trimestre.

La captura masiva de 'paras' hace parte de la estrategia de la Policía para enfrentar la creciente presencia de las autodefensas en la ciudad, hecho que llevó al alcalde Lucho Garzón a prender las alarmas sobre este fenómeno. Incluso el tema fue debatido la semana pasada en la Casa de Nariño en una cumbre extraordinaria entre Garzón y el presidente Uribe.

El Alcalde también le pidió al alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, que discutiera el tema en Santa Fe de Ralito (Córdoba), sede de negociación entre el Gobierno y las autodefensas.

Ford Fiesta

27 Abril 2005

SOS por seguridad en Bogotá

Piden reubicar a "paras" reinsertados

El representante a la Cámara, Germán Navas Talero, lanzó un SOS a las autoridades de la capital del país, ante la necesidad de adoptar medidas urgentes debido al incremento de la inseguridad que se viene registrando en varios sectores de la ciudad.

Ante la negativa de las comisiones Primeras del Congreso de la República de aprobar una proposición en el sentido de asegurar el regreso de los reinsertados de las Autodefensas a sus lugares de origen, y de evitar el montaje de nuevos albergues en Bogotá, el congresista dijo que es urgente que los ex combatientes de las AUC sean reubicados en los sitios de donde fueron traídos.

Es necesario evitar que la capital colombiana continúe convirtiéndose en el único lugar donde ex miembros de las AUC y miles de desplazados encuentren el lugar predilecto para mitigar sus esgracias como la falta de techo y de trabajo, explicó el parlamentario.

Agregó que es oportuno estudiar la manera de brindarles la oportunidad de que regresen a sus lugares de origen, a sus tierras, su habitat, y evitar así que los cordones de miseria de las capitales continúen ampliándose.

Navas Talero se refirió a la grave problemática que padecen los habitantes de algunos barrios de Soacha, al sur de la capital, y los vecinos del sector de Teusaquillo, donde se han instalado varios albergues para reinsertados.

Sostuvo, que en los barrios donde habitan reinsertados de las AUC ha aumentado considerablemente la inseguridad. Agregó que es perjudicial para la ciudad albergar más reinsertados y desplazados.

El congresista explicó que no quiere entorpecer el proceso de inserción y mucho menos rechazar a los ex combatientes. Lo que pretende, según argumentó, es que la mayoría de ellos no llegue a la ciudad a pasar hambre e incluso a delinquir por la falta de oportunidades de empleo y recursos para su subsistencia. *voz

6 Mayo 2005

2005 IndA 72

SEGURIDAD / SE INVIRTIERON \$ 400 MILLONES

Desde ayer, Soacha con zonas seguras

En dos cuadrantes que se caracterizan por una gran concentración y movilidad de población flotante comenzaron a funcionar ayer zonas seguras en Soacha, en desarrollo del programa de la Cámara de Comercio y la Policía, que busca mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos.

El primer sector comprende desde la calle 30 hasta la diagonal 6a., y desde la carrera 9a. hasta la 7a. (se amplió de la calle 22 hasta con carrera 4a.); y el segundo, desde la calle 15 con Autopista Sur hasta la calle 22 sur con Autosur.

El año pasado aumentaron en Soacha el hurto a residencias y fincas (en 15 por ciento) y el abigeato (300 por ciento). Por eso, parte de la función de las zonas seguras es lograr la reducción de estos índices, además de solucionar los problemas de convivencia y espacio público.

María Fernanda Campo, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, precisó

que "el objetivo es poner en marcha un modelo de gestión de la seguridad basado en la concertación público-privada, en la cual se logren identificar los problemas colectivos de la zona frente a la seguridad, la convivencia y la protección del espacio público".

Y agregó que se trata de concertar estrategias que aporten a la disminución de esas problemáticas, para reducir el índice delincriminal y mejorar la percepción ciudadana.

Cada zona estará dotada con dos camionetas 4x4, una motocicleta y una unidad móvil de denuncia y contravenciones.

También contará con la presencia de ocho policías profesionales y el apoyo de un coordinador cívico de la Cámara de Comercio de Bogotá, figura que apoyará y acompañará el proceso de articulación entre la comunidad y las autoridades.

La inversión total fue de 400 millones de pesos.

Mayo 2005

ASESINATO DE JOVENES EN ALTOS DE CAZUCAAFP
BOGOTÁ

El hallazgo de dos menores asesinatos en el sector de Ciudad Bolívar, al sur de la capital del país, de nuevo prendió las alarmas sobre la proliferación en esta zona de una guerra territorial entre milicias urbanas y escuadrones paramilitares.

Para completar la difícil situación que padecen cientos de barrios de este afligido sector, la Defensoría del Pueblo denunció ayer, que al menos otros diez jóvenes están desaparecidos, hechos que le atribuyen al parecer a comandos de autodefensas, según versiones de los habitantes.

Un portavoz de la Defensoría del Pueblo indicó que los menores, de 16 y 14 años, fueron asesinados con tiros de gracia en un barrio de Cazucá, en hechos en los que también resultó herido un joven de 19 años.

Este caso ocurrió la noche del miércoles, cuando cinco hombres armados con cuchillos y armas de fuego, llegaron a la casa de tres jóvenes cuyos nombres llevaban en una lista y a quienes acusaban de asaltar supermercados.

Las víctimas fueron llevadas a un paraje aislado, donde los tendieron en el suelo y les dispararon.

La Policía halló en las últimas horas los cadáveres de Omar Hernández, de 16 años y de Michael Aranda, de 14 años, con disparos en la cabeza, mientras que Javier Vargas, de 19 años, fue hospitalizado tras recibir varios disparos en el tórax.

Habitantes de la zona dijeron que los menores atacados eran de carácter reservado y más bien juiciosos.

Además se reportó que otros cuatro muchachos fueron atacados entre la noche del sábado y el amanecer del domingo.

Un Problema Anunciado.

En el mes de abril, la propia Alcaldía de Bogotá llamó la atención sobre la conformación de escuadrones ilegales que intentan controlar Ciudad Bolívar, una zona con 800 mil habitantes, altos índices de pobreza y presencia guerrillera, de la que forma parte Cazucá, por medio de una campaña de intimidación que coincidía con el asesinato, hasta entonces, de 92 jóvenes en cuatro meses.

“acuesten a los niños temprano o nosotros los acostamos”, señalan letreros aparecidos en el último mes en el sector, según denunciaron los habitantes.

Por su parte, un periódico señaló que la campaña de “limpieza social” comenzó hace un mes con notificaciones a profesores de los colegios de esos barrios, donde advertían a los alumnos que no debían salir de sus casas en las noches.

16 mayo de 2005

CAZUCÁ / MUERTOS DOS MENORES CON TIROS DE GRACIA

Alarma por masacre en la que solo aparecen 2 muertos

Jóvenes víctimas baleadas del Oasis, en Cazucá, eran estudiantes callados.

Desaparecidos otros cuatro menores, la misma noche de la matanza. Hay otro herido, de 19 años.

El aviso fúnebre que invita a las exequias del joven Omar Erminso Hernández, de 16 años, el pasado sábado, pegado en el frente de una casa de bloque sin pañete, sobre la carretera principal del barrio Oasis, en los Altos de Cazucá (Soacha), es el único hecho visible que queda de las muertes de dos adolescentes, baleados en el cráneo, en la noche del 11 de mayo. El otro menor era Michael Aranda, de 14 años. Un tercero de ellos, Javier Vargas, de 19 años, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Policlínico El Olaya con heridas de bala en el tórax.

Los padres de estos menores por dolor y temor callan la tragedia. Como la silencian los habitantes del Oasis que tienen miedo de revelar lo que pasó esa noche. Sin embargo, hay versiones que circulan desde los barrios de Cazuca, en la parte baja, hasta los de Ciudad Bolívar, en la zona alta, que indican

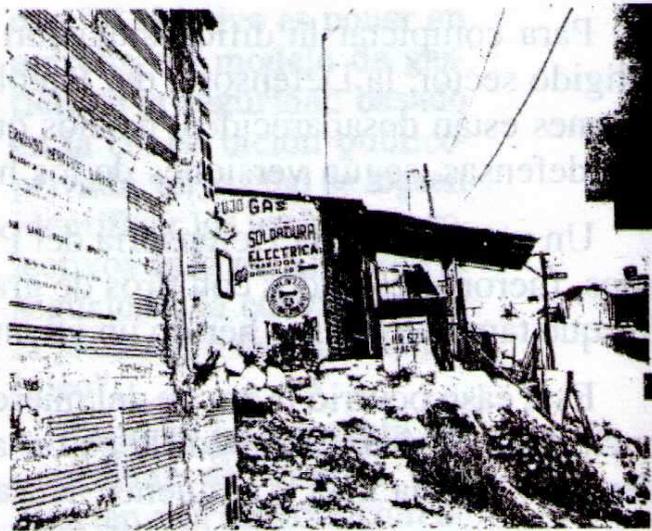
que lo sucedido con esos adolescentes es producto de “muertes selectivas” y que son parte de una “limpieza social” reiniciada, al parecer, por paramilitares que quieren consolidar su dominio en ese territorio de Soacha y Ciudad Bolívar.

Según esas versiones, la reiniciación de la “limpieza social” comenzó hace cerca de un mes con notificaciones a profesores en colegios de esos barrios y a través de letreros pintados —como en el sitio Tres Esquinas— donde advierten a los papás: “Acuestan a los niños temprano o nosotros los acostamos”.

Luego de esas amenazas ha seguido la procesión de víctimas jóvenes, eliminados con tiros de gracia. Parte de ello fue lo que ocurrió la noche del 11 de mayo. De acuerdo con esas versiones, ese día, entre las 7:30 p.m. y las 8 p.m., cinco hombres con cachuchas, cuchillos, machetes y armas de fuego, llegaron a casas del barrio con lista en mano preguntando a jóvenes con nombres y apellidos. A dos de ellos, les ordenaron el destierro.

Eran estudiantes juiciosos

Luego dos de esos hombres armados ingresaron a una tienda del Oasis, donde encontraron a los tres adolescentes Michael, Omar Erminso y Javier. Los acusaron de ser los supuestos “asaltantes y la-



LA CALLE principal del barrio El Oasis, ubicado en los Altos de Cazucá, en Soacha (Cundinamarca), se veía así ayer, al mediodía.

John Wilson Vizcaino / EL TIEMPO

drones de supermercados”. Y así lo gritaban los hombres armados a la gente que se asomaba por las ventanas, mientras se llevaban a los muchachos metros adelante, por la carretera principal del barrio, entre insultos, improperios, y golpes de machete y puntapiés. Por el camino, aseguran esas versiones, arrastraron con otros cuatro adolescentes más. Luego, en el sitio Tres Esquinas, los acostaron y les dispararon. La gente afirma haber oído al menos cuatro tiros.

Pero los muchachos asesinados eran estudiantes que, según quienes asistieron a sus entierros, eran “más bien taimados (callados) y juiciosos”. Michael estudiaba quinto de primaria en el Instituto Comercial El Oasis, y Omar Erminso cursaba octavo grado en el Instituto Educativo Buenos Aires. Parte de lo sucedido esa noche del miércoles,

también lo corroboran las organizaciones de la sociedad civil de Soacha. Pero las “muertes selectivas” no terminan ahí. Se ha señalado que el sábado en la noche, fueron baleados otros dos jóvenes en el barrio Luis Carlos Galán y que en la mañana de ayer otros dos, en La Nueva Unión.

Para hablar sobre el tema, se llamó a la Policía de Soacha y nadie respondió.

La Defensoría del Pueblo informó que tiene las alertas tempranas puestas y solo tiene confirmadas las dos muertes de los jóvenes del Oasis. Sin embargo, tiene también conocimiento de que esa noche del 11 de mayo desaparecieron entre siete y nueve menores. Tales hechos los investiga la Defensora Delegada para Bogotá y Cundinamarca. Pero continuarán desaparecidos, si la gente no denuncia esos hechos, advirtió la Defensoría.

dez de 16 años, a quienes inicialmente hirieron a machetazos, luego los tendieron en el piso y les dieron un tiro de gracia. Un tercer muchacho logró salir con vida pero su estado de salud es delicado.

Algunas personas del sector, le dijeron a VOZ que esa misma noche los 'paras' secuestraron y desaparecieron a otro número indeterminado de jóvenes sin que hasta el cierre de esta edición, se supiera de su suerte.

Semanas atrás, grupos de paramilitares visitaron escuelas del sector, amenazaron a docentes, directivas y estudiantes, prohibiéndoles transitar por la calle después de las ocho de la noche.

En el último año, han sido asesinados selectivamente por paramilitares y grupos de 'limpieza social' al menos 190 personas en Ciudad Bolívar, la mayoría jóvenes. Los comerciantes y transportadores son extorsionados y amenazados, sin que las autoridades le presten atención adecuada al problema. Todos los crímenes están en la impunidad. ★

En Cazuca

Asesinados varios jóvenes

El 11 de mayo de 2005, entre las 7:30 y 8:00 de la noche, cinco sujetos vestidos de civil y fuertemente armados, patrullaron las calles del barrio El Oasis de la Comuna Cuatro del municipio de Soacha, como generalmente lo hacen sin que las autoridades los incomode, requisaron y exigieron documentación a los transeúntes que llegaban a sus hogares, entre ellos a los jóvenes Michael Aranda Díaz y a Omar Erminson Hermán-

17 Mayo 2005

Jóvenes desplazados en Colombia enfrentan la violencia y el reclutamiento forzado en las ciudades, advierte el ACNUR

GINEBRA, 17 de mayo (ACNUR) – La población de jóvenes desplazados en las ciudades colombianas enfrentan cada vez más peligros como asesinatos, abuso sexual y reclutamiento forzado de parte de los grupos armados, advirtió la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados el día de hoy mientras enfatizaba la necesidad de tomar acciones urgentes para proteger y asistir a estos jóvenes vulnerables.

Más de cuatro décadas de conflicto armado en Colombia han desarraigado a más de 1.5 millones de personas a lo interno del país. De manera no oficial se estima que el número de desplazados internos se encuentra entre 2 millones y 3.5 millones de personas. Las cifras del gobierno indican que más de un millón de ellos viven en las grandes ciudades, unos 400.000 de los cuales son adolescentes y personas jóvenes menores de 29 años.

Recientes incidentes subrayaron que éstos jóvenes son más vulnerables a la violencia que la población no desplazada. El más reciente ejemplo se produjo con el asesinato, el miércoles pasado, de al menos dos muchachos, de 14 y 16 años de edad, a manos de hombres armados desconocidos en Altos de Cazucá, una zona ubicada en las afueras de Bogotá y que alberga a más de 20.000 desplazados internos.

El proyecto paramilitar de Soacha

Denuncian financiamiento de militares (R) a "paras" que trabajan a órdenes de "El Águila" jefe paramilitar de Yacopí

Soacha (Por Yaneth Pérez). Ciudadanos de Soacha denunciaron a nuestro semanario un siniestro proyecto paramilitar en curso en este municipio, el cual hace dos años viene generando asesinatos, desplazamiento hacia otros barrios, extorsiones, prostitución infantil, graffitis atemorizadores, amenazas y persecución sobre todo contra sectores de izquierda y populares a cuyos miembros acusan de subversivos. Los habitantes de los barrios San Mateo, La Isla, El Progreso, Los Robles, Caracolí, El Oasis, El Arroyo, Los Pinos, El Rincón del Lago, Ciudadela Sucre, Cazucá y Julio Rincón, han hecho varias denuncias sin que hasta ahora las autoridades se hayan interesado en estos graves hechos. Los denunciantes señalan a policías retirados y activos, que culpan de identificarse como paramilitares de las AUC, como financiadores, para lo cual también cobran "vacunas" a comerciantes y empresas de transporte locales. Explican que actúan bajo el ropaje de la "limpieza social", con plena impunidad y se ha llegado el caso de que pastores evangélicos ex-

hiban carné paramilitar que les ha sido otorgado.

Con plena impunidad

Armados hasta los dientes, uniformados y con pasamontañas -denuncian- inician sus acciones a partir de las ocho de la noche, hora en que la población barrial es obligada a estar en sus casas. En varias ocasiones -revela el documento- han aparecido cadáveres y se han registrado tiroteos nocturnos. Puntualizan, que los supuestos "paras", aprovechando la pobreza local, reclutan jóvenes y adolescentes para sus filas, ofreciéndoles un salario que oscila entre 600 y 700 mil pesos, de acuerdo con la mayor o menor capacidad de acción delictiva, a los cuales ubican como vendedores ambulantes en sitios estratégicos dentro y fuera de Soacha. Algunos "paras" han expresado al calor de bebidas embriagantes que trabajan a órdenes de "El Águila", jefe paramilitar de Yacopí.

"Muerte a bazuqueros, ladrones, auxiliadores del ELN y las FARC y sapos", "Señor padre

de familia, acueste sus hijos temprano o se los acostamos", son entre otros, los graffitis escritos por los "paras".

Piden investigar y castigar culpables

Reclaman por último, que la seguridad no sea sólo para Bogotá y que no siga la actitud complaciente del Estado frente al fenómeno paramilitar. "Quedamos en espera de acciones y medidas inmediatas encaminadas a judicializar y sancionar a estos criminales y prevenir nuevos atropellos", dice el texto.

Las denuncias anteriores se unen a graves revelaciones hechas por organizaciones comunitarias, por hechos que han dejado una secuela de asesinatos, allanamientos y detenciones en los barrios populares de Soacha. Para observadores políticos locales, el proyecto paramilitar tiende a afianzar un clima de terror que contribuya a la criminalización de la protesta social y el afianzamiento de las organizaciones derechistas de marcado corte fascista. *voz

17 Mayo 2005

PRENSA 2006

MARTES 9 DE MAYO DE 2006 **EL TIEMPO**

JUNTO A JOVEN

Desaparece líder cívico en C. Bolívar

Luis Antonio Arismendi Pico, un líder cívico de Ciudad Bolívar, desapareció misteriosamente hace diez días en esa conflictiva localidad del sur de Bogotá, denunció ayer en un comunicado la ONG Proyecto Justicia y Vida.

Arismendi, de 55 años y padre de tres hijos, se desempeña como presidente del Sindicato Manuela Beltrán de Trabajadores y Expendedores de Alimentos y Bebidas de la Plaza de Mercado del barrio San Francisco, de Ciudad Bolívar.

Según las primeras informaciones, Arismendi fue visto por última vez en la tarde del pasado viernes 28 de abril.

Junto a él, también desapareció Belquis Dayana Goyeneche, una joven madre de 20 años, quien lo acompañaba en la plaza de mercado San Francisco.

"Él es un campesino dedicado a trabajar por la comunidad. Hay que advertir que la situación en Ciudad Bolívar es dramática, desaparecen muchas personas y nadie denuncia, ni hace nada", aseguró ayer Lilia Solano, directora de Justicia y Vida.

La Defensoría del Pueblo, a través de una carta dirigida a la Fiscalía General y a la Policía Metropolitana, solicitó esclarecer cuanto antes la desaparición de Arismendi.



Luis Antonio Arismendi

Cambio, Lunes 12 de junio de 2006

Fragmento del Artículo el "reciclaje" Para

LA TRIBUNA JUEVES 18 DE MAYO DE 2006

1-16 BOGOTÁ

>EXPOSICIÓN: Fotografías tomadas por niños del barrio caleño de Siloé. En la Biblioteca Virgilio Barco.

PERSONERÍA DICE QUE LOS HABITANTES TEMEN REPRESALIAS SI REPORTAN ESTOS CASOS

Denuncian la desaparición de 170 personas en Ciudad Bolívar

La ONG Justicia y Vida y la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas (Asfades) recopilaron esa estadística mediante encuestas con amigos y familiares de las víctimas. Defensoría del Pueblo se comprometió a activar un comité de búsqueda.

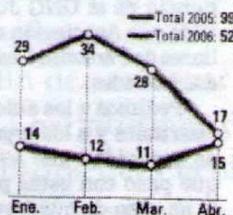
El 16 de diciembre del año pasado, Martha Lucía Montano salió de su casa en el barrio San Francisco, en Ciudad Bolívar, acompañada de su bebé. Cuentan que esa mañana tomó un taxi para dirigirse al barrio San Carlos, en el sur de Bogotá.

Pero hoy, cinco meses después, nadie sabe el paradero de esta joven madre de 23 años ni de su pequeño hijo de 7 meses, quienes habían llegado a la ciudad desplazados por la violencia del Casanare.

Martha Lucía y su bebé son dos de las 170 personas que han desaparecido de manera forzosa en el último año en Ciudad Bolívar, según una denuncia de la ONG Justicia y Vida y la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas (Asfades).



Homicidios en Ciudad Bolívar



350

El número de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá asignados para vigilar los 95 barrios de Ciudad Bolívar. En la zona funcionan 9 CAI y dos

PRENSA 2006

EL TIEMPO

BOGOTÁ

BOGOTÁ

encuestas con amigos y familiares de las víctimas.

El 16 de diciembre del año pasado, Martha Lucía Montaña salió de su casa en el barrio San Francisco, en Ciudad Bolívar, acompañada de su bebé. Cuentan que esa mañana tomó un taxi para dirigirse al barrio San Carlos, en el sur de Bogotá.

Pero hoy, cinco meses después, nadie sabe el paradero de esta joven madre de 23 años ni de su pequeño hijo de 7 meses, quienes habían llegado a la ciudad desplazados por la violencia del Casanare.

Martha Lucía y su bebé son dos de las 170 personas que han desaparecido de manera forzosa en el último año en Ciudad Bolívar, según una denuncia de la ONG Justicia y Vida y la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas (Asfades).

"Pedimos a las autoridades distritales y a los organismos de seguridad que averigüen qué pasó con estas personas y, en caso de que hayan sido asesinadas, que nos ayuden a buscar sus cuerpos", dijo ayer la abogada Lilia Solano, directora de Justicia y Vida.

Solano explicó que en el último año realizaron encuestas en algunos de los 95 barrios de la localidad. "Así lo



En la localidad de Ciudad Bolívar, ubicada en el sur de Bogotá, residen más de 600 mil personas, el 70 por ciento en condición de pobreza, según un informe de la Cámara de Comercio. / Archivo - EL TIEMPO

gramos documentar las 170 desapariciones. De algunas tenemos información, pero hay otras sin mayores datos porque hay mucho miedo a denunciar", agregó Solano.

Las desapariciones más recientes fueron las del líder cívico Luis Antonio Arismendi,

de 55 años, y la joven Belquis Goyeneche, de 22. A ellos los vieron por última en una plaza de mercado, el pasado 28 de abril.

Ayer, el Defensor Nacional del Pueblo, Vólmar Pérez, les pidió a Justicia y Vida y a Asfades que "envíen formalmen-

te la documentación sobre las desapariciones, con el fin de activar de manera inmediata un comité de búsqueda".

"Tenemos que reconocer que el nivel de denuncia en esa localidad es muy bajo y de ahí la importancia del apoyo de las ONG en estos casos", le dijo Pérez a EL TIEMPO.

Cambio, Lunes 12 de junio de 2006

Fragmento del Artículo el “reciclaje” Para

El foco ‘para’ sobre la ciudad

El epicentro del rearme paramilitar en Bogotá se ha situado en el sector Altos de Cazuca, en límites de la localidad Ciudad Bolívar y el vecino municipio de Soacha. Desde septiembre de 2005, 25 líderes comunitarios han sido desaparecidos y por lo menos cinco de ellos asesinados allí por un grupo que se presenta como Bloque Central Santander y está conformado por miembros de los bloques Capital y Centauros de las AUC, desmovilizados el 4 de septiembre de 2005.

Monitoreos realizados por la Defensoría del Pueblo coinciden con algunos informes de inteligencia consultados por Cambio en la existencia de éste y de otro grupo llamado Bloque Guaviare, que están retomando las posiciones ganadas por el Bloque Capital en las zonas industriales y comerciales de la ciudad. El grupo emergente sacó provecho de la acefalia en la que quedó el Bloque Capital después del asesinato de su jefe Miguel Arroyave.

El rearme de los grupos paramilitares en Medellín se siente en barrios como La Mano de Dios y las comunas 3, 8 y 13, donde comandos de los extintos bloques Nutibara y Héroes de Granada, desmovilizados en noviembre de 2003, se han reagrupado para reestablecer allí el control territorial, cobrar vacunas, hacer reclutamiento forzado y reabrir las oficinas de cobro. Estas estructuras también se están gestando en las universidades con el fin de amenazar a estudiantes, maestros, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Los informes de Inteligencia y el monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo coinciden al mencionar la aparición de un grupo creado con ese fin, que se llama Autodefensas Unidas de la Universidad de Antioquia.

Los nuevos grupos de paramilitares en Barranquilla se están adueñando de barrios populares como La Chinita, Barranquillita y los municipios vecinos de Soledad y Malambo. La banda, conformada por desmovilizados del Bloque Norte, está al mando de Carlos Arturo Posada Florez, pero realmente obedece órdenes de Jorge 40. Se ha especializado en oficinas de cobro, extorsión a comerciantes, muerte a sindicalistas, lavado de activos y en prestar seguridad a importantes empresas.

Según el comando de la policía de Bogotá del 1 de enero al 31 de mayo de 2006 se registraron en Ciudad Bolívar 63 homicidios y 31 desapariciones, la respuesta del mayor Alvarado comandante de la policía de Ciudad Bolívar no presenta con claridad estas cifras, el cuartano niega algún tipo de conocimiento.

EL PERFIL DEL ASESINO Y DE LA VÍCTIMA EN LA CAPITAL DEL PAÍS

EL TIEMPO DOMINGO 30 DE JULIO DE 2006

¿Quiénes matan y quiénes mueren?

El homicida actúa, preferencialmente, los miércoles, jueves y viernes, entre las 6 de la tarde y la medianoche. El lunes es su día de 'descanso'. Muchos de ellos regresan al lugar del crimen y sus víctimas, por lo general, no tienen más de 25 años.

YESID LANCHEROS
JORGE LUIS DUFÁN P.
REDACTORES DE EL TIEMPO

El asesino en Bogotá actúa, principalmente, los miércoles, jueves y viernes.

Y prefiere dar muerte a sus víctimas en la oscuridad: entre las 6 de la tarde y la medianoche.

Además, luego de matar —y gracias al conocimiento previo del terreno— huye con facilidad, pues en el 84 por ciento de los casos jamás es capturado en los primeros tres días después del crimen.

Sus víctimas suelen estar entre los 16 y 25 años. Las razones para asesinarlas son, en primer lugar, venganzas relacionadas con deudas, seguidas de discusiones o riñas callejeras (ver gráficos).

Para acabar con la vida de la otra persona, el homicida recurre en mayor medida a las armas de fuego (66,9 por ciento), de las cuales la mayoría no

tiene salvoconducto. Luego, están las armas blancas (25,4 por ciento), las contundentes —como piedras y garrotes (2,9 por ciento)—, y la asfixia mecánica (2,0 por ciento).

Estos rasgos hacen parte del perfil del asesino en Bogotá, una ciudad en la que en el 2005 se registraron 1.669 homicidios y en la que este año, en promedio, se cometen diariamente 3,5 crímenes.

Y también son una aproximación a la llamada 'perfilación criminal', un nuevo trabajo que los organismos de investigación han decidido emprender en el país.

Hace dos meses entró a operar la Unidad Especial de Comportamiento Criminal, conformada por la Policía Nacional, el DAS, el Instituto Nacional de Medicina Legal y el CTI de la Fiscalía, con la asesoría del FBI (Federal Bureau of Investigation) y el

Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre sus misiones está la de definir, a través de la evidencia "comportamental" en la escena del crimen, las características de los autores de asesinatos, robos y secuestros, entre otros delitos.

Todo con el fin de dar con los responsables y resolver estos casos con una mayor celeridad (ver recuadro).

Hombres, principales víctimas

Dentro del perfil del asesino bogotano, la mayoría de sus víctimas son hombres (90 por ciento), cuya profesión o actividad laboral se desconoce en la mitad de los casos.

En una caracterización he-

cha por la Secretaría de Gobierno Distrital sobre las 655 muertes ocurridas entre enero y mayo de este año, solo se estableció que las víctimas fueron comerciantes (8,7 por ciento), vendedores ambulantes (5,5 por ciento), obreros de construcción (3,9 por ciento) y estudiantes (3,7 por ciento).

Y por sitios, el que más escoge el homicida es el espacio público. Seis de cada 10 ocurrieron en avenidas y parques, según la base de datos del Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia (Suivd), de la Alcaldía de Bogotá.

En segundo lugar, el asesino actúa en establecimiento público (13,3 por ciento)— como tiendas o discotecas—, en la residencia de la víctima (11,4 por ciento) o den-

tro de un vehículo (4,6 por ciento).

Un dato que llama la atención es que en un cuestionario que respondieron 100 detectives del DAS en Bogotá para la creación de la Unidad, el 64 por ciento de ellos aseguró tener documentados casos en los que el criminal volvió a la escena de los hechos tan solo algunas horas después de ocurrido el mismo.

Además, en el 42 por ciento de esos casos se encontraron "signos o símbolos" en la escena del crimen, como cruces, escapularios o dibujos, que usaba o trazaba el asesino.

Según el Suivd, los sectores de la ciudad donde el criminal aborda a la víctima con mayor frecuencia son populares y tienen altos niveles de desempleo, necesidades básicas insatisfechas y escasa presencia policial.

Los barrios de Kennedy, en el sur occidente de Bogotá, son el escenario principal de homicidios.

Le siguen los localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Engativá y Usme.

Y el asesino sorprende a sus víctimas en sus cinco sentidos.

Es nocturno y por venganza

Hora elegida por el asesino	
De 6 a.m. a 11:59 a.m.	De 6 p.m. a 11:59 p.m.
19,5%	36,6%



CIFRAS OFICIALES 2006



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
METROPOLITANA DE BOGOTÁ
COMANDO

Bogotá, D.C.

06 JUL 2006

Nº 12101

COMAN -MEBOG

ASUNTO Respuesta Derecho de Petición

A L :

Señora
LILIA SOLANO
 Directora Proyecto Justicia y Vida
 Carrera 43 N° 22 A-76, oficina 401
 Ciudad -

Ejerciendo el derecho constitucional a la información, solicita usted a la Policía Nacional se le expida copia de información sobre asesinatos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones y reclutamiento de jóvenes, acontecidos en la localidad de Ciudad Bolívar y de los cuales se tenga registro en la Policía Nacional.

El Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, estando dentro del término que consagra el artículo 6° del Decreto Ley 01 de 1984, procede a dar respuesta a las inquietudes planteadas por la libelista, así:

Estadísticamente se tiene acreditado que del 1° de enero al 31 de mayo del año en curso se ha registrado 63 homicidios en la localidad de Ciudad Bolívar. De otro lado, la oficina de desaparecidos de la Seccional de Policía Judicial de la MEBOG, registra que en lo corrido del año se han producido 31 desapariciones, habiéndose reportado 6 apariciones del número anterior, arrojando hasta la fecha 25 personas desaparecidas en la jurisdicción de E-19. Aclarando que no se trata de desapariciones forzadas.

Según el comando de la policía de Bogotá del 1 de enero al 31 de mayo de 2006 se registraron en ciudad bolívar 63 homicidios y 31 desapariciones, la respuesta del mayor Alvarado comandante de la policía de Ciudad Bolívar no presenta con claridad estas cifras, al contrario niega algún tipo de conocimiento.


**POLICIA NACIONAL
 METROPOLITANA DE BOGOTA
 COMANDO OPERATIVO No. DOS
 DISTRITO CINCO
 ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR**

Bogotá D.C. Julio 4 de 2006

ASUNTO : Respuesta Derecho de petición

AL : Señora
 LILIA SOLANO
 PROYECTO JUSTICIA Y VIDA
 Carrera 43 No. 22 A 76
 Ciudad.

Por medio de la presente me permito informar a ese despacho, que durante el transcurso del primer semestre se han presentado los siguientes delitos en la Localidad Ciudad Bolívar así:

HOMICIDIOS

En comparación al año anterior se ha logrado la reducción de menos ochenta y un homicidios menos en especial a los que corresponde a los límites de la Localidad Ciudad Bolívar y Soacha, los homicidios que han ocurrido en esta jurisdicción en su mayoría son por riñas y venganzas las cuales son provocadas por el consumo de bebidas embriagantes.

DETENCIONES

En esta Localidad no se ha presentado registro alguno de detenciones a jóvenes o adultos para ingresar a los grupos armados ilegales o al margen de la ley.

RECLUTAMIENTO DE JOVENES

Así mismo en los sectores que limitan con la jurisdicción de Soacha y que corresponde a los barrios Caracoli, Santo Domingo y Tres Reyes no se han conocido casos de reclutamiento a jóvenes o adultos.

Atentamente


Mayor JULIO CESAR ALVARADO DIAZ
 Comandante Estación de Policía Ciudad Bolívar

e-19qrves@policia.gov.co
 Calle 62 sur No. 18 A 25 Barrio Meissen 7 657117

La presentación de quejas y solicitud de investigación a la comandancia de la policía, por abuso de autoridad y maltrato por parte del ESMAD a cargo del mayor Alvarado en una manifestación pacífica a los habitantes del barrio brisas del volador, a pesar de las repetitivas quejas de los habitantes de la localidad por los abusos de la policía, el mayor fue condecorado como mejor policía del año.



**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
METROPOLITANA DE BOGOTÁ**

Bogotá, D.C., 30 de Junio del 2006.

No. **0604** COPER - DOS.

ASUNTO : Respuesta Requerimiento Ciudadano.

A L : Doctora
LILIA SOLANO
Directora ONGS de Derechos Humanos Proyecto Justicia y Vida
Carrera 43 No. 22 A - 76 Teléfono 3688724 - 2447754
Ciudad

En atención a su requerimiento, comedidamente me permito informarle, la gestión adelantada y las acciones implementadas por este Comando en coordinación con el Comité de recepción, atención, evaluación y trámite de quejas e informes, relacionado con el presunto maltrato por parte del ESMAD, al mando señor **Mayor JULIO CESAR ALVARADO DIAZ**, el día 19/04/06, en Ciudad Bolívar, así:

Como primera medida mediante Oficio No. **0583** de fecha **30/06/06**, este requerimiento fue tramitado a la Inspección General, para dar apertura de la indagación preliminar correspondiente de cada caso, con el fin de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acaecieron los hechos.

Por ultimo, este Comando estará muy atento al desarrollo de este tema y aumentará los sistemas de control para detectar la posible ocurrencia de estos hechos y así poder aplicar los ajustes y correctivos correspondientes del caso, en el evento en que se presenten casos como los expuestos en la queja; ejerciendo una supervisión personal tanto al proceso como a la Unidad policial, con el fin de subsanar las falencias presentadas y optimizar la prestación del servicio Policial.

Cordialmente,

Coronel YAMILK HERNANDO MORENO ARIAS
Comandante Operativo No. 02

Email: coperdos@policia.gov.co
Avenida Primero de Mayo No. 1 - 42 Este - Tel: 3282000 Ext. 202.

Datos medicina legal Soacha, según los habitantes de Cazuca muchos de los asesinados cometidos contra la población de este sector son arrojados en barrios aledaños como ciudad Bolívar, Bosa, o en el humedal de Terreros, en otros casos luego del asesinato se hacen los levantamientos rápidamente sin ningún tipo de procedimiento técnico.

HOMICIDIOS OCURRIDOS EN SOACHA Y VALORADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, 2000 - 2006-11-16

AÑO	Nº HOMICIDIOS	TASA POR CIENTO MIL NECROPSIAS	TOTAL
2000	203	9.48	326
2001	137	6.27	254
2002	195	6.76	315
2003	146	6.44	269
2004	140	6.07	231
2005	131	5.80	239
2006*	46		94

Fuente: datos del Sistema de Información de Violencia y Accidentes de la Seccional Cundinamarca del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con fecha de corte 06/06/06 , *Enero a Mayo de 2006

Relación de Homicidios en la Localidad de Ciudad Bolívar

Fuente: Secretaria de Gobierno Subsecretaria de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana

Victimas con Edad entre 0 y 26 años

En el año 2003

117 Muertes: 44 por Establecer, 52 Ajuste de Cuentas, 21 Otros

112 Hombre y 5 Mujeres.

Enero 2004 – Abril 2005

150 Muertes, 82 por establecer, 33 ajustes de cuentas 35 Otros.

144 Hombres 6 Mujeres

Personas asesinadas en Altos de Cazucá

Fuente: Información sobre violaciones con base en Informes elaborados por las organizaciones sociales y organismos oficiales presentes en el sector.

2002 62 personas 52 Jóvenes

2003 175 personas 47 Jóvenes

2004 134 Personas 79 Jóvenes

NUNCA, JAMÁS

NUNCA, JAMÁS he que arropar en mi vida pero inabarcable...
 El mundo y nosotros todos que a diario vivimos a un ritmo loco
 Desde aquel momento e inesperado momento de la injusta y cruel partida
 Al desolado, paralizado y silencioso universo de los que no existen.
 Y ahora a una voz, como antes, pero ya, es un gran momento
 Que me ayuda el momento justo y otro, en su adecuada presencia
 Y que NUNCA, JAMÁS en momentos algunos de mi existencia futura
 Para ser este, un gran momento e inesperado momento por siempre.

Por eso NUNCA, JAMÁS no he de por sus cosas de la muerte

Aunque en el momento de la muerte, como lo contrario como solo, como nada
 Fallece en un momento interno, para este mundo pueblo del momento para el

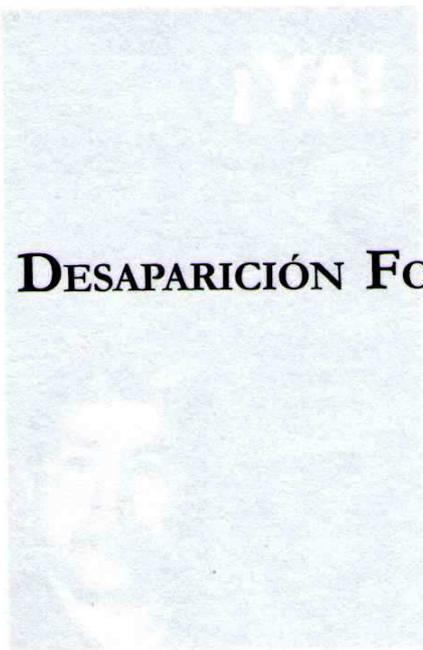
Por eso NUNCA, JAMÁS mi vida he de por sus cosas de la muerte
 Aunque que esta que en paz de la muerte, y busque un noble mundo en la vida
 Para estar bella, como siempre, y los hermosos apellido de la vida que es la vida
 Y que me ha dejado como una gran herencia para por siempre, mi BARRA
 ANAJO

Londres - Argentina

ICARUS - Los Angeles - Argentina

3

"Gracias al sepulcrista se encontró la fosa donde estaban los cadáveres"



IYAI

TESTIMONIOS

DESAPARICIÓN FORZADA, TORTURA, ASESINATO Y ABUSO DE AUTORIDAD .

... de 2006, Luis Antonio
 años de edad, quien se
 desempeñaba como comerciante y presidente del
 sindicato de la plaza de mercado Mariana Beltrán
 General Bolívar, sindicato afiliado a la
 CGT y la joven Raquel Dayana Goyeneche de 22
 años de edad y madre de una niña de 2 años, fueron
 desaparecidos por hombres que se movilizaban en
 furgonetas y que vigilaban los alrededores de la plaza
 de mercado.

NUNCA, JAMAS

NUNCA, JAMÁS imagine arropar en mi frágil pero irrompible corazón

El inmenso y perverso dolor que a diario tortura a mi triste alma

Desde aquel incierto e inesperado momento de su injusta y cruel partida

Al desolado, putrefacto y mísero universo de los que no existen.

Y reitero a viva voz, como tantas veces ya, el amor inmenso

Que me inspira el recuerdo grato y vivo, de su anhelada presencia

Y que NUNCA, JAMAS en momento alguno de mi existencia partirá

Pues será este, mi gran aliento e inspiración certera, por siempre.

Por eso NUNCA, JAMAS mi lucha por sus nobles ideas morirá

Aunque en el océano de lo impune, contra la corriente como sólo, usted nado

Fallezca en otro ingenuo intento, para este ingrato pueblo, del burócrata liberal.

Por eso NUNCA, JAMAS mis piernas temblaran, ni los impíos mi voz acallaran

Siempre que esta grite en pro de la justicia, y busque un noble puesto en la cima
Para esas bellas convicciones, y un hermoso apellido de guerrero que es mi orgullo

Y que me ha dejado como rica y gran herencia usted por siempre, mi PADRE

AMADO

Loudwin Arismendi

LUARY(hijo Luis Antonio Arismendi)

“Gracias al sepulturero se encontró la fosa donde estaban los cadáveres”

QUE APAREZCAN VIVOS

¡YA!

Luis Antonio Arismendi Pico
Belquis Dayana Goyeneche

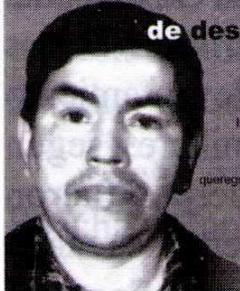
Luis Antonio es el actual Presidente del Sindicato, Manuela Beltrán de Trabajadores y Explotadores de Alimentos y Bebidas de la Plaza de Mercado del Estero San Francisco de Ciudad Bolívar en el Sur de Bogotá, filial de la Confederación General del Trabajo, CGT.

El viernes 23 de abril de 2006 en las horas de la tarde, salió de su lugar de trabajo el compañero y amigo LUIS ANTONIO ARISMENDI PICO de 57 años de edad en compañía de BELQUIS DAYANA GOYENECHE de 23 años, quienes desaparecieron y hasta la fecha no se sabe su paradero. Entre sucesos se dan en el interior de hoteles, viviendas, colegios, desguapes, bares y guarderías a través de la Policía y en general en todo el país.

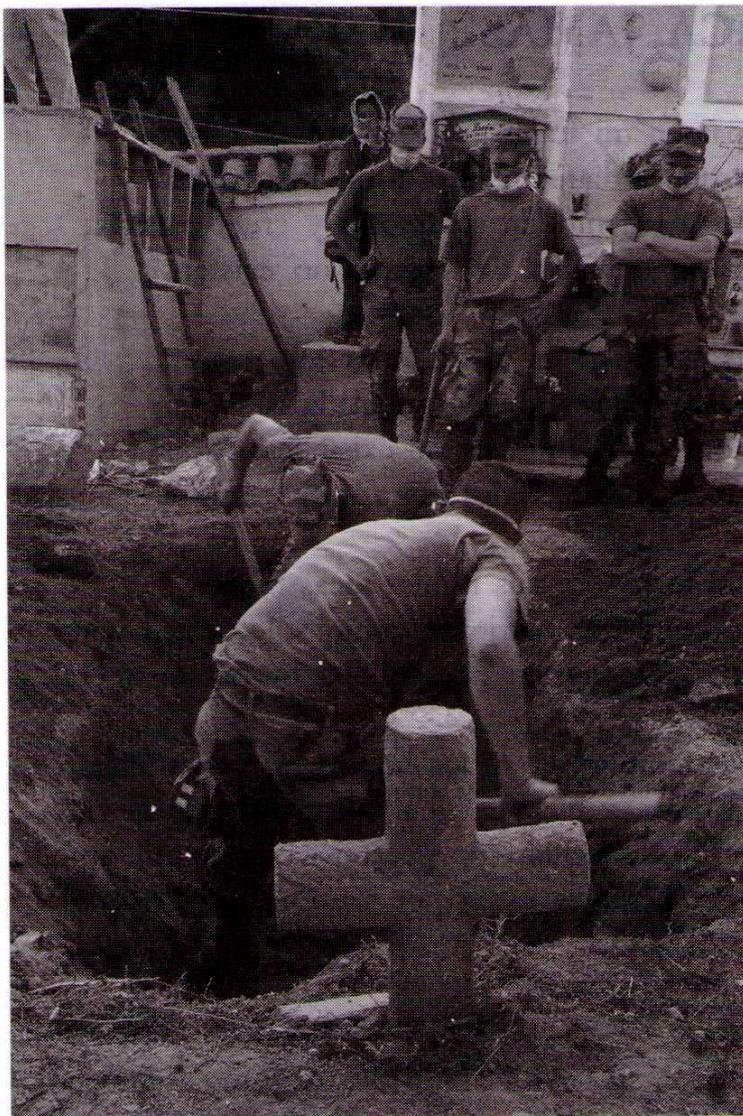
Víctimas de desaparición forzada

INFORMES

Informes Justicia y Vida
Tel: 2347754/2385724
ASFADDES: 2377997
Correo electrónico:
queregrasenvivos@yahoo.com



El día viernes 28 de Abril de 2006, Luís Antonio Arismendi Pico de 55 años de edad, quien se desempeñaba como comerciante y presidente del sindicato de la plaza de mercado Manuela Beltrán SINDIMANUELA BELTRAN del barrio San Francisco en Ciudad Bolívar, sindicato afiliado a la CGT y la joven Belquis Dayana Goyeneche de 22 años de edad y madre de una niña de 2 años, fueron desaparecidos por hombres que se movilizaban en furgonetas y que vigilaban los alrededores de la plaza de mercado.



Según testimonio de su hijo quien le acompañaba en sus labores en la plaza de mercado, Luís Antonio reporto desde el día jueves 27 de abril a la policía del barrio san Francisco la presencia de estos hombres y furgonetas desconocidas alrededor de la plaza, sin embargo ni la policía ni ningún otro organismo del Estado se presentaron, aunque el CAI (Centro de Atención Inmediata) de la policía se encuentra tan solo a algunas cuadras.

Luego de reportar y denunciar la desaparición forzada por parte de su familia y las organizaciones de Derechos Humanos, el día 6 de mayo de 2006 siendo la 1:30 p.m. Louwing Arismendi hijo de Luís Antonio fue retenido ilegalmente por un policía y un hombre de civil que se identificó como miembro de la DIJIN en la

avenida Jiménez con carrera 7, quien le retuvo su cédula sin ninguna justificación y desapareció con ella. Dos horas mas tarde cuando se encontraba con unos amigos en el barrio Castilla varios hombres de civil armados que se identificaron como de la DIJIN, otros hombres de civil quien lo observaban desde un taxi y algunos policías motorizados lo retuvieron, lo intimidaron y amenazaron sin ninguna justificación y luego de encontrarlo sin su respectiva cédula de identificación, lo retuvieron durante mas de 24 horas en el CAI de Castilla, la estación de policía del barrio Kennedy y por último en la UPJ.

El día viernes 26 de Mayo de 2006, la fiscal encargada de derechos humanos quien llevaba el caso de Luís Antonio Arismendi y Belquis Dayana Goyeneche, informó el encuentro de dos cuerpos que coincidían con las características físicas de estos, solo hasta el día 30 de mayo se lograron ver las fotos del levantamiento de los dos cuerpos que fueron plenamente identificados por sus familiares; según los funcionarios de la fiscalía regional Cundinamarca; los cuerpos fueron encontrados a las afueras del municipio de Zipacón y su levantamiento se realizo el día 5 de mayo, pero solo se aviso 21 días después a sus familiares. Según el

dictamen de medicina legal Luís Antonio fue degollado y presentaba signos de tortura, la causa de la muerte de Belquis no se determinó.

Luego de un largo proceso de identificación las autoridades no sabían con certeza el lugar donde se encontraban los cuerpos, al final gracias al sepulturero del pueblo se encontró la fosa común donde se encontraban los cuerpos, en el cementerio de Zipacon junto a una base militar.

Aquí vemos una clara violación a los derechos humanos y al exterminio que vienen ocurriendo a los líderes sociales y sindicales, que dentro de la política de seguridad democrática del presidente Uribe, vienen adelantando en todo el país, la desaparición forzada, la tortura, y el homicidio cometido contra estas dos personas, con toda la complicidad del Estado, la policía, la DIJIN, y los funcionarios del Estado pretenden entorpecer el derecho de las víctimas a conocer la verdad de los hechos y una investigación que son los responsables intelectuales y físicos de este crimen de lesa humanidad.

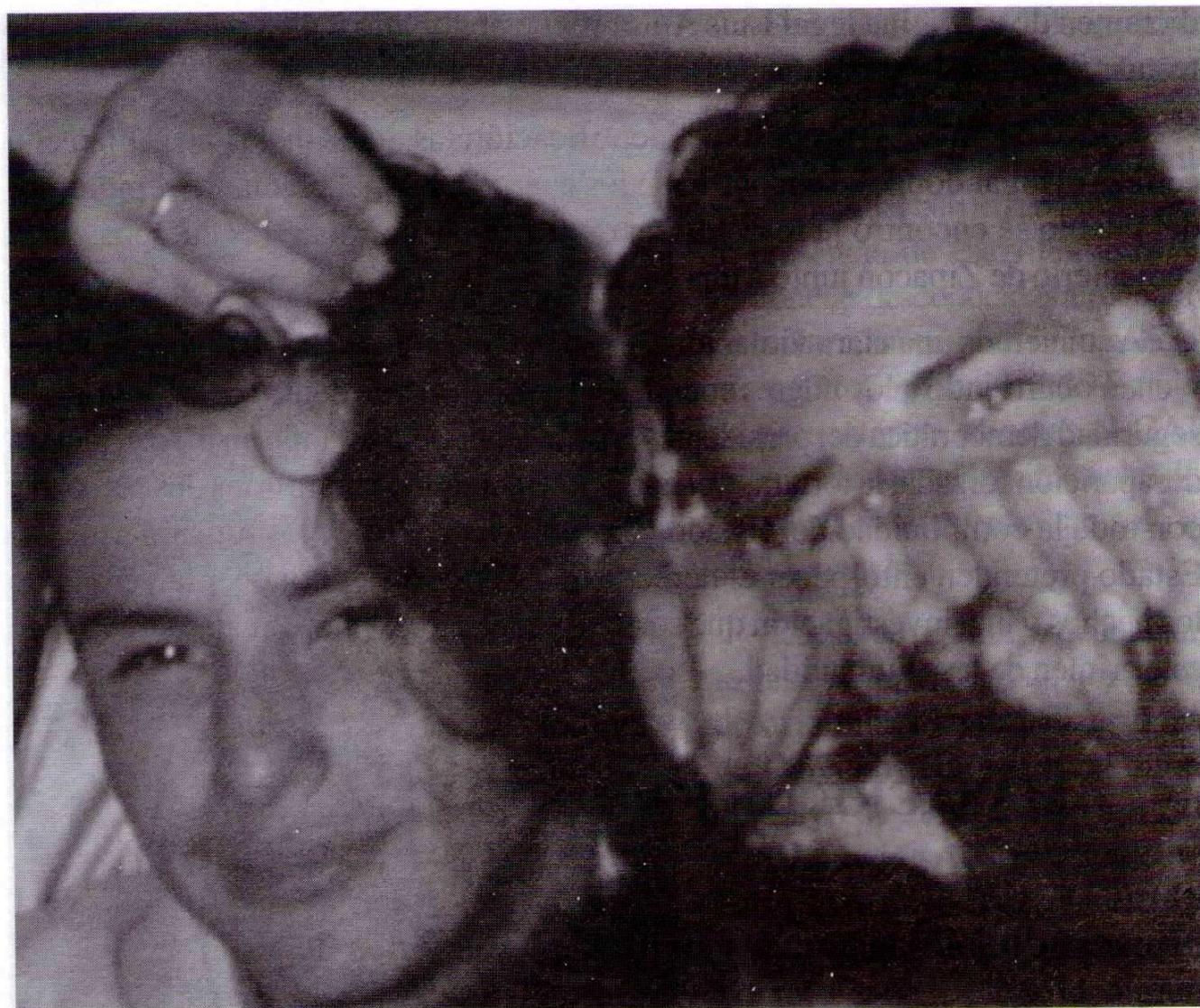
MASACRE DE JOVENES EN CAZUCA

“Buscando salidas para mejorar las condiciones de vida”

La familia Ramirez llegó a Cazuca municipio de Soacha a mediados del año 1999, luego de varios desplazamientos en varias regiones del país por amenazas de los grupos paramilitares por su militancia en la Unión Patriótica y su liderazgo social, se asentaron allí para comenzar de nuevo su proyecto de vida como familia.

Estando en la zona, a mediados del año de 2000 a raíz de la grave situación que vivían los desplazados y buscando salidas para mejorar las condiciones de vida, decidieron junto a otras familias una organización de desplazados que se llamaría Corporación para la Educación, el Desarrollo y la Paz, CEDEPAZ;. Se logró vincular a 221 familias en un programa de mejoramiento y construcción de vivienda en las zonas de Altos de Cazuca, Bosa, Ciudad Bolívar y la parte plana de Soacha. Así mismo, se logró desarrollar un proyecto educativo para desplazados en básica primaria, actividad que se auspicio con el colegio María Auxiliadora de Soacha, y que recibió el posteriormente el nombre de *Promundo Activo*.

Luego participaron de la Mesa de Interlocución, Gestión y Desarrollo de Soacha y Cundinamarca -MIGD-. Dada la experiencia de Federico el padre de



Solo queda el recuerdo de lo que pudo ser y no fue...

los Ramirez fue nombrado en la dirección durante más de un año y luego como miembro del comité operativo, pese a que por esta labor y debido a la creciente presencia paramilitar del Bloque capital y Bloque Centauros de las AUC en la zona, se presentaron amenazas directas contra su vida y la de su familia, en su propia casa frente a sus hijos por negarse a colaborar con ellos y suministrar información.

Posteriormente y a consecuencia de apoyar a familias que se desplazaron masivamente de los municipios del Tolima, el mes de enero de año 2003, fue acusado por miembros de los paramilitares, de albergar “delincuentes”. Por la gravedad de esta situación y las constantes amenazas proferidas en ese entonces, salieron del sector por un espacio de tres meses. Pero la situación de inestabilidad, los obligó a volver a Altos de Cauca.

El día 19 de Julio de 2004, siendo las 7:45 de la noche fueron asesinados los jóvenes Mario Andrés Rodríguez, Macias William Rivas Pino, Jaime León García y Carlos Andrés Garzón Peña. En este hecho se salvan milagrosamente José Huependo hijo de Federico y otro compañero de nombre Armando Ibañez. Todo este grupo estaba vinculado a las actividades juveniles de la Corporación CEDEPAZ, a los programas de formación solidaria y de generación de empleo y a proyectos productivos que venían adelantando en la zona de Altos de Cazuca.

Apenas sucedieron los hechos de la masacre, algunos vecinos acudieron al lugar para auxiliar a los muchachos, dos de ellos alcanzaron a llegar vivos al Hospital de Soacha y allí fallecieron, los otros dos murieron en el hecho. Al hospital, llegó Pedro Ramirez, sobreviviente de la masacre quien fue retenido arbitrariamente por miembros del cuerpo de policía de la SIJIN, quienes se lo llevaron al Comando de la Policía de Soacha bajo la excusa de que debían tomar su declaración. Esta declaración fue tomada bajo presión ante la amenaza de ser llevado al calabozo.

Luego de identificar a varios de los homicidas, denunciaron lo sucedido ante las autoridades del municipio, particularmente ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca.

Ante la solicitud de la declaración tanto de parte de la Fiscalía como de la Defensoría del Pueblo, la SIJIN señaló que no existe tal declaración, ya que supuestamente fue tomada de forma verbal y por eso sólo se limitaron a expedir un informe parcializado sobre el hecho.

En el interés de exigir justicia y detener los sucesivos hechos de exterminio contra los jóvenes del sector, realizaron las respectivas declaraciones ante la SIJIN, el DAS y la Fiscalía. Sin embargo, ante la solicitud de las declaraciones interpuestas, las autoridades no dieron razón y por el contrario los expusieron en una situación de alto riesgo.

Hasta el día de hoy aunque se denunciaron los responsables directos de estos asesinatos, no se a capturado ningún responsable, se ha mantenido en total impunidad mientras los responsables se siguen viendo en las calles del barrio, patrullando junto a la policía.

“El parche era como de diez”

“Yo estaba trabajando con Jaime en la panadería, cuando empezaron a llegar el resto de los amigos que trabajaban y estudiaban, ellos eran Carlos, Jaime, Armando, Andrés, el parche era como de 10, esa noche estábamos como unos 13, pero se empezaron a ir para sus casas, al final solo quedamos 6 y fuimos a comprar la mantequilla para el otro día hacer el pan, eran algo más de las 7 p.m., teníamos que ir hasta el barrio la Isla, cruzando como dos barrios, y nos fuimos tranquilos.

Antes de salir de mi barrio el Arrollo hay una “Y”, para entrar a los Pinos, y entonces hay un camino por arriba y uno por abajo, para ir al barrio a comprar la grasa, entonces llegamos a la “Y” a pensar por donde nos íbamos, tres dijimos vámonos por abajo y dos de ellos dijeron que por arriba, al final cedimos y cogimos por arriba.

Yo digo que si nos hubiéramos ido por abajo no nos había pasado nada, porque el Ejercito estaba todo por hay regado, el Ejercito cuando ocurrió eso estaban como a cinco cuadras, y como a los diez años aparecieron.

La soledad en esos barrios es muy normal a esas horas, no había nadie, llegamos al barrio la Isla, entonces solo bajamos dos a donde se compra la grasa porque la Isla es un barrio muy peligroso, ahí se la pasan los paramilitares, todos los que cobran las vacunas, y los de la limpieza social, solo bajamos Jaime y yo; compramos la grasa y subimos otra vez, nos encontramos todos y nos pusimos a jugar con la grasa y seguimos caminando.

Íbamos lo más de bien, nos faltaba poco para llegar, se me dio por mirar hacia atrás y vi cuatro personas, yo les dije a los otros miren los que viene ahí, y voltearon a mirar y comenzamos a caminar mas rápido y ellos nos siguieron mas rápido, caliche volvió a mirar a tras y dijo todo bien hay viene el “cari cortado” ese man me conoce y no nos hace nada, yo le dije, si usted lo dice, cuando me di cuenta que los manes se abrieron, dos siguieron detrás de nosotros y dos agarraron para llegarnos de frente. Uno de los que venia con nosotros dijo, pues salgamos corriendo, caliche volvió y dijo, no, no corramos, que más íbamos hacer, pues listo si nos van a matar que nos maten, y seguimos caminando cuando llegamos a la cancha y les dije se fijan que van contra nosotros!

Yo salí corriendo no alcancé a dar un paso cuando me caí y miré hacia un lado y el man venia con un revolver, yo no podía hacer nada, en ese momento que el tipo venia estaba esperando el momento para me pegara un plomazo y listo.

Esta persona dijo que requisaran a todos, nos dijeron que entregáramos las armas que porque nosotros traíamos armas, uno de mis amigos dijo, nosotros no traemos nada y le dieron una patada en la cara para que se callara, y le dijo: no conteste que no le han preguntado, yo salí corriendo y baje como cuatro casas, paré, me fui a devolver y a lo que me estaba devolviendo comenzó la plomacera, los mataron a todos.

Yo en ningún momento los vi detrás de mí pero la gente dice que si estaban detrás de mí después vi que los mataron a ellos lo único que hice fue correr, correr hacia la casa y le dije a mi mamá lo que había pasado. Los vecinos y mi papá salieron a llamar a la policía, fuimos donde estaban ellos, a dos los estaban bajando, a uno de ellos lo llevaban muerto, el otro estaba vivo pero muy mal, luego murió en el hospital.

Yo mientras tanto salí corriendo y me bote a un carro, entre cuatro personas lo llevaban, los echamos y cuando me di cuenta ya no podía hacer nada, el otro se murió allá en el hospital, faltaban como tres cuerdas y lo último que alcanzó a decir fue, mamá, llamó a la mamá y se murió.

Cuando llegamos al hospital dos agentes de la SIJIN me agarraron, primero empezaron a insultar a mi papá y a alzarle la voz, yo en ese momento tenía mucha piedra y les alce la voz y les eché su “madrazo” a ver que era lo que querían, me dijeron quiere que le meta 24 horas?, yo le dije hágalo, el man me agarró y me subió al carro y me llevó a la estación, allá mostró unas fotos y me dijo esos fueron, y yo les dije no esos no fueron, y ellos si dígame que ellos fueron y ya, y yo pero no esos no son, ¡que no son!

Luego les dije a la policía quienes eran, donde vivían, ellos fueron y grabaron con una cámara, luego dijeron que la cámara no servía, y hasta el día de hoy no han hecho nada.

Un mes después que agarraron a un supuesto sospechoso, la policía me lo mostró, me dijeron que tenía que asegurarles que era el, yo les dije que no es, le pusieron cachucha, lo pusieron por un lado por el otro, para que yo dijera que él era, yo les dije que no era y lo sostuve.

A veces me siento culpable. Ellos eran mis amigos eran”:

Carlos Andrés Peña, de 22 Años, pintor

Jaime León, de 16 Años, panadero

Andrés de 22 Años panadero

William Rivas de 15 años, Practicaba Capodeira

Armando de 18 Años vendía materiales de construcción

DETENCION ALBITRARIA Y TORTURA

(por sugerencia de la victima de la policía, se cambian nombres)

“Entre cuatro policías cogieron a pegarme”

Hechos:

Los hechos ocurrieron el año pasado, estoy estudiando ese día hicieron un festival en el colegio, fue un sábado, salimos como a las 8 de la noche y estábamos, recochando y hablando, con mis amigos, llegué solo a la casa como a las 10 de la noche, faltando como dos metros para llegar a la casa, llegaron dos motorizados que para una requisita, yo les dije que ¿por qué?, uno de ellos se bajó y de una vez me levanto a patadas, y yo le dije, usted porqué me pega patadas, usted no tiene derecho de pegarle a uno, y después me pusieron gancho contra una ventana de una casa y fue cuando me alboroté y empecé a gritar, y armé un alboroto, y toda la gente salió hasta mi mamá salió.

Los vecinos y la gente que salió a mirar se dieron cuenta que los policías botaron una botella de aguardiente, los manes estaban entonados. Entre cuatro policías me cogieron a pegarme, entonces, yo empecé a pelear con los policías les dije que ellos no tenían derecho de pegarme y comenzaron a darme patadas, y yo también me reboté, y como no me dejé llevar entre cuatro me llevaron alzado para el CAI de Compartir Ciudad Bolívar, y en el trayecto me pegaban puños, patadas, todo eso, y un tombo estaba pegándome puños en la cara y me tuvieron en el CAI, fue cuando mi mamá se alborotó y por allá fueron y ahí dentro del CAI cogieron y me pegaron más duro, me metieron en el baño y ahí fue cuando me cogieron más duro a puños y patadas en el piso, después que me pegaron llegó el camión de la UPJ y me llevaron para el MEISSEN y me tuvieron dos horas.

Mi mamá se subió conmigo y ella estuvo en todo el trayecto desde que me pegaron hasta que me llevaron al Meissen, ya después me calmé un poquito y me empezó a hablar un policía preguntándome que había pasado, yo le dije que venia



Mayor Julio Cesar Alvarado, Comandante de la Policia de Ciudad Bolívar

de estudiar y me preguntaron lo que hacía, y que hacia mi mamá, y todo eso, yo les conté que era obrero, les conté que mi mamá trabaja en servicio domestico y donde trabaja hay una abogada o una juez y si ustedes no me sueltan le cuento el caso, además no se porque me detuvieron y vieron que hable así se calmaron conmigo.

Y son tan cínicos que me sacaron y me llevaron al barrio y me tuvieron en el CAI por una hora y me dijeron que porque hacia eso, de pegarle a la policía, yo les dije que fueron ellos los que me empezaron a pegar y maltratar y yo no tengo antecedentes, no tengo nada, ustedes son los culpables, sí ustedes me golpean así, pues yo me tengo que defender, me tuvieron en el CAI, como otra hora y que tenia que esperar hasta que hiciera un documento de que ellos no me habían hecho nada, de que no me habían pegado, yo declaré eso, y me obligaron a firmar, que si no firmaba que me atuviera a las consecuencias, después me llevaron y me dejaron en la puerta de la casa, como servicio puerta a puerta, como a las 3 de la mañana, ya era el domingo.

Y a mi mamá la acusaron de que ella era una guerrillera, pues ella de ver que me estaban pegando armó ¡el que alboroto! Empujó a uno de los policías y ellos dijeron, “esta vieja guerrillera”, que no se que, que les quería quitar el arma, ¡que tal!, un policía cuidándose de una señora de 55 años.

Cuando yo estaba en el CAI llevaron a tres muchachos y una niña como de 17 años, y la niña se rebotó que porqué la detenían que ella iba para la casa que salían de bailar, pero que ellos estaban robando a otros y les echaron la culpa a ellos, un policía negrito llegó a pegarle a la muchacha, la metió al baño y péguete y péguete, el man de daba cachetadas, la emujaba, lo mismo que hicieron conmigo.

Hace poco me llamaron del Restrepo y atestigüe como fue los hechos, me dijeron que como eran los policías, y yo los describí a todos, no pude ver identificaciones porque tenían las chaquetas encima, pero recuerdo los rostros, les dije que ellos me hicieron firmar un documento, todo eso dije.

Yo tengo documento de todo, hasta de medicina legal.

Estos casos pasan con frecuencia en esta localidad. (Joven. Ciudad Bolívar. 2005)

Violencia contra los jóvenes

Una mujer, joven, habitante del sector da su testimonio con respecto a la violencia que predomina en los jóvenes, ella es una habitante de esta localidad desde hace 15 años.

“He tenido que vivir unas experiencias muy difíciles, desde el tiempo que llevo viviendo aquí, viendo los jóvenes en una esquina, matan a uno o dos sin saberse porque, estos años han sido duros, aquí he aprendido a ver lo que es la injusticia, el desempleo, el maltrato de las autoridades, lo que es la indiferencia gubernamental, todo esto lo he visto aquí, yo creo que con los jóvenes debe haber mas consideración ya que los niños y los jóvenes son el presente y el futuro de esta sociedad.

En carne propia sufrí el caso de una sobrina, de la cual no quiero dar el nombre. Ella fue brutalmente asesinada a la edad de 14 años, ella venía de un hogar bien constituido, una madre que se preocupaba por darle todo lo que necesitan sus hijos, una buena formación, pero el desempleo, la indiferencia del gobierno, ella tenía que dejar sus hijos e irse a trabajar, la niña estudiaba, pero en el estudio le hacían falta muchas cosas, desde una buena alimentación hasta los útiles escolares, ella fue involucrándose con amistades jóvenes, porque los jóvenes no tienen la culpa que por la misma situación que tienen en sus hogares, iba a sus paseos, a bailar con sus compañeros. Un día la niña se fue de la casa, se involucró con unos jóvenes y a ella la amenazaron, no sabemos quien fue, porque ella no hablaba, pero iba esporádicamente a la casa de la familia, y manifestaba en su forma de



actuar un nerviosismo terrible, ella decía que quien sabe si volvería cuando iba a la casa de la familia eso daba sospecha que estaba siendo amenazada y le preguntábamos porqué y ella decía que por nada. Un día cualquiera ella fue a la casa bien arregladita, salió como a las 4:00 de la tarde y a las 7 y 15 de noche avisaron a su familia que a ella la habían asesinado brutalmente de tres balazos en la cabeza en el barrio Juan Pablo, lo que nos causa mucho dolor es saber que esto se quedó oculto, que hay muchas versiones que fue, que fueron los paramilitares, no se sabe.

La mamá y las personas más allegadas a ella tuvieron que irse del barrio, porque constantemente hacían llamadas y la mamá no podía decir quien la había matado pero ella quería decir que la sangre de su hija diera un mensaje a los demás y un mensaje a quien la mató, donde estuviera, que no mataran a los jóvenes por algo que han hecho, sino buscar otra forma de cómo corregir a estos jóvenes que están con ellos. Pero la mataron de una vez, ella no fue pandillera. La gente los grupos que dicen hacer limpieza, que dicen que hay que tapparle la boca al que habla, ¿porqué no buscan otra forma? Después, han estado matando uno a uno de los que estaban con ella, al novio, un chico de 20 años lo mataron hace como 4 meses en Lucero bajo, hicieron una limpieza, una masacre de jóvenes que son inocentes. Para nosotros los familiares de esa niña la seguimos recordando con cariño.

El Nosotros queremos que en Ciudad Bolívar se tenga en cuenta la muerte de esos jóvenes, y que la gente que están haciendo esas “limpiezas” que no asesinen a los jóvenes, ellos mismos saben que matan unos jóvenes y se forma otro grupo. Mi hijo se metió a la droga y dos veces a estado por ser asesinado, yo le pido mucho a Dios, que él en lugar de estar ahí sirva como ejemplo, estamos luchando por recuperarlo, él será testimonio para muchos de lo que él ha visto, oído, en esa vida y que diga que voy a luchar por la verdad, la verdad y la justicia y no es matando a la gente.

Los jóvenes aquí Ciudad Bolívar viven resentidos, revelados, dolidos, porque son estigmatizados de delincuentes, de vagos y consumidores de droga y cuando ellos se encuentran frente a la fuerza pública, ellos en lugar de encontrar un apoyo un amigo, encuentran siempre un enemigo, porque la acción de la policía frente a un grupo de jóvenes es la requisita, los gritos, los insultos, los estrujones, les preguntan que hacen, muéstreme sus manos, si es un joven que trabaja para pagarse el estudio, o solamente estudia porque no ha conseguido empleo, entonces es un matón, para cogerlo y masacrarlo, aquí en Ciudad Bolívar, la autoridad no está para dar y defender a la gente, aquí la policía, las fuerzas militares, paramilitares así como otros grupos son para a los jóvenes. (Habitante de la comunidad. Ciudad Bolívar. 2005)

“Allá le toca a uno entrar “parado” Joven del sector.

Ese día estábamos en las Quintas, estaba con mi amiga que íbamos a comprar algo, yo vi a mi amiga con unos policías, y la llamé y le dije que hace ahí, y ella me dijo, es que uno de ellos es mi novio, y yo le dije, ¿qué, qué? Y el novio entonces me llamó y me dijo venga y me pidió papeles, y le dije que no tenía, y me dijo que me iba de veinticuatro, y yo si lo trate mal, y me dijo que si estaba muy alzada, entonces, yo le dije que me respetara, ahora si están pidiendo papeles, la mujer que no tenga papeles se va de pejotas, (UPJ) eso es un calabozo, yo he estado ahí, se orinan, los hombres a un lado y las mujeres a otro, cuando uno llega a donde las mujeres, le dicen a uno que qué trajo, que se desvalijen, allá le toca a uno entrar parado, y si es posible cogerse a puños o lo que sea, a mi me llevaron por estar tarde de la noche por fuera, no era tarde como las nueve, lo ven a uno con los amiguitos y lo suben al camión a todos, o también por no cargar papeles, pero normal, a mi ya me parece eso normal. (Joven de la comunidad, mujer. 2006)

Detención Ilegal y Abuso de Autoridad “Luego de celebrar el día de los niños....”

El día 31 de octubre de 2006 4 jóvenes los Yeifer de 15 años, Brayan de 13 años, Pedro 16 años y de Johan de 17 años se devolvían a su casa luego de celebrar el 31 de octubre día de los niños, cerca de la sede de la caballería de la policía en Sierra Morena, dos policías que iban en una motocicleta, los detuvieron sin ninguna justificación, los insultaron, los esposaron y los bajaron hasta el CAI, luego los entraron a un cuarto del CAI, los obligaron a desnudarse, los insultaron, algunos los golpearon por no quererse desnudar luego los pusieron a lavar las motos y a barrer sin que ninguno pudiera llamar a su casa durante toda la noche

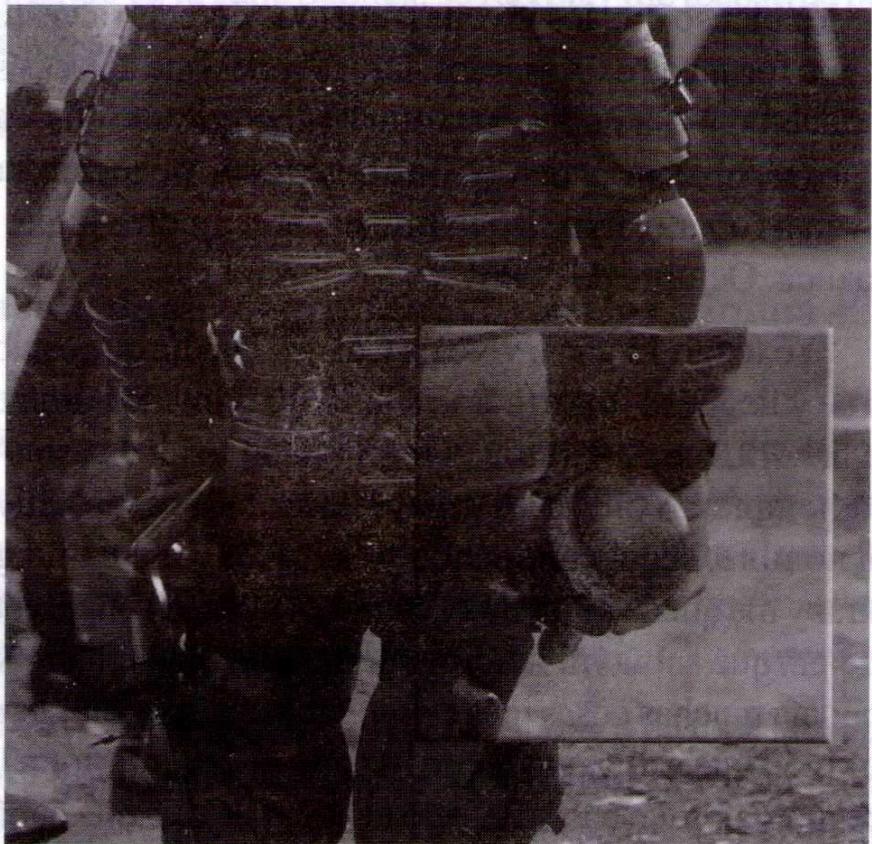
aunque contaban con celulares y minutos, luego al amanecer los soltaron cuando sus padres preocupados aparecieron a buscarlos.

La justificación que hicieron los policías a los padres y madres de familia es que les estaban haciendo el favor de no dejarlos por las calles para que no les pasara nada y antes los regañaron por dejar que sus hijos estuvieran a esas horas en la calle.

Testimonios de cazuca sobre los asesinatos de los jóvenes, abusos de autoridad y control de la localidad.

“Tengo 17 años, soy líder de la comunidad, me gusta trabajar por la comunidad, y por ser un joven que trabajo por la noviolencia creo que por eso me han pasado cosas; a mí me han amenazado.

Hace como un mes estaba estudiando en el Barrio San Francisco, me bajé de la buseta en la vía principal de San Francisco llego un señor y en ese momento se quedó solo ese pedazo de la vía, él se paró al lado mío y me preguntó que horas tenia, entonces yo saque el celular y le dije que eran las 7:10 de la mañana, en ese momentito, entonces el señor me dijo que él venia a lo que venia, me dijo que si yo volvía a estar por esos lados no volvería a ver a mi familia. Yo me quedé quieto, ni siquiera lo miré a la cara, esperé el bus me fui para el colegio,



La otra vez fue como a mediados de septiembre en las canchas de Rincón del lago yo salí a la tienda a comprar lo del desayuno y estaban los “duros” allá, así les dicen a los paramilitares, entonces me hicieron la señal, me mostraron el reloj, eran como las 7:30 de la noche, yo seguí compré y me fui derecho para la casa.

Los problemas más grandes que pasan con los jóvenes en este sector es que nos violan los derechos desde la forma de vestir, la libertad, el derecho a expresarse, el derecho a la vida, allá no lo dejan a uno vestirse como uno quiere, si aquí lo ven a uno con una sudadera al revés de una vez dicen este es un “ñero” y viene a tirarse el barrio, y hasta aquí llegó, los “ñeros” son jóvenes que se visten de manera diferente pero no le hacen daño a nadie y los persiguen.

Yo pienso que los jóvenes tenemos derecho a vestirnos como queramos, esa es una forma de expresarnos, hay jóvenes que a veces se visten de negro pero no le hacen daño a nadie, hay otro grupo que son los viciosos, un grupito de los viciosos, hizo un acuerdo con ellos y es de no meterse con la misma comunidad, sí van a robar o algo tienen que hacerlo en otro lugar. (Joven de la comunidad. Cauca. Octubre de 2006)

“Yo tengo 15 años, vivo en Cauca Un día que estaba estudiando, me cogió la tarde y llegué al barrio como a las 8:00 p.m. me llamó un señor y me hizo la señal de la hora, me mostraron el reloj; yo no le hice caso. Al otro día llegué un poco más temprano como a las 7:30 p.m., me bajé del colectivo y un señor me llamó por mi nombre, seguí caminando y él volvió y me llamó gritó más duro yo voltee a mirar y me quede mirándolo, entonces me dijo venga, entonces yo fui, y le pregunté que porqué sabía mi nombre, él me dijo que no solo sabía mi nombre sino que conocía muchas cosas más de mí, sabía quien era mi familia y donde vivía me dijo también que sabía que había llegado el día anterior a las 8:00 de la noche, y me preguntó porque había llegado tarde, yo le dije que había tenido un inconveniente con una amiga, entonces él me dijo que yo podía ir a arreglarle los problemas a mis amigas, pero que ellas no iban a ir allá a ayudarme a mí cuando estuviera en problemas, él me dijo que había hablado con mi mamá y que ella no había hecho nada entonces, él mismo se iba a encargarse de decirme, “que niñas decentes no podían estar después de las 6:00 o 7:00 de la noche en la calle”, yo le conté a mi mamá y ella me dijo que ya le habían dicho. Esto pasó hace como dos meses, como en agosto, por eso yo ahora casi no salgo a la calle. Esto lo escuchaba uno antes en la calle hasta las 9:00 o 10:00 de la noche, pero ahora no se puede, a las 6:00 de la tarde ya tenemos que estar en la casita.

He escuchados de jóvenes que se han tenido que ir del barrio porque los han amenazado y a la tercera vez ya se tienen que ir del barrio. (Jóven Ciudadela Sicre).

“Me quitaron un pantalón camuflado que llevaba puesto”

“Hace como un mes iba para mi casa por la tarde en compañía de mi hermana y unos amigos, cuando iba subiendo una camioneta del ejercito, venia del Oasis por la calle principal hacia Caracoli en dirección a tres esquinas, cuando de repente se detuvo y se bajaron dos soldados, me apuntaron con los fusiles que levaban, me insultaron, me maltrataron y luego me obligaron a entregarles un pantalón camuflado que llevaba puesto y que esta de moda, si no lo hacia me llevaban preso, luego de que todos se me quedaron viendo en la calle pública, se fueron y me toco irme por fortuna en pantaloneta para la casa.

Todos sabemos que aquí hay detenciones arbitrarias por parte de los militares, cuando nos piden los papeles, nos pegan, nos tratan mal” (Joven Cazuca, Septiembre de 2006)

“Nos angustia la situación de silencio que se vive en la Comuna 4”

“Sabemos lo que sucede y nos angustia la situación de silencio que se vive en la Comuna 4 de Soacha. Vi en la Isla, una camioneta negra 4x4 con cuatro puestos, de vidrios negros, escuchamos unos tiros, vimos como llevaban dos jóvenes del cuello, cerca de la Escuela los Robles, mataron los dos jóvenes. Dijeron que era un ajuste de cuentas entre los que estaban recogiendo las vacunas, y al que mataron se emborrachó y se gastaron la plata de un armamento que tenían que comprar.

Del Urabá mandaron 170 paras, este mes y están distribuidos en toda la zona. Sabemos por los comentarios que estan en todo el sector. Hay un chico como de 11 años que lo amenazaron, tiene un hermano de 25 años, desaparecido, la mamá no lo deja salir para nada es como si estuviera preso en su propia casa, es una situación muy difícil para la familia” (habitante de la Comunidad. Octubre de 2006).

“Me gustaría que se hiciera algo para que los jóvenes tuvieran más libertad”

“Me gustaría que se hiciera algo para que los jóvenes tuvieran más libertad, por lo menos en el barrio, que pudieran andar, ir a sus fiestas, reunirse en sus grupos, porque ellos sienten que aquí hay cosas que quieren hacer.

Uno ve ahí que la gente dice cosas como por ejemplo: mire debemos de llamar a la policía para que formen un CAI, esto para saber que pueden sacar, que si uno puede denunciar y sacar algo, si, pero uno conociendo las personas y las cosas uno no se atreve a decir nada, hay rumores que la mayoría de juntas la tienen los paramilitares, si amenazaron a uno e incluso le pusieron una puñalada a un niño de allá arriba donde ellos están, ellos estaban allá porque le estaban haciendo seguimiento a un par de personas que están allá y que están haciendo de la suya, ellos no están respetando al barrio, entonces se han empezado a meter a unas casas y ellos supuestamente estaban allá haciéndoles seguimiento, incluso cogieron y patearon a uno de ellos, le dijeron váyase para su casa.

Ellos se meten con las chicas para sacarle información, pero de esas chiquitas que estaban con ellos, son niñas de apenas 13 y 14 años, ya hay algunas amenazadas que en cualquier momento caen por ahí, un día sin querer escuche venían dos niñas subiendo y vi el grupito de las otras chicas noviecitas de los paras y dijeron ahí vienen las dos cojamos las de una vez, yo dije pero que?.

Uno como mamá no sabe que pensar, ellos mismos las amenazan bien sea para que se vinculen a ellos o para que les den información o para que les ayuden a la delincuencia y otras las amenazan, porque son niñas sanas para que no se la pasen en la calle.

A mi me preocupa porque allá hay informantes tanto para la policía como para los paras, por eso uno no puede decir ni a ni e, porque uno no sabe que puede pasar.

Yo fui amenazada públicamente, yo fui a naciones unidas a exponer el caso y no me pararon bolas, le dijeron que fueran a la casa de los derechos y de igual” (Habitante de Cauca. Octubre de 2006).

“Los niños y las niñas montan a caballito”

“Allá va la policía, los carabineros y los niños hacen fila, para subirse a los caballos, y los policías van sacando información y a las mamás también les preocupa que los paracos se den cuenta quienes están saliendo, quienes dan información, les preguntan, donde está el papá, la mamá, cuantos hermanos, con quien vive, les preguntan por todo, que si veían algo extraño, y un niño al que le pregunte se puso a llorar, yo le pregunte porque, y él dijo que cuando estaba en el caballo él había

visto los paracos, entonces cuando él se fue para la casa, lo detuvieron los paracos y lo amenazaron y le dijeron que si lo volvían a ver con los policías que ahí si era que lo mataban, el niño tiene como 10 años, son pequeñitos.

Una niña del barrio y tiene como 10 añitos y un día llevo llorando, con el hermanito pequeñito que tiene como 4 años, le preguntamos porque lloraba y la chiquita estaba como en shock, porque se encontró un tipo mientras bajaba para el proyecto, la niña conocía al tipo porque él fue el que mató al papá, entonces cuando vio la niña bajar le dijo que si la volvía a ver sin el niño la iba a clavar un cuchillo, así le dijo en esas palabras, la niña llegó asustadísima, el tipo vive por ahí y ella lo ve todos los días.

Hay otro joven que tiene como 17 años y esta viviendo una situación muy difícil todavía, a él si le están ofreciendo que se vaya con ellos, que si se va con ellos va a tener mejor vida, va a tener plata, no va a pasar necesidades, la familia va a estar mejor.

Él vió matar a alguien y le han dicho o se van con ellos o que se vaya del barrio” (Habitante de la Comunidad. Octubre de 2006)

“Un día yo escuche a alguien que dijo, “estamos esperando que se vaya la policía los carabineros, porque ellos no iban a durar ahí toda la vida y no iban a durar mucho tiempo y que estaban esperando esto porque iban a matar a más de un sapo que había ahí, entonces me imagino que es a los chicos grandes que han montado con la policía porque hay chicos grandes, las, niñas, le manifestaron esto” (Habitante de la Comunidad. Octubre de 2006)

“El año pasado, en una la tienda había maquinitas y habían unos muchachos jugando, los dueños de la tienda eran informantes, entonces los llamaron, vino un carro y subieron a cinco jóvenes que estaban jugando maquinitas, mataron tres y dos los dejaron heridos, los dejaron botados en el basurero del Oasis, al lado de una casa prefabricada, uno de ellos se llamaba Omar y tenía 17 años, era personero del Colegio y era un niño sano, otro tenía 14 años y así eran todos jóvenes, después dijeron que era porque eran ladrones y habían atracado el carro de la gaseosa.

El barrio ha cambiado muchísimo, porque antes uno llegaba y encontraba a los niños jugando en las calles, a los jóvenes, y ahora uno llega y todo es como solo, pues la soledad impera en el barrio, en la comunidad, ya la cancha no la usan porque ahí han hecho masacres, no se ven niños en la calle, hay mucha soledad, después de las 6 de la tarde ya no sale nadie y todas las mamás están pendientes de que los hijos estén en la casa” (Habitante de la Comunidad. Octubre de 2006)

“Los derechos están muy lejos de nosotros, en la realidad no se ven”

“Los derechos solo están ahí escritos, muy lejos de nosotros, en la realidad no se ven, yo siempre he dicho, por lo menos para nosotros en Ciudadela Sucre el derecho al agua es totalmente abandonado, es lo que ellos quieran hacer con nosotros, ahí no veo a donde están los derechos, aquí ni para estudio, ni para trabajo, ni para una vivienda digna, ni para un futuro digno para nuestros hijos, no se ven, no se ven por ningún lado.

El otro día llegaron a una casa del fontanero, salió un niño y le preguntaron que sí está un fulano de tal y, lo vieron allá y de una vez le dispararon, lo sacaron y lo acabaron de matar en la puerta de la casa, él fue uno de los líderes que más luchó por toda la comuna; nos ayudó a conseguir el agua a toda la comuna, luchó con nosotros y lo mataron.

Aquí nos tienen señalados como zona roja y uno no tiene derecho a nada.

Hay un batallón en Ciudadela Sucre y nosotros no sabemos cuando va a estallar la guerra, los soldados están protegidos con unos costales de arena, pero la población? No está protegida con nada; a nosotros nos da miedo en la parte mas arriba del tanque dicen que hay otra base que es parte del mismo batallón y allá se escuchan muchas ráfagas al amanecer y uno vive con esa zozobra. Esto en lugar de ser bueno para la comunidad es malísimo empezando porque esos benditos soldados a las muchachas las han embarazado, qué es lo que están buscando estas niñas? Esos soldados no van a responder por esos bebes. Si esto es la autoridad?

Los de la fuerza pública son muy agresivos con los muchachos, hoy hace ocho días en una parte que llamamos la “placita” donde hay unas casitas de madera habían como 5 o 6 muchachos, me imagino que alguien llamó al ejército y llegaron, hay veces que yo soy peleona porque hay cosas que no me gustan, ellos empezaron con los cabos de las escopetas a golpearlos, les quitaron los zapatos, les quitaron la ropa, les dieron hasta donde más no quisieron; a dos de ellos porque se revelaron y empezaron a gritar y a no dejarse pegar más entonces ellos decían que no se querían dejar llevar, entonces yo les decía a los soldados, no es así, así no se puede, yo traté de acercarme más para mirar el código que ellos tienen y el nombre para poder hacer el denuncia pero una vecina me dijo que no me metiera allá que era peligroso que hasta me podían pegar, y uno de ellos me decía no sea “sapa”, que “vallase para su casa”, a mi me dio nervios pero al ver que lo estaban golpeando tanto me dio angustia, al rato llego la mamá de uno de ellos y apenas

lloraba y gritaba pero ni siquiera fue capaz de quitárselo, yo le dije: si ese muchacho fuera mi hijo yo me le tiro a ese señor allá lo empujo y le quito a mi hijo” (Habitante de la Comunidad. Octubre de 2006)

Señora

En el barrio Lucero bajo de Ciudad Bolívar en abril de este año a las 11:20 p.m. entró una patrulla de la policía de esas 4x4 a una comunidad de recicladores, se bajaron 4 personas con pasa montañas en la cancha de microfútbol donde jugaban 6 muchachos, al llegar la camioneta se bajaron y le dispararon a dos de ellos y salieron por una esquina del CADE, por la otra esquina entro otra patrulla a hacer el levantamiento esto paso en cuestión de minutos.

Señora

Mi hijo lo desterraron de su casa en Santander, llego a Cazuca y duró como seis meses, no pudo encontrar trabajo y como no encontraba que hacer, se fue. En enero él volvió allá y le dijeron que se tenía que ir. Allá esta mi hija, el esposo, mi cuñado y también les dijeron en tenían una semana de plazo para que desocuparan, qué puede hacer esa pobre gente si allá tienen lo poco que tienen y se van a venir para acá, a qué?. O con qué se van a venir para acá? Y a llegar a dónde?, yo me pregunto si eso es allá y se vienen aquí a someterse a lo mismo. Entonces a quién nos sometemos? A quién le pedimos una ayuda, una asesoría?.

Señora

Yo me acuerdo de un líder importante que lo habían amenazado, él tuvo que perderse por un tiempo hasta que le duraron los ahorros que tenia y ahí esta otra vez, él dijo que iba a seguir trabajando por la comunidad y esperar haber que es lo que le va a pasar, no hay nada más que hacer, eso dijo.

Señor

Nos desplazan; llegamos aquí aterrorizados, han matado a nuestras familias, como ya llegamos aterrorizados con problemas.

Testimonios de niños de Cazuca

Testimonio Niño

“Pa que se enderece”

“Yo me llamo Carlos Eduardo Rodríguez (nombre cambiado), tengo 9 años y estoy en segundo de primaria.

Cuando tenía 5 años entré al colegio de la base que se llama Paz y Patria, de San Rafael, ciudadela Sucre. Mi mamá me metió a allá “que pa que se enderece”, eso me dijo.

A veces los soldados nos enseñaban a leer y a escribir, pero uno tenía que hacer lo que ellos decían porque sino lo castigaban. Ellos tienen unas canecas grandes, pintadas por fuera, llenas de agua, una vez a mí me cogieron de los pies y me metieron con la cabeza para abajo en la caneca por tres veces seguidas por diez segundos cada vez, otra vez me llevaron de las orejas y me encerraron en el calabozo y aseguraban la puerta con puntillas, allá me dejaron por media hora primero, me sacaron y me insultaron y me dijeron que la próxima vez me metían por 5 horas y otra vez me metieron las cinco horas, a ellos no les importaba si era niño o niña y si era pequeño, tampoco les importaba que uno llorara, todos los niños y las niñas que nos castigaban siempre llorábamos mucho y a ellos no les importaba.

Nos ponían a hacer 400 de piernas. Una vez me pusieron a hacer 400 de piernas y después me metieron al calabozo y yo a lo último solo me quedé dormido y dormía y dormía.

Otro castigo era ponernos a lavar los baños de ellos; esos baños son tan sucios que lo hacen vomitar a uno.

También nos paraban en la pared con las manos arriba con un ladrillo en cada mano.

• Si uno no lo hacía llamaban a los papás y le ponen matricula condicional.

Yo estuve solo seis meses allá, después le conté a mi mamá y ella me creyó y me saco de allá.

Ahora estoy en otro Colegio.

Niño 9 años

Allá en la esquina de la vía principal, en una piedra hay un letrero que dice “si no duermen a sus niños nosotros se los dormimos”, hace como dos semanas mataron a Omar, era el personero de mi colegio que tenía 16 años, el era inocente, el no hacia nada malo, él vendía pizza, pero el se juntaba con malas amistades y esas malas amistades ya estaban como anotadas en la lista para que las mataran

y de pronto lo pillaron y dijeron que él era uno de ellos también, ese día la mamá lo mandó a hacer un mandado y los encontraron un día por la noche en una tienda jugando maquinitas, los cogieron a todos se los llevaron y al rato sonaron los tiros, a él le dieron un tiro por el cachete, les cortaron los labios con cuchillos, les cortaron la cara, a la mamá se le reventó una ulcera de tanto dolor, yo lo vi en el ataúd donde lo vimos todos sus amigos, pusieron una alcancía para que dieran plata para colaborar para el entierro. Así han matado a muchos amigos míos, otro se llamaba Michael y era un niño como de doce años que lo encontraron jugando maquinitas y decían que era ladrón y por eso lo mataron.

“Aquí en Caracolí, nosotros los niños vivimos amenazados por la guerra y la violencia”. En las noches yo siento miedo cuando mi mamá me manda a un mandado y de pronto me ven por ahí y piensan que yo estoy robando y eso no es así y pum me maten, por ahí dejan letreros en las puertas de las casas, los letreros dicen autodefensas Estados Unidos, yo no se que significa eso, qué significa autodefensas?

Yo he visto cosas horribles; Un día yo estaba jugando ahí en el patio de mi casa, empezó a llover y a tronar entonces nos entramos, nos pusimos a ver televisión cuando pum escuchamos como tres o cinco tiros, mi mamá y yo salimos a ver porque podía ser un familiar porque mis tíos vienen a visitarnos o alguien que uno conozca, yo vine y miré y no era nadie conocido; tenía un ojo salido y algo salido en el estómago horrible como si estuvieran las tripas por fuera, había mucha sangre, en la pared de la panadería había sangre chispeada, tenía unas zapatillas nuevas. Yo me fui rápido y me entré a la casa, me dio pánico, mucho miedo, yo tengo mucho miedo de que me maten, yo me siento mal porque este es un barrio de bien, es un barrio bonito, tiene muchas cosas nuevas como una cancha de fútbol; aquí tendríamos que vivir todos en paz y si ven a un niño en la calle haciendo algo malo, robando o jugando maquinitas hay que corregirlo no hay que matarlo porque eso es muy duro para una mamá y toda la familia sufre mucho. Eso es lo feo que tiene este barrio, no me gusta con tanta matazón. (Steven 11 años).

Niño de 6 años: “de pronto mandan a un niño hacer un favor y de pronto los chuquines estén escondidos y se lo llevan”

Niño de 5 años: “yo no salgo a la calle nunca...me da miedo”

Barrio el Arroyo

Quien cuenta la historia: Anderson 14 años

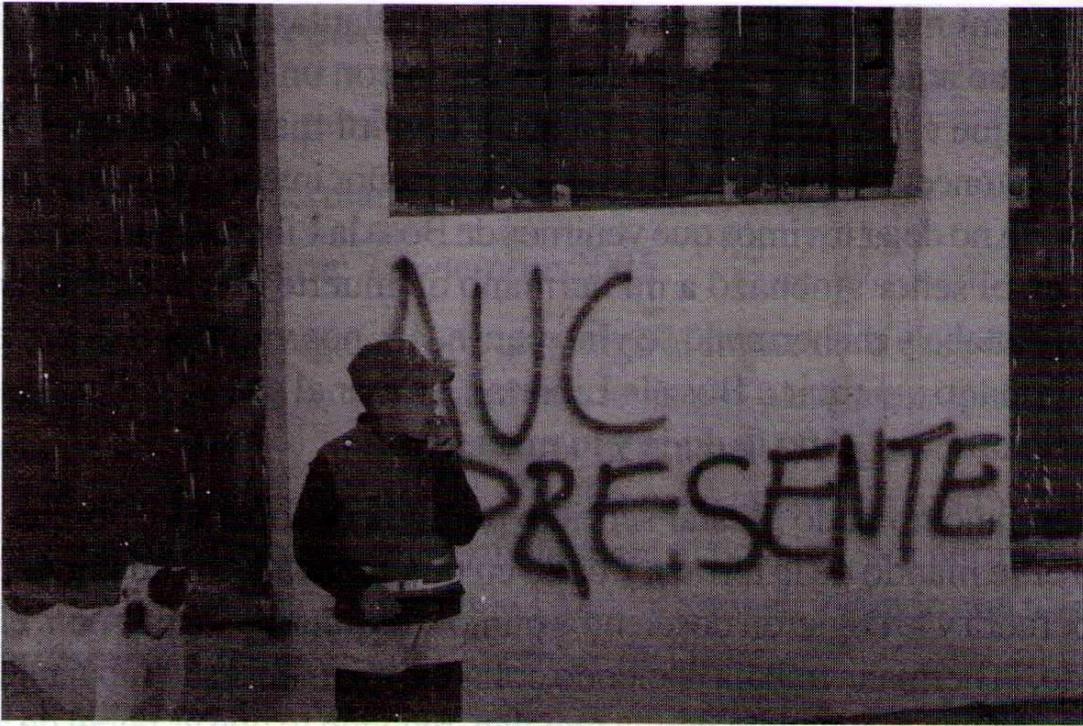
Nombre del familiar muerto Maicol Andrés edad 3 años

Fecha y hora de la muerte: 20 diciembre 2005, Hora 3 PM

Era un domingo a las 3 de la tarde nosotros estábamos jugando fútbol entonces comenzó la policía a buscar unos pandilleros que habían robado y comenzaron a buscarlos y ellos dijeron que no, que ellos no eran entonces sacaron un arma y comenzaron a dar bala, y allí comenzaron los enfrentamientos, entonces estábamos jugando con mi hermanito Maicol Andres y nos descuidamos y él se fue detrás del balón a la calle a recogerlo entonces le metieron un tiro en la cabeza entonces nosotros nos metimos a sacarlo y cuando lo llevamos al hospital de Soacha ya estaba muerto.

Después que al niño le dispararon ellos pararon de disparar, pero se fueron los pandilleros y los policías y más adelante empezaron los enfrentamientos de nuevo y mataron otro niño ese mismo niño.

Entonces mi mamá empezó a ponerse muy triste, entonces ella no puede recordar eso, todos nos pusimos a llorar y lo llevamos a enterrar y mi mamá no quería dejarlo enterrar porque era el ultimo niño que tenía, y lo enterramos y al rato ella se sentía mal, ella como que se estaba enfermando, y la llevamos al doctor y el doctor decía que le diéramos unas pastas cada tercer día, entonces nosotros se la estábamos dando y ella no las quería tomar entonces se enfermo comenzó a vomitar sangre y la llevamos al hospital y le hicieron una operación para no tener más hijos y entonces ella se calmo y dijo que no le volvieran a nombrar nada de eso y que si estábamos en la calle y había otro enfrentamiento nos fuéramos corriendo para la casa y que no estuviéramos en la calle tarde de la noche, yo vi los pandilleros y a ellos ya los mataron, en ese enfrentamiento, eran 20 policías y 10 pandilleros así como de 20 años, uno de ellos un día estaba sentado con la mujer y llego uno encapuchado de los encapuchados que hay por aquí, que vienen a uno tarde de la noche y lo matan, entonces llegaron y le dijeron a la esposa que estaba embarazada, bueno usted lo mata, o la mato a usted o la mato a ella, entonces Henry dijo que lo mataran a él porque yo quiero que mi hijo viva, entonces le dieron el arma para que ella lo matara y ella se puso a templar y ella pego un tiro y cerro los y le callo en un pie entonces le quitaron el arma y le dijeron preste ese que esto se hace así, entonces le pegaron un tiro en la cabeza y el otro en el pecho y a los otros también los cogieron en otro enfrentamiento pero



el otro en el pecho y a los otros también los cogieron en otro enfrentamiento pero con otra pandilla los apuñalaron y los mataron, yo vi todo esto no me da miedo porque ya uno vive en el barrio ya hace 13 años y se vive con enfrentamientos y todo, al principio si me daba miedo porque empezaban a montársela, a joderlo me obligaban a fumar marihuana, y yo que no, entonces me pusieron en la boca, y yo que no y que no, entonces llegó mi hermano el mayor y le casco a dos y les dijo que a mi no me dieran a fumar eso y a mi me casco y me dijo eche para la casa y me fui llorando para la casa y el les dio duro, y los chinos dijeron listo, listo nosotros no volvemos a hacer esto, y lego una vez mi hermano se puso a echar pegante bóxer y se puso en una loma y eso le empezó hacer efecto y empezó a hacer equilibrio y a tambalearse, entonces llegamos nosotros y le dijimos no, no, no oscar si usted nos quiere bote eso y lo botó eso y después a los tres días estaba con los amigos en la arenera, y yo lo vi en la arenera y me subí hasta la casa llorando y saque un cuchillo y me bajé hasta la arenera y los vi y cuando los vi entonces llegó mi hermana y yo cogí a Víctor y lo empujé y le dije abraza no se meta con mi hermano, yo no quiero que mi hermano sea como usted un vicioso y luego y dijo bueno yo iba a sacar el cuchillo cuando mi hermano tiró la bolsa con el pegante y dijo, no quieto yo dejó éste vicio pero déjalos a ellos, mentiras el tiro eso y le alcance a dar un patadon y luego el otro intentó pegarme y como al tercer día fue cuando mataron a Víctor con tres tiros en la cabeza.

Nosotros antes de la muerte de mi hermano éramos felices después que lo mataron a él empezó mi mamá a trabajar para darnos de comer a nosotros, mi hermano a robar para llevar para la casa, mi hermana se fue a una casa a trabajar

de mesera a mi me tocó ir a trabajar a un montallantas a purificación Tolima, después llegue aquí y mi mami estaba viviendo con un señor, entonces yo dije bueno pero que el señor no se vaya a pasar con mi mami y si no se la ve con nosotros. Entonces empezaron las desgracias el señor intento pegarle a mi mamá, mi hermano a no dejar tuvimos que venimos de Bosa la Libertad para aquí, tuvimos que vender, el señor amenazó a mi hermano de muerte que si en 5 días no nos íbamos lo mataba y mi hermano se vino para acá y nos vinimos todos, y en estos días mi hermano quiere ir a Bosa la Libertad a mirar al señor, si el señor intenta amenazarlo otra vez él no lo duda y lo mata.

Mi hermano no pudo prestar servicio porque el es operado, porque cuando pequeño él se mando de la terraza y calló en una caneca la mitad por dentro y la mitad por fuera y le cogieron doscientos puntos, le quitaron un pulmón, el no esta trabajando, la hermana trabaja haciendo collares, mi mami esta trabajando donde mi padrino en una recicladota donde reciclan, recogen lo que es papel de archivo, cartón, plástico, bolsas, por colores, y compran a \$100 el kilo, las latas de gaseosa la pagan a \$10.000 el kilo.

En los días que murió mi hermanito, mi mamá se puso muy triste, veía la foto y se ponía a llorar, se iba para la loma y se ponía a pensar, duraba horas allá llorando, una o dos horas, o mas, se iba a las seis y llegaba a las doce, y llegaba con los ojos hinchados de llorar, después mi mamá empezó a tomar el vivió de tomar, nosotros le dijimos que no, o sino nos íbamos, no mami, no siga tomando, si sigue tomando se va a acabar, ella dijo que diosito le de el placer de tener otro niño y si él le dio otro que tiene tres meces.

Barrio Villa Mercedes

Quien cuenta la historia: Elidí Xiomara 9 años

Familiar muerto: Tio Idier de 28 años

Fecha y hora de muerte: 18 diciembre 2005

Venían buscando a mi tío Lucho dos o tres muchachos y mi tío Idier se metió ahí y ellos tenían un revolver lo sacaron y lo dispararon hacia tras mi primo y él se agacharon y no les salió, se levantaron y les dispararon dos veces y Manuel se agachó y mi tío quedo levantado y lo mataron, ellos estaban en una cantina, esto me lo contó Manuel el que estaba con él. Los tiros fueron uno en la parte del corazón y otro mas abajo.

Barrio: Villa Mercedes

Quien cuenta la historia: Ana Milena 8 años

Familiar muerto: Hermano Daniel Céspedes 15 años

Fecha y hora de muerte: 7 diciembre 2005

Mi hermano estaba jugando con un amigo al frente de la casa de mi tía, ellos estaban jugando y el amigo de mi hermano tenía una pistola que tenía en la casa y él pensó que no servía y le disparó a mi hermano, le pegaron una bala en la cabeza y toda la frente se le destapo, mi tía no estaba en la casa y cuando ella llegó, ya se habían llevado a mi hermano para el hospital. Mi hermano tenía 15 años, esto se lo hizo el amigo que tenía 13 años, estaban jugando con un arma y el amigo le disparo, esto fue el 7 de diciembre de 2005.

Barrio: Villa Mercedes

Quien cuenta la historia: Jorge Ernesto Torres 8 años

Familiar muerto: Hermano Alonso Leiva 13 años

Fecha y hora de muerte: 2006

Mi hermano se lo robaron

Barrio: Villa Mercedes

Quien cuenta la historia: Yeimy Martinez 12 años

Familiar muerto: Hermano José Luis 26 años

Fecha y hora de muerte: 2003

El día que ganó la selección Colombia salió mi hermano José Luis y mi otro hermano a tomar y llegando a la esquina donde voltean los carros y salió un señor y lo trató mal y mi otro hermano dijo que lo dejara así, pero él no lo dejó entonces el man se le fue y le dijo que si se iba a meter con él le metía una puñalada y le dio en la garganta y se murió. Esto ocurrió en el 2003, esto me pone triste todavía porque mi hermano mayor se acuerda de él y se pone a llorar.

Barrio: Luis Carlos Galán

Quien cuenta la historia: Marilyn 12 años

Familiar muerto: Tío Richar 32 años

Fecha y hora de muerte:

Hechos

Mi tío Richar tenía 32 años y le pegaron un tiro en el pecho y le tiraron piedras, unas piedras grandotas, porque el robaba, él murió aquí en Cazuca mi otro tío también robaba y lo llamaban mono él murió en Paraíso.

A él lo estaban esperando, el llegaba tarde de la noche y era peligroso y cuando llegó le dispararon.

Barrio Luís Carlos Galán Soacha

Una vecina del barrio cuenta con un poco de miedo lo que ella viven en este sector.

Ella comenta que una vez en una casa había una tienda y el dueño de ella, mató unos muchachos porque eran ladrones y siempre lo robaban, un día les tendió una trampa, los dejó que entraran y les empezó a disparar, en estos hechos murió un muchacho que tenía problemas de retardo y era parte de la pandilla pues era hermano de uno de los integrantes, esta familia es conocida en el barrio por que son ladrones, al señor se lo llevaron para la cárcel. Ella dice que en este barrio es muy inseguro pues atracan a las personas a cualquier hora y sobre todo en las noches, y más porque no hay buen alumbrado y se presta para esto. Dice que una noche a la cuñada de ella la atracaron y le robaron el bolso, intentaron violarla pero ella empezó a gritar y no se dejó, salió corriendo, pero después dice que esto llegó a oídos del señor Wiliam, un hombre que va los domingos y a él le dan las quejas de todo lo que pasa en el barrio y él manda ajusticiar a la gente, ella dice que eso le da miedo porque hay mucho sapo. El miedo también es por que los miembros de la junta de acción comunal son paramilitares y ellos se meten en cuanto proyecto abren por aquí para saber que es lo que se dice y lo que se hace.

También comenta que hubo un proyecto de iniciar la construcción de una escuela y la gran mayoría de los que la estaban haciendo eran negros y la financiaban unos extranjeros pero lo que pasaba es que los negros les gustaba mucho rumbiar y hacen mucha bulla en las noches bajaban muy de noche y un día los amenazaron y les dijeron que si seguían los iban a matar, entonces ellos pasaron

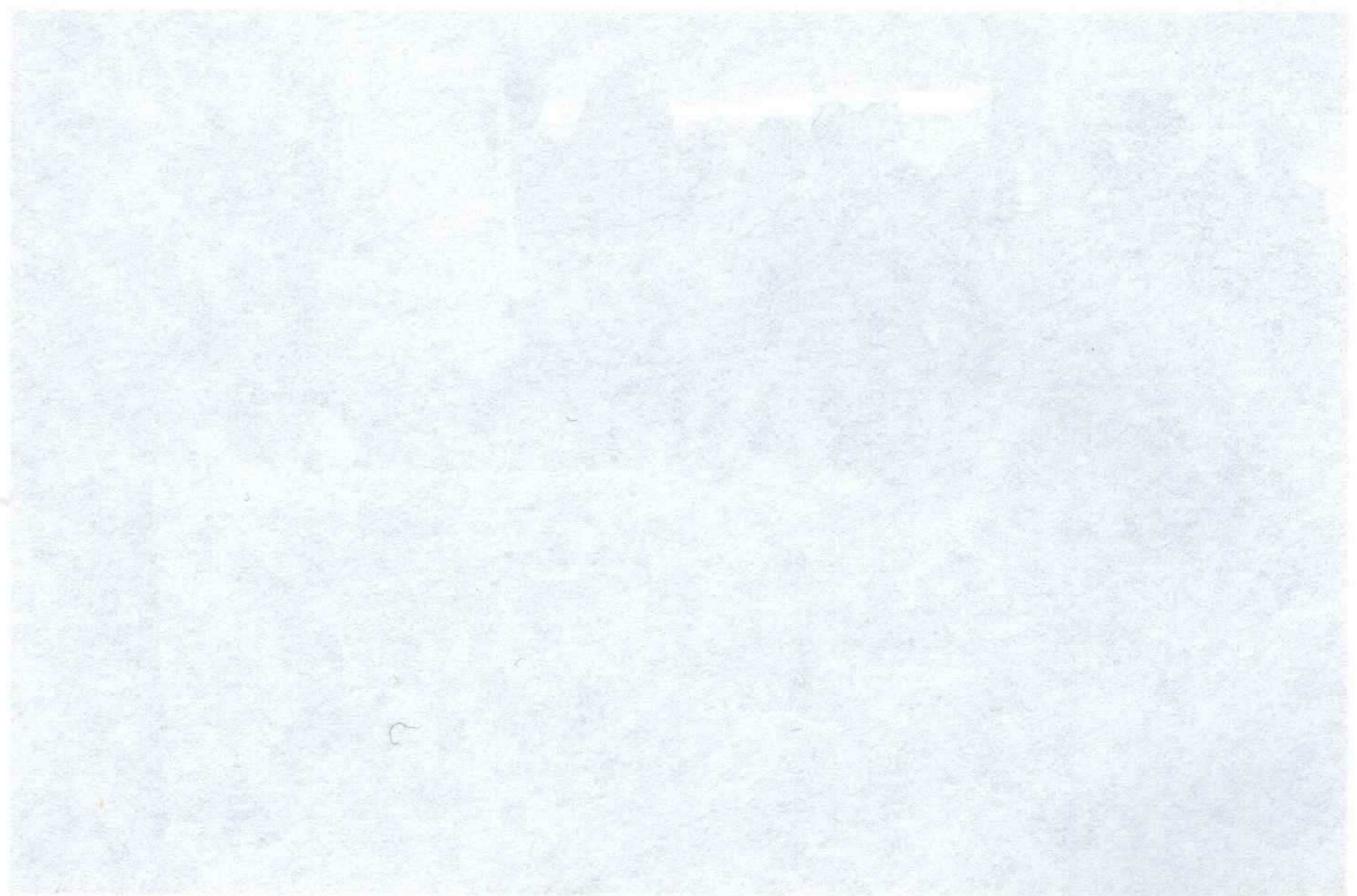
la queja a las extranjeros y todos se fueron porque no había seguridad para la vida y no volvieron y tampoco terminaron la escuela, esto nos perjudico mucho porque los niños y las niñas de por aquí tienen que ir hasta el alto del pino o hasta la isla para estudiar, y los que estudian por la tarde salen como a las seis y llegan muy tarde a la casa, y como les dije esto por aquí es peligroso de noche.

Barrio Rincón del Lago

En octubre de 2005 en el barrio Rincón del Lago en el municipio de Soacha

A plena luz del día dice una testigo de los hechos estaban en el parqueadero del barrio jugando los niños Jeison de 15 años y unos amiguitos, de repente llegó unos tipos encapuchados y le dispararon, luego lo apuñalaron hasta verlo muerto totalmente, después emprenden la huida, según versiones de los vecinos es que fue una equivocación, otras versiones es que el chico se negó a ir a formar parte de las filas de los paramilitares, pero aun no se han aclarado los hechos, aun no se conocen los autores del hecho pero son presuntos paramilitares, teniendo en cuenta que en una de las tiendas del barrio que dá al parqueadero es el lugar de encuentro de los paramilitares y quienes tienen su puesto de control. Ellos son los que controlan la entrada y salida de las busetas, los negocios del sector aunque las personas niegan todo talvez por temor.

ANALISIS DE ENCUESTAS



4

ANÁLISIS DE ENCUESTAS

Uno de los grandes obstáculos que enfrentamos las organizaciones de derechos humanos que acompañamos a las comunidades de estos dos sectores al sur de Bogotá y Soacha, es el temor a denunciar por parte de sus habitantes, en parte por todo el terror que los grupos paramilitares y de policía han sembrado entre los pobladores. Lo vemos en algunos casos en algunos casos la justicia inicia procesos de investigación y en muy poco llega algún tipo de dictamen, mucho menos si se trata de algún miembro de la fuerza pública, lo que ha creado una incertidumbre hacia la justicia institucional.

Los atropellos, las amenazas y los hostigamientos constantes a los que se atreven a denunciar por parte de la policía son amenazas de "aténgase a lo que le pueda suceder", o bajo la presión de ser llevado a la UPT, o "espérese que lleguen los que sí saben" mantienen una constante presión sobre los pobladores, la policía asume un papel que la ley no le delega, como realizar castigos ejemplares contra los que están tarde en la calle, los que se visten diferente "neros", los que hacen



Uno de los grandes obstáculos que enfrentamos las organizaciones de derechos humanos que acompañamos a las comunidades de estos dos sectores al sur de Bogotá y Soacha, es el temor a denunciar por parte de sus habitantes, en parte por todo el terror que los grupos paramilitares y de policía han sembrado entre los pobladores, lo segundo los altos niveles de impunidad solamente en algunos casos la justicia inicia procesos de investigación y en muy poco llega algún tipo de dictamen, mucho menos si se trata de algún miembro de la fuerza pública, lo que ha creado una incredulidad hacia la justicia institucional.

Los atropellos, las amenazas y los hostigamientos constantes a los que se atreven a denunciar por parte de la policía con amenazas de “aténgase a lo que le puede suceder”, o bajo la presión de ser llevado a la UPJ, o “espérese que lleguen los que si saben” mantienen una constante presión hacia los pobladores, la policía asume un papel que la ley no le delega, como realizar castigos ejemplares contra los que están tarde en la calle, los que se visten diferente “ñeros”, los que hacen

respetar sus derechos, o miran mas de la cuenta o simplemente juegan en el espacio publico con los amigos .

Cuando se les reclama por sus malas acciones, culpan a los padres y madres de familia por dejarlos en la calle, en la gran mayoría de los casos, los policías no se dejan identificar poniéndose chaquetas que invisibilizan los apellidos de los agentes, los demás colegas de los CAIs o la estación de policía niegan los nombres de los policías que participan en los operativos; los camiones o “perreras” que llaman los jóvenes por su parecido a los carros que recogen a los perros de la calle, donde recogen a los jóvenes indiscriminadamente no llevan ningún tipo de señalización, ni numero de placa y si llevan placa la tapan durante el operativo con balletillas o simplemente no están en sitios visibles.

La policia a impuesto un toque de queda no decretado muy parecido al de los paramilitares durante la noche, violando los derechos a la movilización, el aprovechamiento del espacio publico, el derechos a la libre personalidad y expresión, el derecho a ser defendidos, a no ser capturados ilegalmente y menos maltratados y golpeados.

Que mas decir de los grupos paramilitares que no dudan en amenazar, desplazar o en los peores de los casos asesinar.

Ante estas dificultades de denunciar nos dimos la tarea de realizar 2500 encuestas con habitantes de los barrios Alpes, Brisas del Volador, Paraíso, Lucero Alto, Meissen, San francisco, Compartir, Juan Pablo, Potosí, Tres esquinas, Caracoli, Oasis, Luís Carlos Galán, Julio Rincón, Ciudadela Sucre, con población juvenil, con mujeres y hombres mayores de edad, de la cual nos permitió determinar los siguientes resultados.

De las 2500 personas entrevistadas, se pudo determinar que los barrios donde se presenta mayor presencia paramilitar y donde la fuerza publica comete mayores atropellos hacia la población civil, son los barrios mas altos de la localidad y los barrios de Cauca que pertenecen a la policía cundinamarca, donde incluso según testimonios de los pobladores, reconocidos paramilitares se les ve de noche tomando o patrullando con miembros de la policía uniformados y de civil.

La acciones cometidas en estos barrios responden a la falta de presencia de las instituciones que den garantía a los derechos de los ciudadanos, no hay ningún organismo que controle o de veeduría a las acciones de la policía en estos barrios.

Igualmente en sectores comerciales paramilitares ofrecen servicios de vigilancia y patrullan con complacencia de la policía, como una forma indirecta de cobrar vacunas a los comerciantes.

En las partes altas de la localidad de Ciudad Bolívar y en la vía principal de altos de Cazuca, los paramilitares cobran a los transportadores una cuota por “seguridad”, igualmente todos los negocios pagan algún tipo de “impuesto”, incluso reconocidos paramilitares o simpatizantes de estos reconocidos por la comunidad se les ve reunidos y tomando en negocios como supermercados, bares, billares, manteniendo constante vigilancia.

En estos sectores es prohibido después de las 8:00 p.m. a los jóvenes transitar, reunirse o simplemente jugar, por que son abordados por hombres armados quienes les prohíben estar en la calle y deben retirarse a sus casas, si incurren en esta falta tres veces son asesinados o desplazados.

Los paramilitares controlan a la población saben quienes viven, a que horas llegan, que hacen, y al cambiar el comportamiento de la rutina son abordados y se les pregunta las razones de su cambio de rutina.

A los paramilitares se les ve tomando en algunas tiendas durante las noches muy fuertemente armados, vigilando e intimidando a la población, cuando llega la policía no hay ningún tipo de detención al contrario se les ve muy amigables.

A los paramilitares se les reconoce que trabajan junto a los vendedores ilegales de lotes donde constantemente están llegando familias desplazadas.

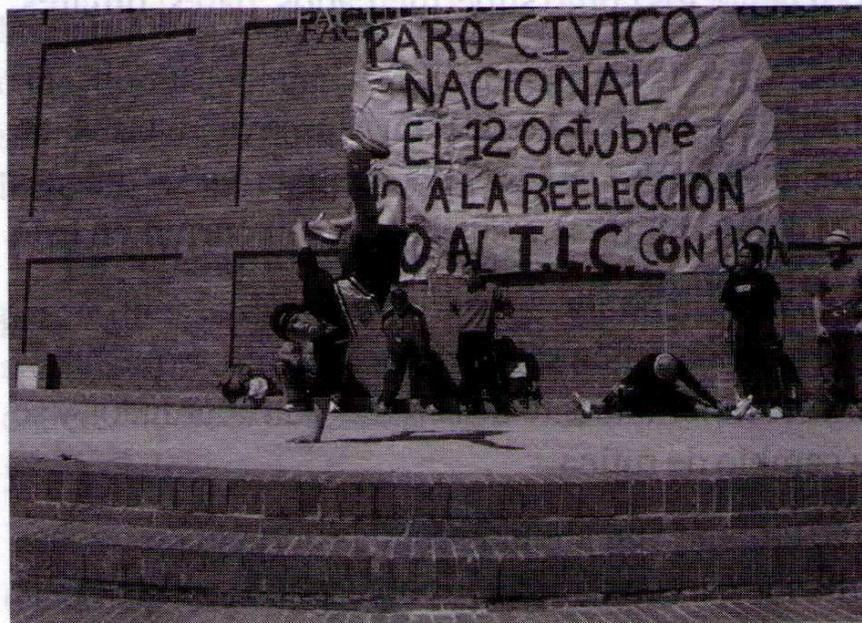
Para algunos pobladores encuestados, relacionan algunas juntas de acción comunal con los paramilitares, según ellos trabajan bajo los intereses de ellos y no de la comunidad.

En algunos barrios de Cazuca los paramilitares controlan y cobran por la venta ilegal de agua.



Al preguntárseles se sienten en libertad de participación política y organización, el 85% de los pobladores de Cauca y el 50% en Ciudad Bolívar consideran que sienten miedo y creen que no pueden hacerlo.

A la pregunta si sienten la libertad de movilización en el barrio, consideran que no pueden transitar con libertad por miedo en las noches, después de las 7:30 en Cauca y 9:00 en Ciudad Bolívar, incluso ahí cuerdas y barrios que prefieren no transitar.



De los encuestados en Cauca en un porcentaje del 85% consideran que han visto o escuchado o le han matado algún familiar, amigo, vecino o simplemente han escuchado de algún caso en su barrio.

En Ciudad Bolívar especialmente en la parte alta el porcentaje es de un 50% y un 20% en la parte

baja en los barrios San Francisco y Candelaria.

Ante la pregunta si ha conocido o sabe de algún desaparecido en su barrio, la respuesta es positiva en un 30% en la parte alta de Ciudad Bolívar y 5% en la parte baja, en Cauca llega a un 40% de los encuestados, realmente es confusa la situación se conocen casos de jóvenes que de un día para otro no se sabe mas de ellos, algunos piensan que fueron asesinados, o se fueron reclutados, los habitantes de Cauca no saben si fueron nuevamente desplazados, asesinados o reclutados, los familiares entrevistados temen que les pase algo si denuncian, prefieren no averiguar por miedo a represarías.

Ante la pregunta si sabe o a escuchado de reclutamiento forzado, la mayoría de jóvenes han escuchado o les han propuesto, en algunos casos les pagan \$150.000 mensuales por ser informantes, \$450.000 por ser de limpieza social y en algunos casos les dan un porcentaje en las ganancias de las vacunas.

Al preguntársele como valora el papel de la policía, en el trato hacia los jóvenes, todos consideran que la policía se excede en su función, ven el constante atropello hacia los jóvenes por su forma de vestir, de expresarse, en un porcentaje del 60% de los encuestados no confía en la policía.

A la pregunta han visto algún maltrato físico o psicológico de la policía hacia los jóvenes responden que es constante, que los bajan en carros, los amarran y luego los esposan en la astas de la bandera nacional, a muchos los golpean sin ninguna justificación, los jóvenes consideran que los policías abusan de la autoridad por que no pueden estar en la calle muy tarde, ni ir a fiestas, ni vestirse como quieren, al contrario le tienen mucho miedo que se los lleven a la UPJ.

Muchos jóvenes expresaron su preocupación por las bases militares en la parte alta del barrio grupos, por que allí detienen sin justificación a los jóvenes, los bajan de las busetas por las mañanas cuando van a trabajar, les quitan los cordones y las correas que no les devuelven, les roban la poca plata que llevan, los sueltan hasta bien tarde, muchas han perdido oportunidades de trabajo o de estudio y otros han tenido que irse a otros barrios por miedo a lo que les puedan pasar.

Algunas mujeres consideran que las bases militares no deben estar junto a las casas, los centros de salud y los colegios por que piensan que es un gran peligro por temor a algún tipo de atentado, además han ocurrido muchos embarazos no deseados a las jovencitas por parte de los soldados, a los niños y las niñas los utilizan como informantes.

Los carabineros llevan sus caballos a Cazuca con el fin de acercarse a los niños y las niñas para sacarles información, les preguntan si conocen guerrilleros que si sus papas son guerrilleros, que si sus tíos son guerrilleros, involucrando a los niños y las niñas en el conflicto armado, muchas veces les han insinuando delatar a sus propios familiares, muchos de los niños y las niñas no entienden que significa lo que les preguntan los carabineros.

Los encuestados responden que la policía trata involucrarlos como población civil en el conflicto, obligándolos a trabajar en sus redes de informantes, pero conocen casos en que delatan algún paramilitar, pero no se realizan investigaciones ni capturas y si llegan las amenazas hacia los denunciante.

Ciudad Bolívar y Cuzco se encuentran interconectados geográficamente y es uno de los sectores de mayor presencia de ejército y policía a nivel Regional.

La construcción de bases militares u la permanencia de batallones en casas de civiles, centros de salud, centros educativos o centros de reunión comunitaria, responde a la estrategia militar de control de la población y la exposición de la población civil a cualquier tipo de agresión que pueda suceder en el conflicto armado, al ver la posición dentro del espacio de las bases militares o de policía, pareciera más bien que la población civil protege y protege a las zonas militares, de esta forma violan el derecho Internacional Humanitario y el protocolo de Ginebra.

Durante este período Uribe en Ciudad Bolívar y Cuzco aumenta la construcción de bases militares, de policía y cuarteles de CAIs, aumentando el abuso de autoridad hacia los jóvenes y los pobladores de estos sectores.

Según el mayor Alvarado existen 2 bases militares, una ubicada en el barrio la curubre, la otra en el barrio santa viviana, una estación de policía en el barrio el Meissen, y diez CAIs, no contempla la estación militar del barrio grupos, la construcción de la base de la policía de sierra morena y las bases temporales en los salones comunitarios, y en casa de civiles como en el barrio grupos junto al barrio Patosí, en la estrategia de seguridad de la alcaldía mayor, se aumento el pie de fuerza policial y el número de CAIs para Ciudad Bolívar.

5

BASES MILITARES Y DE POLICÍA POBLACIÓN CIVIL OBJETIVO MILITAR

Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial que se comenzó a impulsar en la Localidad de Ciudad Bolívar en la presente administración, se estableció que una de las prioridades es la construcción de escuelas y por lo tanto se estableció la construcción de escuelas en la zona. Entre estas escuelas se encuentra la mencionada Escuela Ciudad Bolívar sede Nueva Argentina. Finalmente, se estableció la construcción de la estación de policía que rodea con todos los centros educativos mencionados, el centro de salud y los tanques de agua, gestión que en la actualidad ya se está adelantando.

Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial

Ciudad Bolívar y Cazuca se encuentran interconectados geográficamente y es uno de los sectores de mayor presencia de ejército y policía a nivel Regional.

La construcción de bases militares o la permanencia de batallones en casas de civiles, centros de salud, centros educativos o centros de reunión comunitaria, responde a la estrategia militar de control de la población y la exposición de la población civil a cualquier tipo de agresión que pueda suceder en el conflicto armado, al ver la posición dentro del espacio de las bases militares o de policía, pareciera mas bien que la población civil rodeara y protegiera a las zonas militares, de esta forma violan el derecho Internacional Humanitario y el protocolo de Ginebra.

Durante este periodo Uribe en Ciudad Bolívar y Cazuca aumenta la construcción de bases militares, de policía y números de CAIs, aumentando el abuso de autoridad hacia los jóvenes y los pobladores de estos sectores.

Según el mayor Alvarado existen 2 bases militares, una ubicada en el barrio la cumbre, la otra en el barrio santa viviana, una estación de policía en el barrio el Meissen, y diez CAIs, no contempla la estación militar del barrio grupos, la construcción de la base de la policía de sierra morena y las bases temporales en los salones comunales, y en casa de civiles como en el barrio grupos junto al barrio Potosí, en la estrategia de seguridad de la alcaldía mayor, se aumento el pie de fuerza policial y el numero de CAIs para Ciudad Bolívar.

Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial que se comenzó a impulsar en la Localidad de Ciudad Bolívar en la presente administración, se estableció que una de las principales falencias de la localidad 19 era la poca existencia de escuelas y por lo tanto este esfuerzo se convirtió en una prioridad. En el año 2004 se estableció la construcción de 38 escuelas distritales en Bogotá, 9 de las cuales se encuentran en la localidad de Ciudad Bolívar, e igualmente la construcción de jardines infantiles. Entre estas escuelas se encuentra la mencionada Escuela Ciudad Bolívar sede Nueva Argentina. Finalmente, se estableció la construcción de la estación de policía que colinda con todos los centros educativos mencionados, el centro de salud y los tanques de agua, gestión que en la actualidad ya se está adelantando.



**POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
METROPOLITANA DE BOGOTÁ
ESTACION CIUDAD BOLÍVAR**

Bogotá, D.C.

Nº 234 / COMAN -ZOBOL

ASUNTO Respuesta Derecho de Petición

A L Doctora
JANET ELIANA ZAMORA
Carrera 43 Nº 22 A-76, oficina 401
Ciudad

Ejerciendo el derecho constitucional consagrado en el precepto 23 del Ordenamiento Superior Colombiano, dirige usted a la Alcaldesa Local de Ciudad Bolivar escrito petitorio solicitando se le entregue información respecto a unos tópicos relacionados, entre otros, con el número de bases militares y demás construcciones de la fuerza pública localizadas en la jurisdicción o localidad 19 de la ciudad.

La Jefatura de la Estación de Policía Ciudad Bolívar, siguiendo instrucciones del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, procede a dar respuesta a las inquietudes planteadas por la profesional petente, así:

Estableciöse con la Estación 19 de Policía de la ciudad que en la localidad de Ciudad Bolivar existe en la actualidad dos bases militares, una ubicada en el barrio la Cumbre y la otra en el barrio Santa Viviana; una Estación de Policía ubicada en la calle 62 sur Nº 18 A- 25 del barrio Meissen, y diez CAI ubicados en diferentes sectores de esa comprensión policial.

En los anteriores términos damos respuesta a su petición.

Con cordialidad,

Mayor **JULIO CESAR ALVARADO DÍAZ**
Comandante Estación Ciudad Bolívar

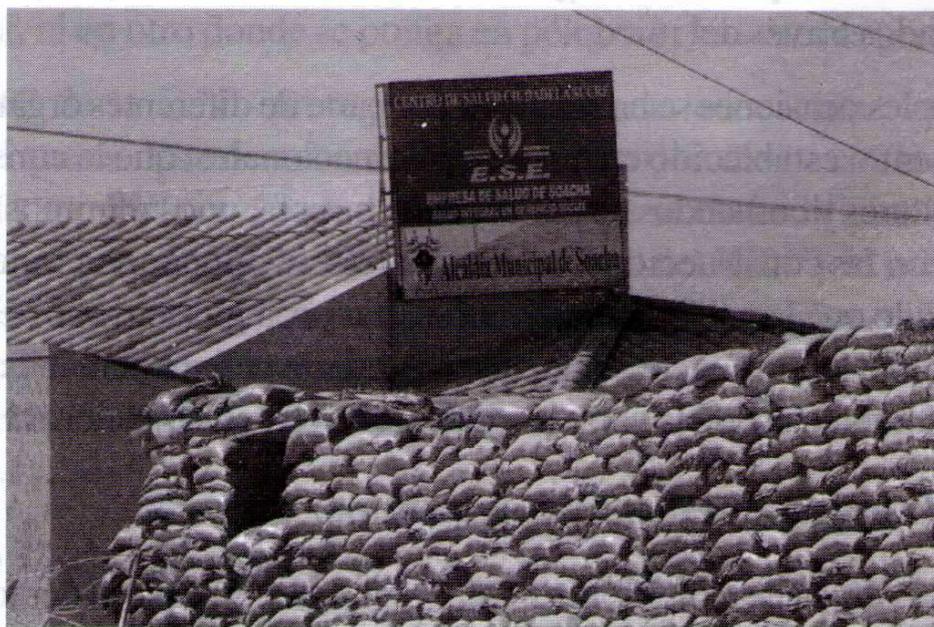
PROYECTO: DII Juan Echeverría
ELABORÓ: PT Herrera A

EMAIL:

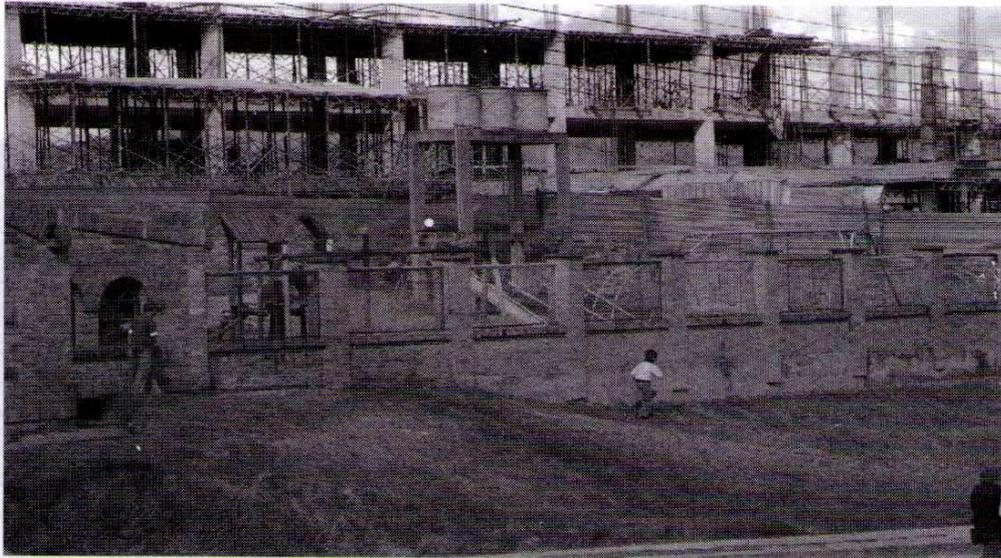
Avenida Caracás Nº 6- 05, piso 3º, teléfono 3360059



Construcción de la base en Sierra Morena junto a colegios



*El C.E.D Ciudad Bolívar
Centro de salud y salón comunal*



Jardín infantil junto a la base de policía de Sierra Morena

La grave situación de orden público que se vive en la zona hace pensar en el peligro inminente que soportan las construcciones aledañas a la estación de policía por la posibilidad bastante viable de un ataque por parte de grupos armados al margen de la ley. Leovigildo Riaño, Personero Local de Ciudad Bolívar reconoce que las Autodefensas y las FARC ejercen de hecho un control sobre ciertas zonas de la localidad, a través del miedo.¹

En múltiples ocasiones se ha señalado por parte de diferentes órganos estatales y así se encuentra establecido en tratados internacionales, que la construcción de las bases militares y comandos de policía debe respetar unos mínimos de distancia en relación con las construcciones residenciales e instituciones como escuelas y hospitales, dado que la población civil debe estar protegida en caso de presentarse alguna situación dentro del conflicto, que represente peligro para la población. En ese sentido ha evolucionado la normatividad de Derecho Internacional Humanitario.

Derechos Fundamentales Transgredidos:

La Carta Política de Colombia establece en su art. 11, que el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Con esa norma se protege el más fundamental de los derechos, el Derecho a la Vida.

Es evidente que la vida de los niños que van al Jardín Infantil «Cartagena de Indias», como la de los niños y jóvenes que van al colegio CEDID, y todas las

¹ Tomado de la publicación: Hacia dónde va Ciudad Bolívar, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, noviembre de 2004.

personas que acudan al Hospital Vista Hermosa I Nivel – UPA «Sierra Morena», en Ciudad Bolívar- Bogotá, tienen su vida en inminente peligro cuando estén en esos establecimientos, pues en cualquier momento la base de la policía cuya construcción se cuestiona con esta tutela puede ser objeto de un atentado o ataque. Esta afirmación no constituye una conjetura, es producto del análisis de la realidad que vive nuestro país, análisis que incluye lo que la experiencia enseña, esto es, que con frecuencia humildes personas que viven o estudian o que acuden a centros de salud en distintas regiones, son víctimas del enfrentamiento que sostiene la fuerza pública (militares y policía) con organizaciones armadas.

Por mandato constitucional, entonces, el Estado no puede poner en peligro la vida de las ciudadanas y ciudadanos, ni de ningún habitante de nuestro país, no aún con la intención de defender sus vidas, por cuanto *la Vida no se defiende poniendo en peligro la misma Vida*.

El mandato constitucional aludido está siendo violentado con la construcción de la base de la policía en el sitio donde se construye en Ciudad Bolívar; le corresponde, por consiguiente, a la autoridad judicial, hacer cumplir la ley, conminando al Ministerio de Defensa y al alcalde Mayor de Bogotá, para que no construyan ni pongan a funcionar la base de la policía en el sitio donde empezaron a construirla, ni en otro donde se ponga en peligro la vida de las personas.

El art. 67 de la C.N. protege el derecho a la educación, como derecho fundamental que es. Este derecho se pone en peligro inminente con la construcción de la base de la policía en Ciudad Bolívar, donde se está edificando, anexa a la Casa Vecinal «Cartagena de Indias» Jardín Infantil del ICBF y al lado del colegio CEDID. Ciertamente quedarán sin Jardín y sin colegio los niños, niñas y jóvenes, en la eventualidad de un ataque a la base mencionada, pues por estar prácticamente colindando con la base se verán afectadas las edificaciones escolares con las hostilidades.

Protocolo II de Ginebra.

Protección de la sociedad civil; protección especial a la población infantil.

El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), aprobado por el congreso de Colombia mediante Ley 171 de 1994, establece lo siguiente en sus artículos 4 y 13:

«ART. 4. Garantías fundamentales.

1°. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes. (...)

3°. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesitan..... (...)

ART. 13. Protección de la población civil.

1° La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes:

.....

2° No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.

3° Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación».

Es claro, que la construcción de una base o estación de policía es una operación militar, e incluso es una medida dentro de una estrategia policivo-militar dirigida a tener una mejor posición dentro de determinadas operaciones militares. En consecuencia, su construcción al lado de establecimientos educativos, centros de salud, acueductos y viviendas es violatoria de Derecho Internacional Humanitario, por poner en riesgo la vida y edificaciones de civiles.

No ser objeto de ataque la población civil implica no ponerla de blanco de ataque tampoco, que es lo que ocurre cuando se construyen bases o estaciones de policía o militares donde está la población civil, entre la cual la población infantil es la más afectada si se tiene en consideración que, por sus condiciones físicas y

sicológicas y por su absoluta falta de experiencia, no puede defenderse en condiciones de igualdad como lo haría un adulto, frente a cualquier ataque. No es razonable exigir a un menor que asuma el riesgo de perder su vida, sobre todo si dicho peligro puede evitarse o disminuirse; y allí se encuentra una de las más importantes responsabilidades de la sociedad y del Estado, como resulta, entre otras normas, del artículo 44 del Constitución.

La Corte considera que esa protección especial a los niños armoniza plenamente con la Constitución, puesto que no sólo ellos se encuentran en situación de debilidad manifiesta (CP art. 13) frente a los conflictos armados sino que, además, la Carta confiere prevalencia a los derechos de los niños (CP art. 44).²²

Sentencia SU-256/99. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.

En sentencia de unificación de criterios SU 256 de 1999 la Corte Constitucional hace un recuento de las posiciones que ha desarrollado hasta el momento, en el sentido de plantear que, si bien las Fuerzas Armadas tienen la obligación constitucional de resguardar bienes como la soberanía nacional y la estabilidad del gobierno vigente, es cierto también que los derechos y garantías fundamentales de la población infantil hacen parte de los bienes que sobre cualquier otro deben resguardar estos agentes del Estado, teniendo en cuenta además que se encuentran ceñidos a los convenios, tratados y demás instrumentos internacionales. El hecho de construir bases, y edificaciones de diferente índole que colinden con instalaciones civiles como colegios, jardines infantiles y centros de salud contradice entonces su función principal ya que por el estado del conflicto armado, estas instalaciones se convierten en un objetivo militar de los combatientes y ponen en riesgo innecesario y abusivo a la población civil que se encontraría en medio del fuego cruzado.

Consideramos que la construcción de la estación de policía pone en grave riesgo la vida y seguridad de los infantes que asisten al la Casa Vecinal «Cartagena de Indias» jardín infantil del ICBF, al Hospital Vista Hermosa I Nivel – UPA «Sierra Morena», al Colegio «CEDID», y la prestación del servicio básico de abastecimiento de agua potable por estar en cercanías del tanque del Acueducto del sector y de varias viviendas. Esta conducta de las autoridades de ubicar dicha instalación tan cerca de los centros indispensables para la población civil es arbitraria y contraria a la Constitución, por lo cual solicitamos que sea ordenado al Alcalde Mayor de Bogotá y al responsable en el Ministerio de Defensa que CESE LA

² Sentencia SU-256/99. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA, y QUE SEA ORDENADA SU REUBICACIÓN EN UNA ZONA ALEJADA DE LA ZONA RESIDENCIAL, DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS, LOS CENTROS DE SALUD Y LAS RESERVAS DE AGUA POTABLE.



Base Militar Ciudadela Sucre



Distribución de agua junto a la base

Desde mediados de los años '90 se encuentra funcionando en el Barrio San Rafael, Ciudadela Sucre, Cazuca una Base Militar conocida con el mismo nombre. Esta Base fue ubicada en el sector por la «situación de inseguridad» que se presentaba en la zona, argumento utilizado ya en varias ocasiones por el Ministerio de Defensa para justificar cualquier violación a los derechos humanos de las poblaciones.

La Base Militar se encuentra ubicada muy cerca de el Centro de Salud de Ciudadela Sucre, del Colegio Fe y Alegría, el Liceo Pedagógico Alegría y del Colegio Nazareno, construcciones que rodean totalmente la mencionada Base Militar.

El documento de la Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como consecuencia del Conflicto Armado-Sistema de Alertas Tempranas, del 13 de Marzo del 2004, que corresponde a un estudio del riesgo que corre la población de Cazuca por el conflicto armado, da cuenta del hecho inobjetable, de estar la población civil de Cazuca en inminente riesgo por el

enfrentamiento allí existente entre grupos subversivos, paramilitares y fuerza pública.

La Carta Política de Colombia establece en su art. 11, que el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Con esa norma se protege el más fundamental de los derechos, el Derecho a la Vida.

Es evidente que la vida de los niños que van al Colegio Fe y Alegría, al Liceo Pedagógico Alegría y al Colegio Nazareno, así como las personas que asisten al Centro de Salud de Ciudadela Sucre en Cazucá, tienen su vida en inminente peligro cuando estén en esos establecimientos, pues en cualquier momento la base militar cuya localización puede ser objeto de un atentado o ataque.

Por mandato constitucional, entonces, el Estado no puede poner en peligro la vida de las ciudadanas y ciudadanos, ni de ningún habitante de nuestro país, no aún con la intención de defender sus derechos.

Protocolo II de Ginebra.

Protección de la sociedad civil; protección especial a la población infantil.

El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), aprobado por el congreso de Colombia mediante Ley 171 de 1994, establece lo siguiente en sus artículos 4 y 13:

«ART. 4. Garantías fundamentales.

1°. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes.

(...)

3°. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten.....,.....

(...)

ART. 13. Protección de la población civil.

1° La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes:

.....

2° No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.

3° Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación».

Es claro, que la construcción de una base militar es una operación militar, e incluso es una medida dentro de una estrategia policivo-militar dirigida a tener una mejor posición dentro de determinadas operaciones militares. En consecuencia, su construcción al lado de establecimientos educativos, centros de salud, acueductos y viviendas es violatoria de Derecho Internacional Humanitario, por poner en riesgo la vida y edificaciones de civiles.

Artículos Vulnerados.**1. Derechos Fundamentales de los Niños:**

ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

ARTICULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibra-

da, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

ARTICULO 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas

el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.

ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia

Protocolo de Ginebra II -Protección especial a la población infantil

«Protocolo Adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)», hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977, y aprobado mediante Ley 171 de 1994, establece lo siguiente en sus artículos 4 y 13:

«ARTÍCULO 4. Garantías fundamentales.

1°. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes.

(...)

3°. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en particular:

a) recibirán una educación, incluida educación religiosa o moral, conforme a los deseos de los padres o, a falta de éstos, de las personas que tengan la guarda de ellos;

(...)

ARTÍCULO 13. Protección de la población civil.

1° La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.

2° No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.

3° Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación».

Tomado de la publicación: Hacia dónde va Ciudad Bolívar, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, noviembre de 2004.

Casos de Ciudad Bolívar y Cauca
Bogotá, Colombia
Convocatoria
Noviembre 24 y 25 de 2006

Oficina de prensa Congreso de la República

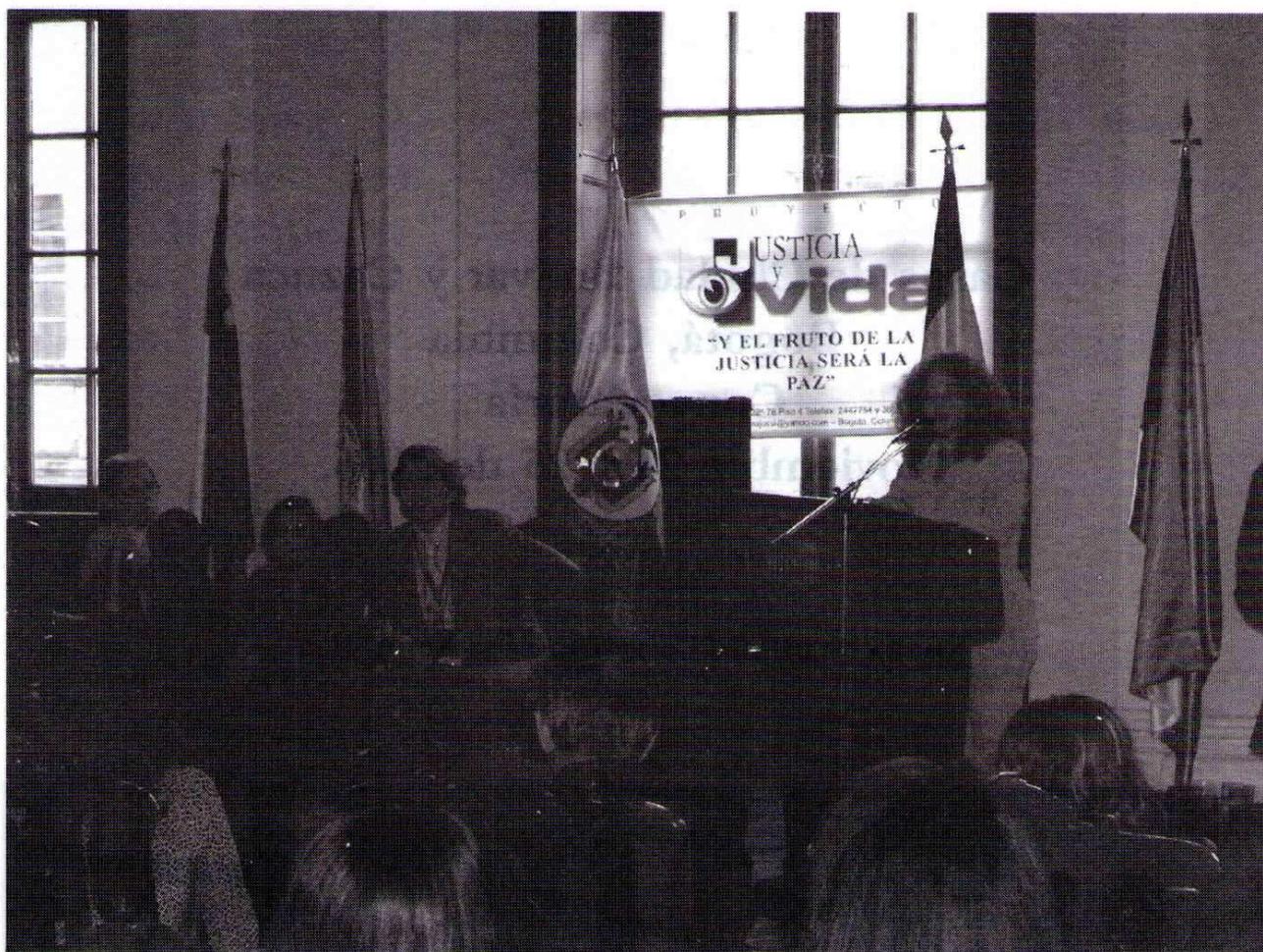
6

**TRIBUNAL INTERNACIONAL CONTRA LA
IMPUNIDAD**

**Casos de Ciudad Bolívar y Cazucá
Bogotá, Colombia
Convocatoria
Noviembre 24 y 25 de 2006.**

Rueda de prensa Congreso de la República





Rueda de prensa Congreso de la República

El tribunal contra la impunidad pertenece al género de los tribunales de opinión, que no reciben su investidura de ningún poder estatal, sino de la conciencia ética de la humanidad, expresada en personalidades eminentes, dotadas de reconocida competencia y destacados en alguna área específica de trabajo alrededor del mundo. El tribunal recibe acusaciones, las somete a un análisis riguroso y emite sentencias o dictámenes finales.

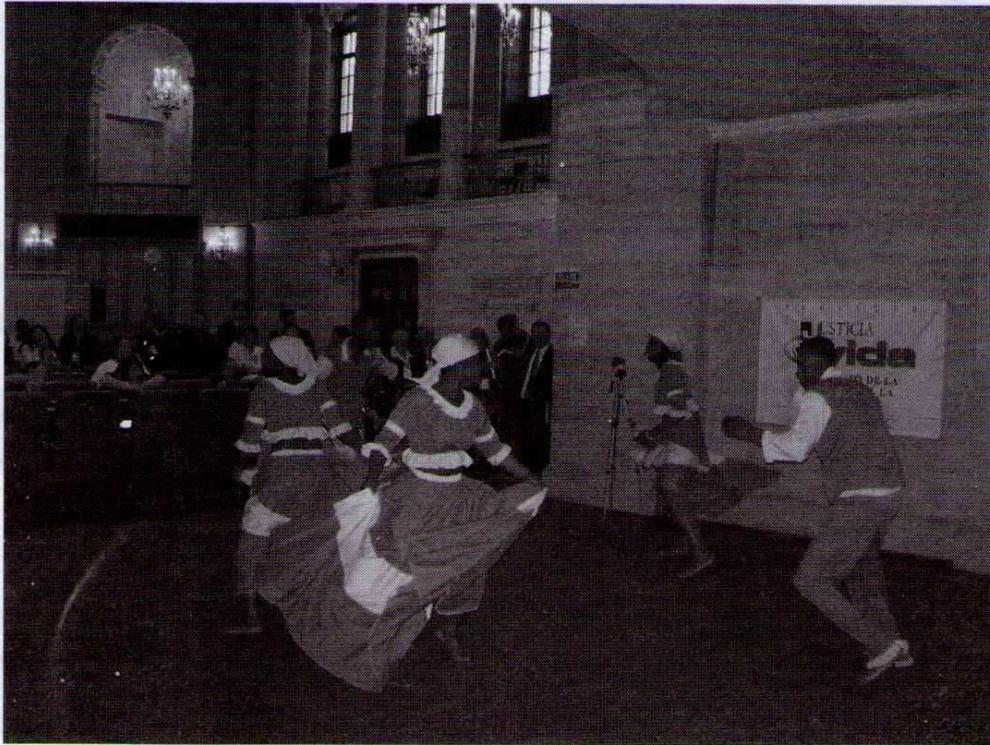
El tribunal es impulsado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado que nació el 25 de junio de 2005 durante el Segundo Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos; cuatro días después de la aprobación por parte del congreso colombiano de la Ley 975 de 2005, o ley de impunidad.

El Movimiento es fruto de un extenso acumulado histórico de luchas de las víctimas por los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral en Colombia.

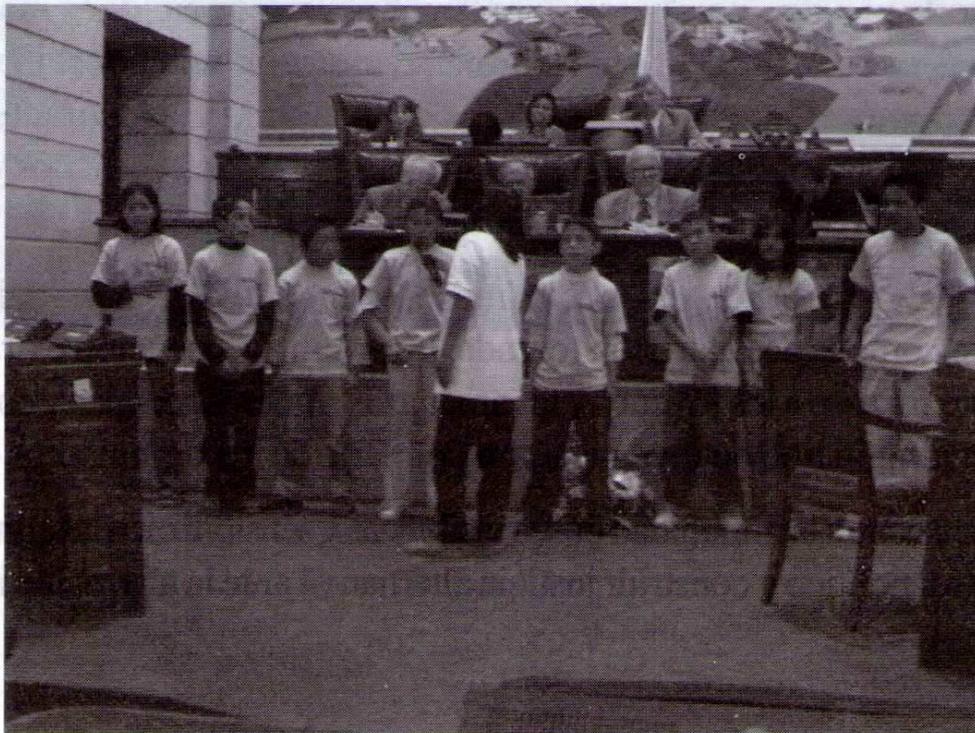
El tribunal cuenta con la participación de organizaciones sociales y no gubernamentales de Ciudad Bolívar y Cazucá comprometidas con la defensa de la vida y de lucha contra la impunidad.

Por que un Tribunal en Ciudad Bolívar y Cazucá

Expresiones artísticas juveniles durante las secciones del Tribunal



Expresiones artísticas juveniles durante las secciones del Tribunal





Expresiones artísticas juveniles durante las secciones del Tribunal

Ciudad Bolívar y Cazucá son dos sectores al sur de Bogotá que se encuentran conectadas e interrelacionadas física, social y económicamente donde se presentan los mayores índices de recepción de población desplazada que llega a Bogotá y Soacha de todo el país a convivir y sobrevivir en las condiciones más adversas. Las limitadas oportunidades y la estigmatización son una constante hacia sus pobladores. Según el informe presentado por Justicia y Vida, durante el periodo enero de 2004 y marzo de 2005, más de 170 jóvenes fueron asesinados y solamente en el 1% de los casos, se adelantó algún tipo de investigación.

En la actualidad las altas tasas de crímenes cometidos directa e indirectamente por el Estado como la desaparición forzada, la tortura, la ejecución extrajudicial, el reclutamiento forzoso a los jóvenes y las amenazas a líderes sociales y comunitarios, continua sin ningún tipo de investigación por parte de los organismos de control.

El tribunal contra la impunidad busca visibilizar y sensibilizar a la opinión pública, realizar control político y construir justicia alternativa ante la alarmante impunidad.

Lugar:

Salón Elíptico

Capitolio Nacional

Convocantes:

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de Colombia

Organizaciones Sociales de Ciudad Bolívar y Cazucá

Proyecto Justicia y Vida





**VEREDICTO DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL
CONTRA LA IMPUNIDAD
Casos de CIUDAD BOLIVAR Y CAZUCA
Bogotá, Colombia
Noviembre 25 de 2006.**

**Apertura del Tribunal
Jueces en la deliberación del Tribunal**

1. Durante los dos días de sesión del Tribunal contra la impunidad, Nov. 24 y 25 de 2006 en el salón Elíptico del Congreso de la República de Colombia, los jueces han conocido la dramática violación de los derechos humanos más fundamentales, los crímenes contra la humanidad que se han cometido y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas.

Muchos habitantes de Ciudad Bolívar y Cazucá son víctimas de esta práctica sistemática y violenta del uso del terror y la intimidación que privan a personas de su vida, su hogar, sus propiedades y su tierra.

Además hay evidencia innegable de la práctica de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas, abusos sexuales e intimidación por parte del ejército, la policía y grupos paramilitares en esta zona. Hay que subrayar que especialmente los niños, niñas y jóvenes son blanco específico de los abusos. La situación representa una política y práctica intencional y una estrategia de los órganos del Estado, valiéndose de la represión contra la población civil directamente o por medio de estructuras paramilitares, en su avanzada por consolidar un proyecto social económico y militar.

Los crímenes contra la población de Ciudad Bolívar y Cazucá no son actos aislados ni representan las consecuencias secundarias ni indirectas del conflicto armado. Van mas allá de las realidades de violencia urbana que existen en muchas ciudades del mundo y por lo tanto, constituyen una modalidad de violencia específica ligada a intereses económicos, políticos y militares, nacionales e internacionales.

Los crímenes son entonces del orden de Lesa Humanidad; comprenden violaciones sistemáticas de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad física y además violación a los derechos económicos, sociales y culturales. Las violaciones son tan numerosas y engloban a tantas personas que no se puede exonerar la responsabilidad del Estado de Colombia que según las leyes nacionales e internacionales tiene la obligación absoluta de proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos.

2. En consecuencia, el Tribunal Internacional contra la Impunidad declara que:

La responsabilidad del Estado colombiano está fundada en el desconocimiento grave e injustificado de su deber de garantizar los derechos fundamentales, dado que es obligación del Estado proteger a sus ciudadanos, el no cumplir esta obligación lo convierte en responsable del mas grave crimen que ha costado la vida de muchas personas y ha incrementado la pena y miseria de miles y miles de otras mas.

Igualmente, el Estado Colombiano es culpable de forma directa, por sus políticas socio-económicas, militares y del accionar de su fuerza pública y sus organismos de seguridad y de hacer uso excesivo de la fuerza.

Esto se concreta en ocurrencia de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado incluso intraurbano, torturas, abusos sexuales, intimidación, privación arbitraria de la libertad, limitación de la libertad de movilización, de asociación y de libre expresión, y de no atender las necesidades básicas de la población para gozar de una vida digna.

La complicidad del Estado en Crímenes de lesa Humanidad y violaciones graves a los derechos humanos fundamentales, representa, tanto las acciones directas de agentes estatales como la existencia de los grupos paramilitares, quienes son apoyados y legitimados por las autoridades y organismos de control. El Estado es culpable de complicidad por sus acciones directas y no menos por permitir e incentivar las acciones de los paramilitares quienes actúan efectivamente como agentes activos y pasivos de la política del Estado y es culpable de la flagrante situación de impunidad.

Fuera de la falta de protección a sus ciudadanos más vulnerables y de la comisión de crímenes de Lesa Humanidad, el Estado falta a su obligación de sancionar y corregir las situaciones y asegurar que los crímenes no se repitan. Es asombroso hasta el extremo el régimen de total impunidad en lo que respecta a la situación de violaciones de los derechos humanos y el infierno de terror que experimentan las comunidades de Ciudad Bolívar y Cazucá. Las víctimas y sus voceros mayoritariamente no son escuchados; sus denuncias no son tomadas en cuenta y las investigaciones no se hacen o no dan resultados. Los autores no son procesados y mucho menos sancionados. Las víctimas y sus familiares son sobornados, intimidados o silenciados, los crímenes son ocultados o justificados como si fueran producto de la delincuencia común o como si fuera efecto del conflicto armado.

La impunidad es un grave crimen en si mismo. No se trata sólo de una actitud pasiva frente a los crímenes de Lesa Humanidad. Es una institucionalización activa de la injusticia. La impunidad es justificada falsamente como un mal necesario para lograr la “pacificación” pero la paz no es posible sin la justicia y la justicia no es posible sin la verdad. Al contrario se promueve un Estado de impunidad denegando los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y la garantía de no repetición.

3. El jurado toma en cuenta el contexto sociopolítico de Colombia incluyendo la existencia del conflicto armado interno. El Tribunal no ignora la existencia de insurgencia en el país, a pesar de que no se comprobó la participación de la misma en los abusos de Ciudad Bolívar y Cazucá.

El gobierno considera que la insurgencia es la causa del fenómeno paramilitar, sin embargo, existen documentos que demuestran que la estrategia paramilitar fue adoptada antes de que existieran las guerrillas actuales. Por otra parte el argumento de la lucha contrainsurgente no tiene aplicación en la comisión de abusos cometidos en las localidades de Ciudad Bolívar y Cazucá.

Sin justificar la prolongación de la lucha armada, el Tribunal afirma que el conflicto armado es, en sí mismo un síntoma de la estructura social y económica caracterizada por la injusticia social. La existencia de grupos insurgentes ha correspondido en general a la pobreza generalizada, la falta de oportunidades y la desigualdad social; así como a la imposición de un modelo económico a favor de los intereses de empresas transnacionales y la inversión extranjera que beneficia a la clase más poderosa. Es este el origen principal de las violaciones a los derechos fundamentales y de los crímenes hacia las comunidades.

4. Este Tribunal encuentra culpable no sólo al Estado colombiano sino también a la comunidad internacional y a las empresas transnacionales, quienes son cómplices por apoyar y financiar las políticas y prácticas del Estado colombiano de guerra sucia.

Los Estados Unidos son culpables dado su apoyo político y financiero por vía del Plan Colombia y del actual Plan Patriota, el cual bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, impuso un modelo de explotación económica y social que ha generado el desplazamiento masivo de la población rural de varias regiones del país, muchos de los cuales son habitantes de Ciudad Bolívar y Cazucá.

Los Estados Unidos son culpables por financiar y asesorar a las fuerzas Militares de Colombia quienes son autores materiales de muchos de los crímenes que aquí se han denunciado, más grave aún, es que los Esta-

dos Unidos aprovechan económicamente esta situación para lograr contratos en diversas áreas.

Los Estados Unidos son culpables de haber impedido una solución negociada al conflicto armado, al imponer a los grupos insurgentes la categoría de grupos terroristas y así descartar las soluciones no militares del conflicto.

La Unión Europea también es culpable de complicidad por su promoción y financiamiento de la Ley de Justicia y Paz y el sistema de reinserción, puesto que ambos instrumentos permiten que el accionar impune de los paramilitares se perpetúe continuando con el control social, militar y económico que ejerce y seguirá ejerciendo en el sector. Dejar a los autores sin sanciones reales es una clara institucionalización de la impunidad.

Otros países también son responsables por la violación de derechos humanos en Colombia, tal como Canadá, puesto que apoya el proceso de desmovilización y legitima así el reino de la impunidad.

Empresas transnacionales de los Estados Unidos, Canadá Bélgica y Suiza, en Colombia son responsables de esta situación, no solamente por la explotación destructiva del medio ambiente aquí y en otras partes del mundo, sino también por ser cómplices del aparato paramilitar en el país. En esta situación generalizada de violación de derechos humanos se observan las secuelas de un proyecto económico doméstico impuesto violentamente, y al mismo tiempo las consecuencias de la política extranjera, específicamente en los resultados devastadores de la lógica neoliberal, en particular la imposición del Plan Colombia y el Plan Patriota.

5. Por eso el Tribunal condena al Estado Colombiano, representado por el presidente, el señor Álvaro Uribe Vélez por no cumplir su obligación de proteger a los ciudadanos y no garantizar el goce de sus derechos fundamentales; por complicidad en violaciones de los derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales; por mantener un aparato de impunidad al no investigar, perseguir y castigar a los criminales; por no corregir el sistema de justicia y asegurar que los crímenes no se vuelvan a repetir, y por imponer un modelo económico a costa de la vida digna de los pobres.

Condena a los grupos paramilitares de la zona, específicamente a los bloques Capital y Centauros y sus líderes por crímenes contra la humanidad y por imponer un estado de terror contra la población civil.

Condena a los aparatos represivos del Estado de Colombia por crímenes de Lesa Humanidad y por no cumplir su deber de respetar la ley, específicamente el Ejército, la Policía Nacional, el DAS y el ESMAD.

Condena a la Fiscalía General de la Nación por no cumplir con su obligación de investigar denuncias y proteger a las víctimas y a los testigos.

Al Ministerio del Interior por omitir su obligación de proveer seguridad a la población en situación de desplazamiento forzado y por no proveer adecuada ayuda humanitaria.

Finalmente el Tribunal subraya también la responsabilidad política de las alcaldías de Soacha y de Bogotá por no proveer a la población la infraestructura necesaria para una vida digna acorde a sus derechos fundamentales.

A las empresas: Cemex de México; Holcim de Suiza y Ladrillera Santa Fe por la destrucción del medio ambiente y por la complicidad en imponer un modelo económico y colaborar con estructuras paramilitares que destruyen el tejido social y violan los derechos de los ciudadanos.

Otros países de la comunidad internacional, condenados por su complicidad en apoyar al gobierno Colombiano en la imposición de un modelo económico y militar, por apoyarlo con su financiación y por la legitimación política y moral, específicamente países europeos.

El Tribunal contra la impunidad hace directamente responsable al Estado colombiano en caso de que alguna de las personas que hicieron parte de este Tribunal sea hostigada, perseguida o vulnerada en su integridad, vida o seguridad personal.

Dado a los 25 días del mes de noviembre de 2006.

Padre Francois Houtart	Bélgica
Padre Javier Giraldo	Colombia
Dr. Chistopher Ferguson	Canadá
Dra. Carmen Karagdag	Filipinas

- | | |
|------------------------|----------------|
| Dr. Orlando Fals Borda | Colombia |
| Dra. Patricia Dahl | Estados Unidos |
| Dr. Alexis Ponce | Ecuador |
| Obispo James Decker | Canadá |

Organizadores: Proyecto Justicia y Vida, Organizaciones Sociales de Ciudad Bolívar y Cazucá, Comisión de Derechos Humanos del Senado.

**Informes: Justicia y Vida Tel: 2447754 projusvi@yahoo.com
www.justiciayvida.org**



Jueces al finalizar la lectura del fallo del Tribunal

Tribunal examinó casos de Ciudad Bolívar y Cauzá

Otra condena al Estado

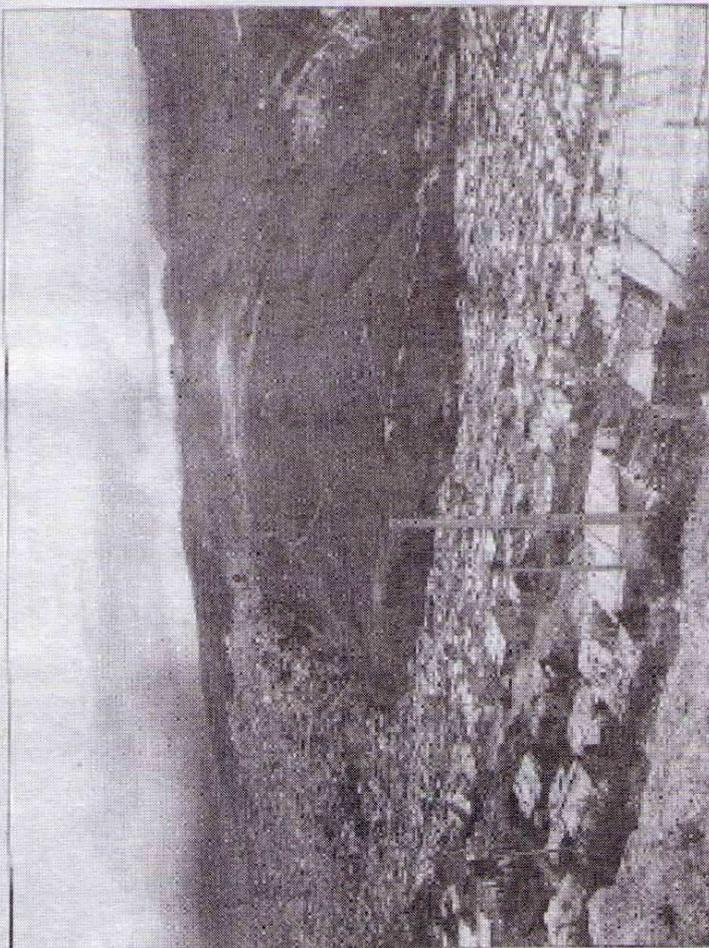
Siete jueces internacionales encontraron responsable a Colombia de la crisis humanitaria al suroccidente de Bogotá. Dicen que E.U. y transnacionales propician violencia.

UNIDAD DE PAZ

Los crímenes contra la población de Ciudad Bolívar y Cauzá, en el suroccidente de Bogotá, no son hechos aislados, sino que constituyen una modalidad de violencia ligada a intereses económicos, políticos y militares transnacionales e internacionales.

Sobre esta base, el Tribunal Internacional Contra la Impunidad condenó al Estado colombiano y a la vez cuestionó a las alcaldías de la capital de la República y de Soacha (Cundinamarca), por no proteger a los desplazados de estas comunidades y zonas urbanas la infraestructura necesaria para una vida digna.

Según el fallo, Colombia es responsable de no garantizar las



ABRIL 2006. EL SUROCCIDENTE DE BOGOTÁ.

derechos fundamentales y tampoco garantizar sanciones a los autores de delitos de crímenes, de aplicar políticas socioeconómicas y uso excesivo de la fuerza pública en contra de sectores vulnerables de la población civil. El arguismo igualmente cuestionó el hecho de que no se tomaran las acciones de los grupos paramilitares que operan en estas dos localidades.

Este Tribunal encontró culpa

de no sólo al Estado colombiano, sino también a la comunidad internacional y a las empresas transnacionales de Estados Unidos, Canadá, Bélgica y Suiza en Colombia. Reprochó a la vez a E.U. por financiar los planes Colombia y Patriota, que de acuerdo con los jueces internacionales, propiciaron el desplazamiento de la mayoría de habitantes de estas localidades.

En el texto de siete páginas, el

Tribunal responsabiliza a Washington de haber impedido una solución negociada al conflicto armado, al imponer a los grupos insurgentes la categoría de terroristas y así desvirtuar las soluciones militares del conflicto.

Las condiciones no sólo se extendieron a la comunidad internacional sino también a los bloques Capital y Consumos, por crímenes contra la humanidad y por imponer un estado de terror

Desacato a la Corte

La sanción del Tribunal Internacional contra la Impunidad dio momentos que la Corte Constitucional abrió un incidente de desacato porque el Gobierno no atendió la orden, a través una estrategia de tutela de 2004, de buscar fórmulas reales y atender el fenómeno del desplazamiento en nuestro país. La determinación de la Corte se tomó con base en un informe la Procuraduría General de la Nación, quien sostuvo que no tanto los diversos programas del Gobierno, la información suministrada por las diferentes entidades oficiales no aportan meritos que permitan verificar que estos programas hayan tenido efectos en la disminución del desplazamiento.

Este y otros cuestionamientos sirvieron de sustento para el Corte Constitucional abrir el incidente de desacato y remitir al Jefe Quinto Civil de Bogotá el informe del Ministerio Patricia Devés Ruiz, directora de Orden Público del Ministerio del Interior, el subgerente de Ordenamiento Social de esa misma, los funcionarios y contrainformistas de Acción Social, resabados de las víctimas del desplazamiento.

contra la población civil.

LOS TESTIMONIOS

La determinación del Tribunal se dio luego de escuchar 21 testimonios de habitantes, con quienes se documentaron casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario, capturas y detenciones ilegales y control territorial por parte de paramilitares.

El arguismo internacional, que sesionó en el Capitolio Nacional los días 24 y 25 de noviembre, fue convocado por el Movimiento Nacional de Vigilancia de Crímenes de Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, las organizaciones sociales de Ciudad Bolívar y Cauzá, y el Proyecto Justicia y Vida, quienes denunciaron la muerte de unas 600 personas.

Aunque el fallo es simétrico y

sin efectos jurídicos, la determinación constituye una acción moral y pública internacional en contra del Estado. El fallo estuvo compuesto por jueces: François Houtart (Bélgica), como presidente; Jøvel Giralde, vicepresidente; Carmen Karling, el primer Patricia Dahl, de los Estados Unidos; Alexis Ponce Ecuador; James DeGard, de Irlanda; Fals Borda, de España; Fiscal Christopher Ferrus Suiza; Adicionalmente, 9 paraba la asistencia de representantes del Estado colombiano, que no se presentaron a fiscal la política de seguridad internacional y sus efectos.

No es la primera vez que la Corte Internacional de Justicia ha sancionado al Tribunal de Estrasburgo. También hubo sanciones por los del bombardeo al corregimiento de Santo Domingo de Guzmán y las masacres de Barrancabermeja y San José.

ASESINATO DE JOVENES EN ALTOS DE CAZUCA

Denuncia pública emitida por la Mesa de Trabajo de ONG de Altos de Cazuca, sobre el ASESINATO DE 2 JOVENES Y LA TENTATIVA DE HOMICIDIO DE OTRO en el sector de ALTOS DE CAZUCA, comuna 4 del Municipio de SOACHA.

HECHOS:

1. El día miércoles 11 de Mayo de 2005, entre las 7:30 y 8:00 de la noche, cinco hombres vestidos de civil y fuertemente armados (según miembros de la comunidad estas personas son presuntos paramilitares), patrullaban por los calles de la zona baja del Barrio El Oasis en el sector de Altos de Cazuca de la Comuna 4 del Municipio de Soacha, requiriendo a los transeúntes y exigiéndoles la presentación de sus documentos de identificación.

2. En el recorrido, dos de estos cinco hombres, ingresaron a uno de los negocios del sector, abordaron a dos jóvenes -que posteriormente fueron asesinados-, les exigieron la presentación de su documento de identidad y los inquirieron sobre el porqué se encontraban fuera de su casa a esa hora. El joven MICHAEL GUERRA DIAZ, opuso resistencia a dicha solicitud y en respuesta los cinco hombres le propina una herida en el rostro con un machete.

3. En ese momento, ingresa en el local un tercer joven, quien saluda a los dos jóvenes forzosamente retenidos y a quien los hombres que estaban allí lo abordan y le dicen que él también tendrá que ir con ellos.

4. En el recorrido hacia la avenida principal del barrio El Oasis, según versiones de la comunidad, los cinco sujetos hirieron en repetidas oportunidades a los tres jóvenes en diferentes partes del cuerpo con machetes y una cuadra antes de llegar a la avenida principal, los jóvenes son obligados a acostarse en la calle y allí, en estado de indefensión, los

ANEXOS

Proyecto de Investigación Social

ASESINATO DE JOVENES EN ALTOS DE CAZUCA

Denuncia pública emitida por la Mesa de Trabajo de ONG de Altos de Cazucá, sobre el ASESINATO DE 2 JÓVENES Y LA TENTATIVA DE HOMICIDIO DE OTRO en el sector de ALTOS DE CAZUCA, comuna 4 del Municipio de SOACHA

HECHOS:

1. El día miércoles 11 de Mayo de 2005, entre las 7:30 y 8:00 de la noche, cinco hombres vestidos de civil y fuertemente armados (según miembros de la comunidad estas personas son presuntos paramilitares), patrullaban por las calles de la zona baja del Barrio El Oasis en el sector de Altos de Cazucá de la Comuna 4 del Municipio de Soacha; requiriendo a los transeúntes y exigiéndoles la presentación de sus documentos de identificación.

2. En el recorrido, dos de estos cinco hombres, ingresaron a uno de los negocios del sector, abordaron a dos jóvenes -que posteriormente fueron asesinados-, les exigieron la presentación de su documento de identidad y los inquirieron sobre el porqué se encontraban fuera de su casa a esa hora. El joven MICHAEL ARANDA DÍAZ opuso resistencia a dicha solicitud y en respuesta uno de los hombres le propina una herida en el rostro con un machete.

3. En ese momento, ingresa en el local un tercer joven, quien saluda a los dos jóvenes forzosamente retenidos y a quien los hombres que estaban allí lo abordan y le dicen que él también tendrá que ir con ellos.

4. En el recorrido hacia la avenida principal del barrio El Oasis, según versiones de la comunidad, los cinco sujetos hirieron en repetidas oportunidades a los tres jóvenes en diferentes partes del cuerpo con machetes y una cuadra antes de llegar a la avenida principal, los jóvenes son obligados a acostarse en la calle y allí, en estado de indefensión, les

propinan tiros de gracia. Uno de los jóvenes logra sobrevivir y su diagnóstico médico es reservado.

5. Hacia las 8:15 de la noche, cerca de la avenida principal del barrio El Oasis por donde transitan los vehículos de servicio público, miembros de la Policía Nacional hacen el levantamiento de los cuerpos de los jóvenes.

6. Es de anotar que el joven OMAR ERMINSON HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (16 AÑOS), era personero estudiantil de su colegio.

7. Unas semanas antes, sujetos que según miembros de la comunidad presuntamente hacen parte de grupos de paramilitares, visitaron escuelas del sector, hablaron con docentes y directivas y les notificaron que hablaran con los y las estudiantes, para que se abstuvieran de transitar por las calles de la zona después de las 8 de la noche, porque de lo contrario ellos tomarían medidas.

8. Estos eventos se suman a los homicidios selectivos de jóvenes y a las recurrentes amenazas a líderes y lídereszas sociales de la zona de Altos de Cazucá, a los desplazamientos intraurbanos y extorsiones a los comerciantes locales durante los últimos meses.

9. Algunas personas de la comunidad, comentan que en la misma noche del 11 de Mayo de 2005, en la parte alta del barrio El Oasis, fue asesinado otro joven, de quien hasta el momento se desconoce la identidad y edad, así mismo se dice que esa noche fueron asesinados otros jóvenes, pero hasta el momento no se tiene información exacta del total de personas, su identidad y las circunstancias que rodearon estos hechos. Además, se comenta que circula una lista con nombres de jóvenes, posibles víctimas de conductas similares.

Es esta la oportunidad de reiterar que a pesar de que frente a la grave situación de violación de derechos humanos que se presenta en el sector de Altos de Cazucá, la Defensoría del Pueblo - Regional Cundinamarca, ha expedido Alertas Tempranas; así mismo, las Organizaciones No Gubernamentales que tienen trabajo en esta zona del Municipio de Soacha, han denunciado el asesinato sistemático de

jóvenes y líderes sociales residentes en este sector ante los organismos del Estado, la Comunidad Internacional y Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, y han solicitado la investigación de estos hechos criminales y el castigo justo a los responsables, sin que hasta la fecha hayan cesado los actos de violencia contra jóvenes y líderes sociales.

Es por ello que SOLICITAMOS a las autoridades competentes y responsables de garantizar y proteger los derechos humanos por parte del Estado Colombiano lo siguiente:

1. Ordenar inmediatamente una investigación independiente e imparcial sobre las circunstancias que rodearon la muerte de MICHAEL ARANDA DÍAZ (14 AÑOS) y OMAR ERMINSON HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (16 AÑOS) y la tentativa de homicidio y lesiones graves que tienen al borde de la muerte al joven JAVIER VARGAS (19 AÑOS), con el fin de identificar a los culpables, llevarlos ante un tribunal competente y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley a las que haya lugar.

2. Garantizar a las familias de los jóvenes MICHAEL ARANDA DÍAZ, OMAR ERMINSON HERNÁNDEZ MARTÍNEZ y JAVIER VARGAS, sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.

3. Adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de la víctima sobreviviente y sus familiares, al igual que a los familiares de los dos jóvenes asesinados y de los y las demás habitantes del sector de Altos de Cazucá Comuna 4 del Municipio de Soacha, y de esta manera poner fin a los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufren todos los habitantes de esta zona por cuenta de los actores armados que operan en el sector, y evitar que continúen las ejecuciones de los jóvenes y líderes sociales y comunitarios.

4. A la Alcaldía Municipal de Soacha y a la Gobernación de Cundinamarca, que desplieguen un plan de protección de la vida de los jóvenes y líderes sociales de Altos de Cazucá.

5. A los organismos de control: Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Personería el seguimiento y acompañamiento de las acciones que propendan por la defensa de los derechos y garantías fundamentales de la comunidad.

Convocamos a la comunidad defensora de los derechos humanos, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, a apoyar este llamado dirigiendo comunicaciones a las autoridades para solicitar que se adopten medidas urgentes y con continuidad para preservar la vida e integridad personal de los habitantes de Altos de Cazucá.

Bogotá D.C., 13 de Mayo de 2005

- MESA DE TRABAJO DE ONG DE ALTOS DE CAZUCÁ

Proyecto Justicia y Vida

Comunicado por el asesinato de cuatro jóvenes en el sector de altos de Cazucá, Comuna 4 del municipio de Soacha (Cundinamarca)

20 Agosto de 2004

La Mesa de Trabajo de ONGs y Organizaciones Sociales de Altos de Cazucá y la Mesa de Interlocución, Gestión y Desarrollo de Soacha y Cundinamarca, y FIDHAP DENUNCIAMOS ante la opinión pública nacional e internacional, la comunidad defensora de Derechos Humanos, los organismos de justicia y control del Estado colombiano y ante los medios de comunicación, el asesinato de CUATRO JOVENES identificados: MARIO ANDRES RODRÍGUEZ MACÍAS (20 años); WILLIAM RIVAS PINO (15 años); JAIME LEON GARCÍA (16 años) y CARLOS ANDRES GARZON PEÑA (20 años), habitantes del barrio El Arroyo de Altos de Cazucá Comuna 4 del Municipio de Soacha.

Es indignante que a solo tres horas de la terminación de la Audiencia Pública sobre la grave situación de derechos humanos del sector de Altos de Cazucá que se llevó a cabo en el Congreso de la República, donde los altos mandos de las fuerzas militares aseguraron que esta zona, tiene una fuerte presencia del Estado (no tiene sitios vedados) y registra una alta disminución de los niveles de criminalidad gracias a su accionar, siete jóvenes se ven involucrados en circunstancias que hasta el momento le ha costado la vida a cuatro de ellos.

HECHOS:

1. El 19 de Agosto de 2004, en el barrio Altos del Pino del sector de Altos de Cazucá a la altura del Depósito San Pedro, siendo aproximadamente las 8:50 de la noche, cuatro hombres fuertemente armados, interceptaron a 6 jóvenes que venían del Barrio La Isla del mismo sector de comprar materias primas para panadería, porque dos de ellos trabajaban en la panadería del Barrio El Arroyo.
2. En aras de evadir la acción de los sospechosos, los 6 jóvenes bajaron por una de las cuadras del barrio y a una distancia de 200 metros del lugar del primer encuentro, fueron nuevamente interceptados (cancha de microfútbol Barrio Altos del Pino) por los mismos cuatro hombres,

quienes una vez los tenían en fila y los habían requisado, los obligaron a tirarse al piso uno a uno.

3. En la acción el sexto joven, observó que uno de los hombres se encontraba armado y le apuntaba al primero de la fila. En ese momento, el quinto joven le dijo que corrieran, y este último se botó cuadra abajo, y el sexto logró escabullirse y no ser asesinado.

4. Una vez se le informa a algunos miembros de la comunidad del barrio El Arroyo de los acontecimientos sucedidos en el Barrio Altos del Pino, un grupo de personas se dirigió al sitio y encontró los cuatro jóvenes heridos con arma de fuego, a la altura de la cabeza, en otras palabras, los jóvenes habían recibido tiros de gracia.

5. Inmediatamente los cuatro jóvenes fueron trasladados al Hospital Mario Gaitán Yanguas, donde tres de ellos fueron declarados muertos y a uno de ellos le diagnosticaron muerte cerebral y será desconectado en la tarde del viernes 20 de Agosto de 2004.

6. Por otra parte, según versiones de pobladores del Municipio de Soacha, a eso de las 10:10 p.m., arribaron al mismo hospital miembros del Ejército Nacional, llevando tres jóvenes heridos por arma de fuego, procedentes del Barrio Minuto de Dios del Sector Altos de Cazucá. En este momento se desconoce el estado de salud de los mismos.

2. Frente a la grave situación de violación de derechos humanos que se presenta en la zona de Altos de Cazucá, la Defensoría del Pueblo - Regional Cundinamarca, ha expedido Alertas Tempranas; así mismo, las Organizaciones No Gubernamentales que tienen trabajo en esta zona del Municipio de Soacha, han denunciado el asesinato sistemático de jóvenes y líderes sociales residentes en este sector, ante los organismos del Estado, la Comunidad Internacional y Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, y han solicitado la investigación de estos hechos criminales y el castigo justo a los responsables.

Es por ello que SOLICITAMOS a las autoridades competentes y responsables de garantizar y proteger los derechos humanos por parte del Estado Colombiano lo siguiente:

1. Ordenar inmediatamente una investigación independiente e imparcial sobre las circunstancias que rodearon la ejecución de MARIO ANDRES RODRÍGUEZ MACÍAS; WILLIAM RIVAS PINO; JAIME LEON GARCÍA y CARLOS ANDRES GARZON PEÑA, con el fin de identificar a los culpables, llevarlos ante un tribunal competente y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.

2. Garantizar a la familia de MARIO ANDRES RODRÍGUEZ MACÍAS; WILLIAM RIVAS PINO; JAIME LEON GARCÍA y CARLOS ANDRES GARZON PEÑA, su derecho a recibir una adecuada reparación.

3. Adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de los y las habitantes del sector de Altos de Cazucá Comuna 4 del Municipio de Soacha, y de esta manera poner fin a los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufren todos los habitantes de esta zona por cuenta de los actores armados que operan en el sector, y evitar que continúen las ejecuciones de los jóvenes y líderes sociales y comunitarios.

4. A la Alcaldía Municipal de Soacha y a la Gobernación de Cundinamarca, que encabecen la construcción de un plan de protección de la vida de la comunidad afectada.

5. A los organismos de control: Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Personería el seguimiento de la denuncia y acompañamiento a los planes ejecutivos de protección a los derechos humanos de la comunidad afectada.

Además convocamos a la comunidad defensora de los derechos humanos, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, a apoyar este llamado dirigiendo comunicaciones a las autoridades para solicitar que se adopten medidas urgentes y con continuidad para preservar la vida e integridad personal de los habitantes de Altos de Cazucá.

Bogotá D.C., 20 de Agosto de 2004

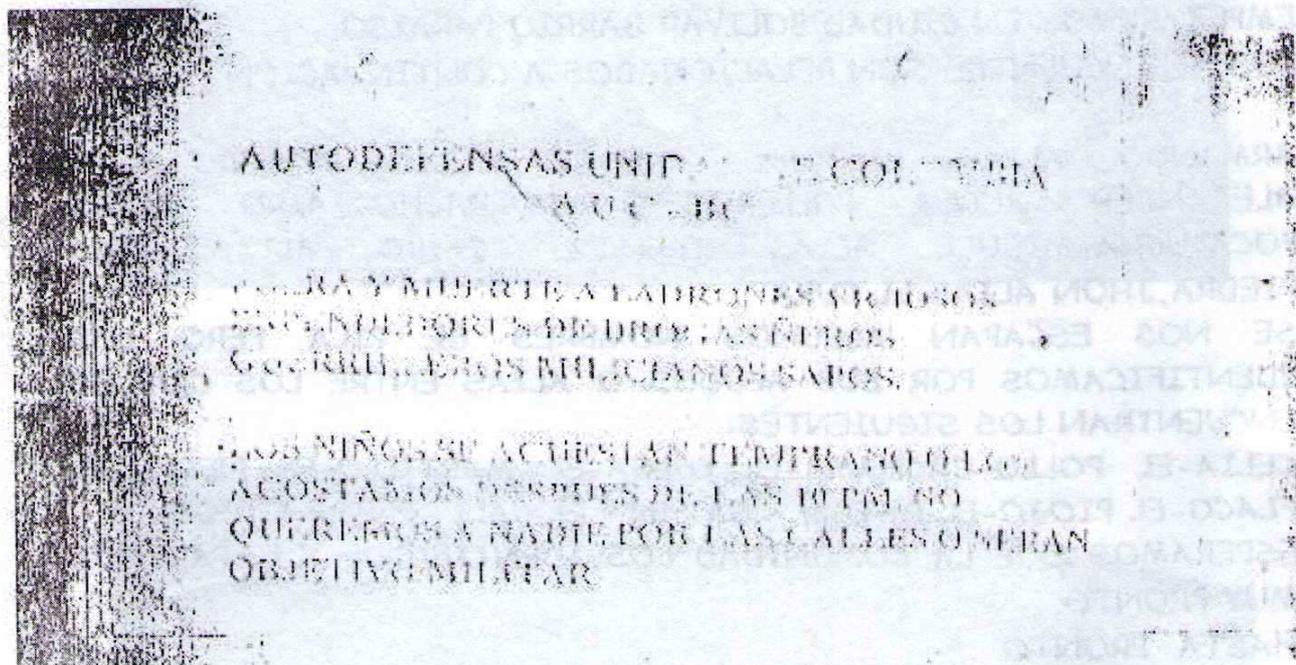
Con sentimientos de preocupación,

**MESA DE TRABAJO DE ONGS Y ORGANIZACIONES SOCIALES
DE ALTOS DE CAZUCÁ
MESA DE INTERLOCUCIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE
SOACHA Y CUNDINAMARCA
FIDHAP**

PANFLETOS DE LOS PARAMILITARES.

**AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA
AUC - BC**

**FUERA Y MUERTE A LADRONES VICIOSOS EXPENDEDORES DE DROGA,
ÑEROS GUERRILLEROS MILICIANOS SAPOS.
LOS NIÑOS SE ACUESTAN TEMPRANO O LOS ACOSTAMOS DESPUES DE LAS
10 PM NO QUEREMOS A NADIE POR LAS CALLES O SERAN OBJETIVO
MILITAR.**



LISTA NEGRA DE PERSONAS A ASESINAR POR LOS PARAMILITARES.

LA SIGUIENTE LISTA DE DELINCUENTES SE LES DA UN PLAZO PRUDENCIAL DE TRES MESES PARA QUE ABANDONEN EL SECTOR DE NO HACERLO SERAN OBJETIVO MILITAR DE NUESTRA ORGANIZACIÓN QUE HA DADO INICIO A UN PLAN DE LIMPIEZA Y EXTERMINIO DE TODO FOCO DE DELINCUENCIA Y VICIOS QUE CORROEN NUESTRA SOCIEDAD.

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN QUE HA ASUMIDO LO QUE EL ESTADO NO HA PODIDO ACABAR NI CONTROLAR Y QUE YA HEMOS OBTENIDO LOGROS EN MEDELLIN, BARRANQUILLA, CALI Y EN ALGUNOS SECTORES DE BOGOTA COMO BOSA CASUCA Y EMPEZAREMOS EN CIUDAD BOLIVAR BARRIO PARAISO.

LOS DELINCUENTES SON RELACIONADOS A CONTINUACION:

ARMANDO ALIAS PILDORA- FREDDY ALIAS PERRERO-JHON ALEXANDER ALIAS POLLERO O BORRACHO-JAIRO ALIAS POCALUCHA-MIGUEL ALIAS TRELLEZ, JAIRO ALIAS PICA PIEDRA, JHON ALIAS EL CURA

SE NOS ESCAPAN ALGUNOS NOMBRES DE PILA PERO LOS IDENTIFICAMOS POR SUS APODOS O ALIAS ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES:

CELIA-EL POLLO-CACHAMA-EL PULGA-EL MARTILLO-EL NEGRO-EL FLACO-EL PIOJO-EL RATON - SATAN - EL CALI -ENTRE OTROS.

ESPERAMOS QUE LA COMUNIDAD LOS IDENTIFIQUE Y ESTAREMOS MUY PRONTO.

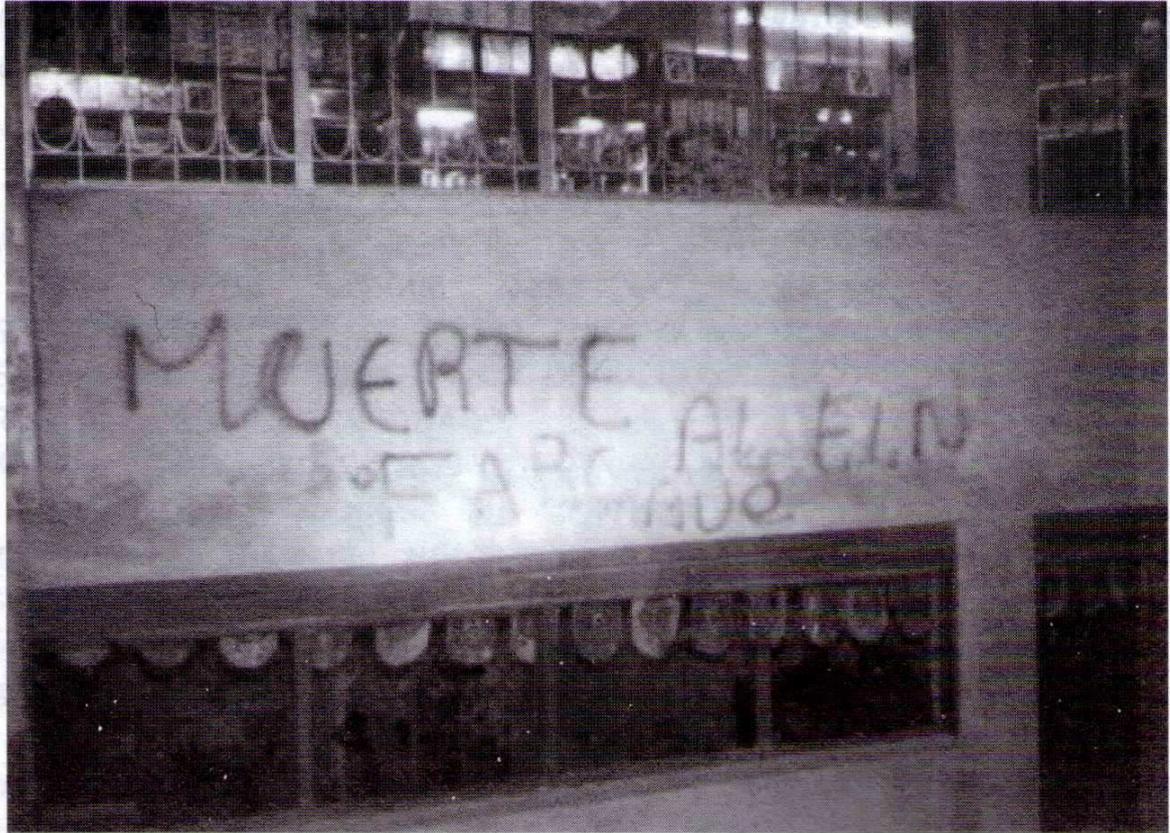
HASTA PRONTO

POR UNA SOCIEDAD LIMPIA Y SIN DELINCUENCIA I

I PAZ Y AMOR I

GRAFITTIS EN LAS PARES DE LAS AUC





AGRADECIMIENTOS

a las personas y organizaciones que participaron en este informe, todos estamos convencidos que el silencio y el miedo deben romperse para construir una sociedad con justicia y vida dignidad para todos y todas.

*Red de Organizaciones Sociales de Ciudad Bolívar
ASOJUVENIL Asociación de Jóvenes del Barrio Compartir
CORPODEC Corporación para el Desarrollo Comunitario
COSPACC Corporación Social para la Asesoría y Capacitación
Comunitaria
Organización Femenina Popular OFP
Semillas Creativas*

*Líderes Sociales y Comunidades de Ciudad Bolívar
Instituto Cerros Del Sur (Ices)*

*Organizaciones, Comunidades y Líderes Sociales De Cazuca
Apoyar, Asolicsef, Palma Negra, Black Brothers entre otras*

CINEP Centro de Investigación en Educación Popular

*A todas las organizaciones y personas que no se nombran por
su seguridad*

Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República

TRIBUNAL CONTRA LA IMPUNIDAD

El Proyecto Justicia y Vida es una organización de Derechos Humanos que trabaja junto a desterrados, humillados, excluidos y víctimas de la violencia política y las organizaciones sociales de Ciudad Bolívar y Cazucá, quieren dar a conocer la forma sistemática en que se han venido cometiendo crímenes como la desaparición forzada, la tortura, la ejecución extrajudicial, el desplazamiento forzoso, el reclutamiento a jóvenes y las amenazas a líderes sociales y comunitarios y estos se practican sin ningún tipo de investigación por parte de las instituciones encargadas y con la complicidad de las autoridades civiles, de policía y militares.

Por tanto presentamos el presente informe como parte del Tribunal contra la Impunidad para dejar testimonio de esta realidad y para que se escuche el clamor de las víctimas por Justicia, Verdad y Reparación Integral.